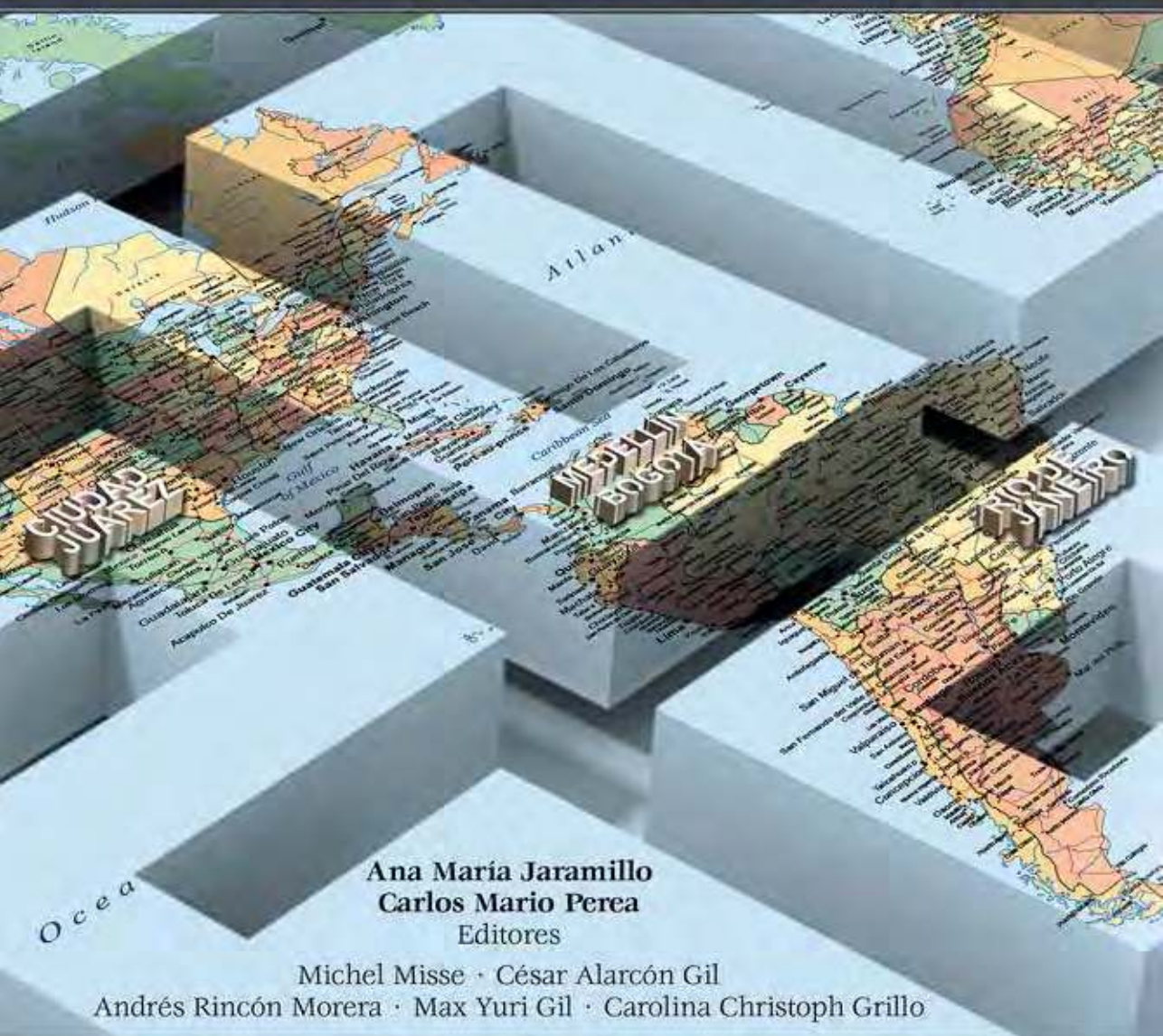


CIUDADES EN LA ENCRUCIJADA:

Violencia y poder criminal en Río de Janeiro,
Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez



Ana María Jaramillo
Carlos Mario Perea
Editores

Michel Misse · César Alarcón Gil
Andrés Rincón Morera · Max Yuri Gil · Carolina Christoph Grillo



CIUDADES EN LA ENCRUCIJADA: Violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez



Medellín, octubre de 2014

CIUDADES EN LA ENCRUCIJADA:
Violencia y poder criminal en Río de
Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez.

Corporación Región

Carrera 49 N°. 60-50
Teléfono: (574) 2542424
e-mail: corporacionregion@gmail.com
Medellín - Colombia

**Instituto de Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Colombia**

Carrera 5A N°. 34A - 09
Bogotá - Colombia
PBX (57-1) 7430700

Diseño e impresión
Pregón S.A.S.
Medellín, 2014

Corrección de Estilo:
Sol Astrid Giraldo

ISBN: 978-958-8134-66-6

Contenido

Presentación.....	5
Introducción	9
La paradoja latinoamericana.	
Las ciudades en perspectiva comparada.	9
I. Cocaína y conflicto	14
II. Contenido del poder: “consenso” y violencia.....	25
III. Forma y alcance del poder: la estructura	37
Bibliografía	48
Río de Janeiro: sufrir la violencia, decir la paz.....	49
I. La criminalidad y la violencia	
en su contexto histórico y social	50
II. Actores colectivos de la violencia en Río de Janeiro	81
III. Las políticas de seguridad pública y las UPP.....	109
Bibliografía.....	116
Medellín en su laberinto	
Criminalidad y violencia en los comienzos del siglo XXI ..	119
I. Medellín y sus transformaciones	121
II. Actores y estructuras delincuenciales:	
en permanente mutación	130
III. Economía criminal próspera	145
IV. Inserción en el entramado social barrial.....	156
V. Capacidad para incidir en la esfera política	165
VI. En la búsqueda de salidas al laberinto.....	173
Bibliografía.....	178

“Robar, pero no matar”

Crimen, homicidio y violencia en Bogotá..... 185

Primera parte: El homicidio desciende: “no matarás”	191
I. Homicidio en descenso	191
II. Seguridad y ciudadanía: discurso e institución	197
Segunda parte: El crimen abunda: “robar, pero no matar”	204
III. Asimetría y resemantización	204
IV. Características y actores armados.....	207
V. La estructura criminal.....	212
Tercera parte: La violencia se disemina: límites del mandato	222
VI. Enclaves violentos.....	222
VII. Limpieza e identidad	226
VIII. Violencia entre cercanos	234
Bibliografía.....	243

Ciudad Juárez:

Sociedad, criminalidad y violencia trasnacional..... 249

I. El perfil de la ciudad	258
II. Prohibiciones y oportunidades	266
III. Los sinaloenses en Juárez	274
IV. Los sinaloenses en Juárez II	283
V. Necrópolis fronteriza	298
Conclusiones	318
Bibliografía.....	321

PRESENTACIÓN

Con el presente libro se dan a conocer los resultados de la investigación comparativa sobre criminalidad y violencias en las ciudades de Río de Janeiro, Medellín, Ciudad Juárez y Bogotá, cuya realización fue posible gracias al interés de la Corporación Región y del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional por contribuir al avance de la investigación de estos temas en América Latina. Este propósito se hizo realidad gracias al apoyo del *International Development Research Centre de Canadá* (IDRC) y de *Colciencias* (Colombia).

La selección de las ciudades se basó en la realización de un diagnóstico inicial en donde fueron tenidas en cuenta las diferencias y las semejanzas que hicieran posible la comparación, referidas a transformaciones recientes en el panorama de la criminalidad y las violencias, en el comportamiento del homicidio y en la proliferación de diverso tipo de actores criminales con capacidad de convertirse en factor decisivo de poder en la sociedad, la actividad económica y el ámbito político.

La inclusión de Bogotá, una ciudad capital con características diferentes a las de Río, Juárez y Medellín hizo posible afinar la mirada comparativa al servir de elemento de contraste, dada la no existencia de una relación estrecha entre narcotráfico y violencia, de un notable y sostenido descenso en las tasas de homicidio, así como de la ausencia de dominaciones territoriales violentas.

Los alcances de la labor comparativa se pueden apreciar en una primera parte introductoria donde se da cuenta de las hipótesis y los elementos conceptuales y metodológicos construidos para dar cumplimiento a los objetivos definidos en el proyecto: lo común y lo diferente de la conflictividad violenta entre las cuatro ciudades latinoamericanas durante la década del 2000, no sin aclarar que dicho propósito hizo necesaria más de una consideración histórica.

Luego de la primera parte comparativa los capítulos siguientes se centran en el examen de las particularidades propias de cada ciudad. En el caso de Río de Janeiro (Capítulo 2) Michel Misse y Carolina Christoph ponen el acento en la transformación del imaginario de “ciudad maravillosa” en el de urbe violenta, ligada a un proceso de acumulación social de la violencia gestada desde mediados del siglo XX y rematada después, a partir de comienzos de la década de 1980, en el quiebre que encarnó el auge de la cocaína con sus múltiples impactos en la favelas y las agrupaciones ilegales dedicadas a la comercialización y venta de drogas. La presencia permanente de tales actores en los tejidos sociales de las barriadas representó un incremento de la violencia y considerables desajustes de la sociedad y la institucionalidad. El capítulo se cierra con una mirada sobre el diseño y aplicación de modelos de intervención agenciados desde el Estado, con el ejemplo de la actual intervención de las UPP (Unidades de Policía Pacificadora).

En lo que respecta a Medellín, Ana María Jaramillo y Max Yuri Gil (Capítulo 3) se ocupan de las mutaciones que en las dos últimas décadas ha experimentado una ciudad que, como es conocido, llegó a ser considerada la más violenta del mundo. Aunque en los últimos años se observan logros en la reducción de los homicidios,

aumentos en la inversión social y una mejora en la imagen de la ciudad, aún se registran reacomodos en las estructuras criminales tras la muerte de Pablo Escobar en 1993 y de ese momento hasta el día de hoy. Dichos reacomodos dan lugar a periódicas disputas entre los grupos criminales, lo mismo que al establecimiento de alianzas y al reforzamiento de controles sobre territorios -y por ende a los intentos de consolidar vínculos con la población-, amén de su injerencia sobre el ámbito político y la diversificación de rentas ilegales.

Por su parte Carlos Mario Perea y Andrés Rincón privilegian el análisis de la asimetría entre el crimen y la violencia propia de Bogotá. Mientras el crimen pulula, la violencia disminuye de forma sostenida. Dicha situación se explica por la combinación de diversos factores entre los cuales cuentan el acatamiento al mandato de no matar por parte de los actores criminales y la fragmentación de sus estructuras criminales. Pese a dicho rasgo dominante, de la ciudad no desaparecen los enclaves violentos caracterizados por elevadas tasas de homicidio y ocurrencia de hurtos y empresas de narcotráfico.

El libro cierra con el artículo de Ciudad Juárez. En él, Cesar Alarcón se detiene en los aspectos asociados a la condición de ciudad de frontera y de la periferia, lejos de las preocupaciones de las autoridades nacionales ubicadas en el centro geográfico y político de México. Asimismo atiende su configuración histórica como lugar de consumo y tránsito de drogas hacia los Estados Unidos, los cambios en el perfil y trayectoria de los protagonistas de la sangrienta disputa por Juárez entre los años 2008 y 2012 (las organizaciones de traficantes de Juárez y Sinaloa) y las recientes variaciones en la situación marcadas por la disminución de los homicidios y la aplicación de estrategias de intervención por parte del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

La culminación de este labor investigativa fue posible gracias a la participación de investigadores con amplia trayectoria en los temas objeto de indagación. Su disposición para hacer parte de es-

ta experiencia generó un ambiente propicio para el encuentro, el debate y la construcción de los acuerdos indispensables sobre los pasos a seguir, desde la preguntas de investigación hasta el diseño y realización del trabajo de campo (entrevistas, grupos de discusión y observación de campo). En el proceso de investigación fue definitivo el destacado desempeño de los asistentes y auxiliares de investigación, así como la generosa contribución con sus testimonios e informaciones de líderes sociales, habitantes de las zonas en estudio y funcionarios públicos.

La realización de esta investigación tampoco hubiera posible sin contar con el apoyo de Markus Gottsbacher y de Eyra Edington del International Development Research Centre de Canadá (IDRC).

Con la difusión de estos resultados esperamos contribuir a la comprensión de realidades que de manera reciente han empezado a ser objeto de preocupación por parte de los Estados y de los propios ciudadanos y de cuya positiva transformación depende, en buena medida, el futuro de nuestras ciudades y la calidad de vida de sus habitantes.

Ana María Jaramillo
Coordinadora
Corporación Región

INTRODUCCIÓN

LA PARADOJA LATINOAMERICANA. LAS CIUDADES EN PERSPECTIVA COMPARADA.

Carlos Mario Perea
Ana María Jaramillo
Andrés Rincón Morera
Michel Misse
César Alarcón
Max Yuri Gil

Este libro trata sobre la paradoja Latinoamericana. Habla de ciudades revestidas de toda importancia; sin embargo, y pese a su marcada preponderancia, se trata de ciudades cruzadas por criminalidades y violencias intensas. América Latina, ciertamente, sale del período amargo del neoliberalismo dando muestras de mejoría económica y reducción de situaciones críticas como la pobreza y el desempleo; con todo, pese al repunte en los indicadores de bienestar, continúa siendo el continente donde germina una variada gama de agentes violentos entregados a imponer la ley de su voluntad arbitraria y déspota. No de modo gratuito es hoy el continente donde muere la mayor cantidad de gente a manos de otro que asesina¹. Es la paradoja Latinoamericana.

¹ América tiene la tasa de homicidio más alta del mundo (con un valor de 19), seguida de cerca por África (16). Bien lejos están Asia (4), Europa (2) y Oceanía (3). Dentro de América, Centroamérica lleva la delantera con una tasa de 37, el Caribe con 19, Suramérica con 16 y por último Norteamérica con 5. UNODOC, 2012.

Río de Janeiro en Brasil, Medellín y Bogotá en Colombia, Ciudad Juárez en México -las ciudades de las que nos ocupamos, comenzando por mirarlas de manera comparada en estas páginas introductorias-, hacen el testimonio elocuente de la paradoja Latinoamericana. Río de Janeiro, segunda ciudad de Brasil, gran centro económico y turístico mundial, enfrenta la presencia endémica de bandas de traficantes adueñadas de un sinnúmero de *favelas*, de un tiempo para acá disputadas en su señorío por la policía y actores recientes identificados con el nombre de milicias. Medellín, también segunda ciudad de Colombia, centro económico reputado de la condición de urbe de la innovación, afronta una larga presencia de bandas y “combos” insertos en las barriadas de la periferia articulados a una estructura criminal sometida a frecuentes reacomodos. Bogotá, escenario de una eficiente actividad productiva asentada sobre su carácter de capital nacional, no termina de superar la permanencia de enclaves violentos y de una criminalidad difusa extendida por el conjunto de la ciudad. Por último Ciudad Juárez, núcleo de la frontera mexicana al norte y hasta hace unos años epicentro de la industria maquiladora, fue devastada por la guerra entre poderosas organizaciones de traficantes cuando cada uno pretendió adueñarse de los mercados de drogas ilícitas de la ciudad.

Las cuatro ciudades encarnan de manera dramática la paradoja latinoamericana, cada una desde dinámicas en extremo diferenciadas. El contraste se impone, nada pareciera conectar las contiendas locales en Brasil, las confrontaciones entre facciones en Colombia, la guerra en México. Traficantes de Río, bandas criminales de Medellín, “ganchos” en Bogotá, organizaciones de traficantes en Juárez: el nombre adoptado en cada urbe corresponde, en efecto, a la particularidad de los agentes violentos propios de cada urbe.

Nuestra hipótesis, sin embargo, asume que las marcadas diferencias no dejan de permanecer conectadas por un rasgo común que las vincula. En las cuatro ciudades el negocio del narcotrá-

fico opera como el mercado ilegal dominante, mercado del cual se derivan importantes márgenes de ganancia y se coordinan otro conjunto de actividades ilegales. En Río la refriega se mantiene sobre el poderío de los traficantes, sostenido sobre el microtráfico organizado desde las *bocas de fumo*. En Medellín la estructura criminal remonta su primer origen al cartel de Pablo Escobar –jefe del mercado de la cocaína en los años 80-, heredada después por alias “Don Berna” y al día de hoy en disputa entre la Oficina de Envigado y Los Urabeños. En Bogotá, en medio de un crimen diverso y fragmentado, los traficantes de droga del Bronx constituyen la más compleja estructura ilegal de la ciudad. Finalmente, en Ciudad Juárez la guerra fue resultado del choque entre las organizaciones de Sinaloa y Juárez, dos de las organizaciones que detentaron durante buen tiempo el poder del negocio en México. El narcotráfico hegemoniza el universo criminal en las cuatro ciudades, en todos los casos mediante la constitución de agentes violentos que imponen un poder armado sobre procesos diversos de la vida urbana².

La mirada comparativa –de nuevo, el objeto de esta introducción-, se mueve entonces entre aquello que arma la diferencia y aquello que funciona como denominador común. En otras palabras, la mirada comparativa ha de dar cuenta de las marcadas diferencias entre las ciudades y sus actores, pero bajo la premisa de determinar la singular gestión del narcotráfico adoptada en cada ciudad.

No es una gestión cualquiera. La acción de los agentes violentos afecta la configuración de lo social y modifica las dinámicas económicas, incide sobre los procesos culturales y reorienta las políticas públicas, influencia las prácticas políticas y distorsiona la acción colectiva. Tal impacto opera entonces como telón de fondo de la comparación. El sensible efecto que provoca un mercado ile-

2 Hablaremos de agente violento, una noción no exenta de ambigüedades pero que establece su diferencia con actor armado, el propio de un conflicto bélico. La ciudad es escenario de “otras” violencias: pueden llegar a una guerra como la de Juárez pero sin perder su conexión con la dinámica urbana.

gal sobre las estructuras de las sociedades urbanas plantea –al modo de preocupación primordial-, el interrogante sobre la naturaleza del poder criminal que se viene asentando en diversas ciudades latinoamericanas. Es la pregunta que nos servirá como eje de la comparación: ¿cuál es la naturaleza del poder criminal que anida en más de una urbe Latinoamericana?

En el camino de abrir una comprensión de ese poder criminal echamos mano de tres dimensiones. Ellas constituyen la clave comparativa y definen las secciones de estas páginas iniciales. Primero, la ubicación del país en los eslabones de la cadena del negocio³; tal ubicación desempeña un papel crucial en los modos de producción del conflicto violento en la urbe. Segundo, el ejercicio del poder propiamente dicho (el contenido), esa mezcla de fuerza y “consenso” que los agentes violentos despliegan en el medio urbano. Tercero, los patrones de organización, las maneras como estructuran sus prácticas a fin de gestionar la empresa ilegal y desplegar su poderío (la forma y alcance del poder).

Las tres dimensiones se articulan primero con la historia del país al que pertenecen y segundo con la particularidad de cada ciudad. No todos los países latinoamericanos han visto florecer los carteles del narcotráfico que sí han abundado en México y Colombia, de tal modo que la modalidad y el grado de afectación de cada nación están atados a su devenir histórico: unas han sufrido crisis profundas, otras han padecido dificultades graves y unas más han permanecido al margen de la algarrada que recorre la región durante las últimas tres décadas. De igual manera, pese a que todas las ciudades del continente tienen mercados de drogas ilícitas, sólo en unas aparecen los agentes violentos que convulsionan a Juárez, Medellín y Río. La historia de cada ciudad desempeña también un papel crítico.

3 El ciclo de las drogas ilícitas naturales (no sintéticas) incorpora cuatro eslabones: producción, procesamiento, comercialización y consumo. La comercialización, el eslabón decisivo, se divide a su vez en doméstica, de paso, final y venta al menudeo.

La posibilidad de recoger esta compleja multitud de factores desborda el alcance de estas páginas introductorias, de modo que la mirada comparativa se circunscribe a la situación actual⁴. Intentamos señalar los rasgos básicos de un conflicto que de más de un modo funda la contemporaneidad latinoamericana, por supuesto con particular atención a los muchos matices que introduce la singularidad de cada ciudad.

La apuesta del presente libro, así las cosas, se finca en el intento de poner en evidencia el grado de postración urbana al que conduce el negocio ilegal más lucrativo del planeta una vez se instala en las calles de una ciudad: confrontaciones permanentes en Río, violencia sostenida en Medellín, diseminación de la criminalidad en Bogotá, guerra abierta en Juárez. No se trata ni de países ni de ciudades presas de la marginalidad; con todo, pese a su dinamismo siguen siendo lugares sometidos a intensas violencias⁵.

Es la paradoja Latinoamericana. Pese al repunte económico las violencias proliferan, se enquistan aquí y allá, bajan en esta localidad pero renacen en la del otro lado. Brotan en zonas agrarias pero también en sectores urbanos. Tras la huella del narcotráfico, más cerca o más lejos, numerosos países de Latinoamérica continúan siendo el epicentro de amargas violencias criminales. Nos anima entonces la esperanza de que al fin, a la vuelta de una cantidad indecible de personas asesinadas, el mundo entienda que se demanda una política pública mundial distinta para el tratamiento del fenómeno de la cocaína, una que no esté centrada en la guerra contra los centros de producción y tráfico, esto es sobre Latinoamérica.

4 En los capítulos correspondientes a cada ciudad se abordan antecedentes históricos de su respectiva criminalidad.

5 Es preciso clarificar que Bogotá carece de la estructura y la intensidad violenta de las otras tres ciudades. Su utilidad para la comparación es entonces enorme: opera como caso control que permite valorar desde abajo el alcance de la criminalidad en la ciudad latinoamericana.

I. COCAÍNA Y CONFLICTO

Volvemos a la pregunta que nos convoca: ¿cuál es la naturaleza del poder criminal que anida en más de una urbe Latinoamericana? Ese poder arranca, en primer término, en la conexión entre conflicto violento y narcotráfico. ¿De qué forma se construye la conflictividad violenta en relación con el sitio ocupado en la cadena del mercado de la droga? La ciudad está interconectada con su país. Una urbe poblada de violencias pertenece por fuerza a un país con correspondientes niveles de conflicto, de tal modo que la ubicación nacional opera como matriz de lectura de la ciudad. Entramos entonces, en este primer apartado, en la consideración de los nexos entre país y conflicto. Desde allí es posible el salto a la ciudad, nuestro objeto temático.

1. Eslabones y ubicación de los países

El narcotráfico no da cuenta cabal del abigarrado espectro de la criminalidad y la violencia de la región; tampoco, ni mucho menos, agota por sí mismo la dinámica interna de los países⁶. El espacio que se abre entre violencia e historia nacional de un lado, y negocio de la droga del otro, ha de ser colmado con una variedad de mediaciones. Empero, al momento de considerar la conflictividad de América Latina en su conjunto, el narcotráfico, con su efecto multiplicador de las violencias, desempeña un papel protagónico que no se agota en el lugar banal de una expresión más del crimen organizado. La droga marca el destino de la región durante las últimas tres décadas, lo hace siguiendo la impronta de una premisa básica: a mayor nivel de acumulación monetaria mayor conflictividad violenta.

Los mayores niveles de rentabilidad del narcotráfico en América Latina provienen de la cocaína. Sin duda en el continente se

6 México –por poner un caso–, carece de la guerrilla que sí existe en Colombia, un actor que marca el curso del conflicto armado de este país.

producen otras drogas como la heroína y la marihuana⁷, más hasta la fecha ninguna ha logrado producir los márgenes de ganancia del ciclo de la coca-cocaína. La ilegalización acumula capitales colosales en el contexto de una alta demanda global, tanto de los países del norte como de un consumo cada vez más creciente entre la misma América Latina⁸. La enervada conflictividad de la región –de varios de sus países–, sigue de cerca la historia de la cocaína.

La ubicación en la cadena es el núcleo de la multifacética incidencia sobre los países. Como se anunció atrás, cuatro grandes eslabones la componen: producción, procesamiento, comercio y consumo. La producción se refiere al cultivo de la hoja de coca, la materia prima del negocio; el procesamiento a su transformación en algún derivado, sea en intermedios como el bazuco, el crack o el cristal o sea en el producto terminal de la cocaína. Luego viene el comercio, articulado a su vez en varios momentos. En primera instancia el doméstico, referido a la distribución dentro de un mismo país incluyendo el traslado desde las zonas de cultivo hasta los puntos de embarque hacia el exterior. El siguiente momento es el comercio de paso, el que toma lugar en países intermedios entre los centros de producción y la frontera anterior al ingreso en los países del norte. El momento del comercio final supone el tránsito

7 Se siembra marihuana pero su cultivo está regado por el globo entero; según reportes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupeficientes (JIFE, 2008) existen sembradíos de marihuana en 174 países, esto es en algo más de las dos terceras partes de las naciones del mundo. Marruecos adquiere notable importancia por la resina de cannabis y su exportación hacia Europa. Por su parte el epicentro del cultivo de opio y la producción de heroína se hace en Asia, en el Sudeste (Afganistán y Paquistán) y el Suroccidente (Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam). Durante la segunda mitad de los 90 la amapola tuvo cierto auge en Colombia y no faltan informes de su existencia en Guatemala y México. Se trata en todo caso de reducidas extensiones una vez se les compara con el centro mundial de su producción.

8 El consumo de droga es variable a nivel mundial. Si bien es cierto que se centra en Norteamérica y Europa, las tasas de prevalencia de las regiones productoras muestran cifras preocupantes. Las regiones con niveles de consumo de marihuana por encima de la media mundial son África Central y Occidental (13,5%), Oceanía (10,9%), América del Norte (10,7%) y Europa Central y Oriental (7,6%). Otro tanto sucede con las Anfetaminas, donde preponderan Oceanía (2,1%), América Central y Norte América (1,3%) y el Caribe (1,3%) (UNODOC, 2013).

hacia los grandes centros de consumo, momento en que sale de Latinoamérica⁹. Para rematar la cadena, la cocaína o sus derivados se venden al menudeo al consumidor en un sinnúmero de expendios locales

Latinoamérica es el epicentro de la producción de la cocaína a nivel mundial. El tráfico aparece con grandes ganancias hacia finales de la década de los 70, desde el comienzo con un alcance global pero siempre sobre una producción circunscrita a algunos países de América Latina¹⁰. Con proporciones variables en el tiempo sus cultivos se reparten entre Perú, Bolivia y Colombia¹¹. Durante los años 80 Perú y Bolivia fueron los grandes proveedores de la hoja, situación que se modificó en la década siguiente cuando Colombia hizo el relevo en el lugar de primer productor; su incremento fue sorprendente: si en 1992 tenía 30 mil hectáreas, para el 2001 se habían extendido nada menos que a 160 mil, regadas entre una enorme variedad de regiones. Colombia se convirtió en el proveedor del 85% de la cocaína mundial (CICAD-OEA, p. 29; ODC, 2013). No obstante, a medida que avanza la primera década del 2000 tanto los cultivos como la productividad colombianos entran en sostenido descenso, propiciando el retorno a los países originales (en particular a Perú). La situación vuelve a la distribución de los años 80 (Gráfico No. 1). Entre 2005 y 2008 Perú produjo 605 toneladas de cocaína con 100% de pureza, seguido por Colombia con 283 y más lejos todavía por Bolivia con 97¹² (CICAD-OEA, p. 29).

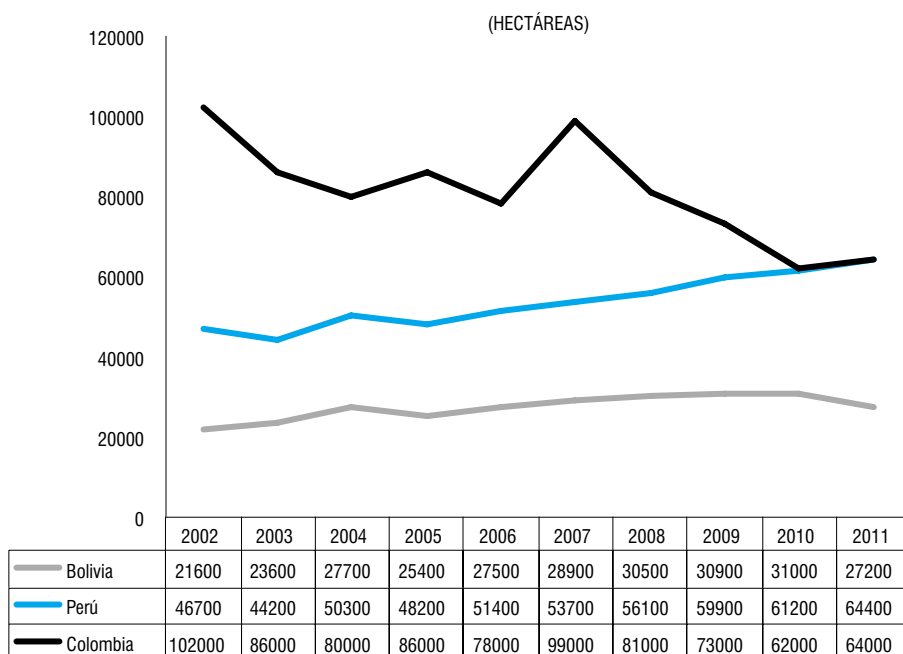
9 Norte América y Europa occidental representan el 44% y 33% del mercado minorista mundial (CICAD-OEA, 2013, p. 9). Aun así regiones como Oceanía y Sur América muestran un consumo nada despreciable, con tasas de prevalencia de 2,9 y 1,3 respectivamente, algunos puntos por encima de la media mundial (UNODOC, 2013).

10 La referencia histórica de la cocaína en Gootenberg (2009).

11 Otros países de la región la producen, aunque en menor medida como Argentina, Chile y El Salvador, entre otros (JIFE, 2008).

12 Sin embargo la productividad permanece equilibrada, en 2011 Colombia produjo el 42% de la oferta mundial, Perú el 40% y Bolivia el 18%.

GRÁFICO No. 1
SIEMBRAS DE COCA EN PERÚ, BOLIVIA Y COLOMBIA (2002-2011)



Fuente: UNODC, 2013. Cálculos nuestros.

En la década de los 80, cuando Perú y Bolivia eran los grandes productores, en Colombia se inicia el mercado globalizado dando origen a los dos carteles de ese entonces -Pablo Escobar en Medellín y los Rodríguez Orejuela en Cali-. Su poder indiscutido se mantuvo hasta la mitad de la década siguiente, cuando los dos carteles se extinguieron como resultado del efecto combinado del sometimiento a la justicia y la persecución del Estado. De ese momento en adelante Colombia ingresa en una nueva fase caracterizada, de un lado por la fragmentación de las organizaciones de narcotraficantes (con la sola excepción del Cartel del Norte del Valle) y de otro por la señalada expansión de los cultivos de coca. La mutación colombiana produjo una decisiva transformación del comercio internacional. El poder sobre el nudo estratégico del mercado global (el eslabón final de la cadena) pasó a manos de los carteles

mexicanos, quienes detentan hasta hoy el control del ingreso y distribución de la cocaína en los Estados Unidos. De tal suerte, los países que han controlado el eslabón final del comercio han sido Colombia y México, cada uno en su momento histórico: Colombia hasta mediados de los 90, México de ahí en adelante.

Otros países desempeñan un papel estratégico en el eslabón previo, el de Paso, desprovistos de organizaciones del poderío de los carteles colombianos y mexicanos. El primero fue Brasil, integrado a los circuitos de distribución de la droga proveniente de Perú y Bolivia con destino a Europa (JIFE; 2012; UNODOC, 2013). En el año 2011 casi el 54% de la cocaína decomisada en Brasil provenía de Bolivia, mientras el 38% procedía de Perú y el 7,5% de Colombia (UNODC, 2013). Al igual que en Colombia, la articulación brasilera se produce en época temprana -los años 80-, cumpliendo la función de intermediación en una ruta alterna a la controlada por los colombianos¹³.

El tráfico colombiano se dirige ante todo hacia Estados Unidos. Según el gobierno norteamericano el 95% de la cocaína confiscada tiene origen en Colombia¹⁴. Se trata de un comercio que ya cumple algo más de 30 años en operación, un período de tiempo con la suficiente duración como para pasar por toda clase de variantes. Ciertamente durante el período de la hegemonía colombiana se privilegió la vía del Caribe, pero a partir de su crisis el predominio del transporte se desplazó al Pacífico. Una década después, ante el nuevo agotamiento de la ruta, se concedió privilegio al Atlántico siguiendo una diversidad de puntos que pueden ir hasta África para redirigirse luego hacia su destino final en el norte (CICAD-OEA, 2013). En medio del traslado de una a otra ruta, diversos países desempeñan un papel estratégico como punto de paso. En el primer cambio hacia el Pacífico la droga pasó por Centroamérica, en particular por el triángulo norte -El Salvador, Guatemala y Honduras;

13 La ruta vía Brasil ha encontrado un importante repunte durante la última década en medio de la búsqueda de renovadas rutas hacia Europa, Asia y Oceanía.

14 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA, p. 47).

tiempo después, en el siguiente relevo, la ruta del Atlántico no le restó importancia al triángulo centroamericano pero le concedió una intermediación de primer orden a Venezuela (UNODOC, 2013, p. 58)¹⁵.

El lugar de cada país en la cadena varía pues en función del tiempo y las rutas de cada momento. El Cuadro No. 1 sintetiza la situación para las naciones que albergan las ciudades en observación en este libro. Colombia es la única nación del continente que participa de la cadena completa modificando su ubicación en función del momento histórico. México participa en el comercio doméstico y final, al tanto que Brasil en el doméstico y de paso.

CUADRO No. 1
PARTICIPACIÓN EN LA CADENA DE LA COCAÍNA
BRASIL, MÉXICO Y COLOMBIA

	PRODUCCIÓN	PROCESAMIENTO	COMERCIO		
			DOMÉSTICO	PASO	FINAL
Brasil					
México					
Colombia					

2. Ubicación y conflicto violento

Cada eslabón produce montos de dinero en extremo distintos. En las zonas de cultivo los campesinos reciben apenas el 1% del total de las ventas (es frecuente que los mismos cultivadores “volteen” la hoja hacia la pasta base, percibiendo un tanto más de dinero). De allí en adelante los niveles de rentabilidad crecen de manera exponencial. Quienes transportan la mercancía desde el sitio de producción hasta los países intermedios perciben un 9% del total de las ganancias (el eslabón de paso), al tanto que quie-

15 También se han instalado rutas haciendo de Ecuador un centro de paso.

nes depositan la mercancía en los mayores escenarios de consumo reciben entre el 20 y 25% (el eslabón final). Es el escenario donde se producen los grandes márgenes de acumulación puesto que quedan en unas pocas manos (hoy las organizaciones mexicanas). La venta minorista (el eslabón del menudeo) recibe el 65% de la ganancia, el mayor porcentaje, pero es también la esfera de la redistribución dada la enorme amplitud de actores que participan del microtráfico (CICAD-OEA, 2013, p. 23).

El mercado de la cocaína puede ser tasado (con base en estimativos de 2009) en unos 85.000 millones de dólares anuales (CICAD-OEA, 2013, p. 23), algo así como el 0,5% del producto interno bruto mundial. Se trata de montos monumentales de dinero desprovistos de regulación por parte del Estado y la sociedad, abiertos a quien esté dispuesto a capturarlos mediante la puesta en marcha de una maquinaria de muerte y violencia. La fuerza es consustancial al ejercicio del poder, la conocida fórmula weberiana del Estado como monopolio legítimo de la fuerza bien lo expresa. El universo criminal, como todo poder, pasa igualmente por la fuerza. A falta de regulaciones instituidas que medien la resolución de sus conflictos, la ley del más fuerte se convierte en alfa y omega de sus modos de operación. El poder criminal es impensable sin el ejercicio de una dosis de violencia o la amenaza de ejercerla.

El mercado de la cocaína está cruzado por dosis particularmente intensas de violencia. El contraste con una reconocida e histórica criminalidad como la italiana resulta indicativo. Pese a estar compuesta por notables organizaciones como la Mafia siciliana, la Camorra napolitana y la Ndrangheta calabresa, sus prácticas intimidatorias no están asentadas en el uso indiscriminado y sostenido del homicidio. Por supuesto las guerras internas las atraviesan, ejecutadas con el ardor necesario para dejar tendidos un número nada despreciable de muertos. No obstante, en los circuitos de la vida corriente opera sobre la fuerza pero cargada del principio *“o me pagas o te quemo el negocio”* (Kraithausen, 1998; Lupo, 2009). La amenaza está siempre presente, es el lubricante del mundo ile-

gal; mas no por fuerza recae sobre el homicidio, puede hacerlo en cambio sobre intereses vitales como el negocio y la subsistencia económica. La capacidad de violencia –incluyendo la muerte–, es un capital que el crimen maneja a fin de hacer creíble su poderío. Mas en Italia no pasa, como sí en Latinoamérica, por la creación de cuerpos en armas dotados de reconocimiento público: aquí, la gente les conoce y se somete a sus disposiciones, al punto de detentar un poder discrecional sobre el Estado y los dineros públicos, de distorsionar procesos electorales y generar a sangre y fuego riquezas extraordinarias¹⁶.

Con todo, la intensidad de la violencia, al igual que las ganancias, se reparte de manera desigual entre los eslabones de la cadena¹⁷: mayores masas de dinero en circulación requieren mayores dosis de violencia. El esquema se confirma en el comportamiento del homicidio del continente, según lo revela el Cuadro No. 2. Las violencias grandes y organizadas han sido desplegadas en el eslabón final del comercio, donde se acumulan las mayores masas monetarias. Es el caso de México y Colombia, países donde se han producido las maquinarias de guerra más sofisticadas del continente¹⁸. La violencia crónica de Colombia resulta evidente, la tasa promedio de los dos quinquenios está pintada con los colores de la violencia elevada, rojo entre 1995-2004 y amarillo entre 2005-2009. El caso mexicano, por su parte, carece de obvedad. En los dos quinquenios marca violencia media (en gris); pero si bien el promedio es medio el ascenso es vertiginoso: creció de una tasa

16 En Colombia los jefes paramilitares detentaban un control pleno sobre regiones enteras, hasta cuando fueran extraditados en el contexto de una negociación con el gobierno. “Señores” de parecido tenor aparecen en México y en el norte de Centroamérica.

17 La violencia se clasifica atendiendo al siguiente criterio. Violencia Baja: tasa de homicidio por debajo de 10 (en color verde); Violencia Media: entre 10 y 19 (en color gris); Violencia Alta: entre 20 y 49 (en color zapote); Violencia Crítica: de 50 para arriba (en color rojo). Se habla de violencia elevada desde la Violencia Alta: la tasa de 20 para arriba significa la presencia de un conflicto violento de elevadas proporciones.

18 En ningún otro país existe nada ni de cerca parecido a los Zetas mexicanos o los paramilitares colombianos, dos organizaciones dotadas de enorme capacidad operativa, financiera y política.

de 9 en 2005 a una de 25 en 2011 (Azaola, 2012), un incremento sin precedentes para un país con algo más de 100 millones de habitantes¹⁹.

CUADRO No. 2
TASA DE VIOLENCIA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 2000-2009
Promedio por quinquenio (tasa por 100 mil habitantes)

PAÍS	2000-2004	2005-2009
El Salvador	58	61
Honduras	45	51
Guatemala	31	47
Venezuela	37	46
Colombia	58	37
Brasil	31	28
Ecuador	16	20
Panamá	11	16
Paraguay	15	13
Nicaragua	11	13
México	10	15
Costa Rica	6	9
Bolivia		7
Uruguay	6	6
Argentina	8	6
Chile		4
Perú	3	4

19 La tasa nacional se presta a confusiones. Resulta clarificador señalar que en 2010 México tuvo 276 municipios con homicidio crítico (por encima de 50), correspondiente al 12% del total de municipios.

RANGOS DE VIOLENCIA

	RANGO	COLOR
Crítico	Más de 50	
Alto	20 – 50	
Medio	11 - 19	
Bajo	Menos 10	

Fuente: Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Nicaragua en Observatorio Centroamericano sobre Violencia, Homicidios en Centroamérica y UNODC. Venezuela en Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile en UNODC. Brasil en Sistema de Informações sobre Mortalidade. Mortalidade por Agressão no Brasil. México en Sistema de información en Salud. Secretaría de Salud de México. Colombia en Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Por el contrario en el extremo opuesto de la cadena, en el eslabón de la producción, no se generan ni acumulaciones importantes de dinero ni mayores violencias nacionales²⁰. Lo atestiguan Perú y Bolivia, ambos pintados con el color azul de la violencia baja²¹. En Perú estuvo de por medio la guerrilla de Sendero Luminoso, dotada de la fuerza suficiente para desafiar el poder del Estado. La captura de sus jefes y el desmantelamiento de sus frentes la neutralizaron, de buen grado porque el grupo insurgente se resistió a adoptar el narcotráfico como fuente de financiación²². La excepción la constituye Colombia, país donde la cadena completa hace parte de la guerra incluyendo el control sobre las zonas de cultivo²³. Sin los ingresos del narcotráfico ni guerrillas ni paramilitares hubieran alcanzado el poder geopolítico que llegó a traducirse en su pre-

20 En el eslabón de la producción queda sólo el 1% -se dijo-. En todo caso no se trata de una suma nada despreciable, la guerra colombiana pasa por el control de los ingresos generados en este punto de la cadena.

21 De Bolivia no se tiene información del periodo 2000-2004.

22 Además en Perú y Bolivia el cultivo de coca está asociado a una tradición ancestral indígena.

23 No tanto el cultivo como el cobro del "gramaje" (porcentaje impuesto a la transacción entre los campesinos cultivadores y los compradores), además del cobro a "cocinas" grandes (procesamiento industrial), al suministro de precursores químicos, a las pistas de aterrizaje para el embarque, a la oferta de seguridad a cultivos.

sencia en más de la mitad de los municipios nacionales, un mapa de expansión de la guerra que de muchos modos coincide con la expansión de los cultivos de coca.

En el otro eslabón, el de paso, aparecen Brasil desde los años 80, el triángulo norte de Centroamérica desde mediados de los 90 y Venezuela en años recientes²⁴. El caso de Brasil es elocuente dada su condición de nación con el Estado y la economía más grandes de la región. En coincidencia con su conversión en nodo de tránsito de la cocaína hacia Europa se desarrolló una potente criminalidad urbana sostenida sobre el ejercicio violento. Desde los años 80 una parte de las ciudades brasileñas se transformaron en escenario de un intenso homicidio²⁵. Entretanto, la crisis que experimentan los países del triángulo norte centroamericano pone en claro las consecuencias de la implantación del mercado de la droga en países con algún grado de fragilidad. El colapso de los Estados y las sociedades en Salvador, Guatemala y Honduras es quizás el problema más acuciante de la región. De su parte Venezuela -pese a las dificultades que rodean la información sobre lo que allí sucede-, enfrenta la existencia de conflictos violentos que la invaden de la mano de una criminalidad que se expande entre las ciudades²⁶.

La conexión propuesta (conflicto versus ubicación en la cadena) deja multitud de cabos sin anudar. Las razones para que un país -y más allá una región o una ciudad- entren a cumplir la tarea de gozne del narcotráfico, guardan conexión con un apretado tejido histórico que entra en relación con factores coyunturales que propician la consolidación del narcotráfico y otras formas de criminalidad. No obstante la relación entre ascensos violentos y

24 Todos pintados en el Cuadro No. 2 con el color de la violencia elevada. Brasil y Venezuela en amarillo ambos quinquenios; Honduras, Guatemala y Salvador en amarillo y rojo.

25 En el año 2009 el 51 % de las ciudades brasileñas de más de 100 mil habitantes tenían tasas por encima de 25 (el 17 % por encima de 50).

26 Panamá y Nicaragua, países de un papel menor en la cadena del narcotráfico, permanecen en la violencia media (en color gris). Ecuador ha comenzado a tener problemas y asciende al amarillo en el último quinquenio.

ubicación en la cadena del narcotráfico no pierde su fuerza. A medida que se avanza en los eslabones las violencias ascienden de la mano de los montos de dinero en circulación. El negocio ilegal de la cocaína, donde llega, agudiza la crisis: opera como caja de resonancia de las fracturas que cada país trae consigo de su historia.

Latinoamérica ha vertido una ingente cantidad de sangre en esa guerra insensata contra las drogas. Sus sociedades padecen un impacto de implicaciones duraderas, se trata de una experiencia criminal que en ciertos países ya cumple algo más de tres décadas de duración. La proscripción de la siembra, tenencia y consumo – el corazón de esa guerra-, convirtió “el oro blanco” en mercancía a cuya sombra se cuece una tupida maraña de conflictos.

II. CONTENIDO DEL PODER: “CONSENSO” Y VIOLENCIA

El país –quedó dicho- opera como matriz de encuadramiento de sus municipios y regiones. Entonces, si cada país tiene la ubicación recién descrita, ¿qué sucede con las ciudades? El impacto urbano del narcotráfico varía de modo considerable de una a otra ciudad; como sucede con los países unas permanecen desprovistas de dinámicas conflictivas mientras otras se ven afectadas por intensos ciclos violentos. Diversas condiciones determinan el modo y el momento en que una ciudad se convierte en pieza articuladora de la cadena. Entre otras la posición geográfica (la ubicación de Juárez en la frontera); la proximidad de severas crisis económicas (la industria textil en Medellín, la maquila en Juárez); la historia de la criminalidad (los antiguos malandros de Río de Janeiro, los contrabandistas en Medellín); el no menos importante ascendiente de figuras relacionadas con la criminalidad (la Nacha en Juárez, Escobar en Medellín)²⁷. Otra vez, como en el caso de los países, la

²⁷ Como quedó señalado este texto comparativo no entra en la complejidad de esas particularidades, se limita al presente.

posición de la ciudad en el eslabonamiento del narcotráfico está mediada por factores enterrados en la peculiaridad de la historia urbana.

De tal modo el país encuadra (impone actores, conflictos y dinámicas violentas), pero cada ciudad procesa esas realidades nacionales siguiendo el dictado de sus propias particularidades²⁸. Ni siquiera la ubicación nacional determina de manera mecánica el lugar de la ciudad²⁹. Así las cosas, ¿de qué maneras se construye el poder criminal en las cuatro ciudades bajo escrutinio? ¿Qué semejanzas y qué diferencias atraviesan las gestiones del narcotráfico en Río de Janeiro, Medellín, Ciudad Juárez y Bogotá?

Comenzamos esta segunda parte considerando el contenido del poder según la fórmula más sencilla pero más potente del concepto, la de Gramsci en su noción de hegemonía, entendida como la tensión siempre compleja entre fuerza y consenso³⁰. Una fuerza social es hegemónica cuando logra concitar el mayor consenso, volviendo redundante el uso de la fuerza; de contramano el despotismo pasa por el balance opuesto, el exceso en el uso de la represión y la violencia supone la existencia de un precario consenso (Buci-Glucksmann, 1979).

Los agentes violentos de la urbe latinoamericana hacen precisamente eso, un ejercicio de poder cruzado por la mezcla de fuerza y “consenso”. La mezcla supone que la presencia de los agentes violentos no se reduce a la fuerza. Los sitios específicos donde se implantan –no están regados por toda la ciudad de manera indiscriminada-, no son zonas deshabitadas

28 En Colombia se mostró la manera como el comportamiento violento de las ciudades de una región sigue un mismo patrón. Ciudad y región están estrechamente conectadas. Perea (2013).

29 Por tomar un caso –según se verá de inmediato-, mientras Brasil es un país parado en el eslabonamiento de Paso, Río es una ciudad situada en el eslabón del Menudeo.

30 Para este esquema comparado nos apoyamos en la mirada desarrollada en Perea (2014).

pobladas sólo por ellos, son lugares urbanos donde la vida bulle con todos sus atributos. Los agentes violentos hacen parte de los tejidos sociales urbanos y sus códigos culturales: cimentan un “consenso” cuyas comillas provienen del hecho de que no se trata de un acuerdo consentido por los dominados, sino de una relación presidida por la amenaza y la violencia. Las reglas las imponen en última instancia las armas y la determinación de emplearlas, al margen de la voluntad de los implicados; empero, el peso decisivo de la fuerza no suprime la necesidad de introducir un intercambio social que llamaremos “consenso”³¹. La relación entre agentes violentos y pobladores está regida por un manejo de procederes inscritos en la mixtura de fuerza y “consenso”, una mixtura cuya combinatoria varía de ciudad a ciudad, de país a país.

1. La fuerza

Dos ciudades han experimentado episodios de violencia críticos. Medellín alcanzó en 1991 la astronómica tasa de 396 homicidios por 100 mil habitantes y Juárez en 2010 la también desbordada tasa de 229. Medellín se colorea en toda la década con el rojo de la violencia crónica y Ciudad Juárez con el mismo tinte en el quinquenio 2005-2009 (Cuadro No. 3). Río y Bogotá no pasan por esos extremos. La primera llegó en 1994 a una tasa de 73 y la segunda en 1993 a una de 84. Son sus picos máximos, con muestras de una tendencia a la baja durante el periodo 2005-2009. Sin embargo, pese al descenso, las dos ciudades permanecen la década completa en el amarillo de la violencia Alta.

31 Con esta mirada introducimos la noción de inserción social del acontecimiento criminal y violento, un concepto que pretende mirar la dimensión social de la criminalidad, tan usualmente escamoteada por esa mirada que sólo se ocupa del agente criminal, sus estrategias y propósitos.

CUADRO No. 3
PARTICIPACIÓN EN LA CADENA DE LA COCAÍNA Y VIOLENCIA*
RÍO DE JANEIRO, MEDELLÍN, BOGOTÁ Y CIUDAD JUÁREZ

CIUDAD	COMERCIO			VIOLENCIA**	
	DOMÉSTICO	FINAL	MENUDEO	2000-2004	2005-2009
Río de Janeiro				49	33
Medellín				134	53
Bogotá				29	21
Juárez				19	67

* Se omitieron los eslabones de la producción, el procesamiento y de paso. Ellos no cuentan en la ciudad.
** Promedio por quinquenio (tasa por 100 mil habitantes).

RANGOS DE VIOLENCIA

	RANGO	COLOR
Crítico	Más de 50	
Alto	20 – 50	
Medio	11 - 19	
Bajo	Menos 10	

Del mismo modo que se estableció para los países, la ubicación de la ciudad guarda conexión con su nivel de violencia (Cuadro No. 3). De un lado Medellín y Juárez (ambas en su momento las urbes más violentas del planeta), corresponden a la condición de epicentro de organizaciones que han poseído el dominio sobre el eslabón final de la cadena, ese donde se produce la mayor concentración de la rentabilidad de la cocaína y por ende las más intensas violencias. Al día de hoy Medellín ya no tiene su función allí –al igual que Colombia-, pero continúa desempeñando un papel clave

en el circuito doméstico³². Del otro lado el caso de Río y Bogotá es otro, su lugar se arma en el eslabón final de la venta al menudeo al consumidor³³, eslabón donde se produce la mayor ganancia (65% del total de las ventas), que no se acumula en pocas manos sino que se reparte entre los vendedores regados entre las calles. Ciertamente no es el eslabón de las grandes violencias, aunque tampoco sean violencias para nada despreciables (Río y Bogotá, pese a sus decrementos, continúan en el rango de la violencia alta –color rosa en el Cuadro No. 3-).

2. Los actores

La práctica violenta (conectada a la ubicación en la cadena), es ejercida por un panorama singular de actores. Los agentes violentos y sus dinámicas (su inserción social desdoblada en unos nexos con la población y las instituciones), varían de una urbe a otra de modo consistente.

Río de Janeiro no es la ciudad más violenta de Brasil³⁴; pero sí es, como lo señalan Michell Misse y Carolina Christoph, el obligado punto de referencia de la criminalidad de su país (Misse, 1999). El corazón del acontecimiento violento tiene como origen la presencia de bandas de traficantes de droga insertos en las favelas, sometidos al permanente ataque de autoridades policiales que ingresan regidas por un esquema de operación militar y, como con-

32 En las zonas periféricas de Medellín –poco habitadas pero todavía de la jurisdicción del municipio-, se libran batallas por las rutas hacia Urabá, un punto de salida estratégica por el mar.

33 El consumo de cocaína tiene en Brasil, Chile y Uruguay una tasa de prevalencia arriba de 1%; sólo Ecuador y Paraguay están por debajo de la media mundial (UNODOC, 2013). Reportes del JIFE señalan que el uso de cocaína en Brasil y Costa Rica ha crecido equiparando el consumo de los países industrializados.

34 En Brasil Serra, Cariacica, Olinda, Cabo de Santo Agostinho y Diadema tuvieron entre 1996 y 2009 una tasa promedio de 79 para arriba (Serra la que más con 99). Entre las ciudades de más del millón de habitantes Recife es la más violenta con una tasa promedio de 66; en los mismos años Río tuvo una tasa promedio de 44 (Sistema de Informações sobre Mortalidade, 1996-2009). En Colombia sólo las ciudades de Apartadó y Turbo del Urabá antioqueño compiten con la historia de la violencia en Medellín.

secuencia, desprovistos de todo cuidado con la presencia de moradores que hacen su vida transitando la calle³⁵. Los traficantes por su lado, provistos de destacamentos de seguridad apertrechados con armas de largo alcance, tampoco se detienen ante miramiento alguno cada vez que la policía realiza sus incursiones. Además, durante la primera mitad de la década del 2000 hicieron su aparición las milicias, organizaciones compuestas en su mayoría por policías o militares -en retiro o activos-, empeñados en arrebatar el control de las favelas a los traficantes³⁶. También se da el caso de enfrentamientos entre los mismos traficantes, quienes chocan entre sí ante cada ocasión en que algún *don* decide tomar el control de una favela bajo poder de otro -fue la nota dominante durante el montaje del negocio a comienzos de los 90-³⁷.

Medellín sí fue durante un buen tiempo la ciudad más violenta de Colombia, competida en su historial de muerte sólo por otras ciudades de la misma región antioqueña³⁸. Tuvo la fatal condición de ser la sede del cartel más poderoso de los años 80. Desde ese entonces, como lo exponen Ana María Jaramillo y Max Yuri Gil, el conflicto violento se ha urdido con la participación de una gran variedad de actores. Los combos (grupos armados de jóvenes en los barrios) y los sicarios de los años 80 fueron perseguidos sin clemencia por las milicias, un proyecto de control armado que protagonizó la escena del conflicto violento durante la primera mitad de los 90. Entretanto se venía consolidando el control de la Oficina de Envigado sobre la criminalidad de la ciudad, en-

35 La Policía ha cometido, entre 2002 y 2010, más de 6 mil homicidios de civiles en la ciudad de Río y más de 10 mil en el estado de Río, en supuestas situaciones de confrontación legal conocidas con el nombre de "autos de resistência (Misse, 2013). En los mismos años fueron muertos en servicio 311 policiales en el estado de Río, una proporción de 32 homicidios de civiles sospechosos por cada policial asesinado.

36 Uno de los casos más sonados de las milicias es la denominada "Liga de la Justicia".

37 El *don* es el jefe de la banda. Las bandas forman redes llamadas "facciones" que reparten entre sí también el sistema penitenciario: Comando Vermelho (Comando Rojo), Tercer Comando, Amigos de los Amigos, etc. En São Paulo hay control monopólico de una sola facción, el PCC (Primer Comando de la Capital).

38 Se trata de Apartadó y Turbo, las dos ciudades de Urabá. Entre 2001 y 2010 Medellín tuvo una tasa promedio de 93, Cali de 95 (DANE, 1980-2010).

cabezada por un acérrimo enemigo de Pablo Escobar conocido con el alias de Don Berna. A la consolidación de la Oficina le servía de telón de fondo la cruenta confrontación entre guerrilla y paramilitares, dirimida cuando se implantó el dominio de los últimos a partir de comienzos del 2000³⁹. Los combos han operado como trasfondo de la confrontación a lo largo de sus distintos momentos: cada actor pugna por controlarlos a favor de su causa. La disputa violenta puede provenir de choques entre diversos competidores o de disputas en la base entre los “combos”, muchos de los cuales mantienen confrontaciones históricas; o también pueden venir de guerras entre estructuras del narcotráfico, como viene ocurriendo con los Urabeños y lo que queda de la Oficina de Envigado.

El caso de Ciudad Juárez es, como lo explica César Alarcón, la explosión de una guerra sostenida sobre el enfrentamiento entre las organizaciones de Juárez y Sinaloa⁴⁰. Su estallido en 2007 se produce cuando cada cartel se enfrasca en el intento de ganar el control de la doble condición de la ciudad, tanto centro de consumo de droga como lugar de exportación de cocaína a los Estados Unidos. A fin de sostener una guerra de tal proporción, además del propio brazo armado, cada organización acudió a agentes violentos adicionales. La organización de Juárez contaba con grupos de extracción militar y policial conocidos como Los Lince y la Línea, subcontratando al grupo mexicano estadounidense Barrio Azteca; Sinaloa, por su parte, le hizo frente a la contienda con Gente Nueva, su brazo tradicional, pero además con Los Mexicles y Los Artistas Asesinos. Una confrontación de tal acritud no podía pasar inadvertida para el Estado, un tercer actor que ingresa en la confrontación. Ante los fuertes anudamientos entre las policías y las organizaciones de

39 La única reproducción urbana del conflicto armado se vivió en Medellín, concluida con la abierta intervención del ejército en la operación conocida con el nombre de Orión, cuyo resultado vino a ser la expulsión de la guerrilla y la entrega de la ciudad al dominio paramilitar. Comisión de Memoria Histórica (2011).

40 La organización de Juárez dominó durante décadas el negocio criminal de la ciudad, lo hizo manteniendo un perfil bajo en la práctica del homicidio.

traficantes, el Estado central mexicano envió primero al ejército y luego a la policía federal. En tal estado de guerra urbana la criminalidad se extendió, escalada por sectores de la sociedad que al amparo del caos emprendieron acciones criminales de la más variada naturaleza⁴¹. Las anécdotas pululan, incluyendo la proliferación de desapariciones forzadas, extorsiones y secuestros, muchos ejecutados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Juárez se convirtió en una auténtica necrópolis fronteriza. Sectores completos de la ciudad fueron abandonados y cientos de negocios debieron ser clausurados, mientras la extorsión y la amenaza del homicidio llevaron al exilio a poco más de 70 mil familias⁴².

El panorama de Bogotá es otro bien distinto. La dinámica de sus criminalidades carece de un agente que ejerza dominación violenta sobre sectores específicos de la ciudad, como sí sucede con los traficantes de Río, los combos de Medellín, las organizaciones de traficantes de Juárez. Lo revela el comportamiento del homicidio, notable por la consistencia de su reducción una vez se le compara con las restantes ciudades de Colombia⁴³. Como lo apuntan Carlos Mario Perea y Andrés Rincón, la transformación urbana, en conexión con la puesta en marcha de un nutrido paquete de políticas públicas, tuvieron como resultado la autonomía del conflicto capitalino respecto al choque armado interno. La ciudad, sin embargo, enfrenta todavía la existencia de enclaves violentos (lugares

41 La violencia en Juárez tiene cuando menos tres trayectorias. Primero la guerra entre organizaciones de traficantes. Segundo la guerra del Estado mexicano contra las organizaciones. Tercero la guerra fragmentaria producida una vez la espiral de violencia entre los distintos polos de conflicto alcanza diversos espacios sociales, multiplicando los agentes sociales que producen violencia y criminalidad. Aunque para muchos la guerra fue ganada por la organización de Sinaloa no es posible decir que hubo un balance neto que otorgara el control de la ciudad a una organización específica. El resultado es más bien una zonificación: el norponiente de Juárez y su aliado Barrio Azteca; el sur de Sinaloa y sus aliados Mexicles y Artistas Asesinos. Existen espacios donde coexisten tensamente.

42 Entre 2009 y 2011 casi 5.000 mil negocios debieron cerrar sus puertas, mientras el exilio correspondió al 25% de la población.

43 Bogotá tiene dos características distintivas. La intensidad del descenso de la tasa de homicidio y la ausencia de nuevos ciclos violentos. Ni siquiera el escalamiento de la guerra del país entre 1996-2002 afecta este comportamiento.

donde el homicidio permanece en niveles críticos), así como la proliferación de una criminalidad presidida por un crimen organizado montado sobre el negocio de la droga⁴⁴.

3. El “consenso”

La evaluación de la capacidad política de un proyecto en el poder se mide por el grado de uso de la fuerza: el escaso empleo del recurso violento sirve de indicativo de la capacidad de fundar un proyecto legítimo –esto es, capaz de concitar la población por la potencia misma de su proyecto, al margen de cualquier coacción-. En el caso del poder del crimen, de manera distinta, la fuerza está siempre presente; el consenso es subsidiario. Naturalmente la condición subsidiaria no le resta importancia, en especial cuando una estructura criminal ejerce dominio sobre la vida de la gente con quien convive. Las políticas públicas de seguridad han de tomarse en serio los intercambios entre los agentes violentos y la población. Ahí reside una clave primordial, probablemente de mayor o por lo menos de igual importancia a la violencia. Son las dos caras de un mismo fenómeno.

En São Paulo (Brasil) el *Primeiro Comando da Capital* (PCC) está provisto de la capacidad de control sobre la criminalidad de la megaciudad. Es la única estructura operante. Como parte de sus prácticas organizativas implementaron la ejecución de juicios dotados de los dispositivos que entrañan la majestad de un tribunal –acusador y defensor, jurados y testigos-, habilitados ante diversas situaciones de conflicto surgidas, bien de la estructura criminal bien de la vida de los moradores con quienes conviven. Una práctica de tal naturaleza acerca el crimen paulista a un proyecto de construcción de “consenso” justo porque, ante sus miembros y ante los moradores de las favelas, los juicios le ponen freno a aquello

44 La criminalidad bogotana resalta por su fragmentación. El negocio de la droga alimenta las dos formas más conspicuas: las bandas de comercio ilegal (las más organizadas y jerarquizadas, dotadas de cuerpo armado propio) y las bandas de residencia (grupos controlando la venta al menudeo en los barrios).

que define la criminalidad: la arbitrariedad en la administración de la violencia. La muerte y el castigo dejan de ser la prebenda autoritaria de cualquier jefe local –fundada en las armas-, para pasar a convertirse en mediación que las gentes reconocen y acatan (Feltrán, 2010). No obstante el “consenso”, aún en este notable caso, dista todavía de quitarse de encima las comillas. Le falta ni más ni menos que la acción concertada con la población en la dirección de determinar los contenidos y los dictámenes de esa justicia. En los juicios la red de narcotraficantes detenta el poder de dictaminar y proceder según el veredicto –incluyendo la muerte-, a partir de principios que ellos fijan con independencia de cualquier proceso con la población⁴⁵. El término “consenso”, aplicado al crimen, debe ir siempre entrecomillado.

No hay un “consenso”, hay formas diversas de construirlo, variables de ciudad a ciudad. La inserción social se vuelve la condición crítica: la naturaleza de los intercambios entre los agentes violentos y los moradores fija la forma de “consenso” que aquellos están abocados a construir. Por lo general los miembros de la criminalidad son oriundos de los barrios y las favelas, de tal suerte que mantienen vínculos de familia, amistad y vecindad con las gentes que habitan las zonas donde operan; el ingreso en la estructura criminal, sin embargo, transforma esos vínculos en función de la inserción social siguiendo dos grandes rutas. De un lado están Medellín y Río de Janeiro, dos ciudades donde los grupos ilegales desarrollan una dominación territorial violenta (procedimientos de vigilancia y control del territorio y de la población que reside allí). Del otro, en el extremo opuesto, están Ciudad Juárez y Bogotá, urbes que por razones por completo distintas operan sin el desarrollo de dominios territoriales.

En efecto, desde el punto de vista de la inserción social Río y Medellín guardan algunas semejanzas. En ambas los agentes violentos despliegan el conjunto de su actividad ilegal en el territorio

45 La nota corriente de los juicios, en especial cuando se trata de casos graves, pasa por la consulta telefónica con los máximos jefes, casi todos en prisión.

de la barriada (traficantes en las favelas, combos en los barrios), todo lo cual supone el despliegue de un conjunto de estrategias que les permita ganar legitimidad entre la población. En las dos ciudades la violencia está siempre latente (más en Medellín pero en Río también con intensidad). El agente enraizado en lo local puede ser objeto del ataque de una variedad de adversarios, mientras multitud de circunstancias abren la posibilidad de la delación por parte de los habitantes del barrio. En medio de ese ambiente crispado se torna perentoria la búsqueda de complicidad de los moradores; ellos manejan información estratégica que podría tener consecuencias fatales en caso de caer en manos del adversario –la policía, los traficantes, las milicias-, cuando no se requiere que las casas se conviertan en sitio de refugio ante los acosos armados.

El cultivo de una buena relación con los vecinos es un factor nada despreciable, en cuyo caso la inserción de los agentes violentos –interesados ante todo en la buena marcha del negocio-, supone la provisión de cuatro bienes esenciales para la vida local. Primero la protección. En un ambiente de permanentes balaceras los traficantes y los combos se erigen en defensores de la comunidad, frente a la gente de afuera se encargan de salvaguardar la vida y los bienes de los moradores. Segundo la intermediación de conflictos. Los pobladores acuden a los agentes violentos con el ánimo de resolver la más variada cantidad de materias, desde diferendos económicos hasta conflictos familiares. Tercero la mediación de la actividad comunitaria. Todo agente “externo” que pretende ingresar al barrio, cualquiera que sea su intención –desde las instituciones del Estado hasta las organizaciones no gubernamentales, de la actividad política a las obras de beneficencia-, pasan por el visto aprobatorio de los agentes violentos. Finalmente, en cuarto lugar, las actividades festivas, una dimensión de la existencia colectiva de gran valía entre los sectores populares. En Río los bailes funk organizados por los traficantes se convirtieron en un momento de comunión local, animados por la generosidad a manos llenas en la repartición de licor y droga, mientras en Medellín ciertas fechas

especiales (como el día de la madre y la navidad) y los fines de semana suelen derivar en fiestas marcadas por la entrega generosa de licores y viandas.

En Juárez, sin los niveles de sofisticación colombianos o brasileños, el grupo Barrio Azteca desempeñó una labor de gestión de la vida de los pobladores en algunos sectores de la ciudad. Es la excepción, no la regla; los restantes agentes violentos no desarrollaron acción alguna de inserción social. A lo sumo articularon el control de los expendios de droga (coloquialmente llamados “tiendas”). La ciudad es sitio estratégico del paso de cocaína a Estados Unidos pero también mercado importante de consumo. Cuando la guerra estalló se hizo común la historia del asesinato de vendedores que no atendieron la orden de las organizaciones en el sentido de conectarse a sus redes y no a las del adversario. Más allá de anécdotas de corte similar, no se tiene noticia de alguna injerencia de los carteles y sus brazos armados sobre el destino de la vida colectiva en las colonias populares. No obstante sobre Juárez gravita todavía un doble espectro. De un lado las organizaciones controlando el negocio de la droga, con toda la constelación de gentes que enrolan; del otro una criminalidad difusa pero contundente, la misma que sostuvo parte de la extorsión, el secuestro y la amenaza que desocuparon buena parte de la ciudad.

Bogotá igual carece de dominaciones territoriales violentas. Existe una modalidad de crimen organizado con arraigo local en los barrios populares –las bandas de residencia-, ocupadas en el control de los puntos de venta de droga y en otra variedad de actividades delictivas. Por lo general se trata de bandas familiares con algún grado de organización, investidas de amplio reconocimiento en la zona. Sin embargo, pese a que llegan a crear niveles de amedrentamiento entre los moradores no pasan por el control de la vida barrial, ni siquiera con prácticas sostenidas de extorsión a los negocios locales.

Aún en estos casos de inexistencia de dominación territorial por las armas –los casos de Juárez y Bogotá-, el negocio de la droga

genera un clima de zozobra y desconfianza en lo local. Para los pobladores, sin duda, la droga y la inseguridad asociada a ella constituyen el problema más sentido de la vida comunitaria. Los puntos de venta pueden no generar una violencia homicida de elevada peligrosidad pero encarnan una fuente de conflicto, incluso en una ciudad de violencia media como la capital colombiana.

III. FORMA Y ALCANCE DEL PODER: LA ESTRUCTURA

El equilibrio inestable entre violencia y “consenso” da cuenta del contenido del poder criminal; ahora, otro paso adelante, es preciso arrojar luces sobre la forma y alcance de dicho poder. Es el tema de la estructura organizativa. Si el crimen detenta un poder capaz de afectar de modo profundo la vida urbana, ¿bajo qué formas de operación lo hace? En otros términos, ¿cómo es la gestión del narcotráfico en la urbe latinoamericana?

Del mismo modo que en el contenido del poder, los patrones organizativos no se comportan de igual modo de una a otra ciudad. En este caso las semejanzas se construyen primero entre Río y Bogotá, ciudades donde la estructura en operación funciona sobre un ámbito de dominio local; entretanto en las otras dos el poder opera sobre un ámbito ampliado, en Medellín sobre la ciudad y en Juárez sobre un espacio global. El eje de la comparación, en este punto, viene a ser el grado de centralización y jerarquía de la forma organizativa, sólida en Juárez y Medellín, sin relieves y frágil en Río y Bogotá.

Por supuesto no se trata de patrones fijos. Todo lo contrario, dada la condición ilegal y las prácticas violentas sobre las que se asienta, los patrones organizativos cambian jalonados por múltiples razones, entre otras el establecimiento de alianzas entre los denominados carteles (el caso de los arreglos entre Colombia y México), el logro de una mayor eficacia en las operaciones, los reacomodos en las jerarquías provocados por la detención o la baja de

algunos de los cabecillas. En medio de las transformaciones, con todo, cada ciudad exhibe un patrón característico⁴⁶.

Desde su comienzo a mediados de los años 80 Medellín dio origen a una estructura jerárquica y centralizada. Había un señor al que se le rendía tributo y pleitesía. Luego de la crisis del cartel de Medellín la estructura la heredó Don Berna, jefe indiscutido hasta su extradición en 2008⁴⁷. Después del pináculo de la pirámide, regentada por el capo, la estructura se flexibiliza combinando niveles de centralización con un funcionamiento en red puesto en marcha por los contactos entre las bandas, y entre éstas y los combos, conformados en su mayoría por jóvenes menores de 25 años. Más allá de las tensiones, la estructura criminal conserva un poder sobre vastos sectores de la ciudad cuyo engranaje se aceita mediante la alineación hacia arriba –de los combos a las bandas y de éstas al poder máximo–, diseminada sobre las barriadas y el Centro de la ciudad. El ámbito de dominio es pues sobre la ciudad y su área metropolitana.

El caso de Ciudad Juárez es el de una elevada centralización, en este caso a partir de sólidas estructuras jerárquicas que operan tanto en el espacio internacional del transporte a Estados Unidos como en el entorno local de los puntos de venta en la calle. En realidad se trata de dos estructuras centralizadas con mandos definidos, división de funciones y diversos grados de especialización en las diversas fases del negocio y en la guerra. Como ya se anotó, ninguna bajó a las colonias populares a ejercer dominio directo sobre la vida local. La organización pasa por una estructura administrativa que controla una empresa de grandes rendimientos, incluida la conformación de ejércitos de alto nivel. La gestión del eslabón Final de la cadena está abocada a manejar elevados estándares de

46 El patrón puede modificarse en el tiempo como bien lo evidencia Medellín: entre los 80 y parte de los 90 ejerció dominio sobre el eslabón final, desde ese entonces desempeña una función clave en el eslabón doméstico.

47 Recordar que en Medellín los combos de los barrios están afiliados a una banda, quienes a su vez rinden tributo al señor. Al día de hoy el pináculo está en disputa.

eficiencia, una condición impuesta por un negocio que produce millones de dólares. La organización de Juárez, por ejemplo, tiene dos componentes: uno familiar (núcleo de la toma de decisiones) y otro territorial (encargado del despliegue operativo), todo lo cual implica una férrea división del trabajo estructurada sobre redes de confianza sometidas a constante prueba. Las numerosas actividades pasan por nodos de logística, seguridad y lavado de dinero, adelantadas por células que pueden tener entre 40 y 80 personas dependiendo de la actividad. Muchas de las actividades exigen perfiles profesionales, incluyendo una nutrida nómina de jefes de la policía cuyo rol es variopinto dentro del tráfico de drogas. La forma organizativa en Ciudad Juárez, así las cosas, se proyecta sobre un ámbito de dominio global⁴⁸.

La estructura criminal de Río es bien distinta, nada parecido a la jerarquía de Medellín o la centralización de Juárez. El núcleo básico de la estructura carioca son las bandas de traficantes imponiendo su ley sobre las favelas. Hay pirámides locales que dividen el trabajo entre gerencias, soldados y vendedores directos, todo bajo el control último del *don*. Paralelos a las bandas, y de buen grado por las incontables luchas entre ellas, desde comienzos de los años 90 se conformaron los comandos o facciones (*Vermelho* –el más poderoso-, Amigos de los Amigos y Tercera Fuerza), a la manera de redes que conectan bandas y territorios a un mismo comando. Los *donos* se adscriben a uno u otro, cumpliendo la decisiva función de generar identidad y protección frente a la eventual invasión de otras bandas. Lo mismo, la pertenencia a un comando significa garantía de protección en el sistema penitenciario, así como la posibilidad de negocios e intercambios entre los *donos*, construyendo la confianza que tanto escasea en el universo de la criminalidad. Empero, los comandos no funcionan en nada parecido a los mandos con jerarquía y centralización de Medellín y Juárez, sino que sólo fijan rumbos para la actuación de la banda en la favela. Sucede, claro está, que un *don* controle varias favelas o que varios *donos*

48 Podría decirse global local (glocalizado), pero lo global es lo determinante.

se articulen en red para el manejo negociado de varios territorios (*firmas*). El *don*, en todo caso, continúa detentando el poder, es autónomo en las decisiones en tanto no existe un mando central al que deba obediencia. El alcance de la dominación en Río es por consecuencia de carácter localizado.

En Bogotá la estructura organizativa corresponde a una criminalidad cuya relación con el espacio es ante todo un lugar de ubicación, no de dominación territorial como en Medellín y Río. La criminalidad bogotana exhibe más bien dos rasgos característicos: está desprovista de dominaciones territoriales violentas; y el radio de operación de la acción criminal es circunscrito y localizado (carece de un agente entregado a la búsqueda de más rentas, sometiendo para ello otras estructuras criminales). Ni tan siquiera la más sofisticada de sus expresiones, la venta de droga en un sitio del Centro conocido bajo el nombre del Bronx, emprende la tarea de desplazarse por la ciudad ejerciendo dominio sobre nuevos territorios. Pese a que generan grandes sumas de dinero articuladas a una compleja estructura organizativa que incluye un ejército al servicio de la seguridad (los llamados “sayayines”), su actividad central sigue siendo la venta al consumidor, incluyendo los muchos compradores que a su vez hacen su propio negocio en otro punto de la ciudad. La nota distintiva viene a ser entonces la fragmentación siguiendo una abigarrada división entre crimen organizado y delincuencia común (cada uno, a su turno, con varias expresiones)⁴⁹. Tal estructura arma un dominio que, más que local en sentido territorial, actúa sobre una actividad delimitada. Es la clave de una ciudad que disminuyó el homicidio de modo notable sobre la construcción del mandato de “no matarás”, producto de unas políticas públicas que transformaron de manera sensible la ciudad⁵⁰.

49 El crimen organizado contiene bandas de comercio (legales e ilegales) y bandas de residencia; la delincuencia común bandas especializadas y grupos esporádicos de atracadores callejeros y grupos de identidad con actividades ilícitas como parches y pandillas.

50 El mandato de “no matarás” se resignificó en la fórmula de “robar, pero no matar”. En Bogotá existe una extendida criminalidad que no hace del homicidio su modo primordial de operación.

1. Estructura versus poder

No existe una relación de causalidad entre el tipo de estructura acabado de poner en escena y los niveles de “consenso” y violencia (lo que hemos convenido en llamar el contenido del poder) descritos en la sección anterior. Los vínculos entre estructura y contenido dependen de factores relacionados con las particularidades de cada ciudad, al igual que de mutaciones en la dinámica del narcotráfico en Latinoamérica y el mundo. Empero, con miras a la perspectiva comparada, es posible arriesgar algunas hipótesis respecto a la incidencia de la estructura sobre la mixtura de “consenso” y violencia.

Medellín es ejemplo de un modelo híbrido en el cual se combina un mando centralizado en la cabeza de la estructura, con nodos intermedios y una base extraordinariamente diseminada y fragmentada. De un lado los combos están insertos en los barrios; sus miembros se reclutan de la masa de jóvenes de allí mismo y sus ejecutorias pasan por las vicisitudes de la vida local. Desde esta condición los combos –como las bandas en Río–, se ven compelidos a negociar su inserción con los moradores. Sin embargo, el hecho de que estén articulados a bandas trenzadas en disputas por el predominio (como fue el caso de la guerra entre alias Sebastián y alias Valenciano), impone entre los combos la proliferación de enfrentamientos, asesinatos selectivos y eventos de desplazamiento forzado dentro de la misma ciudad. Mediante su conexión hacia arriba los combos –pese a su profunda inserción local–, no dependen en exclusivo de los moradores. Su necesidad de “consenso” es baja y su violencia alta. Los costos de la aplicación de la violencia respecto a la relación con la población se tornan secundarios.

En Río los *donos* operan como amos y señores de más de un destino de la localidad. La existencia de los comandos, a pesar de su enorme importancia cohesiva, no modifica el patrón de mando diseminado entre las favelas. Los traficantes mandan, pero dependen por entero de la vida local. Como consecuencia la urgencia de “consenso” es enorme, los agentes violentos están compelidos a “negociar” su existencia, sea con la población sea con la policía

corrupta, conduciendo a un progresivo control de los medios de violencia⁵¹. La importancia de las “mercancías políticas” es central para comprender la reproducción ampliada de ese modelo de dominio (Misse, 2013). La irrupción de las milicias y más recientemente del programa estatal de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), no modifica la forma de operación del poder en la ciudad carioca: en los dos casos se prolonga el ejercicio localizado sobre la barriada. En el espectro de la dominación territorial violenta Río se caracteriza por consenso medio y violencia contenida, mientras Medellín por bajo consenso y violencia desbordada.

Bogotá carece de estructuras criminales de segundo orden que integren bandas menores a un mando centralizado. En el sitio donde se erigen las estructuras más organizadas –el mencionado Bronx-, se dan cita nada menos que seis ganchos –el nombre local de las organizaciones de droga-. Pese a que se trata de un lucrativo negocio dotado de ejércitos privados, en una reducida área geográfica del Centro se reparten los dividendos entre varias organizaciones distintas⁵². La fragmentación de la criminalidad bogotana –en estrecha conexión con una política pública que instaló el mandato de “no matar”-, se encuentra detrás de la notable reducción del homicidio bogotano⁵³. En el caso en que algún agente violento tuviera interés en expandirse dominando otros agentes criminales, quizás no hubiera sido factible la marcada reducción del homicidio que caracteriza la capital de Colombia (más si se considera la extendida proliferación de la criminalidad que también la caracteriza).

La centralización de Juárez conlleva, en un primer momento, un control relativo de la violencia; no obstante, en un segundo momento se desata una guerra de grandes proporciones una

51 Los comandos desempeñaron un papel decisivo en ese control. La posibilidad de protección ampliada ante cualquier ataque limitó los afanes expansivos de los *donos*.

52 La alcaldía aplicó una masiva intervención sobre el Bronx, de tal modo que al momento no es posible decir qué acontece ahí. El negocio sigue, sus mecanismos actuales no se conocen.

53 Es reducción del homicidio pero no de la criminalidad: el mandato de “no matar” se resemantiza en “robar, pero no matar”.

vez las dos organizaciones chocan en su pretensión de dominio pleno sobre la ciudad. Las tasas de homicidio son indicativas. En el quinquenio 2000-2004 fue de 19 (un valor medio), pero en el 2005-2009 ascendió a 67 (crítico)⁵⁴. La guerra terminó, todavía con un incierto balance respecto al ganador, pero más incierto todavía respecto a los efectos que quedarán de esa siniestra movilización social producida durante la guerra, esa que desató tal cantidad de grupos asesinando, secuestrando y extorsionando⁵⁵. Los carteles no se definen por la inserción social; controlan las “tiendas” pero no arman cuerpos armados insertos en las colonias. La condición de empresa de alto nivel, obligada al manejo de grandes operaciones, pasa por el enrolamiento de personal cuya proveniencia no es el factor determinante⁵⁶. Su poderío concentra en el aparato armado el control de los medios de violencia.

Hasta aquí esta nota de comparación introductoria. Tras el camino recorrido es el momento de escuchar de viva voz los ricos desarrollos puestos en marcha en el capítulo de cada ciudad. Por supuesto no se han incluido todas las esferas susceptibles de comparación; sea el caso, haría falta dar cuenta del comportamiento de los agentes violentos frente a la política y la economía, dos dimensiones sobre las que se harán apenas breves alusiones en el propósito de terminar de mostrar la injerencia de la criminalidad sobre el destino de las ciudades.

Frente a urbes cruzadas por inequidades extremas -en los cuatro casos los índices de Gini puntúan por encima de 0.5-, el universo de la criminalidad se convierte en poderoso mecanismo de atracción⁵⁷. El punto para la comparación sería el grado de diversificación de la economía ilegal, con un desarrollo notable en Mede-

54 Volver al Cuadro No. 3.

55 Por lo pronto el homicidio va a la baja. Si en 2011 hubo 2086 homicidios en 2012 se redujeron a 750.

56 Por supuesto, en especial en el componente familiar, el origen es determinante. Pero en otros niveles de la cadena no cuenta.

57 Un Gini por encima de 0,5 representa en el contexto mundial una inequidad muy alta.

llín⁵⁸. La pertenencia a la estructura criminal garantiza protección y flujos de dinero hacia los combos, pero también impone el pago de un tributo que fuerza la puesta en marcha de variadas prácticas ilegales. La extorsión se disemina. Se “gravan” las tiendas, los carros de transporte público, los distribuidores de productos y en general todo negocio con alguna vida en el barrio, llegando al extremo de imponer un cobro por el paso de una calle a otra toda vez que se cruza una “frontera invisible”, esas delimitaciones trazadas a lo largo de una amarga historia de guerra y enfrentamiento. De un tiempo hacia acá hizo carrera la modalidad de agentes violentos ocupados en el desarrollo y expansión de sus propias empresas de alimentos, imponiendo a las tiendas la compra de sus productos a los precios que ellos determinan (y por supuesto sin posibilidad de compra a nadie más). La economía ilegal de Medellín se ha diversificado considerablemente sin perder su conexión con la estructura criminal y sus intercambios de doble vía entre la cúpula y la base⁵⁹.

Por su lado, el poder criminal depende de la construcción de vínculos con funcionarios públicos y políticos. Sin ellos resulta inimaginable su crítica permanencia durante varias décadas. Medellín y Río son dos casos dignos de comentarios al respecto⁶⁰. Los combos en Medellín participan en las redes clientelares que llegan hasta los barrios, como parte de una dimensión de la inserción en lo local. Las bandas, de su lado, no incursionan en esos campos salvo la denuncia de su intento de favorecer determinadas candidaturas, tal y como ocurrió en las elecciones para la alcaldía de Medellín en el año 2011. La excepción la constituyen

58 En Juárez sus organizaciones están centradas en el negocio de la droga, sin diversificación en otras actividades ilegales –como si lo hacen organizaciones de otras regiones de México-. En Río los traficantes tampoco se diversifican, mientras las milicias si pasan por otra serie de actividades ilegales (su renuencia a adoptar el negocio de la droga las fuerza a la diversificación). En Bogotá, por definición, la criminalidad se diversifica sobre su profusa fragmentación.

59 Las organizaciones de Juárez y los traficantes de Río no diversifican sus actividades más allá del negocio de la droga (las milicias sí lo hacen). En Bogotá la economía criminal se diversifica sobre su enorme fragmentación.

60 En Juárez y en Bogotá las estructuras no se ocupan de tramitar la política.

los desmovilizados del paramilitarismo, quienes se organizaron para incursionar en el Concejo y las juntas administradoras locales de la ciudad; poco tiempo se requirió para que se demostraran las conexiones de la Corporación Democracia (la organización de los desmovilizados), con una enorme variedad de prácticas criminales. De su lado, el localismo del poder de Río produce dos caminos distintos, otra vez separados por las diferencias entre traficantes y milicias. Entre los primeros sus vínculos políticos se reducen al apoyo de políticos que llegan a la favela, entrando a formar parte de las redes clientelistas. Las milicias se comportan de modo distinto. Hacen proselitismo abierto por candidatos que han lanzado a las contiendas electorales de la ciudad, ganando en una oportunidad un escaño para la Asamblea Legislativa y otros cargos en la municipalidad⁶¹.

A MODO DE CIERRE

El impacto que provocan los agentes violentos sobre las estructuras urbanas es más que considerable. El recorrido comparado puesto en escena bien lo revela, los actores comprometidos en la gestión del narcotráfico afectan el rumbo que toman un sinnúmero de aspectos de la vida colectiva en la ciudad. Los tejidos sociales y la tramitación del conflicto, la acción colectiva y las redes políticas, el trabajo y los emprendimientos económicos: por esta arista o por la otra todos están afectados por ordenamientos ilegales que ya se insertan en las barriadas administrando la existencia de sus gentes, ya se constituyen en ejércitos privados dotados de la capacidad de imponer la guerra y la criminalidad rampante. El poderío de las estructuras criminales urbanas en América Latina –tal y como lo ponen en evidencia nuestras cuatro ciudades–, ahondan más todavía la ya insondable fractura que atraviesa sus sociedades.

61 Para la comparación falta también la relación de los agentes violentos con la justicia y otros aparatos del Estado diferentes a la seguridad.

Sus dineros privatizan el poder alimentando la precariedad de la justicia; sus prácticas nutren la desigualdad y profundizan la segregación; sus desafueros estigmatizan los sectores pobres de la ciudad y en particular los jóvenes, señalados de ser los responsables de la inseguridad urbana.

El Estado, sin duda, es uno de los estamentos legales que han tenido que padecer la mayor conmoción. La continuidad de una situación crítica que ya cumple varias décadas en operación no obedece propiamente a un Estado de espaldas al problema. En las cuatro ciudades el aparato estatal, fuerzas multilaterales y organizaciones no gubernamentales han invertido un colosal esfuerzo en el intento de competir con el potente magnetismo que ejerce el narcotráfico. Ciertamente, un enorme monto de voluntad ha sido puesto en movimiento sin que la situación sea reversada de manera definitiva. En Bogotá un paquete de políticas públicas logró reducir la violencia pero no así la criminalidad, multiforme y desperdigada entre numerosos rincones de la ciudad. En Juárez la guerra cesó devolviendo una cierta calma a la ciudad, más queda pendiente el interrogante de si se trata del resultado de la acción institucional o de un “acuerdo” entre los estamentos del tráfico de droga. En Río la última medida gubernamental da muestras de estar sufriendo dificultades, asediada por los renovados ataques de los traficantes a los destacamentos de policía creados bajo el cobijo del costoso programa de las Unidades de Policía Pacificadora. En Medellín, de igual manera, una cascada de iniciativas encaminadas a enderezar el curso de facetas estratégicas de la vida urbana no logra, con todo, deshacer la solidez de la estructura criminal.

Así como las cuatro ciudades aquí en observación, los países latinoamericanos, unos más, unos menos, se han visto precipitados en crisis que han terminado arrastrando hacia la disolución al Estado y la sociedad. Su primera expresión adquirió cuerpo en Colombia hacia comienzos de los años 80, precarizando más la frágil estructura estatal y gestando uno de los desastres humanitarios más ruinosos del planeta. Comenzó allí pero no se detuvo. El último estremecimiento cayó sobre México, uno de

los Estados más consistentes de la región que, pese a ello, sigue incapacitado para contener su propio colapso e impedir la diseminación de la violencia a las más distantes regiones. En el recorrido de Colombia a México una buena cantidad de países han sido arrastrados en la violencia, presididos por el ejemplo dramático de El Salvador, Honduras y Guatemala en el triángulo norte de Centroamérica. Latinoamérica continúa siendo el continente donde anida la crisis, las ciudades aquí en estudio simplemente confirman la intensidad de la turbulencia que se resiste a abandonar el continente.

Sin embargo, pese a la evidencia de la capacidad corrosiva del negocio, los centros del poder mundial no se ocupan del tema, encabezados por unos Estados que se resisten a reconocer en la guerra contra las drogas un asunto de elevado interés hemisférico⁶². Por desgracia, no es sólo un asunto del norte. Si más de una nación latinoamericana ha sido colapsada, tornando evidente la realidad de un fenómeno que se desplaza de país a país deshaciendo las estructuras profundas donde anida, ¿cómo es posible que Latinoamérica no haya avanzado en la construcción de un bloque de poder orientado a modificar la política mundial de tratamiento de la droga, no sólo de la marihuana sino también de la cocaína?⁶³.

Entonces, retomando la pregunta lanzada en la introducción, ¿qué se demanda para que el mundo y la misma América Latina emprendan una acción decidida frente a las políticas contra el narcotráfico? ¿Será que en la transformación de la política mundial de la droga anida una clave esencial para la resolución de la paradoja latinoamericana?

62 Por supuesto los centros de poder no son monolíticos, en su interior bullen fuerzas que pujan por la transformación de la política frente a la droga. En Estados Unidos tres estados avanzan en la legalización de la marihuana.

63 Es desafortunado que el más reciente informe de desarrollo humano, centrado en la seguridad del continente, reduzca el narcotráfico al simple papel de una expresión más del crimen organizado.

BIBLIOGRAFÍA

- Azaola, Elena (2012). La violencia de hoy, las violencias de siempre. *Desacatos. Revista de Antropología Social*.
- Buci-Gluckmann, C. (1979). *Gramsci y el Estado. Hacia una teoría materialista de la filosofía*. México: Siglo XXI.
- Centro de Memoria Histórica (2011). *La huella invisible de la guerra. Desplazamiento Forzado en la Comuna 13*.
- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA), (2013). *El problema de las drogas en las Américas*.
- Feltran, G. (2010). *The Managment of violence on the Sao Paolo Periphery. The repertoire of normative apparatus in the PCC era*. Recuperado de http://www.vibrant.org.br/downloads/v7n2_feltran.pdf
- Jaramillo, A. y Salazar. A. (1992). Medellín. *Las subculturas del narcotráfico*. Bogotá: Cinep.
- Krathausen, C. (1998). *Padrinos y mercaderes: Crimen organizado en Italia y Colombia*. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial.
- Lupo, S. (2009). *Historia de la Mafia*. New York: Columbia University Press.
- Misse, M. (1999). *Malandros, marginais e vagabundos. A acumulação social da violência no Rio de Janeiro*. Ph D thesis en Sociología, IUPERJ.
- _____ (2010). La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro y en Brasil: algunas reflexiones. *Co Herencia – Revista de Humanidades*.
- _____ (2013). Estado y mercados ilegales en Latinoamérica: reflexiones a partir del concepto de mercancía política. En Jorge Giraldo Ramirez (Ed.) *Economía criminal y poder político*. Medellín, Universidad EAFIT.
- Perea, C.M. (2014). La muerte próxima. Vida y dominación en Río de Janeiro y Medellín. *Análisis Político* No. 80, enero-abril, pp 3-25
- _____ (2013). “Resituar la ciudad: conflicto violento y paz”. *Análisis Político*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) - Universidad Nacional de Colombia: No. 77, enero-abril, Bogotá.
- Rodrigues, T. (2004). *Política e drogas nas Américas*. São Paulo: Pontificia universidade católica de São Paulo.
- Weber, M. (2007). *Sociología del poder: los tipos de dominación*. Madrid: Alianza editorial

RÍO DE JANEIRO: SUFRIR LA VIOLENCIA, DECIR LA PAZ¹

Michel Misse²

Carolina Christoph Grillo³

Un largo proceso histórico y social transformó, a partir de los años 80, la llamada “Ciudad Maravillosa” de los años 40, 50 y 60, cantada en verso y prosa, en una ciudad expuesta a las noticias internacionales como una de las más violentas del mundo. ¿Cómo fue posible esto? ¿Qué fue lo que sucedió para que esa transformación tuviera lugar y produjera efectos que se mantienen aún hoy, más de treinta años después?

1 La realización de la Investigación en Río contó con la colaboración de varios investigadores del Núcleo de Estudios sobre Ciudadanía, Conflicto y Violencia Urbana (NECVU) de la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialmente Marcela Araújo Silva.

2 Doctor en Sociología (IUPERJ, 1999), Profesor de Sociología en el Departamento de Sociología y en el Programa de Posgrado en Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

3 Doctora en Antropología (PPGSA-UFRJ, 2013), Investigadora Asociada del Núcleo de Estudios de la Ciudadanía, Conflicto y Violencia Urbana (NECVU) de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

En los últimos años una política de reducción de los homicidios y la instalación, en las principales favelas, de “unidades policiales pacificadoras”, las llamadas UPP, lograron hacer declinar la tasa de homicidios hasta alcanzar índices de los años 80 y desalojar el control armado de los principales centros de microtráfico de drogas en la ciudad.

El objetivo de este texto es triple: primero, presentar una contextualización histórica y social de la ciudad de Río de Janeiro, con el fin de permitir una visión general de lo que se configuró como una “acumulación social de la violencia” entre los años 50 y los años 90 (Misse, 1999; 2006), así como un análisis de la situación de criminalidad en la última década. Luego, presentar los dos principales actores colectivos de la violencia actual en Río de Janeiro: las facciones del microtráfico en las favelas y los grupos de policías que actúan en relación con las facciones, ya sea extorsionándolas, o reemplazándolas y reprimiéndolas mediante formaciones ilegales llamadas “milicias”. Finalmente, en la última parte, discutiremos las políticas de seguridad adoptadas por el gobierno en la última década, especialmente la actual política de creación de Unidades de Policía Pacificadora en las principales favelas de la Capital de la Provincia.

I. LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA EN SU CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL

1. Río de Janeiro y la acumulación social de la violencia

Río de Janeiro fue la capital de Brasil desde 1763 hasta 1960, es decir, por cerca de dos siglos. Situada en la costa sudeste del país, sirvió durante más de un siglo (1720-1850) como el principal puerto de llegada de esclavos de África y de exportación colonial del oro y piedras preciosas extraídas en Minas Gerais, hacia la metrópoli portuguesa. Al ser sede de la administración colonial portuguesa, fue también, luego de 1808 y hasta la independencia, en 1822, sede

del decadente Imperio portugués, con la transferencia de la Corte de María I y de Juan VI de Lisboa a Río por las invasiones napoleónicas. Río de Janeiro, que se eleva en uno de los más preciosos sitios geográficos de Brasil y recibió visitantes extranjeros durante todo ese periodo, se vio transformado, con el tiempo, en uno de los principales referentes urbanos del Atlántico Sur, sólo por detrás de Buenos Aires. La ciudad pasó por una gran reforma urbana en los primeros años del siglo XX, inspirada en las transformaciones urbanísticas introducidas por el Barón Hausmann en París, y adquirió progresivamente el estatus de ciudad moderna, sede de la administración pública y de la élite política y cultural del país. Pero permaneció como una ciudad de funcionarios públicos y de comercio, mientras São Paulo, un poco más al sur, se modernizaba con base en la inmigración italiana y en la industrialización acelerada.

Luego de la revolución de 1930, hecha por oficiales militares con apoyo en las clases medias urbanas, Río se convierte también en la sede de una dictadura de estilo fascista, bajo el liderazgo carismático de Getúlio Vargas, un político oriundo de las oligarquías agrarias de Río Grande do Sul, con su estilo de “caudillo” benefactor de las masas populares. Éste gobernará el país con mano de hierro, pero introducirá la legislación laboral y social y modernizará la burocracia estatal, centralizando en la Unión la construcción de la máquina administrativa del Estado brasileño. Los derechos sociales introducen los derechos de los ciudadanos, sin los derechos políticos y con derechos civiles restringidos a las élites, a las clases medias y a las clases trabajadoras reguladas por el Estado.

Derrocado del poder en 1945, tras la derrota del Eje por las democracias occidentales en la Segunda Guerra Mundial, Vargas retorna al poder, esta vez elegido por voto popular, en 1950, con el apoyo de las izquierdas. Bajo fuerte oposición de sectores democráticos, quienes veían en él al caudillo antes que al presidente electo, y de la derecha, que reflejaba los impases de la guerra fría, fue llevado al suicidio en agosto de 1954, un trauma político que perduró durante décadas en la política brasileña. Con su suicidio, logró posponer por diez años la victoria de sus opositores, quienes sólo

llegaron al poder en marzo de 1964, por medio de un golpe de estado militar. La nueva dictadura, de los opositores de Vargas, durará hasta 1985, uno de los periodos más sombríos de la historia política brasileña, pero marcado por un gran crecimiento económico y rápido aumento de la modernización capitalista del país, dirigida por el Estado y basada en el triángulo de empresas nacionales, empresas estatales y empresas multinacionales. Pero Río de Janeiro había dejado de ser la capital política y administrativa del país desde 1960, cuando fue inaugurada Brasilia, una ciudad en el altiplano central del país, planeada para ser la nueva capital de Brasil.

Observando esas transformaciones políticas, pero con un toque de cambio social mucho más profundo, la economía y la demografía brasileña transforman, en el corto periodo de veinte años (1950 – 1970), el continente agrario brasileño en un país fuertemente urbanizado. Las migraciones internas de poblaciones, principalmente del nordeste brasileño en dirección al sudeste, triplican la población de Río de Janeiro y de São Paulo en el corto periodo de treinta años. Son poblaciones compuestas en su mayoría por personas pobres o miserables, que huyen de la sequía o del estancamiento económico y que van a instalarse en la periferia de las grandes ciudades costeras o a aumentar el tamaño de sus favelas. Las favelas de Río de Janeiro, que surgieron durante la reforma urbana de principios del siglo, van a pasar de 40 mil habitantes, en 1940, a 800 mil habitantes en 1980. La periferia, constituida por pequeñas aldeas de economía rural va a transformarse, en poco tiempo, en grandes asentamientos urbanos, con la división del terreno en lotes para la construcción de casas, antes de que cualquier oferta en transporte público, saneamiento y servicios públicos de educación y salud fuera capaz de ser producida por el Estado. Aún hoy esas áreas sufren con la baja capacidad del Estado para atender las exigencias mínimas de servicios públicos.

La universalización de la educación pública, a partir de los años 70, y de la salud pública, a partir de los años 80, no estuvo acompañada de medidas capaces de mantener la calidad de los servicios y detener la progresiva evasión escolar y la baja capacidad de

atención hospitalaria, llevando a la migración de las clases medias hacia las escuelas particulares y a los planes privados de salud. La desigualdad de ingresos aumentó considerablemente entre los años 40 y 70, a tal punto que el General Médici, jefe del régimen militar en 1973, cuando el PIB brasileño alcanzó un 11,3% de crecimiento, afirmaba que “la economía va bien, pero el pueblo va mal”. El aumento de la desigualdad de ingresos reproducía la acumulación de desventajas de las capas más pobres de la población, compuesta en su mayoría por poblaciones negras y mestizas, incapaces de romper la barrera de la desigualdad social en el acceso a derechos y a la justicia.

La despolitización producida durante veinte años de régimen autoritario mantuvo, cuando no aumentó, las antiguas prácticas clientelistas y la corrupción política junto a los sectores más pobres y excluidos del país. La línea de pobreza extrema alcanzó cerca de 50 millones de personas a principios de los años 80, cuando el país comenzó a redemocratizarse. Luego de los choques de los precios del petróleo a mediados y a finales de los años 70, la economía brasileña entró en un periodo de estancamiento con inflación alta, desempleo continuo y crisis fiscal que duraría toda la década del 80. Río de Janeiro, que había dejado de ser la capital del país (distrito federal) veinte años antes, se había transformado en ciudad-provincia (Provincia de Guanabara) entre 1960 y 1975, pero terminó fundiéndose a la antigua Provincia de Río de Janeiro, de la cual se convirtió en capital desde entonces. Habiendo perdido el estatus político y administrativo, la ciudad se sumergió en un largo periodo de pérdida de identidad económica hasta los años 90, cuando recomenzaron las inversiones productivas.

Las tasas de criminalidad en Río de Janeiro se mantenían relativamente bajas hasta principios de los años 50. En la década del 50, la tasa de homicidios dolosos en Río de Janeiro alcanza, en promedio, 10 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que ya indicaba un deterioro del control social. Al final de esa década, la prensa comienza ya a representar la ciudad como peligrosa y violenta, en contraste con el pasado reciente. En los años siguientes, principal-

mente en la década del 70, esa representación alcanza la magnitud de un peligro creciente. Los titulares de la prensa no exageran cuando resaltan que “las ciudades tienen miedo”.

Es innegable el extraordinario aumento de la criminalidad violenta en las grandes ciudades brasileñas en el último cuarto del siglo XX. Más que un aumento excepcional en el número relativo de homicidios dolosos, robos a residencias y a vehículos, robos seguidos de muerte, asaltos a mano armada y conflictos diversos con heridos y muertos, se observa un cambio evidente en el modelo de sociabilidad de las ciudades, con inseguridad en la circulación por calles y avenidas, incluso en carro y durante el día, muertes por balas perdidas, solicitudes de políticas de invasión militar a innumerables áreas pobres, masacres a manos de grupos de exterminio. En casi todas las grandes ciudades brasileñas, y en algunas ciudades de mediano porte en las áreas de influencia de las grandes ciudades, siguiendo un modelo que adquirió visibilidad a partir de Río de Janeiro y de São Paulo, la mayor parte de los edificios y residencias fueron cercados por diversos dispositivos de seguridad, los horarios de circulación por la ciudad se hicieron relevantes para todos sus habitantes y centenas de barrios y áreas son considerados peligrosos cuando no inaccesibles para quienes no son residentes.

Es innegable también que ese aumento de la violencia criminal es diferenciado en el tiempo y en el espacio de esas grandes ciudades. La visibilidad de tal aumento comienza en Río de Janeiro a mediados de los años 50 y en São Paulo un poco después, acompañando la urbanización rápida y la modernización contradictoria del país, y se va generalizando hacia otras capitales: Recife, Vitória, Aracaju, Salvador, Fortaleza. No obstante, otras grandes capitales como Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, aunque presentaban tasas de aumento de la violencia criminal, no parecían seguir, hasta ese entonces aunque tardíamente, el mismo modelo. Todo el país, hacia los años 80 y 90, parece entonces dividirse en ciudades catalogadas como “peligrosas” y ciudades “tranquilas” a los ojos de sus habitantes o de sus visitantes. Además, entre las ciu-

dades percibidas como las más peligrosas, como Río de Janeiro y São Paulo, se distinguían no sólo variaciones que las jerarquizaban comparativamente⁴, sino que además nacían de comparaciones entre sus mitos urbanos, sus estilos de vida, sus etnias, su estratificación por niveles de ingresos, su ecología social, etc.

¿Cómo se establece la percepción extendida de una “ciudad peligrosa”? La experiencia de las calles, de los turistas, de las rupturas de la cotidianidad de sus habitantes por los pequeños y grandes delitos, así como por la cantidad de eventos e historias divulgadas en la prensa, todo eso converge para constituir diferentes signos de un “peligro social”. Cada experiencia singular de ruptura en la sociabilidad aprendida, cada síntoma de transgresión (y la transgresión no es sólo la percibida en los choques interindividuales, hay también signos de transgresión *social* extendida, de injusticias a gran escala), todo esto contribuye a la construcción de un fantasma consistente, que acecha lo cotidiano público y privado y lo pondera con otros signos, como la miseria, la desigualdad económico-social, la desnormalización de los cursos de acción bajo la presión de estrategias adquisitivas o de estilos de vida orgiásticos, la incapacidad del Estado para cumplir su promesa de garantizar la seguridad colectiva y la seducción que muchas transgresiones parecen de manera creciente imprimir en una sociedad “de riesgo”. Todo sucede también como si el fantasma fuera generado por una sorpresa, confinada al cambio en el modelo de bandolerismo, como si el cambio en los modelos de sociabilidad tampoco hubiera cambiado junto a la enorme transformación urbana del país, en un movimiento que ni antecede ni sucede al aumento de la criminalidad violenta.

4 El Secretario de Seguridad Pública de São Paulo explicitó esa percepción al afirmar, ya en 1998, que el crimen en Río «es más organizado» y en São Paulo «más pulverizado». La disputa sobre cuál de las dos grandes ciudades era la «más violenta» prosiguió en la comparación entre sus tasas de homicidios, de robos y de victimización en general durante dos décadas. En la misma entrevista, se decía que «es más fácil combatir el crimen en Río que en São Paulo, porque en Río el crimen es organizado». (*Folha de São Paulo*, 23/4/1998). La década siguiente demostrará lo contrario.

También es innegable que la visibilidad de la violencia criminal asociada a un cierto grado de organización de la misma siempre fue más grande en Río de Janeiro, incluso antes de verificar ese aumento en los años 50. El “juego del bicho”, que aunque muy popular siempre fue ilegal; la tradición de ciertos estilos de vida en las zonas bohemias, en los tugurios y, posteriormente, en las favelas cariocas, con sus escuelas de samba, sus malandrines y sus redes de solidaridad, pero también con sus *valientes* y sus “ollas de vicio”; la expresión cultural de sus mitos urbanos y de sus luchas políticas, que ganaron el imaginario nacional en la literatura, en el cine, en la música urbana. Pero, principalmente, el hecho de haber sido Río de Janeiro la capital federal, puerto y centro turístico nacional e internacional, además de albergar las principales empresas de comunicación del país, hicieron de la ciudad, particularmente desde el final de la dictadura Vargas en 1945, una ciudad especialmente observada por todos los brasileños, una compleja y más extensa “utopía urbana” brasileña, mezcla de seducción y recelo, de atracción y repulsión de un imaginario urbano cuyas raíces se pierden en la historia cultural que forjó o “inventó” la nacionalidad brasileña.⁵

La “invención de la samba” fue también una “invención” de Río de Janeiro como ciudad “típico-ideal” de Brasil, la invención del *carioca* como un estilo de vida diferente, supuestamente más cosmopolita, de buen humor y “superior”. La asociación del *carioca* con el “mandrín”, distinguiéndose de otros estereotipos regionales - el *mineiro* desconfiado; el *paraíba* o *norteño*, violento en la defensa del honor, “valentón” y trabajador “esmerado”; el *paulista*, trabajador compulsivo y “conservador”; el *gaúcho*, machote, autoritario; el *baiano*, indolente, hablador, también mandrín, etc., todo ello indica una invención cultural que especifica a Río, distinguiéndolo de las invenciones (muchas veces producidas en el propio Río, en-

5 Tomo aquí prestada la noción de «utopía urbana», de Gilberto Velho, confiriéndole un significado extendido. Cf. G. Velho, *A Utopia Urbana (La Utopía Urbana)*, Río, Zahar, 1973.

tonces capital de la República) que construyen el imaginario de las demás ciudades (o regiones) brasileñas.

Finalmente, es también innegable que el aumento del consumo de drogas en las grandes ciudades brasileñas a partir de los años 70 se relaciona con la expansión de un mercado informal cuya moneda es la “violencia”. Es indiscutible que gran parte de ese aumento de la violencia urbana se asocia, directa o indirectamente, al enorme crecimiento del consumo de drogas, especialmente de la cocaína, y de su comercialización clandestina por redes de individuos y grupos que, en esas condiciones, hacen de la “desconfianza recíproca” un modelo pragmático de sociabilidad y de la violencia un referente cotidiano de toda convivencia.

No obstante, y por más que existan diferencias de consumo de drogas entre las ciudades peligrosas y tranquilas del país, se observan modelos distintos de criminalidad incluso entre las ciudades percibidas como peligrosas. Aún en este punto Río de Janeiro parece haber recibido la atención principal: todas las ciudades, inclusive São Paulo, comparan su violencia con la de Río de Janeiro, y esa idealización comparativa no es, en absoluto, como se podría pensar, una cuestión irrelevante. ¿Por qué Río se constituyó en paradigma social de la violencia por comparación, cuando São Paulo casi siempre había presentado, hasta entonces, tasas de violencia cercanas o incluso más grandes que las de Río?

Además de la obviedad de una “desilusión” con la utopía de la “Ciudad Maravillosa”, y de su permanente exposición a los medios de comunicación, Río de Janeiro acumuló una violencia criminal *sui generis*, que parece tener una cierta pretensión difusa de “legitimidad”, una “justificación cultural”, una “explicación histórica”. Es como si el paradigma de la violencia carioca se constituyera alrededor de la representación de una “subcultura subalterna” que viene transformándose y cuyo peligro social (y seducción) es todavía imaginado como susceptible de contaminar a todo el país. La referencia al crimen “organizado” de Río, a la “guerra civil” de Río, a la “ciudad partida”, al “problema de la policía” de Río, todo ello

parece seguir un mismo presupuesto, que distingue inicialmente el asunto criminal de Río, concediéndole un estatuto típico-ideal, que sirvió y aún sirve de referencia para comparaciones con el resto del país. ¿Servirá para una comparación con otras ciudades de América Latina?

El mercado informal de la cocaína y de la marihuana, cuyo crecimiento coincide con el crecimiento de la visibilidad social de la violencia criminal, y que permitió, por la acumulación lucrativa, que se estableciera un nuevo modelo de violencia en las relaciones entre las pandillas, y entre éstas y la policía y la población, gracias a la entrada de armas poderosas y al aumento de la corrupción de autoridades, se convirtió en el punto privilegiado de la violencia urbana en Río de Janeiro desde los años 80. Sin embargo, aunque dicho mercado represente un salto cualitativo en la organización y equipamiento de las pandillas y sus redes, esa interpretación no parece suficiente para explicar el desarrollo del fenómeno. El poder de atracción del tráfico no es igual en todas partes. Al fin de cuentas, el comercio clandestino de drogas sucede en todas las grandes ciudades del mundo y no produce, en todos los lugares, los mismos resultados. El enigma, aquí, es que la tasa de crímenes violentos a partir de la diseminación del mercado de drogas en todas las grandes ciudades del mundo, en la década del setenta, presentó un crecimiento significativo y luego decayó o se mantiene relativamente estable, mientras que en Río (y luego en São Paulo) ésta se quintuplicó entre los años 70 y 90.

¿Qué acerca y qué distingue la violencia y sus representaciones sociales en Río de Janeiro de ciudades consideradas también muy violentas, como Caracas, Medellín, Washington o Ciudad Juárez? El mercado de drogas es común a todas ellas, pero también es común a ciudades con bajas tasas de crímenes violentos, como Londres, París o Amsterdam. La percepción social de que la mayor parte de la violencia parte de los guetos, de las áreas urbanas pobres y discriminadas, cuando no son étnica ni socialmente segregadas,

también es un aspecto común a todas estas ciudades, pero también a otras en donde las tasas de violencia son indudablemente más bajas.

La violencia no parece ser, entonces, un resultado aislado e inmediato del tráfico de cocaína, aunque con éste se haya reforzado y ampliado significativamente. La violencia parece, más bien, un proceso social que exige acumulación histórica, aunque el desarrollo de mercados ilícitos de “vicios” pueda ser importante o incluso central en esa acumulación originaria y en sus resultados posteriores. La unidad de sentido de las prácticas que son representadas y aglutinadas bajo el común denominador de la “violencia urbana” no se desarrolla sin que antes estén dadas ciertas condiciones y sin que tales condiciones se reproduzcan ampliamente. La compleja interconexión entre un mercado informal clandestino de microtráfico y la percepción social de un aumento de la violencia en general (y no sólo de la violencia en los límites de los principales agentes de dicho mercado) pasa por una específica *acumulación social de la violencia*, cuyos contornos exigen una comprensión histórica.

En Río de Janeiro hay un doble mercado informal e ilícito semiclandestino que funciona desde hace casi un siglo, sin interrupción: el juego del bicho y las “bocas do fumo”⁶ de las favelas. Son históricas las relaciones de la ciudad (y de la policía) con los personajes de tales mercados. Otros mercados, comunes también a otras ciudades, como los que involucran otras mercancías ilícitas - bienes durables robados, agiotismo, contrabando, prostitución, aborto - alcanzaron una precoz visibilidad en Río que los distingue y particulariza en relación con otras ciudades brasileñas. Paralelamente a dichos mercados, se desarrollaron, desde los años cincuenta, pandillas de asaltantes armados que fueron reemplazando poco a poco a los antiguos “malandrines” y “valientes” en la historia local de innumerables comunidades pobres y favelas.

6 “Bocas do fumo” son los puntos de venta al por menor de marihuana (y después de cocaína), cuya denominación viene desde los años 40 y 50.

No hay una continuidad lineal, en la memoria social, de sus principales personajes, y tampoco hay una discontinuidad radical. Se articulan nombres, eventos, peripecias. Cada generación idealiza la anterior, ve rupturas y diferencias, pero se mantiene de algún modo referida a una memoria social que interconecta diferentes prácticas a lo que podría llamarse una “historia”.⁷ Las representaciones que permean esa “historia” apuntan a modelos comunes y rupturas significativas en torno a la idea de “criminalidad” o de “bandidaje” en Río de Janeiro. Sólo a partir de los años 80, esa “historia” adquirió la dimensión que es representada por la evidencia de “aumento de la violencia”, pero siempre asimilando la noción de violencia con la noción de criminalidad y de bandidaje y con sus extensiones en los grupos de exterminio y en la policía. En cada área, hay una “historia” local de eventos, personajes y hechos, como también hay, en la ciudad, una “historia” periodística que interconecta personajes de la Policía y del crimen, del juego del bicho con la historia de las escuelas de samba, de la cocaína con crímenes que involucran personajes de la élite, en fin, historias que se conectan en un objeto común que es representado como el “submundo” carioca, un submundo en ampliación constante. Esas representaciones refuerzan la idea de un “doble orden”, al mismo tiempo continuo y discontinuo, cuya legitimidad es contradictoriamente disputada en el proceso de socialización de niños y jóvenes, principalmente en las favelas y en otras comunidades que concentran la pobreza urbana a los ojos del asfalto.⁸ Hay bandidos “buenos” y “malos”, malandrines “simpáticos” y “marginales”, “soplones” y

7 En Colombia, como lo observa Daniel Pécaut, el mito de una «Violencia» que se hizo autónoma, generalizada, que sobrepasa a sus protagonistas para transformarse en el principal personaje de un «destino nacional», parece oponerse, al mismo tiempo, a las micronarrativas hechas de una multiplicidad de experiencias, impidiendo la emergencia de una visión de conjunto, o de una metanarrativa coherente, de una «historia».

8 La oposición del «morro» y del «asfalto» es antigua, y primitivamente asimilaba el asfalto con la «ciudad», con lo «público», dejando al morro en una posición periférica, casi rural, estrictamente comunitaria. Con el tiempo, esa oposición pasó a ser también la que existiera entre los ciudadanos y los marginados y actualmente entre el anonimato de la ciudad y la identidad de la comunidad local, pero también entre los «incluidos» y los «excluidos» de la ciudadanía.

“buena onda”, “vagabundos” y “parceros”, toda una estratificación moral de la “gallada”. Por oposición al trabajo, fueron inicialmente “malandrines”, después “marginales”, siempre “vagabundos”, pero no se consideraron jamás “tontos”. El tonto para ellos, se dice, siempre fue el trabajador pobre, “don nadie”, moralista y abnegado con la familia. Pero muchos, al mismo tiempo, los respetan. Sienten compasión y desprecio, pero mantienen el respeto por ellos.

Hay, igualmente, toda una subcultura antigua, transformada y aumentada, que persigue, acusa y mata a los que denuncian a los criminales de su comunidad. La “delación” se transformó, en esa “historia”, en uno de los principales fantasmas de la carrera criminal y en el fundamento de una “subcultura” que se amplió desde hace por los menos cuatro décadas, que respalda, con la “ley del silencio”, la reproducción aumentada de tales prácticas. Pero no hay, nunca hubo, en las áreas pobres de la ciudad, una “organización” que pudiera ser comparada, por los vínculos internos y capacidad de reproducción, con la mafia siciliana o con la de las nuevas “mafias” y “carteles”. Hay relaciones tenues entre pandillas de diferentes áreas, o un mismo “dueño” que controla varias áreas, pero hubo un momento en que se buscó jerarquizar y vincular orgánicamente esas relaciones, cuyos resultados no tuvieron éxito.⁹

El modelo acumulativo entre la desconfianza, el temor a represalias y el estigma de la delación alienta el apareamiento de una sociabilidad “de riesgo”, que emerge en las comunidades pobres que enfrentan pandillas e invasiones policiales y su refracción como una “sociabilidad violenta” en los cálculos de cada habitante de la ciudad. El ciudadano que denuncia, no es un ciudadano que reclama protección del Estado, es un “delator”, un “traidor”, aunque no haga parte de ninguna pandilla, solamente reside en la comunidad en donde la pandilla nació y opera. El enigma aquí, que

9 Hasta los años 90, el «fortalecimiento» (palabra empleada para ese intento) obtuvo cierto éxito, principalmente en las pandillas que se identificaban con el llamado *Comando Vermelho* (comando rojo), pero nada que se comparase con lo que se representa internacionalmente como una organización criminal.

no existió, en esa proporción, ni en São Paulo, ni en ninguna otra ciudad brasileña hasta entonces, pero que fue común a los guetos negros de Washington, New York y Los Angeles, es la demanda de alianza que los bandidos nacidos allí parecen dirigir a su comunidad, como recurriendo a una “dimensión tácita” de comprensión y legitimidad, algunas veces de contenido protopolítico.

Toda esa dimensión señala modelos morales rígidos y, al mismo tiempo, situaciones y personas que pueden, comprensiblemente, neutralizarlos. La “historia” de tales eventos y personajes, historia básicamente oral, los clasifica, los juzga, los conecta, los compara con los personajes y eventos contemporáneos. No son sólo “faits divers”, sino *temas históricos legítimamente ilegales*, una sub-historia, silenciosa y esquiva.

Hay también una historia cultural “pública” de tales temas en Río de Janeiro, en la música popular, en la crónica, en el cine y en el teatro, en algunas novelas premiadas y en novelas de televisión, así como también en reportajes y declaraciones. Una historia que casi siempre se construye de afuera, pero que a todos les parece generalmente verosímil. Una verosimilitud que fue construida junto a los temas y que contribuyó, por la fuerza del espectáculo y del sensacionalismo de los *medios de comunicación*, a concatenar esos temas en modelos de acción social comprensibles, al mismo tiempo normales y divergentes, entre los límites de la astucia y del crimen. Personajes como el “*bichero*” (vendedor del juego del bicho), el “gigoló”, la “puta”, el “pederasta”, el “travesti”, el “malandrín”, el “valiente”, el “marginal”, el “psicópata” (término usado hasta la década de los 70 y sustituido luego por “anormal” y, finalmente, por “bicho loco”), el “soplón”, el “gamín”, el “comisario de policía”, el “bacán”, el “niño rico”, etc., pueblan el imaginario de esa múltiple historia cultural de la ciudad (y de otras grandes ciudades brasileñas), fijando estereotipos basados, en su origen, en las reglas de experiencia social de los que con ellos interactúan, tipifican o los incriminan.

Así como el resto de Brasil se compara, para su alivio o preocupación, con Río de Janeiro, el análisis del actual panorama de

violencia en Río tiende a comparar los personajes actuales a esos tipos sociales históricos. Y esos estereotipos acaban transformándose también en tipos ideales paradigmáticos por comparación, a los cuales se dirigen muchos de los análisis de las diferencias entre el pasado y el presente. La discontinuidad con el pasado, que existe y es grande, unas veces retrocede y otras veces avanza en el tiempo, reafirmando, siempre hacia un “pasado relativo”, la continuidad acumulativa de modelos de acción y de sentido. La gran línea divisoria continúa siendo, en la percepción social y en la mayoría de los análisis, la entrada de la cocaína a las antiguas “ollas de vicio” cariocas, entrada que dataría de fines de los años 70.¹⁰

Sin embargo, mucho antes de esto, ya se observaba un incremento en robos y asaltos con violencia, en toda la ciudad, paralelo (pero no necesariamente vinculado) al crecimiento del consumo de marihuana (y, en escala aún menor, de “pepas” y de cocaína) en los segmentos jóvenes de todas las clases sociales de la ciudad, a partir de finales de los años cincuenta. Diferentes coyunturas políticas, después uniformizadas por el régimen militar, propiciaron también diferentes apropiaciones del fenómeno en la representación social, hasta que se generalizara la “cultura del miedo” en la antigua Ciudad Maravillosa. No obstante, es posible que dicha “cultura del miedo” sólo haya alcanzado la amplitud que alcanzó cuando el llamado “bandidaje” salió de una exclusiva convivencia histórica con las comunidades pobres hacia una interacción mayor con los barrios de clase media y de las élites de la ciudad.

Diferentes movimientos poblacionales, ocurridos entre los años 60 y 80, como la afluencia de la clase media baja hacia ciertos barrios tradicionales (Copacabana, Tijuca, Jardim Botânico y Gávea, Flamengo, Botafogo y Laranjeiras) y el desalojo de favelas y “parques proletarios” de estos barrios, con el reasentamiento de sus residentes en grandes y pequeños conjuntos habitacionales en

10 En las élites, la cocaína (como la morfina y el opio) ya era comercializada mucho antes y aumenta desde principios de los años sesenta, pero en las ‘ollas de vicio’ era de consumo caro y de comercialización residual hasta principios de la década de los 70.

los barrios suburbanos y en la periferia, donde ya se ubicaban otros asentamientos de vivienda popular, modificaron la sociabilidad interclases e interétnica en la ciudad en una dirección que hizo más profunda la antigua diferencia entre “asfalto” y “favela” y aumentó aún más la distancia social. El enorme crecimiento demográfico de los municipios de la periferia (Baixada Fluminense), a partir de la apertura de la Autopista Presidente Dutra, la carretera que conecta a Río de Janeiro con São Paulo, y de las sucesivas divisiones en lotes que se abrieron en lugar de los cultivos de caña, café y naranja, también hicieron retornar una parte importante de la población migrante hacia esas nuevas áreas, marcadas por una rápida y profunda ruptura con la sociabilidad tradicionalmente rural ya existente.

En la representación social, se mezclaron todos estos ingredientes sociales con diferentes signos de la “violencia urbana”: aumento de hurtos y asaltos, aumento de muertes por atropellamientos y accidentes de tránsito, agresividad en el tránsito y en los choques diarios, enfrentamientos, en las calles, entre policías y bandidos, aparición de “escuadrones de la muerte” y otros grupos de exterminio, linchamientos, cuerpos “botados” en terrenos baldíos, corrupción de autoridades, violación de jóvenes no sólo de áreas pobres, sino también de clase media, asaltos diarios a bancos, niños supuestamente abandonados en las calles, haraganeando alrededor de bares y estacionamientos del centro de la ciudad y de los barrios de clase media y clase media alta, asesinatos y rebeliones sangrientas en las cárceles, en fin, diversos signos de un “peligro social” polifacético, pero cuyo signo único remitía a la imagen de algo como un *sujeto social difuso*, un fantasma que se hacía más grande.

Una sensación de desorden, de caos urbano, de anomia contagiosa que produjo crecientes demandas de seguridad pública dirigidas a una policía también representada como ineficiente o corrupta y a un poder judicial representado como lento, burocrático y flojo, terminaron por implorar la intervención de las Fuerzas

Armadas contra el bandidaje.¹¹ Éstas ocuparon la ciudad en 1992, con ocasión de la reunión internacional sobre el medio ambiente; volvieron a ocupar la ciudad en 1994, en la llamada *Operação Rio* (Operación Río), cuando la tasa de homicidios había alcanzado 70 homicidios por 100 mil habitantes. Nuevamente fueron convocadas para la ocupación del denominado *Complexo do Alemão* (Complejo del Alemán), en 2011 y en 2012 volvieron a la ciudad para reforzar la seguridad de la nueva reunión internacional sobre el medio ambiente (“Río + 20”), aun cuando las tasas de crímenes violentos presenten notables descensos en los últimos años.

2. El actual estatus socioeconómico de Río de Janeiro

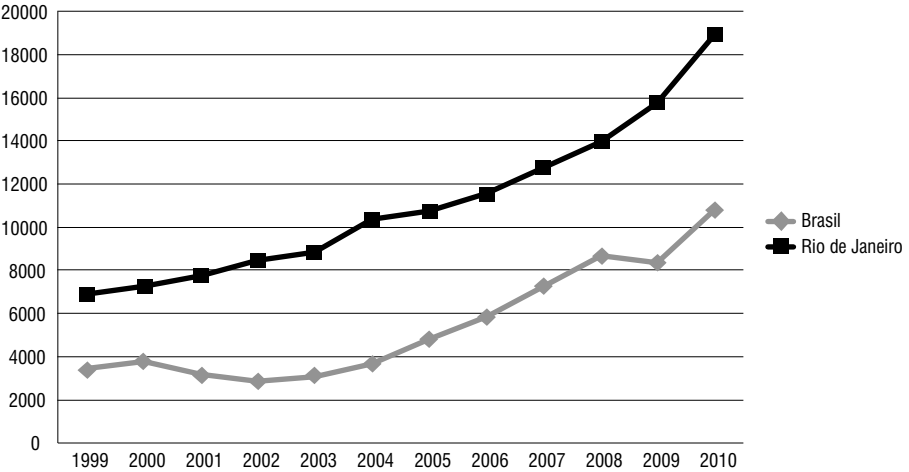
Tras un largo periodo de relativo estancamiento económico, que duró desde mediados de los años 70, y toda la década del 80 y la mayor parte de la década del 90 – y que coincide con el extraordinario aumento de la violencia en la ciudad – Río de Janeiro comienza a presentar, desde fines de la década del 90 una mejora creciente en sus indicadores macroeconómicos. Sin embargo, más que los números, lo que se percibe es un incremento en las inversiones en el municipio de la capital y en la Provincia de Río de Janeiro como un todo, principalmente a partir de los hallazgos petrolíferos en el litoral y su explotación en aguas profundas, lo que se acompañó de grandes inversiones portuarias, siderúrgicas e industriales desde la década de 2000. Como el proceso de recuperación de la economía brasileña también se realizó en el mismo periodo, el porcentaje de participación del producto interno bruto de la Provincia y del Municipio de Río de Janeiro en el conjunto del PIB brasileño no presentó avances relativos, registrando incluso un leve descenso, pero los valores absolutos y *per cápita* avanzaron sustancialmente en relación con el pasado, mientras que la población relativa presenta una tendencia mayor de descenso que la nacional.

11 La lectura de las cartas dirigidas a los periódicos de la ciudad demuestra suficientemente la acumulación de dichas representaciones.

Tabla No. 1
Población de Brasil y de Río de Janeiro.

	BRASIL	RÍO	PORCENTAJE
1999	168.753.552	5.811.650	3,44
2000	171.279.882	5.857.904	3,42
2001	173.808.010	5.904.158	3,40
2002	176.303.919	5.950.412	3,38
2003	178.741.412	5.996.667	3,35
2004	181.105.601	6.042.921	3,34
2005	183.383.216	6.089.175	3,32
2006	185.564.212	6.135.429	3,31
2007	187.641.714	6.181.683	3,29
2008	189.612.814	6.227.938	3,28
2009	191.480.630	6.274.192	3,28
2010	193.252.604	6.320.446	3,27
2011	194.932.685	6.355.949	3,26

Gráfico No. 1
PIB per cápita en Brasil y en el Municipio de Río de Janeiro.



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

Al examinar los indicadores de población económicamente activa (PEA) y población ocupada, verificamos que en el mismo periodo la tasa de desocupación disminuyó casi a la mitad (de 9 a 5 por ciento). La economía del municipio parece recuperarse consistentemente de un largo periodo con tasas de desocupación superiores al 10%.

Tabla No. 2
Tasa de Desocupación en el Municipio de Río de Janeiro.

	PEA*	POB. OCUPADA**	TASA DESOCUP.	POB. DESOCUPADA
2002	2 795 339	2 544 427	9.0	250 912
2003	2 906 754	2 645 793	9.0	260 961
2004	2 910 765	2 715 371	6.7	195 394
2005	2 839 241	2 676 730	5.7	162 511
2006	2 867 875	2 669 637	6.9	198 238
2007	2 872 399	2 711 525	5.6	160 874
2008	2 963 976	2 788 448	5.9	175 528
2009	2 912 875	2 763 593	5.1	149 282
2010	3 152 146	2 252 842	5.0	148 732
(*) PEA - Población Económicamente Activa (con más de 10 años de edad) en julio de cada año				
(**) POB OCUPADA - Número de personas empleadas				

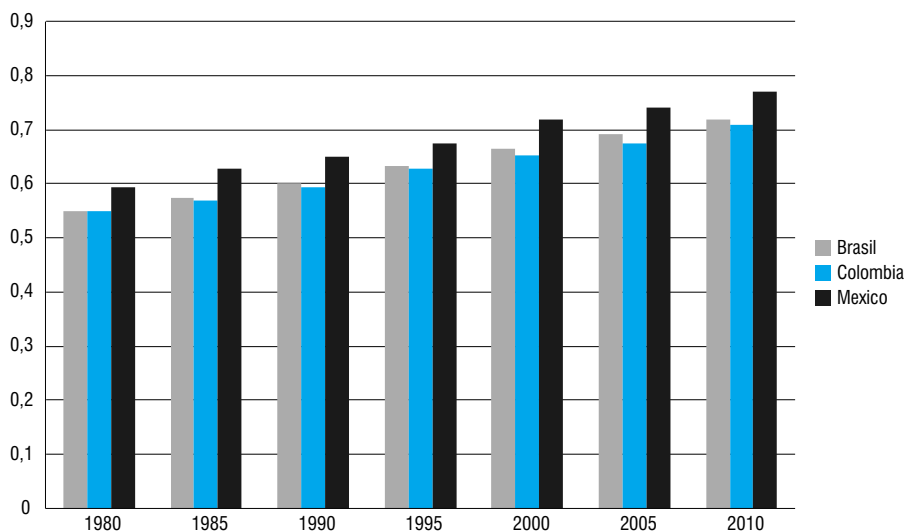
Aunque decreciente en dos décadas, la histórica desigualdad de ingresos brasileña se mantiene muy alta tanto en el país como en el municipio de Río de Janeiro, como puede observarse en la tabla 3.

Tabla No. 3
Coefficiente de GINI*

	Brasil	Río
1991	0,595	0,624
1995	0,599	0,580
2000	0,593	0,580
2005	0,559	0,558
2010	0,520	0,520
* Ingreso familiar per cápita.		

Hay pocos datos recientes sobre el IDH - Índice de Desarrollo Humano de Río de Janeiro. El último, del año 2000, alcanza el 0,842 – cuando el de Brasil era del 0,665. Aún no ha sido divulgado el de 2010 para Río de Janeiro, con base en el último censo, pero por la evolución del índice brasileño puede obtenerse un estimado así como una comparación con los índices colombiano y mexicano. México avanza más que Brasil (0,177 a 0,169), en el conjunto de la serie, y éste avanza un poco más que Colombia (0,169 a 0,160), en el periodo 1980-2010 (gráfico 2).

Gráfico No. 2
Comparación entre Índices de Desarrollo Humano.



De un modo general, se percibe que los avances obtenidos en la economía, en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida del municipio de Río de Janeiro fueron significativos en la última década, manteniendo una tendencia constante en Brasil. La crisis internacional iniciada en 2008 reserva un enigma a cualquier intento de previsión acerca de si habrá o no continuidad en esa tendencia. Aunque sintetizados, tales indicadores muestran un municipio que recupera su estatus económico, aunque haya perdido, definitivamente, hace medio siglo, su estatus político de

capital de Brasil. Desde un punto de vista económico es el segundo municipio del país, sólo después de São Paulo. Pero otras capitales vienen presentando también índices de calidad de vida mejores que los de Río. La violencia, que en el periodo 1950-1990 parecía acumularse solamente en Río de Janeiro y en São Paulo, se extiende hoy a muchas otras capitales y ciudades brasileñas, que presentan índices peores que los de Río y de São Paulo. Pero Río continúa siendo la ciudad cuya criminalidad parece servir aún de referencia nacional.

3. La situación actual de criminalidad y violencia en Río de Janeiro

En todo Brasil, entre 1980 y 2007, el número de personas asesinadas alcanza aproximadamente 1 millón de individuos¹². Son números de guerra, pero no hay ninguna guerra. Las tasas de homicidio aumentaron de forma continua, inicialmente, en Río de Janeiro. Pasaron de 10 por cada 100 mil en la década del 50 a 25 por cada 100 mil en la década del 70 y alcanzaron 50 por cada 100 mil en los años 80. Entre 1980 y 2007 cerca de 200 mil personas fueron asesinadas sólo en la Provincia de Río de Janeiro. El aumento de los homicidios permaneció firme por más de una década en Río de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte, pero presenta signos de descenso en los últimos años, principalmente en São Paulo. No hay consenso sobre qué explica el fuerte aumento continuo y el descenso reciente en las tres metrópolis.

Aunque el número de capturas y de muertes de sospechosos por la policía haya aumentado mucho en la última década, la capacidad de esclarecimiento de dichos homicidios y el castigo a sus autores por el sistema de justicia criminal brasileño es muy

¹² Datos oficiales del Ministerio de Salud, que divulga anualmente las estadísticas de mortalidad con base en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Estas estadísticas están basadas en las declaraciones oficiales de defunción, firmadas por médicos, documento exigido para entierros en cementerios brasileños.

bajo. Las investigaciones indican que no pasan del 15% los homicidios esclarecidos por la policía en Río de Janeiro y cuyos supuestos autores pueden llegar a ser denunciados a la Justicia. La aplastante mayoría de los homicidios permanece sin esclarecer, contribuyendo a que ocurran nuevos homicidios por la impunidad de sus autores. Las cuentas son claras: un asesino en Río de Janeiro tiene un 85% de posibilidades de no ser descubierto por la policía. Aunque el bajo índice de esclarecimiento dificulte conocer las circunstancias de tales homicidios, hay consenso entre los especialistas de que una parte significativa de ese aumento está relacionado con el microtráfico en favelas y otras áreas urbanas de bajos ingresos. Lo que sucedió en Río de Janeiro a partir de los años 80 produjo un modelo de violencia urbana que se propagó hacia gran parte de las ciudades brasileñas a partir de los años 90 (tabla 4).

Tabla No. 4
Homicidios Intencionales en Brasil
y principales Regiones Metropolitanas en números absolutos

	1990-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2007
Río de Janeiro	11.689	13.863	17.623	16.326	17.568	14.934
São Paulo	19.797	22.620	28.539	32.606	25.687	14.086
Belo Horizonte	1.285	1.471	2.184	3.503	6.708	6.774
Porto Alegre	2.336	1.942	2.482	2.784	3.270	3.602
Recife	4.007	3.854	5.798	7.298	7.220	7.486
Vitória	1.468	2.217	3.082	3.212	3.592	3.665
Fortaleza	1.081	1.495	1.687	2.075	2.536	3.207
Salvador	nd	2.459	2.356	1.115	2.484	4.433
Curitiba	915	1.168	1.617	2.022	2.928	3.902
Belém	1.050	909	1.054	884	1.476	2.271
Brasil	91.174	100.342	121.351	136.217	149.112	144.430

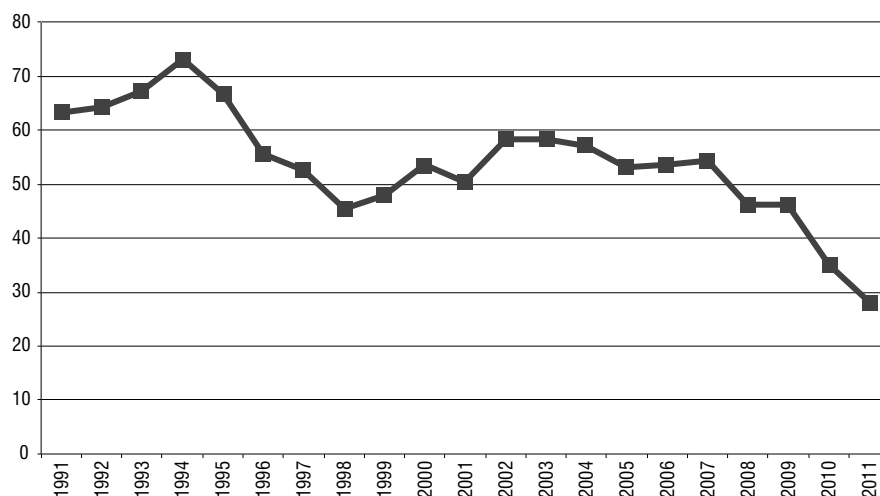
Aún en Río de Janeiro, la tasa de robos con violencia o con amenaza de violencia, registrada por la policía, pasó de 263 por cada 100 mil habitantes en 1980 a 830 por cada 100 mil habitantes en 2009. Sin embargo, es alta la infradeclaración y la más reciente investigación de victimización realizada en 2007 en la Región Metropolitana de Río de Janeiro constató que en los cinco años anteriores a la investigación (2002-2006) cerca del 25% de la población de la región fue víctima de al menos un robo¹³ (de vehículo, de casa y de otros bienes) y el año anterior a la investigación el 7,3% de la población fue víctima de robo, con una incidencia de alrededor de 1.850.000 robos cometidos en un año sobre cerca de un millón de residentes en la región metropolitana de la segunda ciudad más poblada del país. No obstante, solamente cerca del 30% de las víctimas registraron los hechos en las comisarías de policía. Los demás alegan que no creen que la policía pueda resolver el caso y castigar a los culpables y que no vale la pena, por lo tanto, perder tiempo presentando denuncias. Las investigaciones muestran que no están totalmente equivocados: menos del 2% de los robos cometidos en Río de Janeiro se transforman anualmente en investigaciones policiales con sospechosos y pruebas suficientes para que el Ministerio Público (*Fiscalía General*) los denuncie a la Justicia (Misse, 2009).

No es posible desligar el volumen de crímenes violentos, que aumentó considerablemente a partir de los años 80, de las características y de la extensión de los mercados ilegales urbanos en Brasil, aunque variadas circunstancias se mezclen en los datos, desde los crímenes pasionales hasta los ajustes de cuentas propios de las actividades criminales. Nada sabemos, en cambio, sobre qué porcentajes de estos crímenes ocurren por iniciativa individual o de pequeños grupos y cuál es la participación de las organizaciones criminales en su consecución.

13 En la legislación brasileña, "robo" es la expropiación de bienes ajenos mediante uso de violencia o su amenaza (asalto a mano armada), distinguiéndose del "hurto", que es expropiación con astucia pero sin armas.

Examinemos algunos datos sobre la criminalidad en el municipio de Río de Janeiro en las últimas décadas. Comencemos con las tasas de homicidio doloso. Aquí fue necesario que sumáramos cuatro tipos de homicidios dolosos, generalmente presentados por separado en las estadísticas oficiales: homicidios dolosos, robos seguidos de muerte, lesiones seguidas de muerte y muertes de sospechosos en enfrentamientos con la policía. La década del 90 quedó marcada como aquella en la que la tasa de homicidios dolosos alcanzó su más alto nivel (más de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes). Pero como se podrá verificar a continuación, otros indicadores de violencia se mantienen crecientes, mientras que la tasa de homicidios, tras un descenso acentuado en la segunda mitad de los años 90, se estabilizó durante una década entre 45 y 60 homicidios por cada 100 mil habitantes y volvió a descender en los últimos cuatro años, aunque aún se mantenga relativamente alta (cerca de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes).

Gráfico No. 3
Homicidios dolosos en Río de Janeiro: 1991-2011.
(Tasa por 100.000 hab.)



Fuentes: ISP-RJ y Necvu-UFRJ

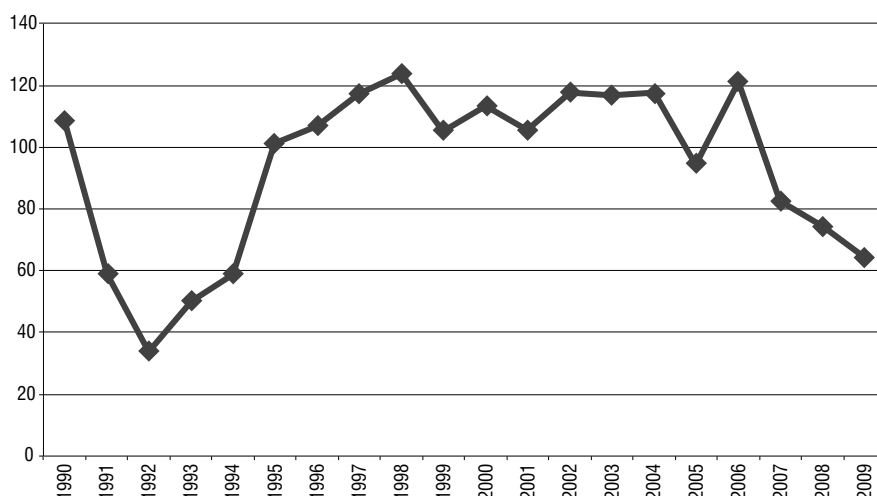
Los valores absolutos y las tasas se presentan a continuación, en la tabla 5.

Tabla No. 5
Homicidios dolosos en el municipio de Río de Janeiro.

	FRECUENCIA	TASAS
1991	3467	63,3
1992	3543	64,3
1993	3732	67,3
1994	4076	73,1
1995	3743	66,8
1996	3084	55,6
1997	3341	52,6
1998	2544	45,4
1999	2685	48
2000	3147	53,7
2001	2984	50,5
2002	3465	58,2
2003	3495	58,3
2004	3456	57,2
2005	3231	53,1
2006	3286	53,6
2007	3354	54,3
2008	2877	46,2
2009	2902	46,3
2010	2212	35,0
2011	1796	28,2
(*) SUMA TOTAL DE HOMICIDIOS DOLOSOS, LESIONES SEGUIDAS DE MUERTE, RESISTENCIA Y ROBOS CON MUERTE.		

La mayor parte de estos homicidios presenta como víctimas a jóvenes en el rango de 15 a 24 años. Si consideramos de este rango de edad, solamente su porción adolescente, entre los 15 y 19 años, entre las víctimas de homicidio doloso en el municipio de Río de Janeiro, obtendremos indicadores de una violencia cuyo declive aún conserva niveles muy elevados de letalidad intencional entre jóvenes adolescentes:

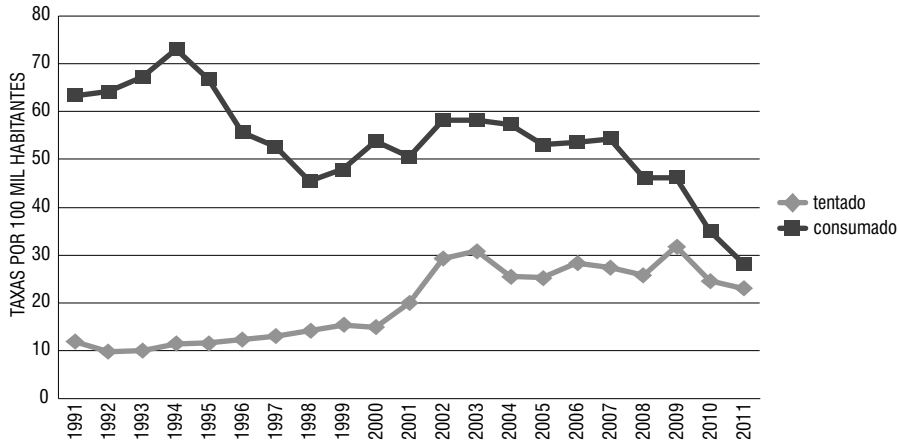
Gráfico No. 4
Homicidios dolosos en el rango de edad de 15 a 19 años en Río de Janeiro.



Fuente: SIM-Datasus - Necvu-UFRJ

Si comparamos la progresión comparativa de las tasas de homicidio doloso consumado e intentado, verificaremos que al descenso tendencial de los homicidios dolosos se le suma un aumento progresivo de las tentativas de homicidio en todo el periodo, excepto en los últimos dos años, cuando fue más pronunciado el descenso tanto de los homicidios dolosos como de las tentativas de homicidios (gráfico 5). Estos años corresponden al periodo de implementación de las llamadas “UPP” – Unidades Policiales Pacificadoras – en varias favelas de Río de Janeiro (trataremos de esto más adelante).

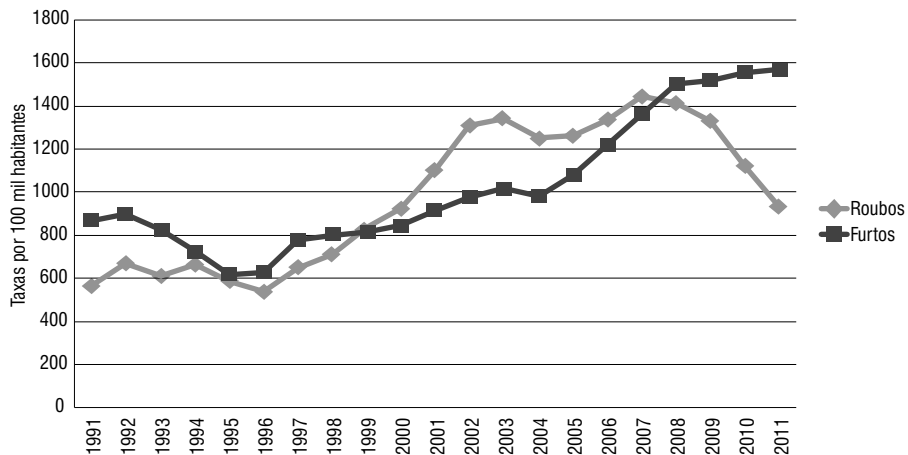
Gráfico No. 5
Homicidios y Tentativas de Homicidio en Río de Janeiro: 1991-2011



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

La tendencia al descenso en la tasa de homicidio doloso, sin embargo, no está seguida, en el mismo periodo, de las tasas de crímenes contra el patrimonio. Veamos las tasas de hurtos y robos en general en Río de Janeiro en el periodo 1991-2011.

Gráfico No. 6
Hurtos y Robos en General en Río de Janeiro: 1991-2011

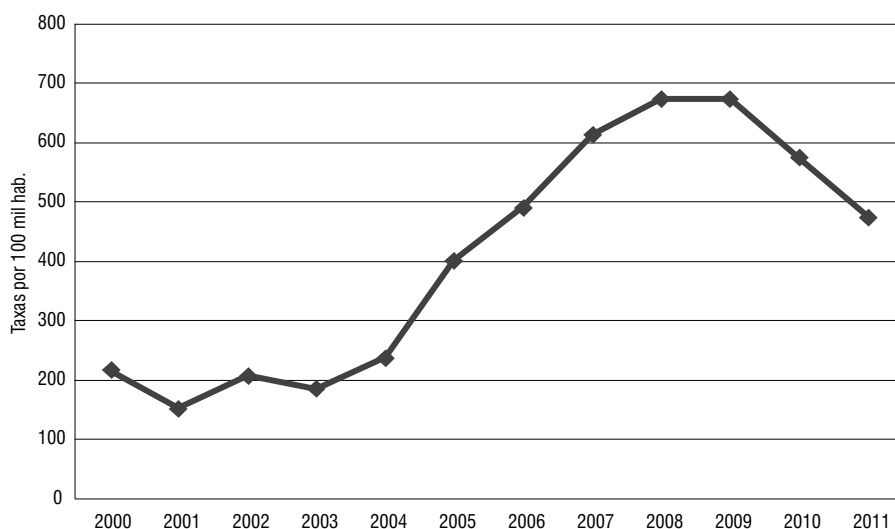


Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

Estos son registros de la policía de hurtos y robos en general. Si comparamos los datos oficiales con la última investigación de victimización realizada en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, en 2007, constataremos que la tasa de infradeclaración de hurtos es, en promedio, del 70% y la de robo del 55% (Misse, 2008). Si consideramos que estos registros se refieren a eventos y no al número de víctimas, se puede tener una idea del enorme volumen de victimización en la ciudad de Río de Janeiro, por hurto o robo en general, que no llegan a las estadísticas oficiales.

Veamos el caso de varios tipos de robos, que usan o amenazan con usar la violencia. La tasa de robos a transeúntes en Río de Janeiro entre 2000 y 2011, por ejemplo, se triplica entre 2000 y 2009 y sólo comienza a descender en los dos últimos años. Si se considerara la infradeclaración promedio de robos y la aplicáramos a la frecuencia de robos a transeúntes oficialmente registrada en 2007, podría proyectarse que cerca de 80 mil personas fueron víctimas de robos (atracos) mientras circulaban a pie por la ciudad.

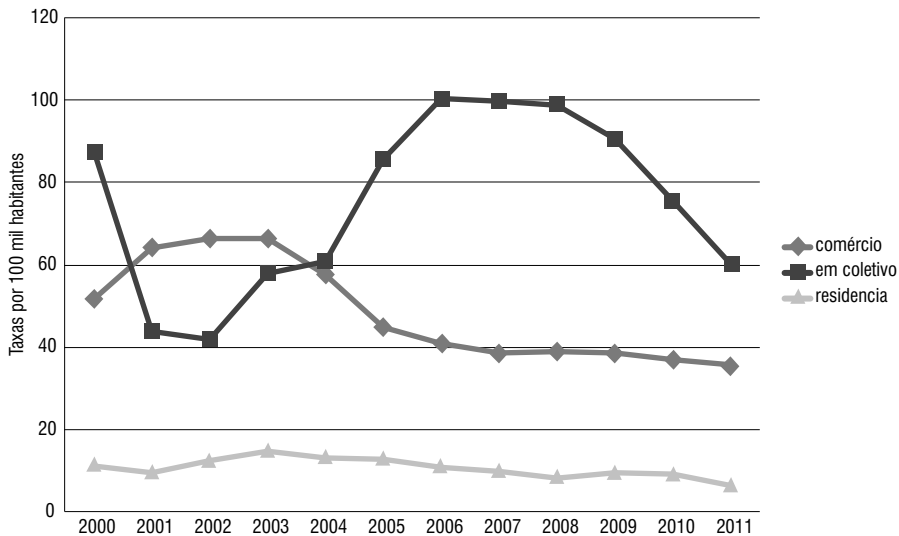
Gráfico No. 7
Robo a Transeúntes en Río de Janeiro



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

Los robos en el comercio, en transportes colectivos (buses) y en residencias, presentados en el gráfico 8, registran una tendencia al descenso en los últimos años, tras alcanzar altas tasas en años anteriores.

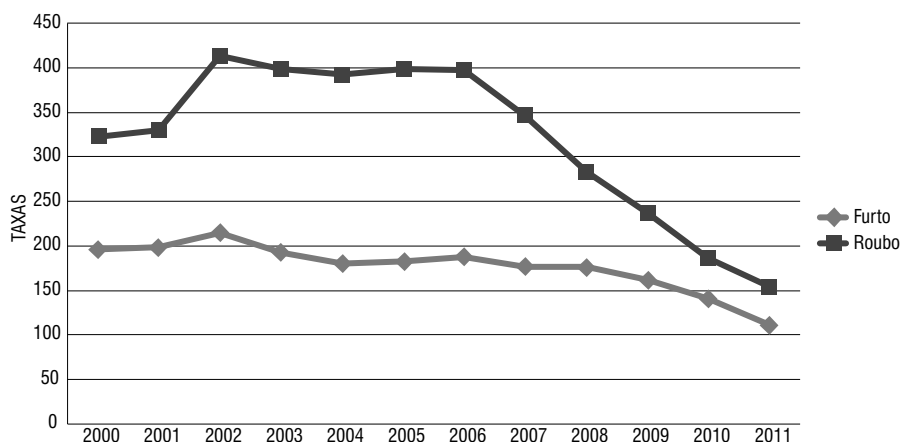
Gráfico No. 8
Robos en el comercio, en transportes colectivos
y en residencias en Río de Janeiro.



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

Se evidencia, por los datos oficiales, que hay un declive de la criminalidad violenta en varios tipos de delitos, en Río de Janeiro, por lo menos desde 2006. En el caso de hurto y robo de vehículos, que alcanzaron sus mayores registros en 2002 y 2006, el descenso, lineal, se mantiene desde hace cinco años.

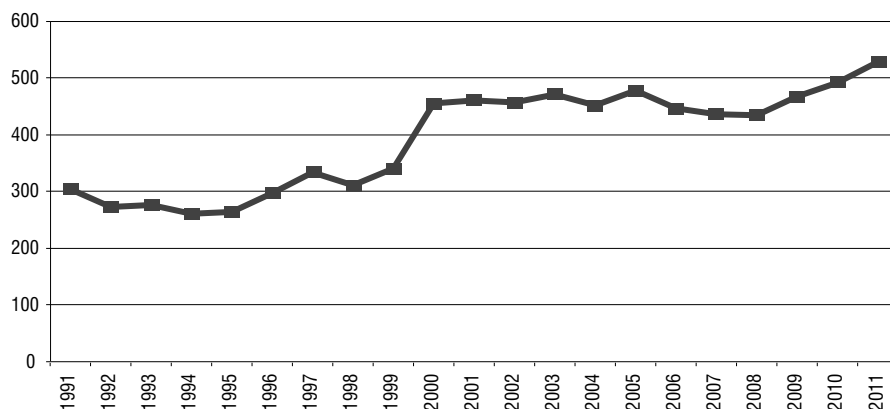
Gráfico No. 9
Hurto y Robo de Vehículos en Río de Janeiro



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

Pero no todo es un mar de rosas. Si los homicidios y robos presentan una tendencia al descenso, los hurtos presentan una tendencia al alza y los conflictos violentos continúan creciendo. Las lesiones intencionales y las tentativas de homicidio en Río de Janeiro indican que la solución de conflictos por el uso de la fuerza y de la violencia no presenta signos de enfriamiento (gráfico 10).

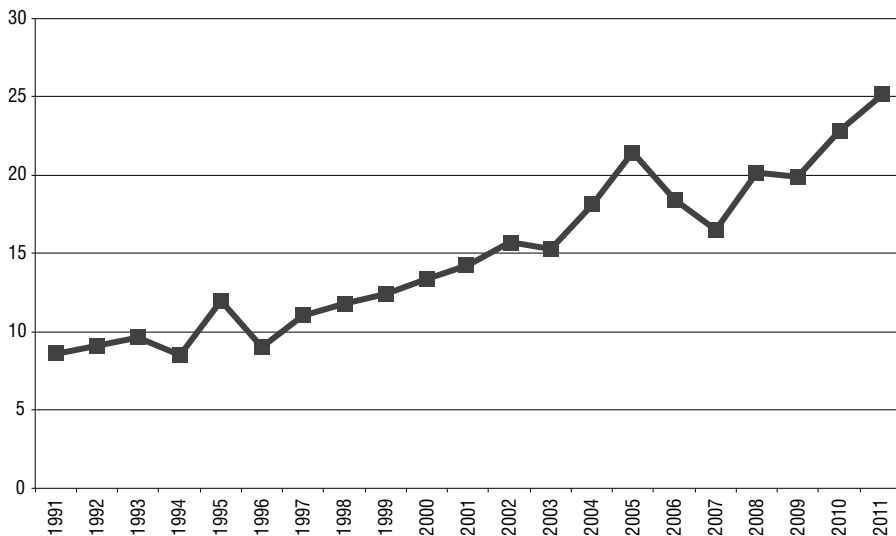
Gráfico No. 10
Lesiones dolosas en Río de Janeiro



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

Aunque los cambios en la legislación penal, principalmente ocurridos después de 2006, puedan haber influenciado la producción de más registros de crímenes sexuales, con una clasificación que extiende a varios comportamientos el significado del crimen de acceso carnal violento, no se puede atribuir sólo a esto el constante aumento de las tasas, incluso antes de dichos cambios (gráfico 11).

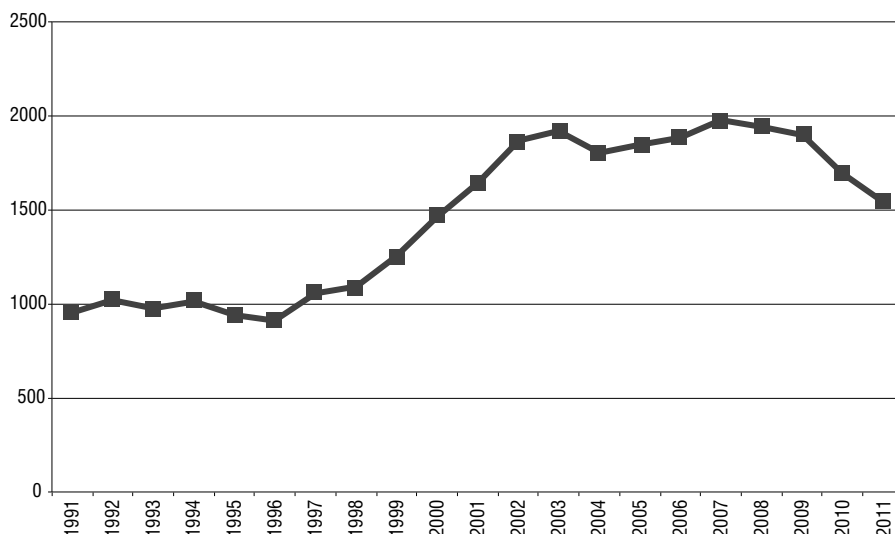
Gráfico No. 11
Acceso Carnal Violento en Río de Janeiro.



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

Es a partir de la suma de las tasas de todos estos crímenes violentos – homicidios dolosos, robos, lesiones dolosas y acceso carnal violento – que podemos evaluar mejor el modelo de cambios que han ocurrido en la criminalidad violenta en Río de Janeiro en las últimas dos décadas (gráfico 12).

Gráfico No. 12
Crímenes violentos en Río de Janeiro.



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRU

Tras la acumulación que se da entre finales de los años 70 e inicios de los años 90, ocurre una primera estabilización en la primera parte de la década del 90, con una reactivación del crecimiento a partir de 1997 hasta 2003, cuando nuevamente la violencia comienza a presentar signos de estabilización hasta iniciar un relativo declive en los últimos cuatro años. Para comprender qué es lo que explica el más reciente movimiento de la curva que, por primera vez en cuarenta años, promete una dirección descendente consistente, será necesario analizar los actores colectivos de la violencia en Río de Janeiro y las políticas de seguridad pública implementadas, lo que se hará en las dos siguientes partes del texto, respectivamente.

II. ACTORES COLECTIVOS DE LA VIOLENCIA EN RÍO DE JANEIRO

El problema actual de la violencia en Río de Janeiro se encuentra, en gran medida, vinculado al control ejercido por grupos armados en territorios de viviendas de bajos ingresos. Se destacan como actores colectivos de la violencia: las organizaciones locales de microtráfico de drogas en favelas y conjuntos habitacionales; los grupos conocidos como “milicias”, que realizan extorsiones y control social arbitrario en comunidades y barrios de la periferia; y también la propia policía, cuya actuación violenta, y muchas veces ilegal, contribuye a agudizar los conflictos en las zonas más pobres de la ciudad. Sin embargo, para hacer comprensible el surgimiento de las milicias y la consolidación de la policía como actor violento, será necesario profundizar en primer lugar en el análisis sobre la proliferación de los grupos de microtráfico de drogas en la ciudad y entender cómo se configuraron las disputas territoriales.

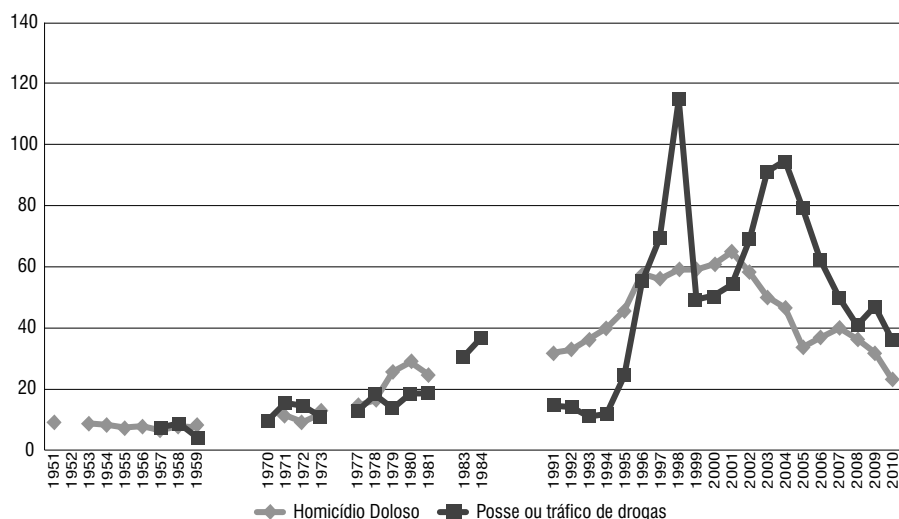
La característica más sobresaliente del tráfico de drogas en Río de Janeiro y demás grandes ciudades brasileñas, es su organización social basada en el recurso constante a la violencia. Altas tasas de jóvenes asesinados o gravemente heridos involucrados con el tráfico y la disputa de territorios controlados por pandillas basados en el uso de armas ligeras de uso militar, como fusiles y granadas, además del frecuente enfrentamiento con la policía en operaciones que se asemejan a los combates de guerra urbana, se transformaron en uno de los principales problemas públicos del país. Tan sólo en Río de Janeiro, en el 2006, fueron asesinadas cerca de 7 mil personas, de las cuales más de mil lo fueron a manos de la policía en los enfrentamientos con traficantes.

El volumen de violencia que se asocia a ese mercado, mucho mayor que el de otras grandes ciudades de otros países, se caracteriza por: 1) un sistema de venta por “consignación”, de modo que cada vendedor queda debiendo a su proveedor inmediato y en el que la violencia es la principal garantía de las transacciones; 2) una carrera armamentista entre las pandillas en la disputa por

los puntos de venta y por el control de los respectivos territorios, que llevó a la estructuración de un tráfico de armas ligeras, como fusiles automáticos usados en guerras; 3) regulares invasiones de la policía militar, a través de operaciones con carros blindados y fuego cruzado con los traficantes, que dejan muertos y heridos de los dos lados y entre la población local; 4) endémica corrupción policial, que negocia la protección, informaciones sobre operaciones policiales e incluso la fuga de presos que cumplen condenas en el sistema penitenciario. Y todo eso sin que existan organizaciones de tipo mafioso, suficientemente estructuradas, sino más bien redes precarias de pandillas dispersas por las zonas pobres de la ciudad.

Los datos sobre el microtráfico en Río de Janeiro indican, desde los años 80, su asociación con el aumento continuo de la tasa de homicidios. Su relativo declive en los últimos años también parece acompañado de la disminución de los homicidios.

Gráfico No. 13
Homicidios dolosos y Posesión y Tráfico de Drogas en Río de Janeiro



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRJ

Diferentes explicaciones sobre la asociación entre tráfico y violencia son proporcionadas por los principales estudiosos del tema en Río de Janeiro. Están los que enfatizan la continuidad y acumulación de fuerzas entre las formas de mercado informal ilegal más reprimidas en el pasado reciente y actualmente, la extorsión practicada por policías y la competencia violenta por el control de los puntos de venta (Misse, 2006). Los que observan una ruptura radical con las formas de bandidaje del pasado y la aparición de una nueva sociabilidad violenta (Machado da Silva, 2008). Los que enfatizan el papel del machismo, del lucro fácil y del ethos guerrero en la movilización de jóvenes pobres hacia el tráfico (Zaluar, 1995). Los que observan, en los últimos tiempos, un recurso a jóvenes cada vez de más temprana edad para la mano de obra en la producción de niños-soldados en las favelas y conjuntos de Río de Janeiro que superan el modelo de delincuencia hasta ahora conocido (Dowdney, 2003). De cualquier modo, la cobertura del microtráfico en Brasil y de los crímenes violentos asociados a él, no sigue ningún patrón conocido en Europa o Estados Unidos. Se contabilizan más de 300 mil jóvenes asesinados en los últimos veinte años en Brasil, una parte significativa de los cuales está vinculada de algún modo al mercado informal de drogas ilícitas.

La inseguridad se volvió rutina entre los habitantes de las áreas controladas por traficantes, algunas de las cuales tienen más de 70 mil residentes, como la favela de la Rocinha, en la zona sur de la ciudad. Aunque haya indicios de que el movimiento del microtráfico disminuyó considerablemente, si se lo compara con mediados de los años 90, las pandillas continúan actuando en las áreas y migrando a otros crímenes, como asaltos a mano armada en autobuses o a transeúntes. En tres ocasiones, entre 2001 y 2003, redes de pandillas llamadas “facciones del tráfico”, lograron articularse en una reacción común a la represión (y a la extorsión) policial incendiando autobuses en varias partes de la ciudad y obligando a parte del comercio local cercano a las principales favelas a cerrar sus puertas.

Parte de la disminución del microtráfico en las favelas resultó de la pérdida de clientes de sectores medios, no residentes de las favelas, que se trasladaron al tráfico de clase media, basados en apartamentos, horarios acordados y entregas a domicilio. La fuga de los consumidores que no residen en las áreas controladas por los traficantes se debió también al aumento de la represión policial, a los crecientes conflictos entre pandillas y a la mayor visibilidad en los medios de comunicación, de los riesgos que cercan dichas áreas, haciendo la compra de drogas a traficantes de clase media más segura y menos vinculada a los estigmas de la “guerra urbana” que involucran policías y traficantes de las favelas.¹⁴

Más recientemente, como un subproducto más de ese mercado ilegal, han surgido grupos de policías militares que ofrecen protección a pequeñas favelas y conjuntos habitacionales de suburbios y áreas de la periferia urbana, a cambio del pago de una cuota. Esa forma de extorsión que era antes practicada con los traficantes, quienes eran obligados a pagar a los policías para evitar ser arrestados y para continuar vendiendo sus mercancías, ahora se viene transfiriendo a los habitantes de las áreas abandonadas o perdidas por los traficantes, y que han quedado bajo el control de estos policías organizados en lo que los medios han denominado “milicias”.

Este fenómeno que surgió en los últimos años en Río de Janeiro, no sería propiamente un fenómeno nuevo, sino la acumulación social de la violencia, el perfeccionamiento, la transición hacia formas aún más organizadas de los antiguos grupos de exterminio, de los grupos de policías que negociaban “mercancías políticas” con traficantes, participantes de esa economía subterránea, de ese capitalismo subterráneo, de ese “capitalismo político” para usar la expresión de Max Weber. En este caso, las “milicias” estarían ocupando el espacio dejado por el declive del tráfico en

14 Sobre el tráfico de drogas practicado por jóvenes de clase media, ver Grillo, C. “Fazendo o doce na pista: Um estudo de caso do mercado ilegal na classe média” (*Haciendo el doce en la pista: Un estudio de caso del mercado ilegal de drogas en la clase media*), Río de Janeiro, PPGSA/IFCS/UFRJ (disertación de maestría).

algunas áreas de Río. Las áreas donde el tráfico estaba más debilitado fueron exactamente las áreas ocupadas por esas milicias, con excepción de la favela de Río das Pedras, que constituyó su “agencia de protección” antes de que el tráfico la ocupara y que sirvió de modelo para las redes de pandillas de policías y políticos locales autodenominada Liga de la Justicia, en referencia al conocido thriller norteamericano.

Estos siguen métodos y tácticas semejantes a las de los traficantes, organizan, por ejemplo, “caravanas” (varios carros en comitiva, llenos de hombres fuertemente armados), invaden el área con 80 o 100 hombres y, después, la controlan dejando a 10 o 15 de sus hombres allí, saliendo a ocupar otras áreas. Al contrario de los traficantes, estos ejercen la extorsión sobre los residentes, exigiendo una cuota para protegerlos; y si el residente se niega, es amenazado o incluso invaden su casa y rompen sus enseres, como se demostró a partir de las declaraciones hechas a la Comisión Parlamentaria de Investigación realizada en la Asamblea Legislativa de Río para tratar el tema. Y finalmente, también como los traficantes, pasaron a explotar la oferta de bienes ilegales como la red clandestina de TV por cable, la distribución de gas en cilindros e incluso el transporte clandestino en camionetas tipo van. A pesar de la dura represión de la Policía a las milicias, el fenómeno se mantiene y se justifica, en sus áreas, por el posible retorno de los traficantes expulsados. Entre traficantes y milicianos, la población local espera un estado diferente de las cosas.

Veamos ahora, por partes, y de modo más minucioso, estos actores colectivos de la violencia en Río de Janeiro.

1. Las redes del microtráfico de drogas en favelas

Lo que caracteriza el *movimiento*, nombre que se da al microtráfico de drogas en Río de Janeiro, y lo distingue del microtráfico de drogas en otras ciudades es su relativa organización local, sus pretensiones proto-políticas, su capacidad de reorganizarse localmente y, principalmente, de constituir redes horizontales

de protección mutua. A diferencia del microtráfico de drogas en grandes ciudades de otros países, el *movimiento* no se subordina directamente ni a los grandes mayoristas ni a organizaciones verticales con una base tipo familia o patrimonialista, como las mafias. Aunque su organización local tenga, muchas veces, una base familiar en las posiciones clave del microtráfico, ésta raramente sobrepasa al dueño o “gerente general” del negocio. Por otro lado, la organización de las redes es más fragmentada y vulnerable de lo que muchas veces se piensa.

¿Cómo, entonces, fue posible una acumulación tan grande de grupos y redes en Río de Janeiro en las últimas tres décadas, sin que ese crecimiento pudiera ser remitido a la subordinación del *movimiento* a grupos estratégicos del crimen organizado (mafias, carteles, etc.)?

Al final de la década del 70 e inicio de los años 80, se originó en el interior de las prisiones un tipo de asociación hoy conocida como “facción” o “comando” y que acabó transformándose en redes horizontales de protección mutua entre jefes locales del tráfico en favelas de Río de Janeiro. Fue justamente a partir de esa época que los grupos de traficantes de drogas se fortalecieron y pasaron a sobresalir en la composición del panorama de la “violencia urbana” carioca.

Ya existía anteriormente, en las favelas de Río de Janeiro, un discreto comercio de marihuana, bien recibido por la población local, que no implicaba un alto volumen de violencia y aún no mantenía relaciones de enfrentamiento con la policía. El punto de inflexión en las dinámicas locales del microtráfico de drogas se debió a la introducción de la cocaína en esas redes, a partir de la década de 1970 y, más intensamente, a lo largo de la década de 1980. Esto ocurrió después de la entrada de Río de Janeiro y São Paulo en la ruta internacional de tráfico de cocaína, proveniente de Paraguay y Bolivia, con destino a Europa.

El capital inicial invertido por los pioneros del tráfico de cocaína no vino de la comercialización de la marihuana, ya que era baja

su rentabilidad, sino de los robos cometidos, a lo largo de la década de 1970, contra bancos y empresas. La práctica de grandes robos se diseminó entre criminales comunes a partir del “efecto demostración” de las acciones de ese tipo que se proponían captar recursos para la guerrilla urbana contra el régimen militar. Sin embargo, tales crímenes se habrían vuelto cada vez más difíciles de llevarse a cabo, debido a la intensificación de la represión policial sobre las pandillas de asaltantes y al perfeccionamiento de las medidas de seguridad adoptadas por empresas. Parte del capital acumulado en grandes robos pasó entonces a ser invertido en la comercialización de la cocaína, lo cual fue posible gracias a las asociaciones constituidas entre asaltantes de bancos y dueños de las llamadas “ollas de vicio”, durante su periodo de reclusión en prisiones.

Al interior de estas instituciones, las reivindicaciones de presos políticos por mejores condiciones, también estimuló a los demás internos a organizarse políticamente ante las pésimas condiciones de encarcelamiento a que eran sometidos, evidenciando una vez más el “efecto demostración” de la guerrilla. Fue creada, hacia 1979, la *Falange Vermelha* (Falange Roja), un colectivo que se proponía promover la solidaridad entre los presos, reducir la resolución violenta de conflictos entre sí y luchar por mejores condiciones al interior de las instituciones penales. La amnistía política declarada en aquel mismo año beneficiaba tan sólo a los presos políticos, lo que incentivó a los miembros de la Falange Roja a justificar políticamente su organización, para neutralizar sus prácticas criminales (Coelho, 1988; Coelho, 1992).

En el transcurso de la década de 1980, miembros de este colectivo obtuvieron la libertad y la Falange Roja acabó expandiendo su influencia por Río de Janeiro. Las conexiones que se habían formado entre los criminales contribuyeron al fortalecimiento de las redes del comercio ilegal de drogas y las ganancias del tráfico se multiplicaron en función del crecimiento de las ventas de cocaína. Fue entonces que el tráfico se transformó en la principal actividad económica de la Falange Roja. Aun así, la convivencia en los centros penitenciarios siguió siendo determinante para la articulación

de este colectivo criminal, de manera que las disputas entre presos dieron origen a otros colectivos – hoy denominados “facciones” o comandos –, como la *Falange do Jacaré*, *Falange da Zona Sul*, etc.

Actualmente, son dos las principales facciones que se disputan entre sí el control de la venta de drogas en favelas: el Comando Rojo (CV) y los *Amigos dos Amigos* (Amigos de los Amigos) (ADA). La primera es directamente originaria de la Falange Roja, mientras que la segunda se derivó de una fisura del *Terceiro Comando* (Tercer Comando)(TC) – originario de la Falange do Jacaré – en dos facciones opuestas: los Amigos de los Amigos y el *Terceiro Comando Puro* (Tercer Comando Puro) (TCP). Sin embargo, a lo largo de la última década, el ADA terminó prevaleciendo sobre el TCP y pasó a dominar la mayoría de sus áreas.

La centralidad del tráfico de drogas en la articulación de estos colectivos contribuyó a que las facciones se constituyeran como sociedades entre los llamados “dueños de morro” – jefes locales de tráfico – promoviendo el fraccionamiento de los territorios de las favelas en zonas bajo la influencia de uno u otro de estos colectivos. Las alianzas selladas por la facción sirven para respaldar el monopolio de los dueños de morro sobre la venta de drogas en determinados territorios, a través de la oferta de apoyo contra eventuales invasiones por traficantes enemigos y del compromiso mutuo de respeto a la autoridad local de los dueños de morro aliados. De este modo, las facciones se constituyeron como redes horizontales de protección mutua, orientadas a la articulación de la defensa de sus áreas de operación comercial, es decir: un conjunto de alianzas entre líderes locales del tráfico. A diferencia de las formaciones verticales observables en mafias y carteles, no hay líderes por encima de los dueños de morro, siendo la jerarquía del tráfico, principalmente, local.

La organización local del microtráfico de drogas en favelas es conocida como “empresa”, en alusión directa a su aspecto similar al de una compañía. La empresa pertenece al dueño del morro, pues es administrada por él mismo o por el llamado “responsa-

ble” del morro. Este último surge del hecho de que normalmente los dueños del morro, los legítimos “patrones” o “jefes” del tráfico, están presos o residen fuera de las favelas que supuestamente les pertenecen. Estos, por lo tanto, designan un responsable para controlar el funcionamiento de las ollas de vicio en una determinada área y asumir el poder de mando sobre la resolución de las disputas locales. Corresponde al responsable del morro – también llamado “frente del morro” o “gerente general” – rendir cuentas a su patrón, enviándole la cuota acordada de las ganancias obtenidas con la venta de drogas.

Con relación a la investigación realizada en la década de 1990, Misse (1997) resumió la jerarquía que compone la pirámide de los flujos comerciales de la siguiente manera:

La estructura de los grupos locales del microtráfico de drogas estuvo siempre basada en el sistema de ventas en consignación, a partir del “dueño” o “gerente general”. La mercancía se entrega por adelantado a los subgerentes y el proceso continúa hasta los vendedores directos, los *jíbaros*. El movimiento de retorno del pago se basa en la noción de “deuda” y debe ser hecho, inexcusablemente, dentro de un plazo mínimo. El no-pago es interpretado como una *tumbada* (engaño, hurto o falla) y el deudor, en la primera reincidencia, es asesinado en un ritual público de crueldad. El sistema de consignación se articula, de este modo, a una jerarquía mortal de “acreedor/deudor” (p.6).

El material de campo recientemente recolectado confirmó la preservación de esa misma estructura jerárquica basada en una pirámide de flujos comerciales, pero aportó también nuevos elementos para pensar el esquema actual de ventas en consignación. La jerarquía interna de las empresas locales de tráfico aparece hoy vinculada a un sistema de concesión de responsabilidades sobre los derechos de explotación comercial de territorios para la venta de drogas. Sistema que se origina de la concentración de tales derechos en manos del dueño del morro y se ramifica hasta los *jíbaros* que venden las drogas en las ollas de vicio. Así como la favela, también las “ bocas do fumo” y los diferentes precios o papeletas

de cada droga comercializada “pertenecen” a un dueño y son administradas por un responsable o gerente. Al principio, todas las ollas y cada precio que éstas ofrecen son de propiedad del dueño, que distribuye diferentes responsabilidades sobre las ollas y papeletas de droga entre los traficantes que detentan más prestigio o, en el lenguaje local, “consideración”. Estos pasan a tener derecho a una participación sobre las ganancias de los puntos de venta o papeletas de droga que les sean asignados para administrar. A esto se le denomina adquirir una “obligación” o un “cargo”.¹⁵

En las ollas, se vende principalmente cocaína, marihuana y crack, aunque también solventes como el *loló* (droga líquida inhalante) y el lanzaperfume y drogas sintéticas, como el éxtasis y el LSD. Las tres principales drogas – cocaína, marihuana y crack – son vendidas en papeletas cuyos precios son fijos y van desde R\$1,00 a R\$50,00. “Marihuana de cinco”, “crack de veinte” y “polvo de treinta” son algunas de las denominaciones comunes para los llamados “precios” o “papeletas” de drogas. La cantidad o calidad de la droga contenida en un “envoltorio” no es estandarizada y tampoco informada, dado que cada uno de estos precios puede tener un gerente diferente. Las papeletas de droga administradas por distintos gerentes quedan todas bajo la responsabilidad del *jíbaro* de turno en la olla de vicio. Es éste quien efectúa las ventas al menudeo y, al inicio y al final de su turno de trabajo, contabiliza todo lo que le fue entregado y lo que vendió.

Las armas de fuego utilizadas en la seguridad de la olla de vicio por lo general también pertenecen al dueño del morro, y son dejadas, en régimen cautelar, bajo la responsabilidad de sus hombres. Algunas deben permanecer para su uso en la olla, siendo transferidas a los traficantes que ingresan en cada turno; mientras que otras permanecen todo el tiempo en manos de algunos miembros de la empresa, pudiendo inclusive ser utilizadas por éstos en asaltos. Están también las armas que quedan enterradas en un lugar confi-

15 Un análisis más detallado sobre la jerarquía interna de la empresa local del tráfico y el funcionamiento actual de las ollas de vicio se encuentran en Grillo (2013).

dencial para ser preservadas de hurtos e incautaciones hechas por policías. Estos artículos son muy valorados en el mercado ilegal, de modo que la pérdida injustificada¹⁶ de un arma acarrea la obligatoriedad de resarcimiento del perjuicio a la empresa. En caso de que no sea viable restituir el valor del arma – cuando se trata de un fusil, por ejemplo – el perjuicio puede llegar a ser pagado con la vida.

Las armas, principalmente las de grueso calibre, adquieren gran importancia en la conformación de las rutinas normales del tráfico. Aunque el respaldo ofrecido por la alineación con la facción posibilite una relativa reducción de las disputas por territorios y la conservación de las relaciones de poder locales, permanecen constantes las amenazas que representan la policía, facciones enemigas o incluso grupos internos de la propia empresa. Desde que grandes cantidades de dinero, drogas y armas comenzaron a circular en las ollas de vicio, los dueños de morro pasaron a invertir una parte significativa de sus ganancias en la compra de armamento y en el pago de sobornos a la policía. Fue necesario también aumentar el contingente vinculado a la venta, para que los “soldados” trabajaran en la seguridad de los puntos de venta.

Las relaciones de poder locales y la articulación de la defensa de los territorios pertenecientes a los dueños de morro – y, en consecuencia, a la facción a la cual se encuentran vinculados – depende de la formación de estos ejércitos de hombres armados y de su obediencia y respeto incondicional al “patrón”. Por lo tanto, aunque sea elevada la desconfianza entre los traficantes y buena parte de la obediencia y respeto se conquiste a través de la subyugación por el uso de la fuerza¹⁷, también es imprescindible que la jerarquía del tráfico sea legítima desde el punto de vista de los propios traficantes.

16 Las justificaciones aceptadas son la prisión o la muerte del portador del arma siempre y cuando éste esté al servicio del tráfico. La pérdida de armas en asaltos o demás operaciones particulares deben ser resarcidas.

17 Ver Machado da Silva (2008) sobre a “sociabilidade violenta” (*sobre la “sociabilidad violenta”*).

En este sentido, la facción coopera con la reproducción de las relaciones de poder, pues ofrece las directrices morales que fundamentan la regulación de las cuestiones de derecho y propiedad concernientes al tráfico. La facción legitima la propiedad de los dueños de morro sobre los derechos de explotación del comercio de drogas en determinados territorios y proporciona las prescripciones generales de conducta que son evocadas durante los procedimientos orales de resolución de disputas, conocidos como “desenredos” o “desenredados”¹⁸. Es con referencia a los preceptos morales compartidos en el ámbito de la facción que los traficantes fundamentan el control social que procuran ejercer los unos sobre los otros y también sobre los habitantes que residen en sus áreas de influencia. El tráfico articula una especie de derecho informal que, en realidad, pretende prioritariamente resolver disputas que conciernen directamente al comercio ilegal de drogas, como deudas, traiciones, delaciones, etc. Sin embargo, para preservar el poder sobre el territorio y mantener la policía alejada de la comunidad, acaba ocupándose también de otro tipo de conflictos, mediando en peleas de parejas o vecinos y reprimiendo crímenes cometidos al interior de la favela, como robos, hurtos, abusos sexuales y agresiones.

El control territorial ejercido por el tráfico también busca legitimarse a través de prácticas clientelistas, eventualmente distribuyendo juguetes a los niños, remedios y canastas de alimentos básicos a los habitantes y promoviendo eventos en la comunidad, en especial, los llamados bailes funk. Tales fiestas – en las que se toca el “funk carioca” – son importantes manifestaciones culturales de los jóvenes residentes de favelas. Sin embargo, como dependen del tráfico para contratar los equipos de sonido y acordar fecha y lugar para su realización, los llamados “bailes de comunidad” acaban sirviendo para comunicar el poder de los traficantes sobre el territorio e incidiendo en los deseos de los jóvenes residentes con sus seductoras imágenes de guerra, éxito y placer. Canciones de

18 Ver Grillo (2013).

apología al crimen – los llamados *proibidões* (música cuya reproducción es prohibida por ley) – y desfiles de jóvenes armados con pistolas y fusiles y vistiendo ropa de marca y joyas de oro componen el escenario en el que la facción ritualiza demostraciones de poder y cohesión. (Grillo y Neri, 2013).

Barbosa (2006) enfatiza la importancia de los bailes *funk* así como las prisiones, como espacios de convergencia y articulación de los grupos intra-faccionales, donde se impulsan las alianzas que le confieren al tráfico una “dinámica segmentada”, esto es, una estructura descentralizada, formada por grupos locales con organización similar. Los bailes propician la reunión de traficantes y habitantes oriundos de diferentes favelas aliadas y los expone a experiencias colectivas de exaltación al crimen y a la facción. Parte del repertorio musical interpretado es dedicado a homenajear la facción, favelas y personajes notorios del tráfico, narrar la “vida en el crimen” y celebrar la violencia contra los enemigos. Todo esto contribuye a alimentar el discurso de existencia de los comandos y lo inscribe en los cuerpos de los asistentes.

El colectivo designado con el nombre de la facción adquiere existencia y eficacia a partir del contraste establecido con el Otro, en este caso, los traficantes de la facción rival, llamados *alemão*. Se trata de una identidad colectiva del Otro que colabora en la construcción de alguna identidad mínima de pertenencia y solidaridad interna. Las distinciones entre una y otra facción no se remiten a diferencias en su modo de organización o prescripciones de conducta, que son, en realidad, muy semejantes. Sin embargo, hay una oposición clara entre estos colectivos, marcada en el lenguaje por el tipo de pronombre utilizado para designar la primera persona del plural, refiriéndose a sí mismos: En áreas del *Comando Vermelho* se usa el pronombre *nós* (nosotros) y en áreas del *Amigos Dos Amigos*, se habla de *a gente* (forma pronominal de uso coloquial equivalente a *nós*). Esta oposición nominal determina que el *alemán* sea considerado a priori como un enemigo y, por lo tanto, deba ser eliminado. Incluso los residentes que no poseen relación alguna con las actividades del tráfico pueden ser

identificados como alemán, cuando circulan en favelas controladas por la facción opuesta a la de su área de residencia, lo que puede resultar en su muerte.

La lógica de inclusión/exclusión contenida en la constitución de las facciones promueve, por un lado, la paz y la solidaridad interna entre los traficantes que se reconocen por el mismo nombre, pero, por otro lado, promueve las llamadas “guerras”. Con el propósito de asumir el control de las ollas de vicio en territorios controlados por una facción rival, bandos de hombres fuertemente armados invaden las favelas de sus enemigos. Estas iniciativas son promovidas, por algunos dueños de morros, que envían sus mejores “soldados”, formando las llamadas “caravanas”. Tales alianzas también son impulsadas para articular la defensa o la retoma de áreas invadidas. Las guerras son acciones que ponen en movimiento los mecanismos de cohesión faccional y contribuyen a que se reconfiguren las relaciones de poder internas de estos colectivos. Los dueños de morro que logran expandir las áreas donde controlan el microtráfico de drogas acaban despuntando como líderes políticos con mayor influencia sobre las decisiones internas del comando.

2. La Policía

La constitución del mercado ilegal de drogas bajo el formato anteriormente examinado debe ser comprendida también a partir de las relaciones establecidas con el control social estatal, especialmente con las instituciones policiales. Aunque las disputas territoriales entre traficantes surjan como la motivación inicial de la carrera armamentista evidenciada en las redes del microtráfico de drogas, ciertamente, las dinámicas de conflicto y negociación entre la policía y traficantes también contribuyeron al aumento de la violencia relacionada al tráfico. Es incluso posible clasificar la Policía también como un actor violento, si consideramos la manera en que actúa en Río de Janeiro, bien sea a través de sus prácticas institucionalizadas o ilegales. La violencia policial es un tema

constante y, más allá de afectar la rutina de los habitantes de la ciudad, influye directamente sobre el modo en que se desarrollan las redes criminales.

Son muchas las denuncias de que agentes tanto de la Policía Militar – encargada del patrullaje ostensivo – como de la Policía Civil – a quien le corresponden las investigaciones sobre crímenes – perpetrar homicidios, abusos de autoridad, torturas, extorsiones o incluso integran grupos criminales. Pero el problema de la violencia policial no se limita a la actuación de malos agentes que infringen las normas de sus instituciones. Incluso los protocolos de acción institucionalizados propician violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos y fomentan la violencia. Entre otros ejemplos, cabe destacar los frecuentes enfrentamientos entre policías y sospechosos de crímenes, que suscitan tiroteos en espacios públicos de la ciudad, principalmente en favelas, ocasionando víctimas letales. La mayoría de estos enfrentamientos proviene de una estrategia oficial de combate al crimen, basada en operaciones policiales destinadas a realizar arrestos e incautaciones.

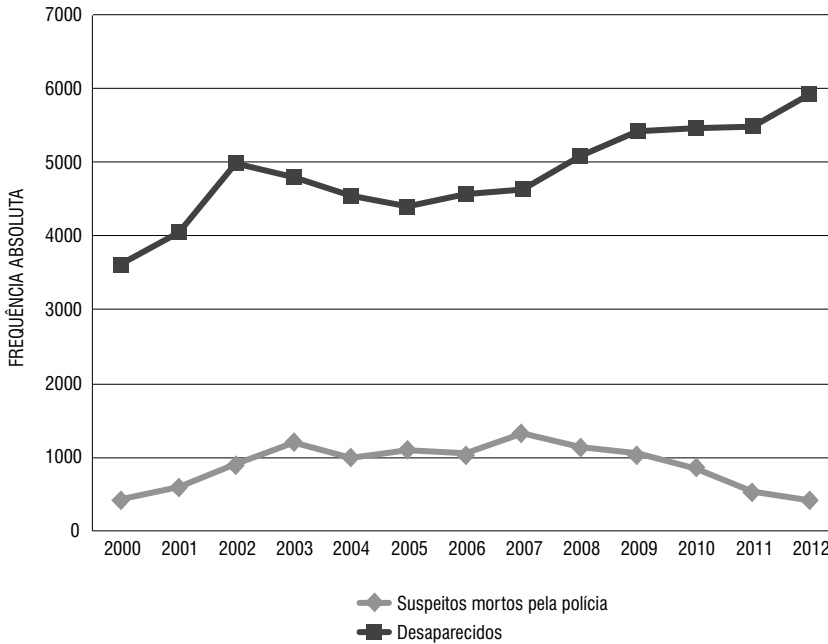
La represión policial al tráfico actúa de manera determinante sobre la regulación de las dinámicas cotidianas de este mercado. Son dos los modos principales de relación entre tráfico y policía: el enfrentamiento y las relaciones de soborno/extorsión. Tales modelos relacionales están asociados al hecho de que la actuación del tráfico es territorializada y sedentaria, estableciendo puntos de venta fijos y reconocibles, lo que facilita su identificación por los consumidores de drogas, pero también por la policía. Para proteger sus hombres, armas, drogas y dinero de los embates de policías o grupos de una facción rival, los traficantes articulan la defensa de sus territorios, mediante el uso de armas de gran calibre. Sin embargo, la superioridad del poder armado del Estado impele a los traficantes a que busquen negociar la reducción de la represión policial, pagándoles a agentes corruptos de las policías civil y militar para que no invadan las favelas en conflicto armado.

De este modo, es posible afirmar que el modelo de gestión de los territorios empleado por el tráfico de morro implica la necesidad de comprar “mercancías políticas” (Misse, 1999). Por “mercancía política” se entiende “toda mercancía cuya producción o reproducción depende fundamentalmente de la combinación de costos y recursos políticos, para producir un valor de intercambio político o económico” (Misse, 1999: 295). Este concepto ha sido bastante provechoso para pensar la manera en que agentes públicos se apropian de forma privada del poder que les es delegado por el Estado para obtener ganancias monetarias. La venta de la reducción de la represión policial por parte de agentes corruptos es uno de los ejemplos más conocidos de la transacción de “mercancías políticas” en el caso de Río de Janeiro.

El soborno/extorsión pagado por los traficantes a la policía es conocido como *arrego* (*vacuna*). La finalidad de este pago es evitar las barreras policiales en las inmediaciones de la favela, y evitar que se realicen operaciones policiales de incursión, principalmente en días de baile funk. Tales operaciones de incursión suelen dar como resultado la incautación de armas y drogas y el arresto, lesión o muerte de traficantes, o incluso de residentes comunes. El pago del *arrego* no constituye una garantía de que la policía cumplirá con la parte acordada del trato, pues las órdenes de instancias superiores pueden obligar a las guarniciones a emprender una operación policial a pesar de los acuerdos ilegales establecidos. Hay que añadir que las policías no son instituciones cohesionadas, lo que conlleva a que algunos policías de turno acepten sobornos y otros no.

Una consecuencia habitual de esas operaciones policiales son los llamados “autos de resistencia”, esto es, los homicidios cometidos por policías en servicio en supuesta legítima defensa. El volumen de sospechosos muertos en operaciones policiales en Río de Janeiro en la última década es espantoso y sin paralelo en otras ciudades de Brasil e incluso de América Latina. A partir de 2007 hubo una tendencia a la baja en estas cifras, aunque compensada por un aumento continuo en el número de personas desaparecidas, cuyo paradero continúa oficialmente desconocido (gráfico 14).

Gráfico No. 14
Sospechosos muertos por la policía y desaparecidos Río de Janeiro 2000-2012



Fuente: ISP-RJ y Necvu-UFRJ

En investigación anterior (Misse, M., Grillo, C., Teixeira, C. y Néri, N., 2012), se observó que los casos registrados como auto de resistencia no son propiamente investigados y tienden en su mayor parte a ser archivados. La versión presentada por los policías autores del homicidio es aceptada desde el momento del Acta Policial e instauración de la investigación, prevaleciendo hasta el fin del procesamiento de los casos, pues no suele haber otros testigos, aparte de la propia policía, y tampoco son efectuadas pruebas periciales capaces de esclarecer las circunstancias de la muerte, bien sea para confirmar la versión de legítima defensa o refutarla. Se observó que falta rigor en las investigaciones y que incluso la comprobación de tiros en la espalda o a corta distancia tiende a no ser considerada elemento probatorio suficiente para la incriminación de los policías. Se entiende, por lo tanto, que las instituciones

del Sistema de Justicia Criminal aprueban eventuales crímenes cometidos por policías, en la medida que no hay compromiso en la fiscalización del trabajo de estos agentes.

En el año 2008, la reducción de los “autos de resistencia” fue incluida entre las metas establecidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, lo que reveló el reconocimiento de excesos por parte de los policías y denotó un cambio en la orientación de las políticas de seguridad pública. En este mismo año, se inició también el proyecto de las Unidades Policiales Pacificadoras (UPP) – analizado en la próxima parte del texto – que representó un punto de inflexión en la estrategia adoptada de combate al tráfico. Las ocupaciones militares permanentes vienen progresivamente sustituyendo las operaciones policiales puntuales, produciendo significativas transformaciones en la manera en que policía y tráfico se relacionan y disminuyendo el volumen de violencia asociado al mercado ilegal de drogas.

Con base en el trabajo de campo realizado antes y después de la implementación de las UPP en las favelas investigadas, se observó que los guardias de las ollas de vicio se hicieron más difíciles de ser localizados. Éstos ya no se encuentran en los locales antes ampliamente conocidos y se volvieron más móviles que antes. Es posible percibir la presencia de algunos jóvenes parados en puntos específicos con mochilas en la espalda, pero en caso de que estén portando armas, no se hace evidente. Luego de la entrada de las UPP, sólo se veían armas de bajo calibre en posesión de jóvenes traficantes que trabajan en la seguridad del “frente del morro”, que, a su vez, acompañaba al guardia de la olla de vicio durante algunas horas. Si antiguamente éste permanecía todo el día parado en una de las principales calles de la favela, donde podían pasar carros, ahora se esconde en un callejón estrecho, de difícil acceso, vigilado por sus soldados. De vez en cuando, también, policías y traficantes chocan de frente, ocasionando así, breves tiroteos, sin embargo, ésta ya no es la regla. Como dice un residente, dueño de un bar: “El morro está más tranquilo, sólo que no falta de vez en cuando una trifulca por ahí”.

Con el fin de evitar estos choques conflictivos, además de monitorear los movimientos de la Policía, se dice también que los traficantes les pagan a los policías de las UPP para que dejen de incautar las drogas y arrestar a los menores de edad que actualmente trabajan en las ollas de vicio, permitiendo que éstas funcionen discretamente.

Con relación a la implementación de las UPP, incluso los residentes que mantienen relaciones de parentesco y amistad con bandidos tienden a coincidir que la reducción de los tiroteos entre policías y traficantes ha sido un punto extremadamente positivo; sin embargo, en un momento inicial, algunos se quejaban de la ausencia de la actuación de los traficantes en el sentido de mediar en conflictos y cohibir determinados comportamientos en el espacio de la favela. Algunas de las residentes afirmaron que pasaron a preocuparse por trancar sus puertas, temiendo hurtos y que no se sentían seguras caminando solas en zonas solitarias. Esto, sin embargo, se habría regularizado pasados algunos meses después de la ocupación de la policía.

Las entrevistas y narraciones escuchadas en áreas controladas por las UPP denotan la enorme incredulidad de la población de las favelas sobre la capacidad de la policía de velar por la seguridad pública en sus territorios. Por más que se critique el tráfico y se reconozca cuánto los perjudican los conflictos entre traficantes y policías, es común que los residentes recurran a los traficantes para que intermedien en conflictos locales. La policía es vista con gran desconfianza por la población de la favela, de un modo general, incluso con más desconfianza que al tráfico. El historial de actuación violenta indiscriminada de los policías contra los residentes, induce a estos últimos a percibir la policía como parte – y tal vez la mayor parte – del problema de la violencia en las favelas.

Policías que humillan, hieren, matan y roban las pertenencias de habitantes pobres y honestos de las favelas. Es de esta imagen de la actuación policial que el proyecto de las UPP pretende distanciarse. Sin embargo, siendo este un proyecto reciente, aún no es

posible medir su eficacia y evaluar su impacto sobre las dinámicas locales de la favela. No hay ni siquiera cómo especular con relación a los desarrollos futuros de las UPP.

3. Milicias

En el año 2006, se dio a conocer a través de la prensa la existencia de grupos de agentes del Estado que controlaban barrios, favelas y conjuntos habitacionales, cobrando cuotas de “protección” a los habitantes y ejerciendo el monopolio de algunas actividades económicas, como el transporte alternativo, la venta de gas y la distribución clandestina de señal de TV por cable. Tales grupos se hicieron conocer como “milicias”, categoría que busca captar la especificidad de un tipo de formación social que comenzó a expandirse por barrios y comunidades de bajos ingresos de la provincia de Río de Janeiro a partir de los años 2000.

Souza e Silva, J., Lannes, F., Willadino, R., (2008) sugieren que el área de expansión privilegiada de estos grupos son los asentamientos ilegales e irregulares situados en las periferias de la región metropolitana de Río de Janeiro, donde surgen grupos respaldados por agentes públicos que pasan a subdividir y vender terrenos ilegalmente. Además, según los autores, las milicias se originarían de grupos de “justicieros”, que pasarían a vender un modelo de urbanización basado en la “seguridad”.

Zaluar y Conceição (2007) señalan, desde la década de los 60, una continuidad entre el fenómeno de las milicias y los llamados “grupos de exterminio”. Para las autoras, la diferencia estaría en la vigente expansión de sus actividades económicas, ampliándose la oferta de servicios, así como en el cobro sistemático a los habitantes de determinadas regiones y en la constitución de redes al interior de los poderes Legislativo, Ejecutivo o, incluso, en el Judicial, mientras que los grupos de exterminio eran pagados sólo por comerciantes que encomendaban homicidios. Misse (2011) hace una observación semejante al proponer que la novedad introducida por la “policía *mineira*” (de *Minas Gerais*) en la década de los 90 con

relación a los grupos de exterminio de la década de los 70 sería el cobro hecho a los habitantes so pretexto de protección contra las redes del tráfico de drogas.

De hecho, la justificación moral dada por tales grupos para legitimar las prácticas de extorsión y explotación de servicios básicos fue, al inicio, la de que éstos impedirían que traficantes de drogas actuaran en determinadas áreas. Esta justificación fue aceptada por mucho tiempo por la prensa, diversos políticos y sectores de la población. Como ejemplo de ello, en el 2006, el entonces alcalde de la ciudad de Río de Janeiro se refirió públicamente a las milicias como “autodefensa comunitaria”. Las milicias se representaron de este modo por algunos años, tomándose por base, principalmente, la experiencia pionera de la entonces llamada *policía mineira* en la comunidad de Río das Pedras, en la zona oeste de la ciudad.

Uno de los primeros estudios sobre lo que la prensa posteriormente denominó como milicia fue la investigación coordinada por Burgos y publicada en el libro *Utopía da Comunidade: Río das Pedras, uma favela carioca (Utopía de la Comunidad: Río de las Piedras, una favela carioca)* (Burgos ed., 2002). Hasta ese entonces el caso de Río das Pedras – donde la asociación de los residentes se había transformado en un aparato coercitivo capaz de impedir la instalación de redes de tráfico de drogas en la favela a costa de limitar la libertad civil y política de los residentes – era considerado un caso singular. La referida investigación tenía como propósito comprender esta nueva forma de organización local que, años después, se habría difundido hacia otros territorios, pasando a constituir un modelo de control social, administración de conflictos y gestión de territorios, que actualmente conocemos como milicia.

En Río das Pedras, tal modelo se habría consolidado a lo largo de los años bajo la complicidad del poder público, que delegaría a la Asociación, el poder de intermediación sobre las más diversas cuestiones desarrolladas a nivel local. La articulación entre el control social y el trabajo político y administrativo de la asociación local de residentes le proporcionó una capacidad de *enforcement* sobre la vida local, sin precedentes. Tal acuerdo institucional dio

origen a una especie de política tributaria y social, que incluye el control sobre el comercio del microtráfico de la favela, su mercado inmobiliario y servicios relacionados al transporte, salud, educación y ocio. (Burgos, 2008)¹⁹

Es importante anotar que aunque el surgimiento de las milicias se haya amparado en el argumento de protección contra la acción de traficantes, el control social ejercido por los milicianos se demostró tan o más arbitrario y violento que el del tráfico. Además de reivindicar el monopolio de la violencia en determinadas áreas, las milicias hacen uso de la coerción física y los homicidios para imponer su dominio sobre la población. Aun así, estos grupos fueron por mucho tiempo interpretados como un “mal menor” cuando eran comparados con el tráfico de drogas.

El punto de inflexión en la percepción que se tenía de las milicias se dio en abril de 2008, cuando periodistas del diario O Dia que realizaban un reportaje investigativo en la favela del Batam, en Realengo, fueron secuestrados y torturados por milicianos. Ya había diversas denuncias de coerción a la población y homicidios cometidos por miembros de este tipo de grupo, así como una solicitud de instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en la Asamblea Legislativa de la Provincia de Río de Janeiro (ALERJ) para comprobar la participación de parlamentarios y demás agentes públicos en tales hechos. Sin embargo, fue el clamor generado por la violencia cometida contra los periodistas lo que posibilitó la instauración de la CPI, amparada por el apoyo de la prensa y la opinión pública.

La CPI pudo contar con el acceso a documentos oficiales de instituciones como la Policía Civil y el *Ministerio Público* (Fiscalía General) y con más de mil denuncias hechas a través de la línea llamada *Disque Milícia* (Marque Milicia) o, también, por otras líneas como la *Disque Denúncia* (Marque Denuncia), entre los meses de junio y noviembre de 2008. Fueron acusadas 218 personas – entre ellas, un diputado de la provincia y cinco concejales que fueron revocados de

19 Texto disponible online en el sitio web comunidadessegura.org

su mandato – y “notificadas” otras 879 personas, sobre las cuales no había pruebas suficientes para una acusación. Entre los acusados, 67 eran miembros de la Policía Militar, 8 trabajaban en la Policía Civil y algunos estaban vinculados a los demás órganos públicos.

La visibilidad que la CPI le otorgó, a través de los medios de comunicación, al asunto de las milicias modificó la manera en que éstas pasaron a ser concebidas por la población y reprimidas por el Estado. Quedó demostrado que de las 171 comunidades controladas por milicias, 119 nunca habían pertenecido a facciones del tráfico de drogas, desmontándose la tesis de que éstas serían una manera de combate al tráfico. La CPI también hizo manifiesta la participación de agentes públicos en estos grupos, los crímenes por ellos cometidos – principalmente extorsión y homicidio – y el poder de control de las intenciones de voto de los residentes de las áreas bajo su dominio.

Con base en datos del Tribunal Regional Electoral, Cano y Duarte (2012) observaron que los concejales acusados de tener vínculos con milicias habían sido electos con votación concentrada, lo que constituye una fuerte evidencia de la existencia de “*currais eleitorais*” (“corrales electorales”): zonas con control hegemónico sobre la compra e influencia en la intención de voto. Además según los autores, algunos miembros de la Secretaría Provincial de Seguridad Pública del gobierno de Anthony Garotinho “notificados” por vínculos con milicias – inclusive el propio secretario – también habrían sido electos con votación concentrada, lo que reforzaría las denuncias de que ellos poseerían de hecho relación con estos grupos y de que habrían facilitado la expansión de este tipo de organización criminal en la provincia.

Las prácticas de restricción de las campañas electorales y la manipulación de las intenciones de voto, comúnmente observadas en áreas controladas por milicias no se desarrollaron del mismo modo que en aquellas controladas por traficantes. A diferencia del tráfico, cuyos tentáculos en el poder público son limitados y puntuales, las milicias poseen agentes del Estado en sus mandos y tuvieron éxito al elegir algunos de sus miembros para ejercer man-

datos en el poder legislativo. Se observó que tenían un proyecto político vinculado a la expansión de estos grupos, lo que les proporcionaría una complejidad mayor de su organización con relación a las facciones del tráfico de drogas.

¿Pero cómo definir este tipo de organización? Una amplia variedad de grupos con modos de actuar distintos entre sí pasó a ser clasificada como milicia. En el año 2012, fue promulgada la ley 12.729 que dispone sobre el crimen de exterminio de seres humanos y, entre otras resoluciones, altera el Decreto-Ley n° 2.848 de 1940. El artículo 4° de la ley 12.729 tipifica la “constitución de milicia privada” y adiciona al referido Decreto-Ley el artículo 288A, que prevé una pena de reclusión de cuatro a ocho años para quien: “Constituya, organice, integre, mantenga o financie organizaciones paramilitares, milicias particulares, grupos o escuadrones con el fin de practicar cualquiera de los crímenes previstos en este Código.” Sin embargo, esta ley fue severamente criticada por muchos juristas debido a que ella no define lo que es “constituir una milicia privada”. ¿Cuáles serían a final de cuentas las características centrales de estos grupos?

En el Informe Final de la CPI consta una compilación de definiciones posibles para el término “milicia”. Para el comisario Marcus Neves:

... milicias son grupos armados compuestos por agentes del Poder Público y personas cooptadas en las comunidades necesitadas, inclusive ex-trafficantes, que hacen uso de la fuerza y el terror para dominar una determinada región y explotar de manera ilegal las actividades de transporte alternativo, gas y televisión por cable. Su consigna es la cuestión financiera, las ganancias abundantes y fáciles. (p.35)

Para el comisario Cláudio Ferraz, el entonces encargado de la Comisaría Regional de Acciones Criminales Organizadas (Draco):

... las milicias se enmarcan en el concepto internacional de crimen organizado. Primero, elevado nivel organizativo; segundo, la racionalidad del tipo de empresario de la corporación criminal que ofrece bienes y servicios ilícitos, tales como drogas, prostitución, e invierten sus ganancias en sectores legales de la economía; terce-

ro, la utilización de métodos violentos con la finalidad de ocupar posiciones dominantes o tener monopolio del mercado, obtención de la máxima ganancia sin necesidad de realizar grandes inversiones, recorte de los costos y control de la mano de obra; cuarto, valerse de la corrupción de la fuerza policial y del Poder Judicial; quinto, establecer relaciones con el poder político; sexto, utilizar la intimidación y el homicidio, ya sea para neutralizar la aplicación de la ley, o bien para obtener decisiones políticas favorables o alcanzar sus objetivos. (p.35)

Entre otras personas escuchadas por la CPI, se destacó la definición ofrecida por el sociólogo Ignácio Cano. Con base en una investigación realizada en el año 2008, Cano definió el concepto de “milicia” a partir de cinco características fundamentales: a) dominio territorial y poblacional ejercido por grupos armados irregulares; b) coacción contra residentes y/o comerciantes locales; c) motivación de ganancia individual de los integrantes del grupo; d) discurso de legitimación en oposición al narcotráfico y al desorden social; e) participación abierta de agentes armados del Estado en posiciones de comando de los grupos.

El primero de estos ejes está marcado por el carácter ilegal del control social ejercido por los milicianos, pues a pesar de que muchos de ellos fueran agentes del estado, la regulación de las prácticas se daría por medios arbitrarios y no por los procedimientos institucionalizados y legítimos. El segundo es el que le confiere ilicitud a la oferta de seguridad, en caso contrario, se trataría sólo de la venta del servicio de protección. La ilegalidad de este servicio reside en la obligatoriedad del pago de las cuotas cobradas por la protección contra ellos mismos. Ahora, el tercero se deriva de la constatación de que, si quisieran apenas proteger la comunidad, esto podría realizarse como agentes del Estado. La formación de las milicias tendría por objetivo el lucro y no propiamente la protección de los residentes.

Estos tres primeros aspectos acercarían a las milicias a otros grupos armados como aquellos ligados al tráfico, en la medida en que el control territorial, coacción y lucro son igualmente observados en las áreas controladas por traficantes. Los rasgos diferen-

ciales serían los dos últimos: el discurso de legitimación y la participación de los agentes públicos. Al presentarse como protección contra la amenaza de crimen y el desorden, las milicias buscan legitimarse como un “mal menor”, diferenciándose del tráfico que no necesita legitimación. Ahora, la participación de agentes del Estado era ampliamente divulgada, aportándoles una ventaja a las milicias con relación a las pandillas de traficantes. Esta publicidad de su papel público sirve para legitimar las milicias en detrimento del tráfico, validar la capacitación de sus miembros para trabajar en el área de seguridad, tener la prerrogativa de invocar el refuerzo del Estado en casos de conflicto con grupos criminales y dificultar la resistencia por parte de los residentes.

Sin embargo, Cano y Duarte (2012) descubrieron que incluso estos dos últimos rasgos característicos de las milicias habrían quedado debilitados luego de la intensificación de la represión iniciada a partir de la CPI, prevaleciendo los tres primeros. Al intentar verificar cuál habría sido la evolución de las milicias entre los años 2008 y 2011 – es decir, desde la instauración de la CPI hasta el momento de la investigación – por medio del análisis de denuncias anónimas, reportajes de periódicos y entrevistas con residentes y profesionales de la seguridad pública, los autores percibieron que las milicias habrían sido debilitadas y habían pasado a operar de manera más discreta.

Ya no aparecía en el discurso de los entrevistados la legitimación de estos grupos como una alternativa al tráfico y tampoco los policías y demás agentes estatales se declaraban abiertamente como integrantes de las milicias. Los cobros pasaron a ser efectuados por personas no identificadas como milicianos, sino como sus asistentes, preservando la imagen de los primeros. En lugar de lanzar la candidatura política de sus propios miembros, pasaron a apoyar candidatos sólo indirectamente vinculados a estos grupos. Y así continuaron existiendo y propagándose, pero esto “bajo cuerda” de acuerdo con la jerga que da título al libro de los autores.

Cano y Duarte también resaltan que la rentabilidad de estos grupos habría disminuido a causa de la mayor represión policial

sobre el cobro ilegal de “cuotas de seguridad” y de la pérdida del monopolio de la oferta de una serie de productos y servicios. La llegada de las redes de gas domiciliario a numerosos barrios y los paquetes populares de TV por cable ofrecidos por nuevas empresas serían un ejemplo de esto. Estos autores resaltan también que diversas denuncias efectuadas contra las milicias a través del *Marque Denuncia* pasaron a reportar la participación de éstas en el microtráfico de drogas, desmitificando la idea de que serían una alternativa al tráfico. Es posible que exista alguna correlación entre las pérdidas económicas por actividades habitualmente vinculadas a las milicias con su ulterior participación en el narcotráfico.

Pero aunque haya habido una intensificación de la represión a las milicias, este modelo de organización de la criminalidad continuaría expandiéndose por la provincia y también por el país. Los homicidios ejecutados por milicianos contra los residentes, líderes comunitarios y adversarios políticos constituyen el principal sustrato de las investigaciones realizadas a fin de desarticular estos grupos. Sin embargo, la participación de políticos y agentes de seguridad pública en milicias privadas conlleva grandes dificultades a la investigación de los crímenes cometidos por estos grupos.

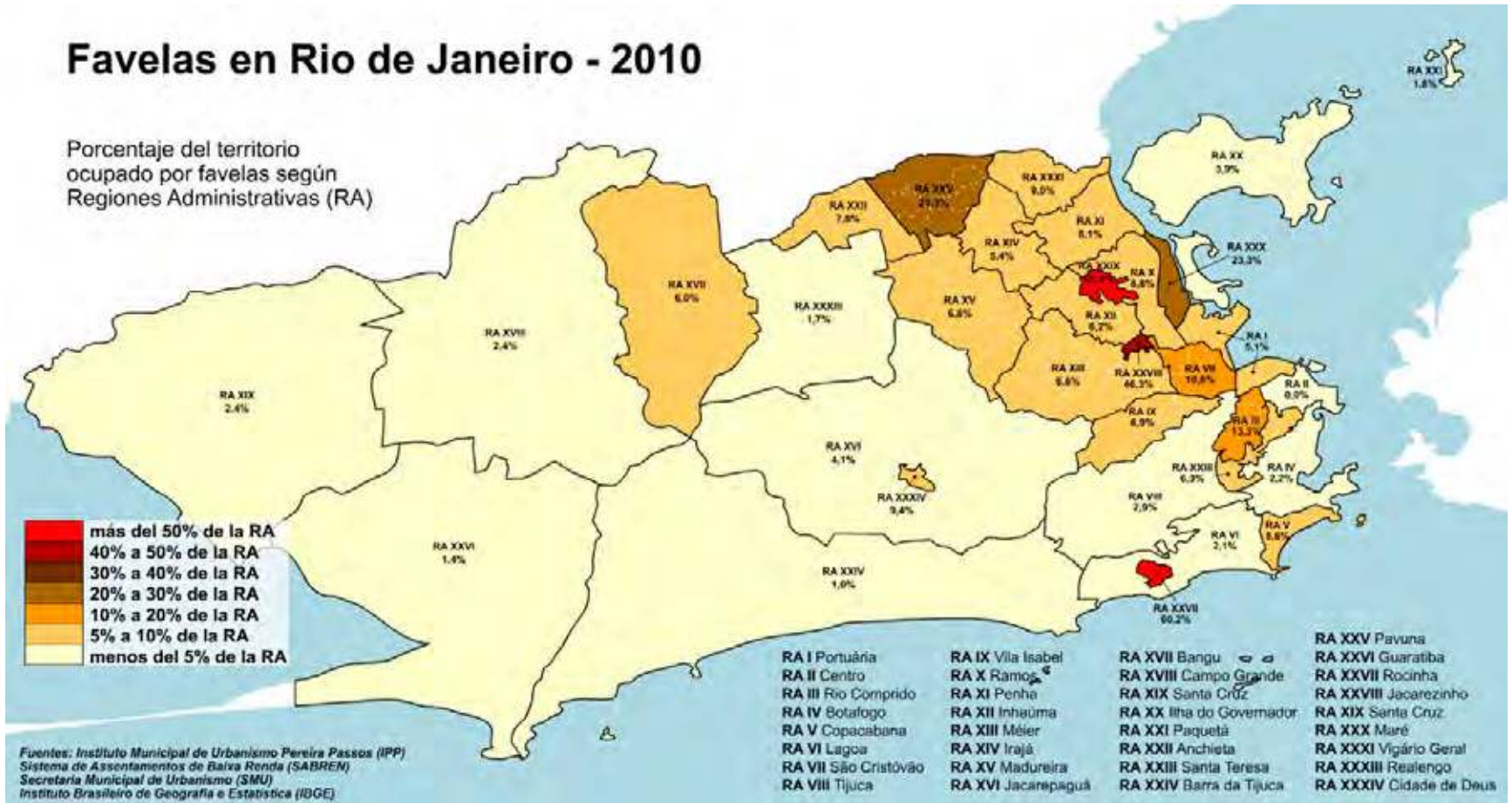
El peligro que representan las milicias se hizo aún más creíble tras la muerte de la jueza Patrícia Acioli, asesinada por policías en represalia a su actuación severa contra los “grupos de exterminio” compuestos por agentes de la seguridad pública. Luego de la muerte de la jueza, se intensificaron las ya recurrentes amenazas al ex-diputado Marcelo Freixo quien propusiera anteriormente la instauración de la CPI de las milicias, llevándolo a abandonar temporalmente el país, hasta que fuesen tomadas las medidas necesarias para la debida garantía de su seguridad.

Nunca antes ningún otro tipo de grupo del crimen organizado en Río de Janeiro había proferido amenazas tan contundentes al funcionamiento de las instituciones públicas como lo hacen las milicias. Lo que anteriormente se había presentado como alternativa al tráfico se constituye hoy como una de las principales amenazas al Estado Democrático de Derecho.

Mapa No.1 Río de Janeiro

Favelas en Río de Janeiro - 2010

Porcentaje del territorio ocupado por favelas según Regiones Administrativas (RA)



III. LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS UPP

Una característica dominante de las políticas de seguridad pública en la Provincia de Río de Janeiro en el periodo comprendido entre las décadas del 80 y 90 fue la oscilación entre gobiernos que enfatizaban la represión violenta y gobiernos que enfatizaban en una política de derechos humanos. El uno acusaba al otro de ser el responsable del aumento de la violencia que se constataba luego de cada mandato.

Algunas experiencias diferentes se intentaron a partir de 1998, con la creación del *Programa Delegacia Legal* (Programa de Comisaría de Policía Chévere) y con la ubicación, en algunas favelas, de GPAES – *Grupamentos de Policiamento em Áreas Especiais* (Grupos Policiales en Áreas Especiales). Se trataba de interrumpir la oscilación entre invasiones policiales y militares de favelas, que dejaban a su paso muchos muertos, y el impedimento de acciones de ese tipo, que facilitaba la oferta de mercancías políticas a los traficantes por policías ansiosos por retomar la política anterior. Con los GPAES la política consistía en invadir y permanecer en la favela, impidiendo, por la presencia ostensiva y la búsqueda de apoyo entre los habitantes, que los traficantes retomaran el control.

La experiencia fue exitosa en algunas favelas, pero encontró una fuerte reacción en los medios de comunicación conservadores, quienes acusaron al Gobernador de hacer acuerdos con los traficantes para que, a cambio de la pacificación, éstos continuaran traficando, discretamente, sin provocar la violencia. El relativo fracaso de esta política fue seguido, como antes, por una nueva oscilación, esta vez con operaciones policiales con carros de combate, llamados *caveirões* (patrullas blindadas), que invadían las favelas sin ningún respeto hacia los habitantes. Al inicio del mandato del nuevo gobernador, en 2006-2007, la tasa de sospechosos muertos por la policía alcanza su mayor nivel. La reacción mediática no demoró en señalar los errores de la represión que, solamente en un conjunto de favelas, conocido como “Complejo del Alemán”, dejó

más de treinta víctimas, muchas de las cuales con claros indicios de ejecución por parte de la policía.

Cuando la Policía Militar invadió la antigua y relativamente tranquila favela Santa Marta, en diciembre de 2008, en una de las zonas de clase media alta de Río de Janeiro, la reacción de los traficantes locales fue menos intensa de lo que se esperaba. La policía decidió permanecer en el lugar, como lo había hecho antes durante la experiencia de los GPAES. Los habitantes y los medios de comunicación elogiaron la decisión y el gobierno decidió aprovechar el éxito de la operación para instituir la y extenderla a favelas cercanas. En ese mismo momento, la ciudad de Río de Janeiro era seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, además de la Copa Mundo de Fútbol de 2014, otorgada a Brasil con anterioridad. La experiencia anterior de los GPAES y, ahora, de la ocupación de la favela Santa Marta, indicaban que la política de seguridad debería dirigirse a ocupar militarmente las favelas, principalmente aquellas donde las facciones estaban firmemente instaladas, con gran poder de fuego y con gran participación en el microtráfico.

Entre el tradicional dominio del microtráfico y las diferentes “agencias” de protección que se desarrollaron en Río de Janeiro en los últimos cuarenta años, una nueva situación comenzó a tomar forma en cerca de veinte importantes áreas urbanas de la ciudad. Bautizadas con el nombre de UPP – Unidades Policiales Pacificadoras -, éstas prometen cumplir una antigua reivindicación por parte de los habitantes de dichas áreas, la de ser una policía comunitaria confiable, capaz de servirles a los habitantes en lugar de amenazarlos y extorsionarlos. Para que el sueño se concrete sin mayores percances, el gobernador resolvió convocar a nuevos policías militares, recién habilitados y entrenados para la nueva misión. Algunos íconos de la violencia urbana de Río, como la Cidade de Deus, en la Zona Oeste, los morros de Babilônia y del Chapéu Mangueira, en Leme, la Ladeira dos Tabajaras y el Cantagalo/Pavãozinho en Copacabana e Ipanema, el pionero Santa Marta, en Botafogo, los tradicionales morros de São Carlos, en Estácio, Turano y Salgueiro

en Tijuca, las favelas de Santa Tereza, el antiguo Borel da Muda, el Macacos en Vila Izabel, y la célebre Mangueira, en Maracanã, son ahora “territorios de las UPP”. Además de éstas, se prometen otras UPP para los territorios conquistados en los llamados “complejos” del Alemán y de la *Penha*, anteriormente una de las principales bases de la facción criminal conocida como *Comando Vermelho* (Comando Rojo) (CV). Y todo indica que también el “complejo” de la Maré, que circunda parte de la *Linha Vermelha* (Línea Roja), entre el Aeropuerto Internacional del Galeão y la Avenida Brasil, será el próximo “cliente”. Todos estos territorios, bajo control policial, constituyen lo que el secretario de seguridad pública ha denominado “cinturón de seguridad”, con miras a la Copa Mundo y a los Juegos Olímpicos.

¿Qué puede significar esto, como no sea la constatación de que la “pacificación” también tiene sus territorios? Al izar la bandera nacional y la bandera de Río de Janeiro en el alto de la Mangueira, cuando anteriormente, en las primeras “conquistas” de territorios, se izaba la bandera del Bope (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), con la famosa calavera, o la bandera de la Policía, ¿Qué es eso tan diferente que se está señalando? La territorialización del poder de la policía en Río de Janeiro es un capítulo más de una larga historia, cuyos contornos necesitan ser recordados.

Una peculiaridad de Río de Janeiro es que siempre incorporó en su historia social la existencia de “valientes” y “dueños de morro”. No es tanto una historia de combos, como ocurre en otras ciudades (Belo Horizonte tal vez sea un ejemplo), ni de pistoleros, como en el nordeste brasileño, ni siquiera de una criminalidad curiosamente casi invisible, por ser tan segmentada, como en São Paulo o Brasilia, o incluso como entre los jóvenes de clase media que trafican en Río y en otras ciudades, sin que sea necesaria la identidad de un espacio urbano y unos puntos fijos de venta de drogas. La referencia al “territorio” en Río fue siempre importante, como lo testifican crónicas y reportajes de diferentes épocas, desde que Orestes Barbosa la señaló ya en los años 20. Del mismo

modo que los personajes del malandrín y del marginal, que en Río adquirieron tinte urbano propio y una visibilidad nacional a través de la música y del cine, el territorio y su división conflictiva entre partidos o facciones se volvió, desde fines del Imperio, una marca característica de la ex capital de la República.

Los territorios de los vagabundos practicantes de capoeira, a fines del Imperio, que dividieron la ciudad en dos bandos; los territorios de los bicheiros (*vendedores del juego del bicho*), cuya delimitación aún hoy ocupa las páginas policiales de la prensa; los territorios donde se refugiaban los malhechores y los marginales, de la antigua Zona do Mangue a las favelas que se levantaban en los morros de la ciudad, los territorios del tráfico, a partir de los años 70, donde adquirió efectividad la militarización sistemática de la disputa de los territorios entre facciones y entre éstas y la policía; el novel territorio de las milicias, controlando la oferta diferencial, pero obligatoria, de protección y de otras mercancías ilícitas, en varias partes de la ciudad y finalmente ahora, la victoria conquistadora de las policías con el apoyo táctico de parte de las fuerzas armadas, señalando que el territorio dejó los márgenes del Estado para integrarse plenamente, con banderas y todo, al orden constituido.

No se puede saber aún en qué va a resultar toda esa respetable inversión, pero pueden sugerirse algunas hipótesis sobre el por qué no se hizo antes, por los gobiernos anteriores. Es necesario considerar algunas variables importantes, que explican incluso el hasta ahora exitoso emprendimiento de traer a la ciudad (con la ambición de integrarlas), las áreas antes relegadas a la lógica de los terrenos baldíos y de las ventanas quebradas.

Las UPP suceden a otra experiencia, menos amplia, pero muy parecida en su inicio: la experiencia de los GPAE (Grupos Policiales en Áreas Especiales), creados en el gobierno de Garotinho. Como el mismo nombre lo indicaba, se trataba de una estrategia policial para “áreas especiales”, territorios que les serían en primer lugar “conquistados” a los traficantes y luego “controlados” por fuerzas especiales ubicadas físicamente en el territorio. El programa comenzó a dar

resultado (en el mismo sentido en que las UPP también comenzaron a dar resultado), pero el tráfico era lo suficientemente fuerte para continuar operando, aunque evitando la violencia en el territorio, ahora explícitamente controlado por la policía. El programa se desmoronó cuando la gran prensa de Río denunció que el gobernador estaba “tácitamente” aceptando que el tráfico continuara operando, aunque sin violencia y sin “control” efectivo del territorio. Sin mayor apoyo político, los GPAE continuaron existiendo como una especie de minibatallones locales, pero perdieron parcialmente la capacidad, inicialmente prometida, de controlar el “área especial”. No llegaron siquiera a tener la cobertura territorial de las UPP.

Entre los GPAE y las UPP (que el lector disculpe la abundancia de siglas) surgieron, principalmente en la Zona Oeste, grupos de agentes públicos (policías militares y civiles, agentes penitenciarios, bomberos y civiles armados), fuera del ejercicio de sus funciones, que pasaron a conquistar militarmente territorios antes controlados por el tráfico. Organizados en redes, las milicias buscaron la legitimación informal de “colectivos de ciudadanos” interesados en ofrecer protección a los desprotegidos habitantes de las diferentes localidades, que éstos transformaron en sus territorios. El problema es que estos “colectivos de ciudadanos” comenzaron a golpear, expulsar y asesinar a los habitantes que opusieran resistencia o que no quisieran contribuir con la “cuota” protectora. Pasaron también a reemplazar el tráfico en la explotación de diferentes mercancías ilícitas – señal clandestina de TV por cable, oligopolio en la distribución de gas en cilindro, transporte clandestino y obligatorio en vans controladas por dichas “milicias”, además de la extorsión de la contribución mensual por protección. El volumen de homicidios en la Zona Oeste alcanzó niveles tan altos que las milicias, ya siendo reprimidas, pasaron a ocultar sus cadáveres. En los últimos años, el volumen de personas desaparecidas en la región se disputa con los homicidios el macabro honor de los primeros lugares. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo el tráfico - tan fortalecido en los años anteriores - cedió los territorios a las milicias, si no los cedían a la policía?

En primer lugar es necesario recordar que, hace décadas, los policías preferían extorsionar a los traficantes que expulsarlos de sus territorios. La palabra “extorsión” no siempre es adecuada para comprender lo que sucedía. Había una reestructuración del poder que interesaba a ambas partes, aunque el cambio se desarrollara bajo una forma obligatoria y asimétrica. Por un lado, guarda semejanza con la forma del tributo, por otro lado es un intercambio en el que los valores son negociados en cada coyuntura de la represión. La represión al tráfico siempre funcionó como matriz de precios, tanto del precio de la droga como de la fijación del valor de la mercancía política ofrecida por los policías. A diferencia de la época del juego del bicho, cuando los policías se encontraban muchas veces en una posición subordinada en la negociación con los jugadores de bicho, en el caso del tráfico había un “acuerdo”, obligatorio, pero negociado, en el que la posición dominante le corresponde al policía. Cuanto menos negociado fuera el intercambio, más se acercaba a la pura extorsión, el llamado “arrego” (*vacuna*). Pero la mayoría de las veces y en la mayor parte del tiempo es una mercancía que es producida en condiciones de monopolio, que interesa a ambas partes y cuyo valor depende de cálculo político y no sólo económico. La oferta de protección tiene diferentes contenidos: informaciones sobre operaciones policiales, liberación de presos, facilitación en la llegada de armas y drogas, una actitud de “vista gorda” en lo cotidiano de la vigilancia, etc.

La creciente demanda de “arrego” por policías y la caída en la demanda de cocaína en el *movimiento* en algunas áreas, entre 2001 y 2006, llevó a sectores del tráfico a repeler el *arrego* y, en tres ocasiones, a incendiar buses y atacar, con tiros, puestos policiales e incluso edificios de la alcaldía y de la gobernación de la provincia. El debilitamiento de la principal facción, el CV, en la época en que surgía y se fortalecía en São Paulo el *Primer Comando da Capital* PCC, permitió que se establecieran acuerdos entre tales redes, pero se sabe muy poco sobre su extensión. Uno de los indicadores de que existe este vínculo es la entrada del *crack* a Río de Janeiro, siempre evitada por el CV cuando éste estaba fortalecido. Otro indicador del

debilitamiento del CV fue el surgimiento de A.D.A., (“Amigos de los Amigos”), que se interpuso en la antigua y permanente disputa entre el CV y el llamado *Terceiro Comando* (Tercer Comando).

Pero hay un dato sombrío e ineludible, que marcó los diez años que antecedieron a la creación de las UPP: el asesinato colectivo de sospechosos por la policía, los tristemente famosos “autos de resistencia”. En ese periodo, fueron muertos cerca de 10 mil sospechosos de robo y tráfico, según datos oficiales, la mayor parte de los cuales sin que se sepa exactamente bajo qué condiciones. Casi ninguno de estos homicidios fue sometido a juicio. Si se suman al fuerte aumento de condenas por tráfico en el mismo periodo, no hay cómo subestimar lo que esto significó en términos de inhabilitación de muchos de los principales nudos de las redes que constituyen la principal facción, el CV, la más insolente con la acción policial. No es por casualidad que el CV sea el que más territorios está perdiendo en beneficio de las UPP.

Antes de conquistar los territorios era necesario, primero, sitiarnos, vencerles la resistencia, abordarlos militarmente con apoyo de los medios de comunicación y de la opinión pública. El desafío de la permanencia ahora no es, como se supone, el de “llevar políticas públicas” a los territorios, sino – por paradójico que parezca – desterritorializarlos; es decir, integrarlos como barrios normalizados a la ciudad, disolverlos como “territorios”, inclusive “territorios de UPP”. La persistencia de una lógica de territorios indica, una vez más, la estabilización y el carácter fijo, en dichas áreas, de las márgenes del Estado. Favela o Comunidad, no importa el eufemismo, lo que se hace es cosificar en el territorio relaciones sociales de segregación y estigma, de desigualdad y represión. Como enfatizó Machado da Silva (2010), las UPP mantuvieron la metáfora bélica del combate al tráfico, pues la “pacificación” es lo que ocurre tras la victoria: la conquista de un territorio y retirada de los enemigos.

En ese sentido, las UPP habrán alcanzado el éxito cuando no busquen la permanencia, cuando no busquen una nueva (aunque bien intencionada) territorialización. Es más o menos como el *Bol-*

sa-Família (programa de transferencia de ingresos que beneficia a familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza): el éxito depende de que el programa alcance su fin, es decir, que tenga como meta alcanzable su propio fin. El gran riesgo es que la territorialización permanezca y, con el tiempo, sirva nuevamente para que se reorganicen los dos principales mercados ilegales, el que ofrece el microtráfico de drogas y el que ofrece mercancías políticas.

BIBLIOGRAFÍA

Assembléia Legislativa Do Estado Do Rio De Janeiro. *Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro*. 2008.

Burgos, M. (2002) *A Utopia da Comunidade: Rio das Pedras, uma favela carioca*. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Loyola.

_____ (2008). *Cidadania, favela e milícia: as lições de Rio das Pedras*. Rio de Janeiro: Comunidade Segura. (texto consultado da internet, na página www.comunidadessegura.org)

Cano, I. (2008). "Seis por Meia Dúzia?: um Estudo Exploratório do Fenômeno das Chamadas 'Milícias' no Rio de Janeiro" em Justiça Global (org.) *Segurança, Tráfico e Milícias no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll. Pp. 48-103,

_____ e Duarte, T. (coords.) *"No sapatinho" : a evolução das milícias no Rio de Janeiro (2008-2011)* - Rio de Janeiro : Fundação Heinrich Böll, 2012.

Dowdney, L. (2003) *Children of the Drug Trade*. Rio de Janeiro, Sete Letras,.

Grillo, C. C. (2008). *Fazendo o doze na pista: Um estudo de caso do mercado ilegal de drogas na classe média*. Rio de Janeiro: PPGSA/IFCS/UFRJ. (dissertação de mestrado) (disertación de maestría)

_____ *Coisas da Vida no Crime: Tráfico e roubo em favelas cariocas* (Rio de Janeiro: PPGSA/IFCS/UFRJ, 2013. (tese de doutorado) (tesis de doctorado)

Machado Da Silva, (org.) (2008). *Vida sob Cerco: Violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira,

Machado Da Silva, L. A. (2010). "As várias faces da UPP", Rio de Janeiro, *Ciencia Hoje*. Vol.46, n° 276, pp 34-39. Nov.

- Misse, M. (1999). *Malandros Marginais e Vagabundo: A acumulação social da violência no Rio de Janeiro (Malandrines Marginales y Vagabundo: La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro)*. (Tese de doutorado em sociologia) (Tesis de doctorado en sociología), IUPERJ, Río de Janeiro,
- _____ (2003). O Movimento. A constituição e reprodução das redes do mercado informal ilegal de drogas a varejo no Río de Janeiro e seus efeitos de violência (La constitución y reproducción de las redes del mercado informal ilegal del microtráfico en Río de Janeiro y sus efectos de violencia). In: Baptista, Marcos *et al* (Orgs.). *Drogas e pós modernidade 2*. Río de Janeiro: EDUERJ.
- _____ (2006). *Crime e violência no Brasil Contemporâneo: Estudos de sociologia do crime e da violência urbana*. Río de Janeiro: Lumen Juris.
- _____ (2008) Sobre a acumulação Social da Violência no Río de Janeiro. *Revista Civitas*, , v.8, (set-dez) 371-385
- _____ (2011). "Crime organizado e crime comum no Río de Janeiro: diferenças e afinidades." *Revista de Sociologia e Política*, Curitiba, v. 19, n. 40, p. 13-25, out.
- _____ *et al.* (2012). "Autos de Resistência": Uma análise dos homicídios cometidos por policiais na cidade do Río de Janeiro. (disponível no site necvu.ifcs.ufrj.br)
- Souza E Silva, J. de *et al.* (2008). Grupos criminosos armados com domínio de território: Reflexões sobre a territorialidade do crime na Região Metropolitana do Río de Janeiro In: Justiça Global (org.). *Segurança, Tráfico e Milícia no Río de Janeiro (Seguridad, Tráfico y Milicia en Río de Janeiro)*. Río de Janeiro: Fundação Heinrich Böhl.
- Velho, G. (1973). *A Utopia Urbana*, Río: Zahar.
- Zaluar, A.. (1994). *O Condomínio do Diabo*, Río de Janeiro: Editora UFRJ.
- _____ e CONCEICÃO , I. S. (2007). Favela sob o controle das milícias no Río de Janeiro: que paz?, *São Paulo em Perspectiva*, v. 21, n. 2, p. 89-101, jul./dez.

MEDELLÍN EN SU LABERINTO¹

CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Ana María Jaramillo²
Max Yuri Gil³

Medellín es una ciudad que ha sido reconocida en la última década por ser un sitio de contrastes, una urbe que sobresale por sus transformaciones, pero que de manera reiterada vuelve a tropezar con los mismos obstáculos, la violencia y el narcotráfico. Aunque no es igual la situación que se experimenta hoy en la ciudad, pues es evidente que no estamos en los mismos niveles de violencia del año 1991, punto de mayor número de homicidios en la historia de la ciudad (6.349 homicidios, 381 por cada cien mil habitantes) ni ante un auge del narcotráfico como el que se vivió en los años 80 y parte de los 90, en la última década se ha puesto en evidencia la pervivencia de una criminalidad que ha adquirido un carácter mafioso, fundado en su capacidad para el ejercicio de la violencia o la amenaza de ejercerla, su inserción social, la diversificación de

1 El presente ensayo es fruto de la labor desarrollada por el equipo conformado en Medellín por la Corporación Región, el cual contó con la valiosa contribución de la socióloga Sandra González en calidad de asistente de investigación.

2 Socióloga. Investigadora Corporación Región. Correo: anitajarami@gmail.com

3 Sociólogo. Investigador de la Corporación Región. Correo: maxgilr@yahoo.com

sus fuentes de obtención de rentas ilegales, los nexos que ha logrado establecer con la economía legal, con la institucionalidad y con sectores sociales y políticos que avalan sus prácticas

Lo anterior no implica una ruptura total con el proyecto que encarnó Pablo Escobar en los años 80. Si bien hay una relación de continuidad en el protagonismo de actores de violencia se observan variaciones en su *modus operandi* sobre todo a partir del momento en que se articulan al proyecto de las Autodefensas liderado por el jefe de la Oficina de Envigado alias Don Berna. Algo similar ocurre con la importancia que han cobrado diversos negocios no solo relacionados con el narcotráfico y con la importancia asignada al dominio territorial.

Sin embargo, es necesario tener presente que la configuración de un poder mafioso no es un fenómeno del todo ajeno a lo que ha ocurrido en otras ciudades del país. Ya desde el año 2005, Gustavo Duncan daba cuenta de los avances logrados por los llamados señores de la guerra provenientes de zonas rurales en la conformación de redes mafiosas en las ciudades, su interés de ejercer un monopolio de la coerción de mercados ilegales y legales y en un nivel superior, la búsqueda de la apropiación del poder político en las ciudades (Duncan, 2005). Aunque Medellín no es un caso representativo de infiltración urbana de los “señores de la guerra”, es factible establecer similitudes con otras ciudades y en lo relacionado con sus impactos en la tercerización de la economía en gran parte debida a los excedentes del narcotráfico, en una expansión del consumo de ciertos bienes y servicios y en los modos de vida de sectores de la población que de diversas formas se benefician con la dinámica económica generada por el narcotráfico.

Tampoco se trata de un fenómeno inédito. Como lo indican estudios relacionados con las transformaciones que a nivel global se han venido produciendo en el crimen organizado y en las mafias, se ha puesto de manifiesto su capacidad para instalarse en el corazón de sistemas políticos y económicos (Gayraud, 2007), diversificar sus operaciones y la búsqueda de influencias en entornos políticos, económicos y sociales basados en su capacidad adquisitiva y poder de coerción (Garzón, 2008), (Garay, 2012). Sin embargo, los

contextos en los cuales se insertan y los impactos que generan no son los mismos. Mientras que en Italia, por ejemplo, la existencia de la mafia cuenta con una larga tradición, en el caso de Colombia es una problemática más reciente y un tema poco investigado, ante el interés otorgado a estudios relacionados con el conflicto armado, aunque el deterioro de la seguridad en las ciudades con el accionar de pandillas, el microtráfico y la extorsión ha contribuido a renovar el interés por abordar estos temas.

El siguiente texto busca dar un fundamento a la hipótesis enunciada en un comienzo a partir del examen de ciertas particularidades de Medellín en relación con sus transformaciones y en el comportamiento de la criminalidad (parte I); la caracterización de ciertos actores de la violencia y criminalidad (bandas, combos, milicias, paramilitares) y su trayectoria a la luz de variaciones en los contextos del conflicto armado y el narcotráfico (parte II); el microtráfico y la extorsión como expresión de su capacidad para diversificar sus rentas ilegales (parte III); su inserción en el entramado social barrial mediante la implantación de controles, diversas formas de victimización e intentos de legitimación como agentes del orden y benefactores de la comunidad (parte IV); su injerencia en la esfera política en relación con las elecciones para la Alcaldía en Medellín en los años 2007 y 2009, y en espacios de participación ciudadana (parte V). Se finaliza con algunas consideraciones sobre el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad y convivencia (parte VI).

I. MEDELLÍN Y SUS TRANSFORMACIONES⁴

Al hacer un recorrido por el barrio Santa Cruz, el escritor Juan José Hoyos comparte con sus lectores el asombro por los cambios que se han producido en este barrio: “donde había cañadas ahora hay puentes. Donde antes había casas de tapia con solares ahora

4 Medellín tiene un área total de 380,64 km² de los cuales 110,22 son suelo urbano y 270,42 son suelo rural. Administrativamente está dividida en 16 comunas y 5 corregimientos. Tiene a diciembre de 2011, un total de 2'368.282 personas, 1'114.923 hombres y 1'253.359 mujeres. Esto es el 74 % de la población del Área Metropolitana, el 42 % de la población de Antioquia y el 5.8 % de la población de Colombia (Alcaldía de Medellín, 2011)

hay casas de adobe de tres pisos, la calle estrecha que unía al parque con la iglesia de la Asunción es una avenida pavimentada llena de buses, tiendas, depósitos de construcción, heladerías, mercados” (Hoyos, 2013). Algo similar se podría decir de otros barrios, solo que no sería posible poner de relieve una mejora significativa en una violencia que sigue presente en la calle y en lugares que han sido construidos o remodelados para facilitar el acceso al deporte, el conocimiento y la recreación, pero en los cuales hacen presencia grupos armados ilegales como bandas y “combos”.

El mejoramiento en las condiciones de vida de los habitantes del barrio Santa Cruz no es un hecho aislado, se enmarca en un proceso de mediana duración que tiene un punto de inicio en la implementación de políticas sociales cuyos antecedentes se remontan a la creación de la Alta Consejería Presidencial para Medellín por iniciativa del gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994). Al respecto, Jorge Orlando Melo, quien se desempeñó como Alto Consejero para la ciudad entre los años 1993 y 1994, pone de presente la manera como se logró cimentar una transformación de la misma con el diseño de estrategias de búsqueda de la convivencia, teniendo como eje las oportunidades educativas mediante la construcción de nuevos colegios, el mejoramiento de las dotaciones básicas, promoción del empleo juvenil, mejora del espacio urbano, lucha contra estereotipos discriminatorios relacionados con el hecho de ser joven y de ser habitante de las comunas⁵. (Melo, 1994:5).

La labor desarrollada por los alcaldes Sergio Fajardo (2004-2007) y Alonso Salazar (2008-2011) hizo posible una continuidad con este enfoque y un fortalecimiento del estado en lo local mediante la lucha contra la corrupción y mejoras en la capacidad de gestión y planeación.

5 De acuerdo con la división administrativa de la ciudad esta se encuentra conformada por seis zonas (agrupan a varias comunas) y 16 comunas (agrupan a varios barrios). Sin embargo en la década de 1980 con el auge del narcotráfico la noción de *comuna* se asocia con lugares que se distinguen por la ocurrencia de hechos violentos y el accionar de bandas promovidas primero por Escobar en la década de 1980 y luego por paramilitares y organizaciones delincuenciales en las décadas de 1990 y 2000.

Con una propuesta electoral moderna, de transparencia, de inversión social en especial en educación y de lucha contra la corrupción, se dio el triunfo de Sergio Fajardo, primer candidato respaldado por Compromiso Ciudadano, una fuerza independiente de los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Además de una fuerte apuesta en lo social, que se concretó en la inversión y los proyectos del Plan de Desarrollo de Medellín (2004-2007) “Medellín compromiso de toda la ciudadanía”, se apostó por mejorar los índices de cobertura en educación (“Medellín la más educada”, programa bandera), salud, así como por el desarrollo de un modelo de urbanismo social, una propuesta de inversión pública en obras de infraestructura física de bienestar colectivo (bibliotecas, colegios de calidad, parques lineales). También se dio impulso a proyectos urbanos integrales (PUI) en las zonas más pobres y violentas, con el propósito de que las obras físicas fueran de la mano con cambios sociales y culturales en las comunidades y se trabajó en la implementación del presupuesto participativo como espacio mediante el cual las organizaciones barriales pudieran tomar decisiones sobre la inversión a realizar en sus comunidades y contribuir a una ruptura con prácticas clientelistas⁶.

En la administración de Alonso Salazar (2008-2012), quien se desempeñó como Secretario de Gobierno de Fajardo, hay nuevos logros en el mejoramiento de los índices de calidad de vida, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Entre los años 2008 – 2012 (período de Salazar y primer año de administración de Aníbal Gaviria), según el informe de Medellín como Vamos (2012), el coeficiente de Gini⁷ se redujo en un 7,8 %, al pasar de 0,542 a 0,5. También se produjo una disminución de la brecha entre las comunas

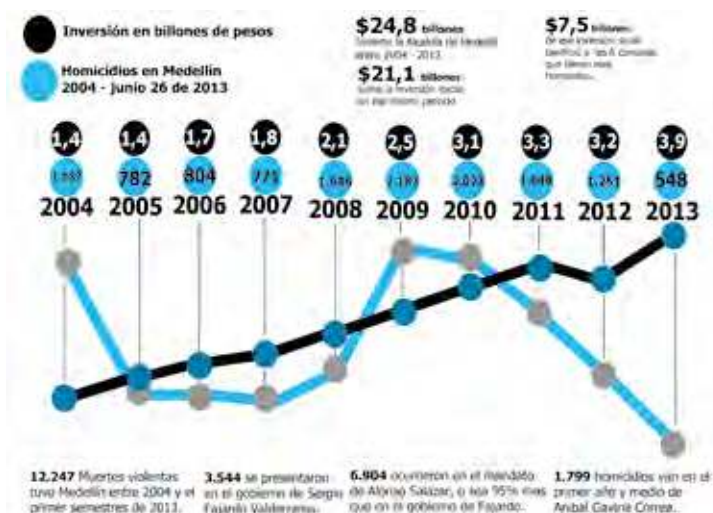
6 Lo que se observa una década después es una pervivencia de este tipo de prácticas clientelistas y su aprovechamiento en algunos sectores por parte de las redes criminales como fuente de recursos y para la ampliación de su influencia social y política.

7 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

de mayor calidad de vida (El Poblado, Laureles y La América) con respecto a las que presentan los más bajos índices (Popular, Villa Hermosa, Manrique, Santa Cruz y San Javier). Del mismo modo prosiguió la tendencia de reducción de pobreza y pobreza extrema, ubicándose en 17,7 % y 3,5 %, respectivamente. Sin embargo y de acuerdo con los resultados del informe de la ONU sobre inequidad urbana en América Latina (2013), Medellín ocupa el primer lugar, seguido por la ciudad de Cali, entre las ciudades colombianas.

Aunque los montos de la inversión social se han incrementado años tras año, especialmente en las comunas más vulnerables, esto no ha tenido los resultados esperados en la disminución de los homicidios. El siguiente gráfico ilustra el comportamiento prevalente entre los años 2004 y 2013.

Gráfico No. 1
Inversión social y homicidios en Medellín (2004-junio de 2013)



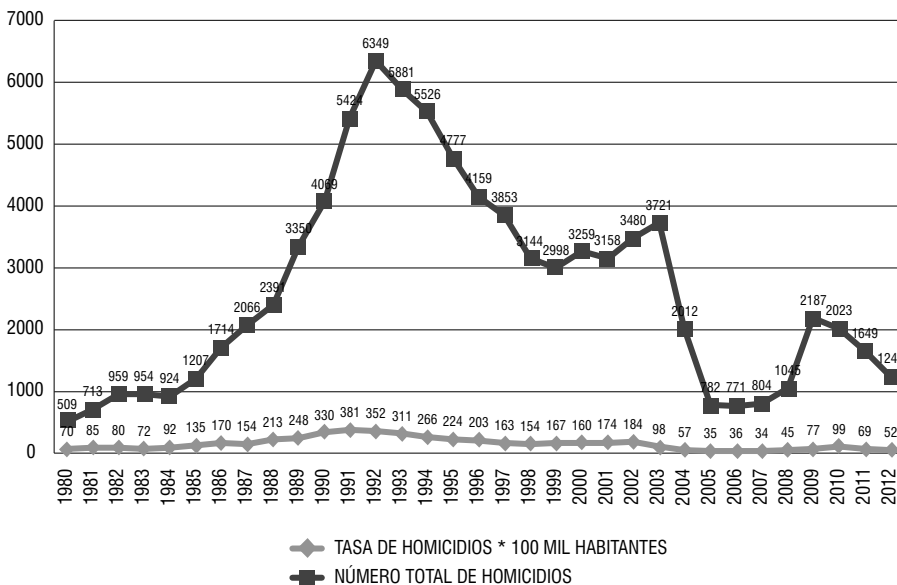
Fuente: Periódico El Colombiano (2013).

Pero ya desde el año 1994, el Alto Consejero Jorge Orlando Melo, al hacer un balance de su gestión, había advertido sobre la inconveniencia de generar expectativas de corto plazo en la superación de los problemas de violencia que aquejaban a la ciudad ante el predominio

de una “lógica inercial de la violencia”, producida por las bandas al convertirse en promotoras de un “modelo de vida, que permitía en pocos meses pasar de la pobreza a la opulencia y a la posesión de vehículos, apartamentos y otros signos de reconocimiento social y emocional”. Al igual que la manera como la sociedad había sido permeada por la violencia, lo que se podía apreciar en “niveles de agresión que producían a su vez en otros sectores la necesidad de armarse, para protegerse o para anticipar el crecimiento del poder del otro”, y en el hecho de que si bien la mayoría de los habitantes de los barrios populares querían la paz, se sentían “impotentes y amedrentados frente a los delincuentes profesionales y no se atrevían a colaborar con procesos que pudieran ponerlos en riesgo” (Melo, 1994:7).

Aunque este diagnóstico no ha perdido actualidad, es de resaltar un logro importante en la disminución de los homicidios, aunque con ciclos de altísima violencia como puede apreciarse en este gráfico:

Gráfico No. 2
Comportamiento de los homicidios según tasa y número total de homicidios 1980-2012



Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín – SISC. Alcaldía de Medellín

Hay que recordar que en 1991 se produce la entrega de Pablo Escobar y su reclusión en la cárcel denominada La Catedral. Desde este lugar estratégico seguía impartiendo órdenes para atentar contra personas que consideraba enemigas o traidoras. Además, la ausencia de jefes de bandas encargados de la protección de su jefe generó un vacío de autoridad que fue aprovechado por las denominadas bandas de *chichipatos*, dedicadas a delinquir en sus propios barrios y también por quienes aprovecharon el momento para proceder a los ajustes de cuentas a nombre de Escobar (Martin, 2013:209)

En el año 2002, el detonante de la violencia fue la confrontación entre las milicias de las FARC y del ELN, el Bloque Cacique Nutibara y el Ejército en la comuna 13 que alcanzó su máxima expresión en la realización de la llamada Operación Orión, mediante la cual se logró una derrota estratégica de la guerrilla en la ciudad, pero también la consolidación del Bloque Cacique Nutibara perteneciente a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) como un poder indiscutido en la ciudad. Esta disputa condujo a que en ese año Medellín aportara el 81 % de los homicidios, el 93 % de las masacres y el 70 % de los secuestros del departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2002. Citado en Giraldo, 2008).

Hacia el año 2009, la ciudad se convierte en un escenario en disputa que tiene como protagonistas a Alias Valenciano y Alias Sebastián, quienes encabezan las dos facciones en las que se dividió la llamada Oficina de Envigado⁸, a raíz de la extradición de alias Don Berna el 13 de mayo del 2008. Los enfrentamientos entre los combos al servicio de uno u otro sector se suceden en varias zonas de la ciudad, teniendo como principal epicentro algunos territorios pertenecientes a la comuna 13 y a la comuna 8.

8 La Oficina de Envigado es el nombre que identifica a la compleja estructura criminal que tuvo sus inicios en la década de 1980 con Escobar y que funciona como oficina de cobro, agencia de protección de narcos y de coordinación de múltiples actividades criminales a cargo de bandas y combos. Ver al respecto Restrepo y Franco (2012). .

Aún haciendo abstracción de lo que acontece en estos años críticos, las cifras de homicidio siguen siendo elevadas lo que pone de presente un enraizamiento social de la violencia que no sólo es atribuible a actores colectivos de la violencia, sino también a personas que contratan los servicios de sicarios o se toman la atribución de ejercer justicia por su propia mano para dar solución a conflictos cotidianos que se generan en la vecindad o al interior de los hogares y a los que espera dar solución de forma expedita, sin tener que recurrir a una justicia de la cual se desconfía o se considera de difícil acceso.

Sin embargo en Medellín el homicidio como un hecho relevante es reciente. Hasta mediados del siglo XX, era visto como un asunto individual y asociado a problemas pasionales o venganzas. Los más frecuentes eran la riñas en las cantinas de Guayaquil y en algunos barrios. Sin embargo, lo que más preocupaba a las autoridades locales eran los delitos contra la propiedad: robos a residencias, atracos a bancos y joyerías, cometidos por bandas delincuenciales. El narcotráfico transformó el panorama de la criminalidad tanto en lo relacionado con la elevación de la tasa de homicidios muy por encima de la de lesiones personales, como respecto a los responsables y a la representación social del homicidio, al estar asociado al cálculo de organizaciones criminales para ajustar cuentas y eliminar a todo aquel considerado amenaza para sus planes de dominio.

Otro cambio no menos significativo se produjo en la geografía de la violencia en la ciudad. Hasta la década del 70 los focos de la violencia coincidían con las zonas de prostitución y con el sector de Guayaquil localizado en el centro histórico de la ciudad donde se concentraban el comercio y numerosas cantinas, inquilinatos y prostíbulos. Como es sabido, el reclutamiento de jóvenes en varias comunas de la ciudad por Pablo Escobar para hacer parte de su ejército tuvo un impacto notable en el aumento de los homicidios, en la proliferación de bandas y en la estigmatización de las comunas localizadas en las zonas nororiental y nororiental (Populares, Manrique, Aranjuez, Castilla) como los nuevos epicentros de la violencia. En la última década, el centro de atención se desplaza

hacia las comunas 8 y la comuna 13, ante la conversión de algunos sectores en un escenario en disputa entre milicias de la guerrilla, paramilitares y ejército, y en la actualidad ante las disputas entre nuevas agrupaciones alinderadas, unas con la Oficina de Envigado y otras con Los Urabeños⁹.

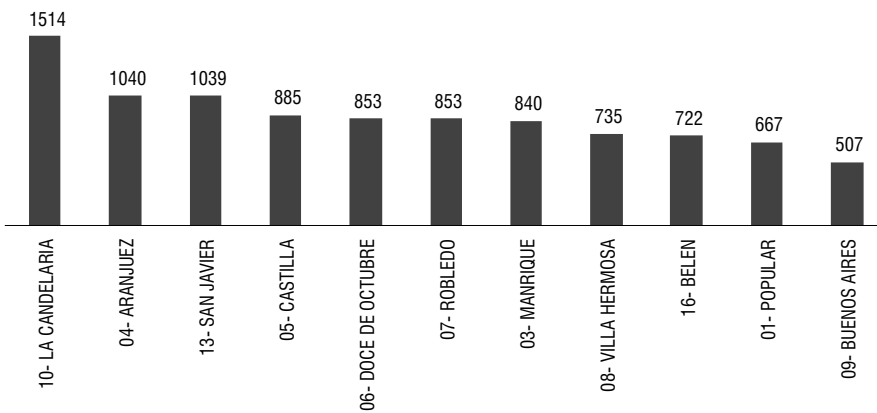
Ahora bien, si se observan los lugares donde se concentran los homicidios se encuentra que el centro histórico-comuna 10, Candelaria-, se mantiene como el lugar más crítico debido a las altas cifras de lesiones personales, homicidios y ciertas formas de delincuencia (robos y atracos). Aunque esta zona no es, como antes, un referente común para los habitantes de la ciudad, cumple una función estratégica como recurso de sobrevivencia de sectores populares por la posibilidad de vinculación a una economía informal en expansión desde la década del 70. También el centro se ha convertido en zona de operaciones de organizaciones delincuenciales y de mafias atraídas por el funcionamiento de negocios tales como casinos, discotecas, y centros comerciales, todo lo cual facilita el lavado de activos, el comercio sexual y la trata de personas. El centro es considerado en la actualidad como una prioridad en materia de seguridad y de lucha contra el poder económico de redes criminales por parte de autoridades civiles y de policía Sin embargo, no se logran resultados significativos pese a los operativos realizados, donde los más afectados son los vendedores ambulantes y comerciante informales.

El siguiente gráfico, correspondiente al acumulado de homicidios en la última década, muestra ciertos cambios y permanencias en ciertos lugares. Por ejemplo, la destacada figuración de las comunas de Aranjuez, Castilla y 12 de Octubre indica una relación de continuidad que se remonta a la época de auge del narcotráfico.

9 Esta organización armada es producto del poder armado que construyó el Bloque Elmer Cárdenas y el Bloque Bananero en el Urabá y el Norte del Chocó, pero recoge a su vez a cientos de combatientes de las ACCU en Córdoba y de las estructuras armadas del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, que tras la desmovilización, no encontraron alternativas en la vida civil o simplemente nunca participaron de la desmovilización (Verdad Abierta, 2011).

De igual forma se advierte un deterioro en la situación de otras comunas en las que el número de homicidios no era tan elevado (Villa Hermosa, San Javier y Belén), lo cual refleja los impactos causados por la disputas entre facciones del narcotráfico y por la urbanización de la guerra.

Gráfico No. 3
Acumulado del número de homicidios por comunas. Medellín (2003-2011)

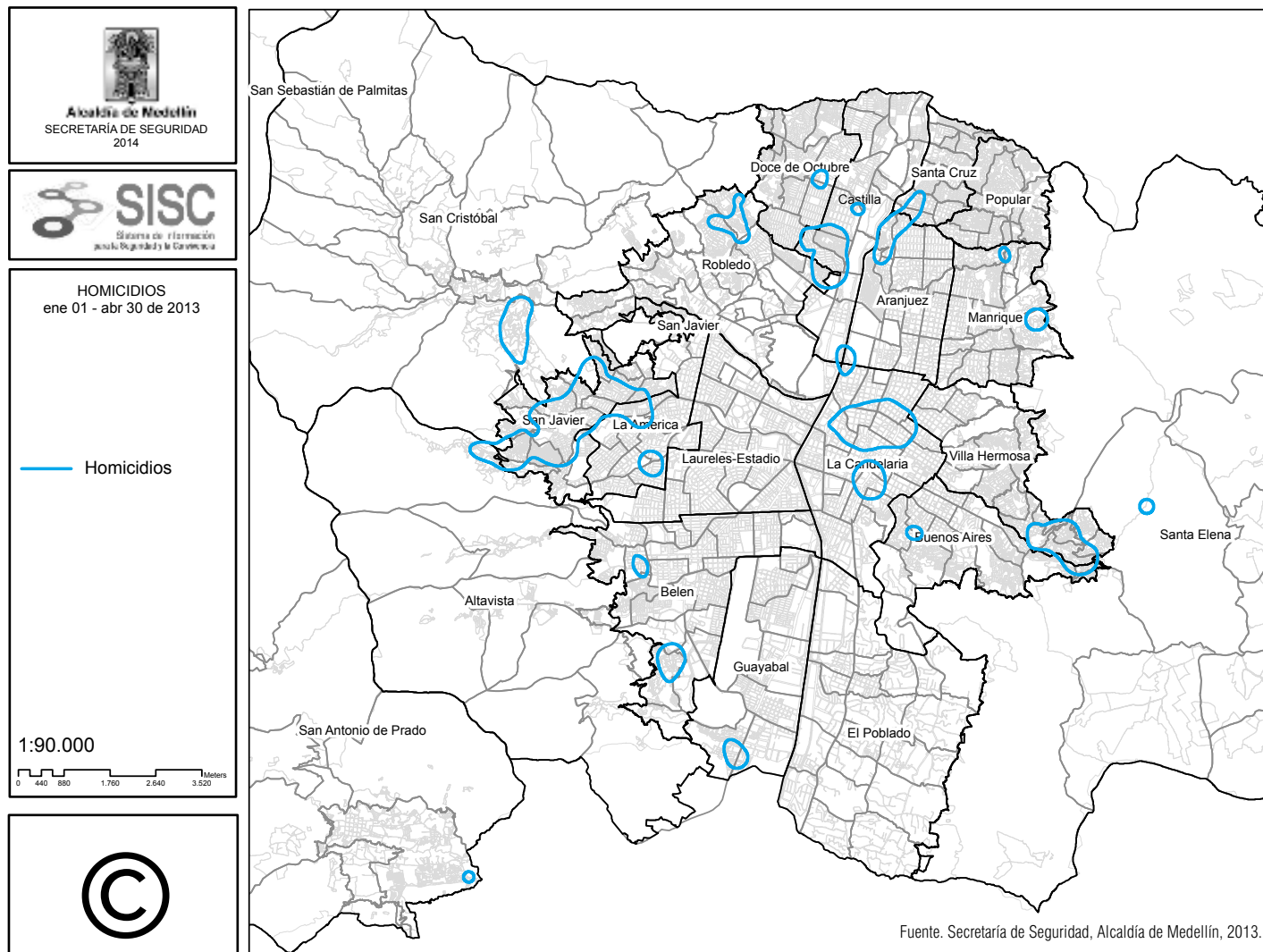


Fuente: Elaboración propia según información suministrada por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín – SISC. Alcaldía de Medellín, 2012

Es del caso advertir que al interior de las comunas (que agrupan varios barrios) opera una lógica similar. Los homicidios se concentran en ciertos sectores en los cuales estas conductas son más recurrentes y no en todos los casos corresponden a lugares de la periferia. También se presentan en barrios tradicionales donde hay una actividad comercial acompañada de una alta densidad poblacional (por ejemplo, Castilla), o en ciertas zonas del centro histórico que se han convertido en área de operaciones de redes delincuenciales.

El siguiente mapa, aunque abarca un período corto (primer semestre de 2013), coincide con la tendencia observada en la década de 2000.

Mapa No 1. Lugares de concentración de los homicidios.



II. ACTORES Y ESTRUCTURAS DELINCUENCIALES: EN PERMANENTE MUTACIÓN

El poder de las mafias en Medellín se sustenta en los aprendizajes adquiridos desde la década de 1980 por un diverso tipo de agrupaciones (bandas, combos, milicias) en el campo de la criminalidad y del conflicto armado, dados los nexos entre la Oficina de Envigado y las Autodefensas (Bloque Cacique Nutibara) y la manera como ello favorece la transmisión de aprendizajes en formas de ejercicio de la violencia y el establecimiento de vínculos con redes criminales transnacionales.

Para una comprensión de este proceso es necesario tener en cuenta algunos antecedentes, las trayectorias de los actores más representativos y las transformaciones en las dinámicas de la violencia.

La existencia de bandas en la ciudad se remonta a la década del 50, momento a partir del cual se hizo notar la habilidad de bandas de delincuencia común para llevar a cabo atracos a joyerías y bancos, robos a residencias y, en los comienzos del Frente Nacional (1958), de algunos secuestros. En todo caso, su número era reducido así como su radio de acción y los recursos de los cuales disponían (Jaramillo, 2001). También fueron los inicios del fenómeno de las pandillas en los barrios:

Las peleas se libraban a puño limpio, a veces por defender a un amigo, aunque pronto se zanjaban las diferencias. Otras, a punta de piedra que dejaban uno que otro herido; en ocasiones la Policía retenía momentáneamente a algunos jóvenes o a sus padres, pero sin consecuencias. Las pandillas no se ocupaban de acciones delictivas, así que cuando alguien pasaba la línea y “se le iba la mano”, quedaba excluido de los programas recreativos o deportivos, y de la compañía de sus pares. (Entrevista a líder social de la comuna 8, Medellín, 2012)

Con el narcotráfico se dio una radical transformación en el perfil y en el *modus operandi* de las pandillas, buena parte de las

cuales se articulan al narcotráfico (Salazar y Jaramillo, 1992). Ya para los años comprendidos entre 1985 y 1990 operaban unas 153 bandas en el Valle de Aburrá, 122 en Medellín (87 de ellas en la zona nororiental), 8 en Envigado, 19 en Bello y 11 en La Estrella. (Salazar y Jaramillo, 1992). Su poder se hace visible con el auge del sicariato y con la realización de atentados, masacres, y acciones terroristas de gran impacto en el período de la guerra contra el Estado por parte de Escobar (1988-1993). La experiencia adquirida por quienes estuvieron a su servicio no tiene paragón con otras agrupaciones similares en las demás ciudades colombianas.

En la actualidad se entiende por banda una agrupación con trayectoria y reconocimiento en el mundo delincuencia, con un amplio radio de acción, articulación a redes dedicadas ya sea al tráfico de drogas, la extorsión, el microtráfico u otro tipo de actividades (hurto de motos y vehículos). Son las encargadas de la subcontratación de combos. Varios entrevistados coinciden en la apreciación de que es la “delincuencia seria”, la cual se cuida de incurrir en excesos propios de los principiantes que integran los combos.

En el marco de la estrategia de lucha contra objetivos de alto valor, la Policía ha priorizado la lucha contra las denominadas Odin (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico) y que corresponden a aquellas bandas cuya principal actividad es el narcotráfico, aunque pueden estar vinculadas a otras actividades y mantienen un control territorial en sus zonas de ubicación. Para el caso de Medellín se han catalogado como Odin a las bandas de La Terraza, San Pablo, Los Triana, El Picacho, Robledo, Caicedo, Belén Rincón, Altavista y San Javier (El Colombiano, 2012).

El predominio de este tipo de bandas no conlleva una desaparición de las bandas de la delincuencia común especializada en actividades delictivas como el *fleteo*¹⁰, atraco, hurto de vehículos,

10 Atracos a personas que han retirado dinero en efectivo de los bancos.

estafas, robo de celulares o de establecimientos comerciales donde operan los *escaperos*¹¹. El centro histórico de la ciudad ofrece ventajas que facilitan su actuación, aunque su posibilidad de operación autónoma encuentra un límite en el control que ejercen las denominadas Convivir¹², a las que se les debe cancelar la cuota o *vacuna* que les asignen. También deben actuar con arreglo a ciertas pautas como no delinquir en ciertas zonas ni cometer homicidios que llamen la atención de las autoridades.

Los *combos* presentan similitud con la pandilla juvenil, en tanto espacio de socialización y construcción de identidades, pero se diferencia en su articulación a estructuras criminales complejas (Oficina de Envigado). La edad de sus integrantes es variable, pero se calcula que puede oscilar entre los 10 y los 25 años. En la mayoría de los casos, viven en el barrio. Son los encargados de mantener el control del territorio. Su nivel de profesionalización es menor que el de los integrantes de una banda. Son frecuentes los reacomodos ya sea por las alianzas establecidas con otros grupos, la movilidad de sus integrantes o la acción policial. El *combo* se diferencia del *parche* el cual se asocia con lugares de reunión de jóvenes para escuchar música, ver un partido de fútbol o consumir droga.

Los *combos* pueden establecer tratos con las bandas para el cobro de extorsión, microtráfico o tareas de vigilancia y protección. Los habitantes de las zonas donde actúan sienten hacia ellos un gran temor por su arbitrariedad y sus excesos, pues no hacen más que “dar bala a lo loco”, lo que les ha valido el calificativo de “asados”.

11 Se refiere a personas que roban en almacenes y salen huyendo con el botín.

12 Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada creadas en Colombia mediante Decreto 356 de 1994, como mecanismo de autoprotección de hacendados en contra de las guerrillas pero que debido a su creciente articulación con los grupos paramilitares fueron declaradas ilegales a finales de la misma década. Sin embargo ello no implicó su desaparición como ocurrió en el departamento de Antioquia y en Medellín (Ver al respecto el apartado sobre extorsión del presente artículo).

Aunque la presencia de bandas y *combos* en los barrios es un fenómeno generalizado, es importante hacer notar diferencias en su concentración y permanencia, lo cual incide en la configuración de áreas en disputa, y los métodos mediante los cuales se pretende ejercer control sobre sus habitantes. No es lo mismo habitar una zona bajo el dominio de bandas históricas que ejercen el control de un área extensa que en un barrio donde los combos se enfrentan a bala para ejercer un control cuadra a cuadra.

Las comunas 1 y 3 en la zona nororiental y las comunas 5 y 6 en la zona noroccidental son las que presentan la mayor concentración de bandas y *combos*. Se aprecia el peso de una tradición que se forjó desde mediados de la década del 80, con la conformación de bandas que adquirieron notoriedad por su relación con el narcotráfico. Ya para los años 1985 y 1990, la Policía daba cuenta de la existencia de 87 bandas en la zona nororiental y 16 en la zona noroccidental. La mayoría de ellas estaban asentadas en Aranjuez, un barrio tradicional y catalogado como de estrato medio bajo (Salazar y Jaramillo, 1992: 88-90). Rápidamente se generó una dinámica expansiva que facilitó la consolidación de algunas bandas (ahora denominadas Odin). En los últimos años empiezan a figurar bandas que a su vez subcontratan combos y cobran *vacunas*.

El contraste se presenta en la comunas 8 y la comuna 13 (San Javier). Es de notar como en la comuna 13, no se registran antecedentes en la constitución de bandas ligadas al narcotráfico como en otras de la ciudad. Las Milicias América Libre y Milicias Populares de Occidente ejercieron un control en la década de 1990 y hasta el momento de inicio de la ofensiva paramilitar en 2001, protagonizada por el Bloque Metro, y luego por el Bloque Cacique Nutibara (Grupo de Memoria Histórica, 2011: 59). Posterior a la realización de la Operación Orión (2002) hasta el presente la tendencia es hacia una proliferación de *combos* que han adquirido notoriedad por su responsabilidad en el asesinato de

integrantes de grupos de hip hop de la comuna, reconocidos por su labor artística, así como por los enfrentamientos y los controles territoriales que ejercen. El siguiente gráfico es ilustrativo de esta significativa transformación.

En la comuna 8, lo característico ha sido la disputa entre una banda histórica, la de Caicedo con un amplio radio de acción y las milicias del ELN con asiento en la parte alta de la comuna (sector de La Sierra), hasta la incursión del Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas a finales de la década de los 90. Una vez superado este momento, se reactiva la disputa entre la banda histórica de Caicedo aliada con la Oficina de Envigado con La Sierra en acuerdo con Los Urabeños.

De este abigarrado panorama de actores armados ilegales hacen parte las Milicias, fenómeno en auge desde mediados de los años 80 hasta el momento de su desmovilización en 1994 y las Autodefensas, que en Medellín no fueron el resultado del arribo a la ciudad de frentes que operaban en áreas rurales, sino de la conversión de la Oficina de Envigado en el Bloque Cacique Nutibara.

Las Milicias: surgen hacia mediados de la década del 80 como respuesta a la demanda de seguridad de los habitantes de barrios afectados por los llamados *chichipatos* (atracadores, violadores, drogadicotos). Entre los fundadores de las Milicias se cuentan jóvenes que recibieron instrucción político-militar del M19¹³ y de barrios influenciados por personas desvinculadas de organizaciones insurgentes, en especial del ELN, que se dedicaban a la promoción de organizaciones barriales cuya labor se vio afectada por el accionar de bandas y *combos*.

13 El M19 hizo presencia en algunos barrios con el propósito de promover “campamentos de paz,” en el marco de negociaciones iniciadas con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Sin embargo, en Medellín esto favoreció a algunos grupos de delincuencia común que recibieron instrucción militar en estos campamentos (Salazar y Jaramillo, 1992).

Gráfico No. 4 Presencia de bandas y combos. Comuna 13. 2001-2011

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Los Cuquitas	Comandos Armados del Pueblo – CAP	ELN (Carlos Alirio Buitrago)	Desmovilizados Bloque Cacique Nutibara	Los Cuquitas	Los Cuquitas	Los Cuquitas
Comandos Armados del Pueblo – CAP	Bloque Metro	Bloque Metro	Jose Luis Zuluaga (Autodefensas Magdalena Medio)	Desmovilizados Bloque Cacique Nutibara	Los Chinos	El Salado
Los colchó- neros	Bloque Cacique Nutibara	FARC			Desmovilizados autodefensas	La Torre
ELN (Carlos Alirio Buitrago)					Los Victorinos	Combo de Goyo
Los Paras					El Combo	Combo del Gordo
Los Cobres						Roman
Los Zaros						Renacer (des- movilizados de las FARC
El socorro						El Gordo
Autodefensa de Córdoba y Urabá						Combo de Roque
						Los Lecheros

Elaboró: Corporación Región
Fuentes: El Mundo, El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación.

Gráfico No. 4 Presencia de bandas y combos. Comuna 13. 2001-2011

2008	2009	2010	2011	2012	2013
Los Cuquitas	Las Cuquitas	Las Cuquitas	Los Cuquitas	Los Urabeños	El Coco
El Salado	La Torre	Los Urabeños	Los Colchoneros	El Salado	
La Torre	El Pesebre	El Salado	Los Urabeños	ODIN La Quiebra	
Combo de Goyo	Las Peñitas	La Torre	La Torre	El Pesebre	
El Pesebre	La 115	Combo de Goyo	Combo de Goyo	Las Peñitas	
Roman	La 39	ODIN Pradera	ODIN Pradera	La 115	
El Reversadero	La Arenera	ODIN San Javier	ODIN San Javier	Los Conejos	
Las Peñitas	Cuatro Esquinas	ODIN La Quiebra	ODIN La Quiebra	El Coco	
La Arenera	La Pedro J	El Pesebre	El Pesebre	La Agonía	
Cuatro Esquinas		El reversadero	El reversadero	La seis	
La Sexta		Los Conejos	Las Peñitas	Los Picuas	
La Agonía		La Arenera	Los Conejos	La Divisa	
20 de Julio		Cuatro Esquinas	La 39		
El Depósito		La sexta	El Coco		
El Hoyo		La Agonía	La Sexta		
El Volao		20 de julio	La Agonía		
Los Pinguinos		El Depósito	20 de Julio		
El Alto		El Hoyo	El socorro		
La Chinga		Los Pinguinos	Los Triana		
Quicorroña		El Alto	La América		
Las Escaleras		La Chinga	Los Pecueca		
Combos de las Inde- pendencias 1, 2 y 3		La Quicorroña	El Corazón		
		Las Escaleras	El Dos		
		Combos de las Inde- pendencias 1, 2 y 3	La Gabriela		
		La Luz del Mundo	El combo de cristobal		
		La Urba	La Oficina		
		La Placha	Los Picuas		
		El Kilo	La Loma		
		Los Pirusos	Eduardo Santos		
	La Divisa	Bellavista			
		Guadarrama			
		Barrio Nuevo			
		El Plan del Che			
		La banda del viejo			
		Travesías			
		Los Paracos			
		Los del uno			
	La Divisa				
	La Asomadera				

Las Milicias del Pueblo y para el Pueblo, el grupo fundador, no aceptó ser considerado expresión urbana de la guerrilla. Reivindicaron su condición de autodefensa, cuya misión consistía en “restablecer el orden” mediante la limpieza de elementos considerados indeseables (violadores, atracadores, viciosos). Aunque en principio tuvieron un radio de acción limitado (barrios de la zona nororiental), se expandieron rápidamente. El auge miliciano se empieza a desvanecer cuando el núcleo fundador comienza a desmovilizarse. En 1994 se llevó a cabo una negociación en la que participaron las Milicias del Pueblo y para el Pueblo y las Milicias del Valle de Aburrá (con influencia del ELN)¹⁴. La desmovilización no implicó la desaparición de todas las Milicias ya que de esta negociación no hicieron parte otras agrupaciones con presencia en las comunas 8 y 13, las cuales después se convertirán en el blanco de la ofensiva paramilitar al ser consideradas una avanzada de la guerrilla en la ciudad.

Los paramilitares: Sus antecedentes se remontan a la constitución del grupo MAS (Muerte a Secuestradores) que surgió como reacción de los narcotraficantes al secuestro (el 12 de noviembre de 1981) de Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio, miembros del Cartel de Medellín, por parte de una célula del M-19 que pedía 12 millones de dólares por su rescate. Para dar con su paradero se desató una implacable persecución contra militantes y supuestos colaboradores del M-19 en la ciudad (Salazar y Jaramillo, 1992).

14 La cifra de desmovilizados ascendió a 843, lo que significaba la reincorporación a la legalidad del 85% de las fuerzas milicianas. Este hecho a la luz del presente, como observan Giraldo y Mesa (2013), reviste una particular importancia si se tiene en cuenta que su magnitud fue igual a la del Bloque Cacique Nutibara (BCN): “El número de armas entregadas superó las de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), la relación arma/hombre superó la del Ejército Popular de Liberación (EPL)”. En 1998 se desmovilizó otro grupo miliciano denominado Movimiento de Integración Revolucionaria – Comandos Armados MIR-COAR, que tenía su centro de influencia en la zona occidental de la ciudad. En su estructura e ideología era muy similar a los grupos de Milicias que se desmovilizaron en 1994.

La ofensiva paramilitar adquiere una nueva dimensión hacia 1996 con las Autodefensas del Magdalena Medio que desplazan integrantes del frente José Luis Zuluaga hacia la ciudad, pero no logran desterrar a las milicias. Esta tarea le fue encomendada en 1998 a Alias Doble Cero, miembro de la cúpula de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), ex integrante del Ejército. Éste se oponía a una injerencia del narcotráfico en las Autodefensas al considerar que podía desvirtuar su legitimidad como abanderadas de la lucha antsubversiva. Para llevar a cabo la misión encomendada, desplaza efectivos del frente que operaba en el Nordeste Antioqueño, establece alianzas con algunas bandas y lanza una ofensiva contra las Milicias del ELN en el sector de La Sierra. Sin embargo, fracasa en este intento. Le sucede alias Don Berna, también integrante de la dirección de las AUC, quien crea el Bloque Cacique Nutibara, agrupación protagónica hasta su desmovilización en 2003.

1. Reacomodos Sucesivos:

La pervivencia de estos actores no es comprensible sino se tiene en cuenta la importancia que adquieren las ciudades en el marco del conflicto armado interno, la reorganización de las estructuras del narcotráfico y el liderazgo ejercido por ciertas figuras. Es factible diferenciar varios momentos: la reorganización después de la muerte de Escobar (2 de diciembre de 1993), la ofensiva paramilitar, el dominio del Bloque Cacique Nutibara y, por último, la fragmentación de la Oficina de Envigado y su impacto en las disputas por la supremacía criminal.

La reorganización después de Escobar: Algunas bandas que venían actuando en Medellín desde la década del 80 y que estuvieron al servicio de Escobar, como La Terraza, se articulan a la Oficina de Envigado, conformada por antiguos integrantes de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Ésta sirvió como espacio de encuentro entre Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Campesi-

nas de Córdoba y Urabá, e integrantes de organismos de seguridad del Estado.

Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, se convirtió en el gestor de un modelo organizativo en el cual se mantienen unas jerarquías (jefes de combos- bandas- integrantes de la cúpula), pero con funcionamiento en red. Esta estrategia facilita su accionar y logra neutralizar la persecución policial, de tal manera que la detención de algún jefe no provoque mayores traumatismos. Al decir del Tuso Sierra, ex integrante de la cúpula de la Oficina de Envigado, la clave del éxito de esta organización se debió a su forma de operar como “una especie de cooperativa dedicada al narco, cobro de cuentas y la extorsión” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, 2013: 97).

Esta adecuación de las estructuras del narcotráfico se hizo necesaria para poner orden al caos posterior a la caída de Escobar, con las acciones de bandas y *combos* que se dedicaron a delinquir en sus propios barrios, al cobro de *vacunas*, atracos y robos de residencias. Alias Don Berna, con el apoyo de la banda de La Terraza, procedió a eliminar a quienes se resistieron a sus dictámenes. No era posible operar en una determinada zona sin su consentimiento y el pago de una “franquicia” a la Oficina de Envigado.

De la Oficina de Envigado al Bloque Cacique Nutibara: El ingreso de alias Don Berna a la dirección de las AUC, organización resultante de la integración de grupos paramilitares de varias regiones del país dio lugar a nuevos reacomodos ¹⁵.

De acuerdo con el testimonio de un desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, alias Don Berna realizó una reunión adonde

15 Con respecto al fenómeno paramilitar, Mauricio Romero anota lo siguiente: Mientras que las élites ganaderas e inversionistas rurales los definen como organizaciones de autodefensa, los activistas de derechos humanos consideran el término paramilitar como el más adecuado, ya que sugiere los vínculos observados con algunos sectores de las Fuerzas Militares (2003: 36).

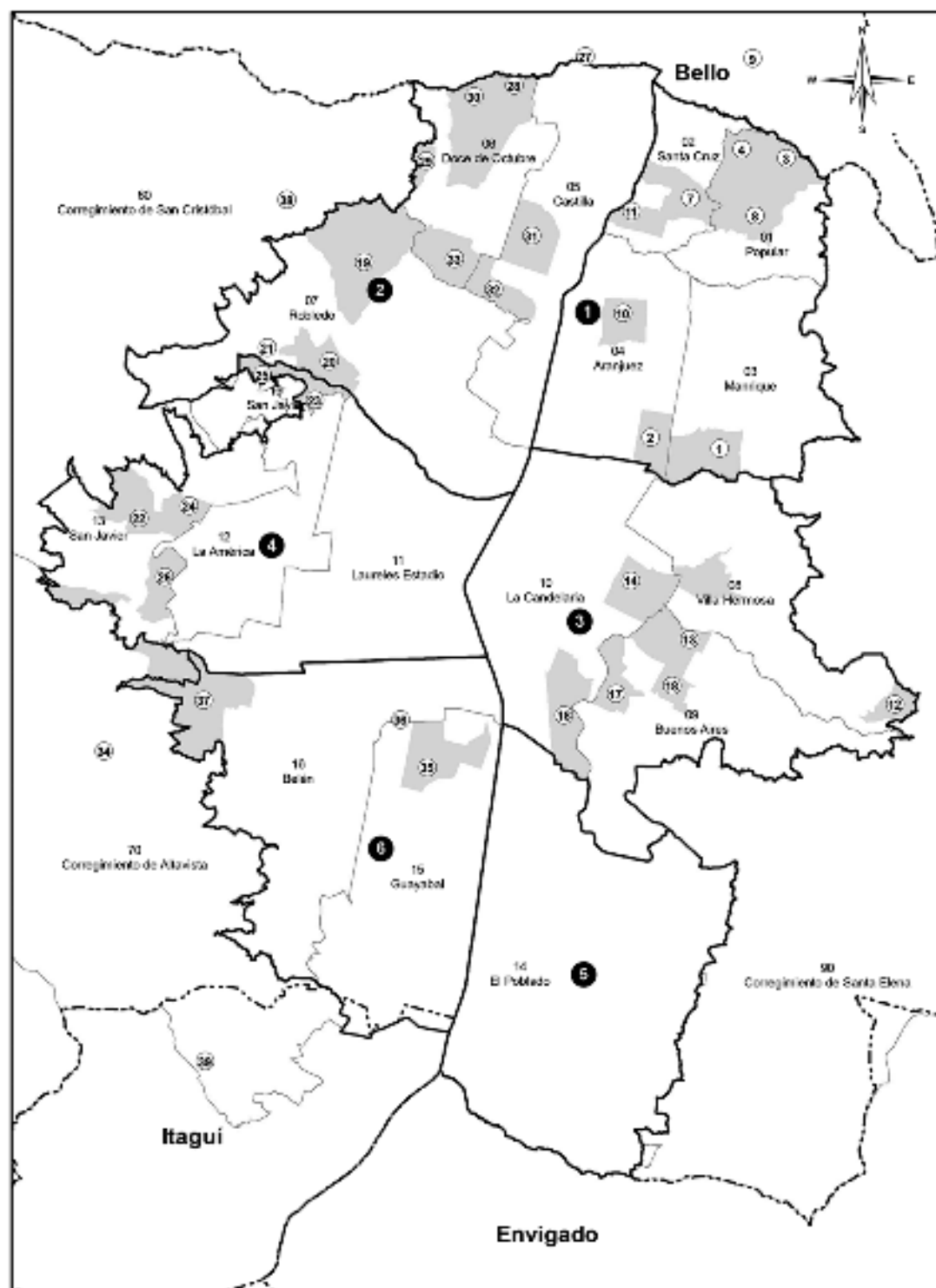
asistieron alrededor de 300 líderes o representantes de bandas y combos de Medellín, a quienes se les informó que ahora debían alinearse con el Bloque Cacique Nutibara. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Entre los reacios a acatar esta orden estuvieron La Terraza¹⁶, la banda de Los Triana –los cuales aún hoy hacen presencia en la zona nororiental de Medellín- y la banda de Frank en la zona noroccidental, pero fueron derrotados en sus pretensiones de autonomía.

Una vez consolidado el predominio del Bloque Cacique Nutibara, alias Don Berna toma la decisión de confrontar y derrotar a las Milicias que a comienzos de 2000 tenían una presencia importante en la comuna 13.

El siguiente mapa proporciona una idea sobre el número y la localización de bandas y combos identificadas por la Policía en 2002 y a las órdenes de alias Don Berna para adelantar una ofensiva que le permitiría eliminar la competencia que representaban las Milicias de las Farc y del ELN.

16 La persecución de los jefes de La Terraza fue implacable y culminó con el asesinato de Elkin Mena, alias El Negro y de Ronald de Jesús Arroyave, alias Ronald, a cuya cabeza el mismo Castaño había puesto un precio de 700 millones de pesos. Su asesinato en Medellín se produjo después de haber aparecido en los medios de comunicación con una mini-uzi y un pasamontañas, planteando su disposición a entregarse a cambio de protección y rebaja de penas, y la promesa de entregar las pruebas que comprometían a Castaño, el máximo jefe de las Autodefensas, en varios magnicidios (El Colombiano, 2012c).

Mapa No 2. Los barrios y las bandas en Medellín, 2002.



LOS BARRIOS Y LAS BANDAS		
Los nombres de bandas con asterisco (*) corresponden a milicias, los restantes son delincuencia común		
COMUNA NOR-ORIENTAL		
1	Manrique Oriental	La 30 u Otona, Los Marines, La 41, Los Pájaros, Los Tobías, La Montañita
2	Manrique Trasmayo	La Beta, La 30.
3	Santo Domingo	La Torre*, La 29, La Sila, El Trébol*
4	Popular	Los Costales*, Cañada Negra.
6	Nuevo Horizonte	Los Joyeros
8	Villa del Socorro	Los Champús
7	Andalucía Fronda	La 49.
8	Granizal	La Cancha, La 38, El Plan.
9	Santa Rita Zemerón	Los Troncos.
10	Aranjuez	Los Tubos, La Terminal, La Arboleda.
11	Santa Cruz	El Huaco, La 103
COMUNA CENTRO-ORIENTAL		
12	Calcedo La Sierra	Bloque Mucho, El Mono, La Libertad.
13	Calcedo	Los Mexicanos.
14	Enseo Borlón	Los Conejos, De Praga, Los Castaños.
15	La Milagrosa	Marquetaria, El Alborán, El Nacional, Pablo Escobar.
16	Buenos Aires	Los Cerros, El Maye o Caunces, El Plan, Del Gordo o David.
17	El Salvador	El Salvador.
18	San Diego	El Budo.

COMUNA CENTRO-OCCIDENTAL	
19	Aurore: Depéche, El chipero.
20	Robledo: Los Bucaros, La Oficina, Los Gómez, Matallana, El Huaco, La Cuchilla.
21	La Iguañá: La Iguañá*.
22	Antonio Nariño: Los Cuquiles.
23	El Pesetre: Los Paras.
24	San Javier: Los Cobres, Los Zetas, Los Colchoneros, El Socorro.
25	Vallejunos Blaquizal: Los Cap*.
26	Belandía Corazón: Los Cap*.
27	Paría: La Banda de Frank, Los Tintos Ficos, Los Ranchos.
28	Sanbender: Debato, Los Ranchos, La 115.
29	Pichachito: Pichachito*, Los Róeles.
30	Doce de Octubre: Los Solos, De Güisao, Los Caratropes, La 30 del Doce.
31	Castilla: Los Madroños, Los Mondongueros, El Camusal, Los Lecheros, La 98 o Sancochos, La 70, Imperial.
32	Alonso López: Los Cola y Pola.
33	Kennedy: La Oficina.
CORREGIMIENTO BELÉN ALTAVISTA	
34	Altavista: Los Chivos, Autodefensas, Los Mister o Sabor Latino, Los Pájaros.
35	Barrios Antioqueños: Los Ranchos, Los Cuquiles, La 24, La estefanía, La Cueva.
36	La Raya: La Raya, El Bolo, San Rafael, Combo de Tavo.
37	Las Violetas: Las Violetas, Los Magníficos, Las Mercedes y Belén Zafra.
CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL	
38	San Cristóbal: San Cristóbal, De Pinu.
CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO	
39	San Antonio de Prado: Limónes I y II.

CONVENCIONES

	Límite Área Metropolitana		Barrios
	Límite comunas y corregimientos		
	Zonas de Medellín		

NOMBRE DE LAS ZONAS

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 Nor-Oriental | 4 Centro-Occidental |
| 2 Nor-Occidental | 5 Sur-Oriental |
| 3 Centro-Oriental | 6 Sur-Occidental |

Elaboración propia.
Fuente: El Colombiano, 2002

Elaboró: Juan Carlos Giraldo G.
giraldojg@gmail.com

A propósito de la conversión de la Oficina de Envigado en el Bloque Cacique Nutibara, alias Don Berna declaró lo siguiente:

...Medellín tiene unas complejidades muy grandes y en los barrios había combos, bandas que en algún momento estuvieron al servicio de la guerrilla. En la dinámica del conflicto, ellos también hacen parte de éste, entonces entramos a cooptar esos grupos, a que hicieran parte de nuestra organización. En esos barrios hay mucha pérdida del tejido social, mucho vicio. Necesitábamos un ente que regulara la situación. Por eso se crea la Oficina, porque no podíamos entrar con la rigidez de la Autodefensa a intervenir a esos muchachos, se necesitaba un ente más laxo, más flexible, pero que ellos estuvieran de acuerdo y coincidieran con nuestro proyecto político y social. La Oficina es la misma Autodefensa con una dinámica urbana. (El Espectador, 2013).

El Bloque Cacique Nutibara actuó de forma mancomunada con unidades de la Fuerza Pública que llevaron a cabo la Operación Orión¹⁷. En ella participaron junto con la Policía y el Ejército, la Fuerza Aérea, el DAS y la Fiscalía. Se desarrolló intensamente entre los días 16 y 18 de octubre de 2002 en los barrios 20 de Julio, las Independencias, Belencito, El Corazón y Nuevos Conquistadores. Dicha operación tuvo un gran impacto en la población por el número de tropas, el tipo de armamento utilizado (ametralladoras M 60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores) y las acciones contra la población civil: asesinatos, detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados y desapariciones forzadas (Grupo de Memoria Histórica, 2011).

Desmovilización paramilitar y nuevas disputas. En cumplimiento de los compromisos adquiridos con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) para proceder a la desmovilización de los frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 25 de noviembre de 2003 en Medellín, se presentaron 868 integrantes de esa agrupa-

17 La Operación Orión estuvo antecedida por 10 operaciones que se llevaron a cabo entre los meses de febrero y octubre de 2002. Ver al respecto (Grupo de Memoria Histórica, 2011: 76).

ción. Sin embargo desde el primer momento hubo dudas sobre su voluntad de abandonar las armas y de desvincularse del narcotráfico y otras actividades criminales.

Medellín es valorado como escenario propicio para poner a prueba las bondades de la desmovilización mediante la cual se esperaba garantizar la reintegración a la vida civil de los ex combatientes. Del análisis de esta experiencia que ofrece posibilidades para la expansión de actividades criminales se hará referencia en el apartado IV.

La extradición de alias Don Berna, antiguo jefe de la Oficina a Estados Unidos el 13 de mayo del 2008, junto con otros integrantes del estado mayor de las Autodefensas, y el fracaso de las negociación de paz con las AUC por parte del gobierno de Álvaro Uribe, agudizan las disputas que se venían presentando entre los mandos medios que aspiraban a ocupar el lugar de alias Don Berna.

Entre el año 2009 y 2012, se libra una guerra entre las facciones lideradas por alias Valenciano y alias Sebastián, hombres de confianza de Don Berna y con una amplia trayectoria delincuencia. Cada uno de ellos, reorganiza sus fuerzas mediante la cooptación de bandas y combos con presencia en varios sectores de la ciudad. La intensidad de los enfrentamientos de nuevo hizo temer un retorno a una situación similar a la que se vivió en la época de Escobar.

En medio de esta disputa, el 1 de febrero de 2010 se anuncia una tregua entre ambas facciones, gestionada por una denominada "comisión de notables". Esta tregua se limita al cese de los enfrentamientos entre estos bandos, pero no significó el fin de las acciones de control sobre la población ni de otras modalidades delictivas. En ella no participaron las autoridades locales. Aunque no fue claro a cambio de qué se estableció la tregua, en la ciudad se conoció que se prometieron traslados, rebajas de penas a quienes se encontraban detenidos y se entregaran a la justicia, además de la posibilidad de ingresar en los programas sociales de la Alcaldía de Medellín. (El Mundo, 2010)

Esta tregua fracasa unos pocos meses después y se reinician los enfrentamientos para luego presentarse un nuevo reacomodo de la confrontación. A partir de 2011, las disputas tienen como protagonistas a los grupos afines a las diferentes facciones aglutinadas en torno a la Oficina de Envigado contra los grupos que están con Los Urabeños. Se dice que estos han logrado tomar ventaja gracias a las alianzas establecidas con algunas bandas históricas y la cooptación de combos localizados en territorios de importancia estratégica para el tráfico de armas y droga hacia el occidente (carretera al mar) y el oriente (autopista Medellín-Bogotá).

En medio de especulaciones acerca del futuro de la Oficina de Envigado y de su competencia, Los Urabeños, se sabe de un arreglo entre esas agrupaciones¹⁸, el “pacto de fusiles”, resultado de una cumbre realizada los días 22 y 23 de julio de 2013 en un municipio cercano a Medellín. Mediante éste se estableció un cese de los enfrentamientos y una distribución de zonas de influencia, el monto de las tarifas de extorsión a las tabernas y supermercados, así como el control de las plazas de vicio. Mientras que Los Urabeños se comprometen a detener su ofensiva y a facilitar las operaciones externas de narcotráfico de la Oficina de Envigado, haciendo uso de su control sobre las zonas rurales, los miembros de la Oficina se comprometen a dejar de pelear entre ellos e imponer disciplina a las pandillas callejeras en sus territorios (El Espectador, 2013b).

Es indicativo del interés por ganar el respaldo de la población, el diseño de una estrategia de divulgación de los resultados de esta cumbre delincriminal como la programación de encuentros a car-

18 Los anfitriones de esta cumbre fueron Los Urabeños, liderados por alias Don Daniel, supuesto responsable de Medellín, junto a cuatro mandos medios encargados de algunos barrios de la ciudad. De parte de la Oficina de Envigado estuvieron los representantes de las cinco facciones más poderosas del mundo criminal del Valle de Aburrá, que en conjunto representan 17 de las más poderosas oficinas de cobro y alrededor de 120 combos (El Espectador 2013b)

go de los “coordinadores de bandas” en comunas y corregimientos para “poder mostrarle a los habitantes de esos lugares que la tregua es real” y que están contribuyendo a un “clima de tranquilidad”. (Análisis Urbano, 2013).

Según lo informa el Sistema para la Información y la Convivencia –SISC-, que reúne y analiza información del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Sijín y el CTI, al 30 de noviembre se registra una disminución del 25,2 por ciento en los homicidios. En 2012, al 30 de noviembre se registraron 1.145 homicidios, mientras que en esta fecha de 2013, la cifra es de 857 (El Colombiano, 2013b).

El “pacto de los fusiles” volvió a poner a prueba la capacidad mediadora de una comisión que, según versiones de prensa-, contó con la participación de personajes de las altas esferas que se mueven entre la legalidad e ilegalidad y tienen vínculos con La Oficina de Envigado. Estos se acercaron a representantes de las cinco facciones de La Oficina y a Los Urabeños, que estaban fortaleciendo su control en las afueras de la ciudad¹⁹.

No ha estado del todo claro qué pudo haber motivado este nuevo pacto. Quizás fue un interés en neutralizar la ofensiva policial, en ganar aceptación por su contribución a la disminución de los homicidios, o tal vez fue un intento de transformarse en una delincuencia más discreta. Lo cierto es que ha puesto de manifiesto su capacidad para incidir en los indicadores de violencia y en la percepción de seguridad.

19 Entre los integrantes de la cúpula de este grupo superior del mundo criminal están Guillermo Valencia Cossio, ex director de Fiscalías en Medellín. Fue condenado en 2011 a 15 años de prisión por colaborar con Los Urabeños. Otro fue Marlon Javier Vergara, quien llegó a ser uno de los jóvenes empresarios más prometedores y bien conectados de Medellín, hasta su arresto en 2010. Fue sentenciado a 37 años de cárcel por un asesinato que le encargó la Oficina de Envigado (El Colombiano, 2010)).

III. ECONOMÍA CRIMINAL PRÓSPERA²⁰

La diversificación de las rentas criminales derivadas no sólo de la exportación de la cocaína, sino también de la incursión en otros negocios que les garantizan altos márgenes de rentabilidad y, de contera, solventar necesidades de diversos sectores de población ha sido un factor decisivo en la construcción de un poder mafioso.

Es claro que lo anterior no puede ser considerado un rasgo peculiar de Medellín, sin embargo ésta es la ciudad donde se observa la mayor sofisticación en la construcción de una cadena criminal (Daza, 2013) y la configuración de lo que se ha denominado una amplia zona gris en la que las fronteras entre la legalidad, informalidad e ilegalidad se tornan más difusas. Sin tener que verse comprometidos con la exportación de un cargamento de cocaína, empresarios y comerciantes se lucran prestando servicios que facilitan la operación de lavado de activos, el suministro de bienes de lujo o su relación con el Estado.

La extorsión y el microtráfico, aunque no son los únicos negocios, son los que copan la atención de las autoridades y de la ciudadanía por sus montos y su impacto en la condiciones de los habitantes de la ciudad.

1. La extorsión

Es considerada uno de los delitos con la mayor expansión desde 2005. De acuerdo con los resultados de una encuesta nacional de victimización realizada en 2012, alrededor de 125.000 colombianos han pagado por una extorsión o han sido víctimas de intentos de cobro. El comandante del Gaula (Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía) reconoció un crecimiento del 229 % en los últimos cuatro años y márgenes de rentabilidad que podrían estar

20 Se retoma la definición de Garzón (2008: 148), según la cual la economía criminal cubre actividades económicas que se desarrollan por fuera de los mercados legales, asegura los acuerdos entre los agentes del mercado ilegal, pero también puede acudir a la corrupción u otros métodos mediante la amenaza o el uso de la violencia por parte de grupos particulares.

alrededor de los 2 billones de pesos al año. Al respecto hay un bajísimo nivel de denuncia. (El Tiempo, 2013).

A la extorsión se le consideró una actividad propia de la delincuencia común hasta que la guerrilla empezó a cobrar altas sumas a compañías multinacionales, a ganaderos y comerciantes. En Medellín, Escobar apeló a la extorsión como alternativa para financiar la guerra contra el Estado, afectando con ello las finanzas de sus socios y de propietarios de *ollas*²¹, de los empresarios del chance y de la venta de gasolina de contrabando (Duncan, 2005). De otro lado, las bandas empezaron a vacunar a propietarios de tiendas, carnicerías, y almacenes, y a ofrecer “protección” a los empresarios del transporte (como lo hizo la banda de Frank en la zona noroccidental de la ciudad).

Para protegerse del pillaje de los combos, algunos empresarios del transporte procedieron a la negociación del pago de una cuota (*vacuna*) para poder garantizar su operatividad²². Pero la competencia armada entre los combos en disputa por estas rentas les generó costos excesivos al verse obligados a cancelar no una sino varias cuotas, incluso en un mismo día. Es el momento en que representantes del gremio del transporte convocan a protestas en demanda de protección por parte del Estado. En el 2010, por ejemplo, se calculaba que en promedio cada bus pagaba \$36.000 pesos (US\$18) semanales, lo que multiplicado por unos 3.200 buses representaba unos \$460 millones de pesos al mes (US\$ 23.000) (El Colombiano, 2010).

Esta situación ejemplifica los nexos entre extorsión y protección. En principio, a la víctima se le protege de los peligros derivados de las acciones de las bandas, pero luego se volverá cada vez más imperativo el pago, a riesgo de seguir siendo *vacunado*. El problema

21 Lugares en donde se expende y consume drogas. Por lo general se encuentran localizadas en sectores del centro histórico de la ciudad. Su existencia se ha hecho visible a raíz de la realización de operativos policiales.

22 Aunque en Medellín se han dado pasos importantes en la construcción de un sistema integrado de transporte con el Metro, el Metrocable y el Metroplus, se depende en gran medida del servicio de las rutas de buses y también de colectivos informales que prestan el servicio a las personas residentes en los lugares más apartados.

para las redes criminales es mantener el monopolio de la seguridad ante la incursión de otras agrupaciones en sus propios dominios.

La relación establecida con el sector del transporte ha sido aprovechada por bandas para hacerse propietarios de buses que compran bajo amenaza. También ofrecen el servicio de venta de repuestos y lavado de vehículos en terminales localizadas en territorios bajo su control. En 2008, por ejemplo, se estimó que en la comuna 8 por cada bus lavado se recibían alrededor de \$22,000 pesos (US\$11), de lo cual se descontaban entre \$1.500 y \$2.000 pesos (US\$ 1) correspondientes al pago de cada lavada del vehículo. Según la Policía, el resto del dinero quedaba a disposición de los jefes, y una parte de él se invertía en armamento. (Instituto Popular de Capacitación, 2008)

Esta situación explicaría la razón por la cual el control de estos terminales se convierte en uno de los objetivos en disputa. Al decir de uno los integrantes del combo que opera en esta comuna, el control de la terminal de Villa Liliam es un trofeo de guerra por ser un paso obligado para las rutas de buses y facilitador de la conexión entre los sectores de Tres Esquinas y La Sierra. Por esto es que se la disputan Los Urabeños y La Oficina, las cuales abastecen de armas a los combos (El Colombiano, 2013d).

La tienda de barrio es el otro blanco preferido para el cobro de vacunas. Estos establecimientos son muy importantes en la vida del barrio, sirven de soporte a la economía local y son punto de encuentro entre vecinos. Los resultados de un estudio sobre mercados indica que es el negocio preferido por los colombianos, pues constituye el 12 % de los casi 600.000 establecimientos revisados en 58 municipios mayores de 100.000 habitantes (El Tiempo, 2013).

En Medellín es generalizada la opinión de que “no hay tienda de barrio en la que no se pague *vacuna* a algún combo”. Ésta puede estar representada en una suma de dinero o su equivalente en cigarrillos, víveres o licores. Ante la imposibilidad de cubrir estos costos, propietarios o administradores han debido cerrar sus negocios y desplazarse, ante el temor de represalias. El silencio es la norma de conducta, salvo en aquellos momentos cuando ha habido una

oportuna intervención de la Policía y de la justicia. Un ejemplo de ello es la detención y el proceso que se le sigue a alias Carlos Pesebre, jefe de la Odin de Robledo, que ha hecho de la extorsión uno de sus principales negocios. Otra fuente de extracción de rentas son los “mercados cautivos”, es decir la comercialización de productos alimenticios que los grupos armados están en capacidad de producir como las tradicionales y apetecidas arepas, o de comercializar como la cebolla o las fresas, los huevos y el licor adulterado (Entrevista líderes sociales, comunas 1 y 6) y (El Colombiano, 2011b). La pretensión de ejercer control sobre la economía barrial además de permitirles obtener una renta, se convierte en fuente de empleo para sus familiares y les hace ganar simpatía como “delincuencia social”. Se afirma que la banda de Los Triana ha montado su propia distribuidora de huevos e impide el ingreso de carros y empresas distribuidoras “ajenas a la comuna”.

Hay sitios que todo el mundo conoce, llegan los vendedores con los carritos reciben la fresa, al día siguiente la pagan. Hay un control meticuloso de lo que se vende, a quién se vende y en dónde se vende, pues ese es uno de los negocios curiosos con los cuales se están financiando, aparte pues de los negocios clásicos de droga, de armas. El negocio de la fresa, al igual que el negocio de la cebolla, tienen nombre propio. (Entrevista a líder social comunal, Medellín, 2012)

No es un fenómeno reciente. Ya desde mediados de la década del 90 la Banda de Frank, como lo recuerdan habitantes de la zona noroccidental, se distinguía por la invención de este modelo de “insertarse en el comercio de los negocios, de las tiendas y obligarlos a comprar cosas, a comprar productos que él empezaba a distribuir. Y luego con el que no le gustaba o con el que tenía algún inconformismo, hasta les llegó a quitar el negocio o los desplazaba” (Entrevista a líder social, comuna 6, Medellín, 2012)²³.

23 Al investigar el fenómeno de la mafia siciliana Gambetta (2010) hace referencia a una experiencia similar: “La Asociación de Pequeños Comerciantes de Palermo descubrió la forma como las familias de la mafia invertían en tiendas de mayoreo y después alentaban a los tenderos a invertir en esos almacenes a manera de salvaguarda para no ser estafado: ‘cómprale o véndele a A y estarás a salvo’ (78).

Otro sector afectado por la extorsión es el de los contratistas del Municipio, con responsabilidad de construcción de obras privadas y de beneficio público en los barrios. También en este caso ha habido “arreglos” mediante los cuales las bandas se hacen a una renta y los contratistas pueden adelantar las obras sin mayores tropiezos. Además de responder por el pago de la respectiva cuota, se negocia el empleo de las personas que ellos indican. La negativa de algunos contratistas a cumplir con este tipo de requerimientos ha tenido como consecuencia la parálisis de las obras y amenazas de represalias que han motivado la intervención de la fuerza pública para garantizar su culminación (El Colombiano, 2010).

La extorsión a los contratistas encargados de la construcción de mil casas gratuitas en la zona del Nuevo Occidente del corregimiento San Cristóbal, parte del programa bandera del Gobierno Nacional, fue examinada en un Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Juan Manuel Santos en Medellín. Como respuesta, el Gobierno se limitó a ofrecer un acompañamiento policial a los contratistas amenazados.

No se trata solo de cobrar *vacuna* sino también del despojo de la vivienda a sus propietarios. Por tal razón, hay familias que se han visto forzadas a desplazarse, mientras delincuentes se apropian de un bien que para muchos representa el logro de una vida. El asesinato de un reclamante de tierras que se negó a ceder su propiedad a un integrante de la banda de Los Triana ha causado una demanda de justicia, pero sin que se haya logrado el esclarecimiento de este hecho ni la condena a los culpables (*Hora 13*, 2013).

La utilización de recursos públicos para la construcción y mantenimiento de espacios destinados a la recreación y el deporte y la labor desarrollada por el Inder (Instituto de Recreación y Deportes de Medellín) ha contribuido a una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las comunas. La paradoja es que son estos los lugares en los que han ocurrido masacres y en donde los usuarios afrontan el acoso de combos que deciden quién, cuándo y cómo se puede hacer uso de estos espacios. El vaciamiento de estos escenarios, ante el temor de ser vacunado o víctima de una bala perdida

empobrece la vida barrial y las formas de socialización en las que la violencia no es el elemento vinculante (El Colombiano, 2012b).

En las áreas bajo su influencia los combos cobran puerta a puerta la vigilancia (\$2.000 semanales como mínimo). Esta práctica hace tiempo dejó de ser un fenómeno exclusivo de las comunas. En un informe del periódico El Colombiano se relata como administradores de urbanizaciones cerradas en sectores de clase media para “evitar problemas mayores han accedido al pago de una cuota camuflada en los rubros de seguridad y que a su vez ha engordado las entradas de Carlos Pesebre y su banda” (El Colombiano, 2013e).

El centro histórico de la ciudad, donde se calcula que circulan un millón de personas diariamente y que laboran otras trescientas mil, es el otro escenario de operación, esta vez de las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Defensa Agraria). Dicha organización fue promovida por el gobierno de César Gaviria (1990-1994) con el propósito de mejorar la seguridad en el campo gracias a la colaboración de civiles con las autoridades. Sin embargo, los problemas que se generaron por los vínculos establecidos con los paramilitares motivaron su disolución.

Esta decisión representó un revés para el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, quien con el apoyo de su Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, promovió esta iniciativa en el Departamento. En Medellín se crearon en aquel momento varias Convivir que contaron con el apoyo de comerciantes y residentes en el centro histórico afectado por robos, atracos y la presencia de mendigos y drogadictos en las calles. La orden de disolver las Convivir no tuvo mayor efecto en Medellín, sino que, al contrario, fueron reorganizadas, lo cual les ha permitido seguir operando y cumpliendo con la función de vigilancia (extorsión por protección), la regulación de la informalidad y el control del orden público. El funcionamiento del centro comercial “El Hueco” en las inmediaciones del complejo de la Alpujarra, sede de la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, pone en evidencia la capacidad para combinar comercio legal y contrabando, y lavado de activos. A ese reconocido lugar acuden los más diversos sectores sociales para

obtener precios más favorables, sin temor a ser atracados, gracias a la vigilancia ejercida por las Convivir.

Pero las Convivir no se limitan a esta actividad. También operan como una agencia de cobro a cambio de proteger a todas aquellas personas que derivan su sustento de la prostitución, vendedores ambulantes (víveres, mercancía pirata) y de ladrones de celulares, escaperos, expendedores de drogas ilegales, quienes deben operar en territorios bien delimitados. Las tarifas para poder ofrecer sus servicios, según cálculos aproximados, oscilan entre los \$2.000 pesos (US\$1) y los \$15.000 (US\$7.50). A los vendedores ambulantes se les cobra un tributo que de acuerdo con el tipo de mercancía puede oscilar entre los \$5.000 pesos (US\$2,50) y \$20.000 diarios. (US\$10) Los días a cancelar son por lo general los sábados. (El Colombiano, 2011). Ante la dificultad para cubrir el valor de la cuota, muchos se endeudan con el *pagadiario*²⁴ o tienen que recurrir al empeño o la venta de los pocos bienes que les quedan.

El sistema de vigilancia de las Convivir se basa en una sectorización por cuadrantes, similar al modelo de la Policía, asignados a pequeños grupos encargados de realizar al menos tres rondas al día. Visten de civil y no portan armas para evitar ser detenidos, pero disponen de sitios en donde ocultarlas. A su vez, las Convivir deben rendir cuentas a varias Odin: Banda del Picacho, Caicedo, Los Triana y San Pablo, las cuales se articulan a su vez a la Oficina de Envigado (El Colombiano, 2011).

Las Convivir también se encargan del cobro del “pagadiario”, un sistema de préstamos ilegal de gran acogida debido a la facilidad con la que se logra obtener el préstamo, ya sea para el pago de la comida del día, la cuenta de servicios, completar el surtido de un negocio, desvarar un carro, llevar a los niños al médico, celebrar una fiesta o para financiar “el vicio”. No se necesita hacer ningún

24 Práctica ilegal que consiste en el préstamo de dinero a personas de escasos recursos sin exigirles los requisitos que piden los bancos. La cancelación de la deuda se debe realizar mediante cuotas que se amortizan a diario y con altos intereses. Los incumplimientos aumentan el costo de la deuda, y llevan a amenazas o al asesinato del deudor. Ver al respecto: Infrarrojo (2012)

trámite, basta establecer contacto con un intermediario. Se puede prestar desde \$10.000 pesos (US\$5) hasta sumas más elevadas, todo con el compromiso de cancelar día a día la cuota asignada y con elevados intereses que se van incrementando con el no pago oportuno. El pago de cuotas cada vez más difíciles de pagar, termina por convertirlo en una pesadilla para muchos deudores, quienes acuden a otros prestamistas para pagar sus obligaciones y evitar convertirse ellos y sus familiares en víctimas de represalias por el no pago de la deuda.

2. El microtráfico o narcomenudeo

Estos son los términos más utilizados para referirse a un fenómeno en alza, el consumo local de drogas ilegales, valorado como otro factor de inseguridad en las ciudades y en relación con lo cual el presidente Santos ha dado respuesta en los últimos meses con una campaña efectista destinada a eliminar lugares de expendio (plazas de vicio, *ollas*) que operan en las principales ciudades.

Pero ya en Medellín desde la década del 50 la prensa local registraba cultivos de la *yerba loca* en regiones de departamento y en áreas cercanas a Medellín. Las papeletas de marihuana se confeccionaban en fábricas que abastecían los sitios de expendio en algunos hoteles y cantinas localizados en el centro histórico de la ciudad y en la Plaza Minorista (El Colombiano, 1951). Su consumo era considerado un atributo del bajo mundo delincuencial y una actividad marginal hasta que un decreto expedido por el general Rojas Pinilla lo incluyó en los “estados de especial peligrosidad” (Diario Oficial, 1955) y se procedió a la detención de *marihuaneros* que eran remitidos a la cárcel La Ladera.

Esta situación cambia una década después, cuando se populariza el consumo de marihuana e irrumpen la cocaína, el bazuco (mezcla de base de coca con componentes altamente tóxicos para hacer rendir el producto). En el centro de la ciudad y en los barrios se instalaron centros de expendio (“plazas de vicio”) y se montó una red para garantizar el abastecimiento, distribución y

venta de la droga. Esto a su vez demandó la vinculación de personal de confianza encargado del transporte, la confección de papeletas y cigarrillos y de las *bolas*” (paquetes) de marihuana, También, de la administración de las plazas y el control del territorio para impedir la presencia de otros competidores y para negociar el pago de sobornos a la Policía. Habitantes de los barrios, líderes sociales, expertos y funcionarios públicos coinciden en afirmar que agentes de policía mejoran sus ingresos con el cobro de *vacuna* a las plazas de vicio y con el suministro de información sobre la realización de allanamientos o facilitando el tránsito de los vehículos que se encargan de la distribución desde los centros de acopio a los barrios.

Aunque el funcionamiento de lugares de expendio desde hace tiempo forma parte de la cotidianidad barrial, es poco lo que se ha indagado sobre la situación de las familias dedicadas a esta actividad²⁵. Los resultados de una investigación realizada por el sociólogo César Tapias (2010) ponen en evidencia los impactos que los vínculos con este mercado ilegal generan en las formas de relación entre padres e hijos, afectadas por la invención de métodos para afrontar los riesgos que entraña la identificación del lugar, los operativos policiales, los probables *sapeos* por parte de los vecinos y los esfuerzos por establecer normas y códigos de comportamiento que puedan ser acatados por todos.

Se estima que en Medellín operan en la actualidad de unos 350 a 400 expendios, siendo la comuna 10 (el centro histórico) el lugar de mayor concentración de puntos de acopio, seguido muy de cerca por otros localizados en barrios populares. El decomiso de un cuaderno contable de cuatro jefes que concentran el negocio en la ciudad y al que tuvo acceso la prensa no deja dudas sobre los altos márgenes de rentabilidad. En solo 13 días por ejemplo, comercializaron 50.850 dosis, las que a un precio unitario promedio de 1.800 pesos (US\$1), muy bajo por demás, implica una facturación de 91,5 millones de pesos. (El Colombiano, 2010b).

25 Las plazas de vicio no son lugares de consumo. Estos corresponden a las *ollas*, ubicadas en zonas deprimidas del centro histórico.

Para adquirir una o varias dosis no es indispensable trasladarse a *la plaza*, ya que se puede obtener en las calles con vendedores ambulantes que la camuflan entre otros productos o en lugares públicos convertidos en lugares de expendio y consumo de drogas como el Parque del Periodista o el Parque de Bolívar.

A la masificación del consumo han contribuido estrategias de mercadeo dirigidas, entre otros, a los estudiantes de colegios ubicados en las áreas de influencia de combos y bandas. La droga es distribuida por menores de edad que hacen parte de combos que tienen familiares metidos en *la vuelta*²⁶. De acuerdo con el relato de uno de nuestros entrevistados:

Hay *baretos* [cigarrillos de marihuana] que parecen un fósforo y se lo venden por \$100 al niño, de prueba, y los van metiendo en la dinámica de 'nosotros somos los fuertes', el *bullying*, y van trayendo, y van viendo que aquel que lleva lonchera puede llevar los \$1.000 que le da el papá o sus \$2.000, entonces de esos \$2.000 'invítame dos o tres', les venden los bareticos, eso ya va armado desde afuera y así ya, cuando ya están en quinto de primaria, los que llegan a quinto ya son adictos, le mezclan perico a eso. Es una situación de la que se percatan muy tarde padres de familia, cuando se da la desvinculación del colegio y empiezan a tener como referente el combo y a rebelarse contra las normas de la casa (Entrevista habitante comuna 8. Medellín, 2013).

Con la expedición del nuevo Estatuto de Seguridad Ciudadana, las penas para el tráfico y porte de estupefacientes oscilan entre 128 y 360 meses, los cuales se reducen al rango comprendido entre 64 y 144 meses cuando se trata de cantidades menores. En el caso de la marihuana por ejemplo, corresponde a topes de 1.000 y 10.000 gramos respectivamente. Para neutralizar esta medida, los expendedores han optado por cargar pequeñas cantidades y camuflar la droga en la calle. Ante la demanda social de intervención frente a una violencia de combos atribuida a las disputas por el control de este rentable negocio ilegal, el presidente Santos le or-

26 Forma coloquial como se denomina estar en actividades ilícitas.

denó al director de la Policía, general Roberto León Riaño, la erradicación en un plazo perentorio de 70 días de 24 de estas *ollas* en 20 ciudades del país.

En Medellín, el comandante de la Policía Metropolitana informó que en el sector de Barbacoas se erradicaron diez casas de vicio, capturaron a 40 personas por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, se incautaron 13.813 mil dosis de drogas y se solicitaron cuatro medidas de extinción de dominio. (El Colombiano, 2013, 1 de junio). Como era previsible las *ollas* se han trasladado a otras zonas del centro.

IV. INSERCIÓN EN EL ENTRAMADO SOCIAL BARRIAL

El afincamiento en ciertos territorios y el poder contar con el apoyo de la población son dos elementos altamente valorados por las agrupaciones criminales a las que hemos hecho referencia. No solo está en juego el transporte de la mercancía ilegal, sino la obtención de otro tipo de rentas en sectores donde hay actividad comercial y concentración de la población. El barrio es un referente importante y más aún cuando se es de allí y se han construido vínculos afectivos y de confianza con la gente, aunque estos se pueden ver modificados por su desempeño, la capacidad de reacción de la población y los cambios en la correlación de fuerzas.

Los actores armados ilegales en la ciudad han tenido a su favor una reputación de violencia²⁷ que se ha cimentado durante varias décadas y que a su vez ha permitido mantener un clima de miedo. Ellos se aprovechan de las dificultades de padres de familia para estar pendientes de sus hijos o de la de los maestros y líderes sociales para ser respetados y se instituyen como los únicos capaces

27 Una reputación de violencia, de acuerdo con la definición del Grupo de Memoria Histórica en el informe *Basta ya!* (2013), es la imagen que un grupo armado construye deliberadamente de sí mismo, a partir de las acciones de violencia que desencadena para reforzar la credibilidad de sus amenazas y apuntalar su dominio a partir de la intimidación que proyecta desde su propia capacidad de daño.

de establecer el orden. Aunque en realidad, como coinciden en señalar residentes de estos barrios entrevistados, son precisamente estos actores quienes contribuyen al desorden al promover el consumo de drogas, la rumba (sobre todo durante los fines de semana) “donde la gente baila, consume marihuana, perico, y guaro” que “incapacita a las personas para cumplir con un trabajo y seguir con una vida normal”. En seguida se hará referencia a métodos de control que se han venido realizando durante las dos últimas décadas, de acuerdo a testimonios y fuentes de prensa.

1. Los dominios territoriales

Del control sobre determinados territorios depende la obtención de rentas provenientes de la extorsión o el microtráfico, el control de rutas de transporte de cocaína, armas o el hurto de combustible²⁸ para mantener a distancia a competidores que pretenden incursionar para disputar sus rentas y para “hacerse respetar”.

El establecimiento de una frontera invisible es el método preferido. Por haber incurrido en el error de cruzar esta línea que se supone es conocida por todos los habitantes del sector, se ha producido la muerte de varios jóvenes. Este fue el caso de un joven de 15 años que iba en bus para su casa, pero se quedó dormido y fue a dar al barrio vecino: “Allá lo cogieron los muchachos de un combo, llamaron a su tía y cuando la tenían en la línea, le dispararon al muchacho y ella escuchó los tiros por el teléfono. El cadáver lo hallaron con señales de tortura” (El Tiempo, 2012).

Hechos de este tipo generan un clima de miedo y enfrentan a la población al dilema de acatar o de negociar con el respectivo combo dueño del sector el pago de un “peaje” para poderse desplazar hacia un territorio vecino y así visitar a la novia, o algún familiar. Es la experiencia de Martín quien reconoce el pago de “un

28 Muestra de ello son las recurrentes disputas por el control occidental de la ciudad, zona estratégica de movilidad entre San Antonio de Prado y San Cristóbal, pasando por zonas periféricas de las comunas 16 (Belén) y 13 (San Javier), con salida hacia la subregión del Occidente antioqueño y el Urabá para el tráfico de narcóticos y armas, y el hurto de combustible al poliducto Medellín-Cartago.

impuesto” para poder atravesar callejones hasta la casa de su amada sin inconvenientes. En su billetera mantiene bien guardado un papel ocre, doblado en más de cuatro partes en el que dice: “hace constar que fulano de tal pagó los 10.000 pesos quincenales para pasar de tal lado a este otro ‘peaje’” (El Colombiano, 2010).

La vigilancia sobre las fronteras se logra asignándole esta función a integrantes de los combos y con patrullajes que se refuerzan en las horas de la noche, los cuales, según lo perciben algunos habitantes, es un método copiado por la Policía. “La metodología que inventó la Policía por cuadrantes se la inventaron Los Triana, porque ellos tienen a una persona por cuadra a la redonda vigilando quién entra, quién sale, tienen unos esquemas muy grandes de ese tema de hacerle control al territorio” (Entrevista, líder social, comuna 1, 2012). Hacia el interior del barrio los integrantes del combo se *parchan* en determinados sitios para monitorear las entradas y salidas de la gente, de los vehículos o de la Policía.

Para aquellos jóvenes que se han especializado en estas labores de vigilancia, la noción de barrio y de ciudad se desdibuja, lo que cuenta es el control de una cuadra, una esquina o una manzana. El tener que vivir *enguetados*²⁹ los hace depender de la ayuda de la madre o de algún familiar para comprarse ropa o para tramitar alguna cita médica, pues deben ser atendidos en sus propios dominios. También para ellos el cruce de la frontera puede significar la muerte a manos de sus enemigos.

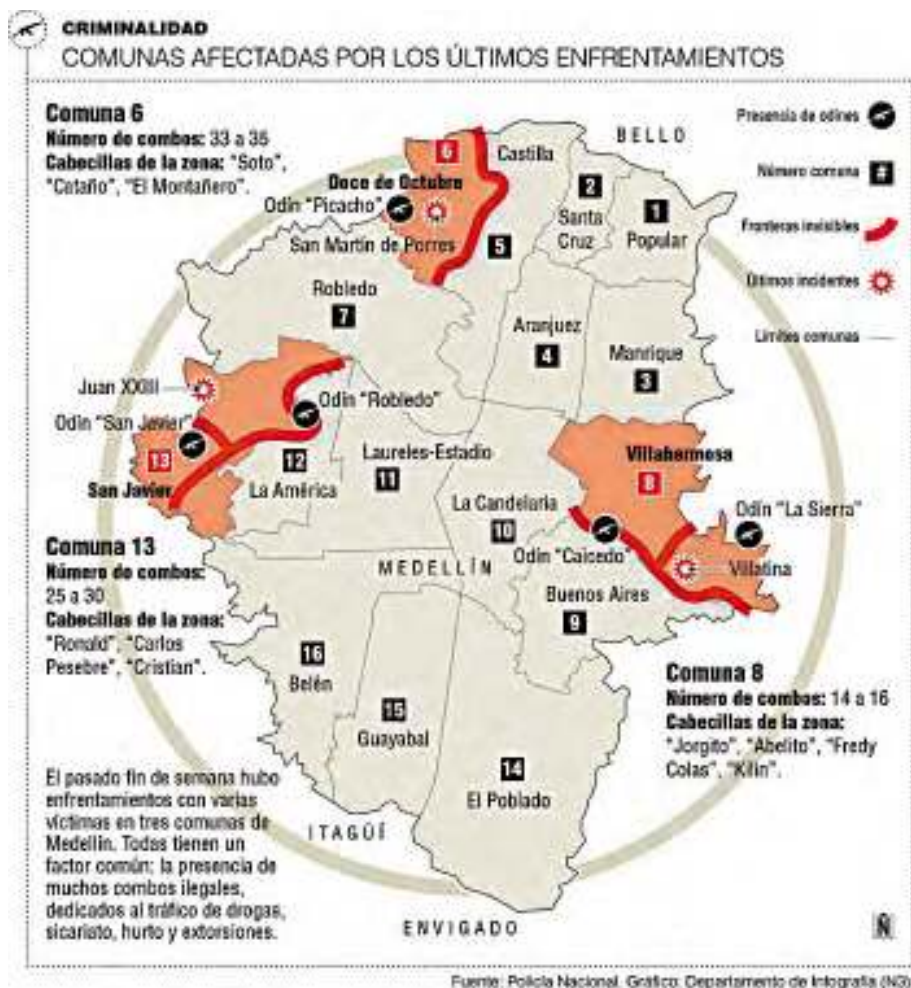
El delineamiento de una frontera es útil para hacer saber a los del combo vecino que allí están atentos a cualquier movimiento y para que “les tengan miedo”. Por esto se llevan a cabo acciones de hostigamiento: “Entonces solamente un *pelado* (menor de edad) no se puede parar al medio día en un morrito a disparar un proveedor, sin ninguna intención en particular, sino para afianzar que se está ahí” (Entrevista a habitante comuna 13, Medellín, 2012). El empleo de este mecanismo disuasivo no ha sido suficiente para evitar los enfrentamientos. Cuando estos ocurren, la población civil es la más

29 Viene de la palabra gueto.

afectada al tener que afrontar una situación de encierro debido a los toques de queda y el riesgo de convertirse en víctimas de “balas perdidas”.

El siguiente gráfico ilustra la diversidad de los territorios en los cuales se concentraban las disputas por el control y las fronteras invisibles al finalizar el año 2011.

Mapa No. 3
Comunas afectadas por los enfrentamientos. Noviembre de 2012



Fuente: Periódico El Colombiano, 2012.

El cese de los enfrentamientos y el levantamiento de fronteras ocupan un lugar central en las demandas de seguridad a las autoridades por parte de la población. Sin embargo, hasta el momento se han dado principalmente como resultado de las treguas o pactos establecidos por los combos y bandas enfrentados. Así sucedió recientemente con el “pacto de los fusiles”. Los habitantes de la urbanización El Limonar, escenario de enfrentamientos en los que ha participado la Policía como aliada de uno de los bandos, han manifestado su complacencia con el nuevo ambiente, porque ahora sí se puede andar por ahí tranquilo y casi no hay balaceras (El Tiempo, 2013b).

Para minimizar los riesgos derivados de la presencia de infiltrados en el territorio, se han adoptado medidas como el levantamiento de un registro sobre quiénes son las personas del barrio, de dónde provienen las familias que alquilan alguna vivienda o que transitan por ciertos lugares “donde nadie debe fisgonear”. La información que proporcionan las redes de colaboradores es de vital importancia cuando se temen acciones de represalia.

2. Amenazar, desaparecer y desplazar.

Mediante la amenaza, se busca advertir a la población de las consecuencias de colaborarles a sus rivales o a la Policía. Se acostumbra repartir panfletos dirigidos a los habitantes de un barrio o contra figuras en concreto que son consideradas sospechosas o sobre quienes se albergan dudas de su lealtad o que se han resistido a cumplir sus órdenes. Al hacer un balance de los casos que ha debido atender, un funcionario de la Personería observa:

...En los barrios las amenazas tienen un móvil diferente al de las universidades: se considera que la persona es un informante o porque habiendo sido conocido le dio por torcerse, o porque se resiste a hacer parte del grupo armado. Chicas que no quieren tener con ellos relaciones afectivas, que no les colaboran guardando armas y drogas. Por algún tipo de relacionamiento con la fuerza pública, relacionamiento territorial o sea alguien que es de

Independencias uno y se pasa a Independencias dos³⁰ donde tiene una novia y creen que aprovecha para llevar información, o por el comportamiento social, '*es un picao*', la cosa más nimia. Ahora la novedad es que la amenaza va seguida de la orden de tener que abandonar el barrio. (Entrevista a funcionario de la Personería de Medellín, Medellín, 2012)

Con la desaparición forzada se pretende evitar llamar la atención de las autoridades en los territorios donde actúan, lograr mayor impunidad y reforzar un clima de miedo entre la población. El ocultamiento de los cuerpos se realiza por medio del desmembramiento y *encostalamiento*, la inhumación clandestina, el lanzamiento de los cadáveres al Río Medellín o la utilización de las escombros para ocultar los cadáveres. (Personería de Medellín, 2011)

El desplazamiento forzado se ha convertido en otro de los métodos preferidos para castigar a quienes no cumplen sus exigencias o se niegan a colaborar. También se usa para apropiarse de viviendas o para cortar la posibilidad de represalias por parte de familiares o colaboradores de la agrupación que ha sido derrotada. Medellín es la ciudad del país con los índices más elevados en desplazamiento forzado intraurbano³¹. Las bandas figuran como las responsables debido a sus amenazas, homicidios, agresiones físicas y reclutamiento forzado.

El fallo emitido por la Corte Constitucional ha permitido que miles de colombianos afectados por las denominadas bandas criminales (Bacrim) sean incluidos en la Ley de Víctimas (El Tiempo, 2013c). Dicha instancia ha insistido en la necesidad de reconocer tanto la modalidad del desplazamiento forzado intraurbano como de las dinámicas de violación sistemática de los derechos humanos por parte de los grupos armados ilegales denominados Bacrim.

30 Barrios de la comuna 13

31 Según Acción Social, a 31 de diciembre de 2011, en Medellín el desplazamiento forzado intraurbano representa más del 14 % del problema de desplazamiento forzado en la ciudad. Es decir, que para esa fecha, de 232.672 personas desplazadas que hay en Medellín, 32.123 corresponde a quienes se han visto forzados a abandonar sus lugares de residencia en la ciudad.

Esto es un logro importante para aquellas víctimas no reconocidas como tales por el hecho de no haber sido desplazadas por los actores del conflicto armado.

Aunque no se dispone de información precisa sobre acciones de violencia específica contra las mujeres por conductas desobedientes o por *sapas* (delatoras), hay elementos que permiten intuir que esto sí ha sido causal de asesinatos y desapariciones. Según el informe de derechos humanos de las mujeres, elaborado por las corporaciones Vamos Mujer y Mujeres que Crean, en los últimos cinco años el porcentaje del total de homicidios de la ciudad que tiene como víctimas a mujeres está alrededor del 8 % del total (Vamos Mujer, 2012).

También se busca el control de conductas que generan rechazo y que pueden entrañar algún riesgo para su propia seguridad: borrachos que provocan escándalos o quiebran los vidrios de una buseta, aquellos que roban a las personas del mismo barrio o que “consumen vicio” en lugares no autorizados o delante de los niños o en exceso. Los caídos en desgracia pueden ser objeto de sanción o convertirse en otras víctimas de “acciones de limpieza”, una práctica que en Medellín se remonta a la época de las Milicias y que cuenta con la aprobación de sectores que se consideran afectados en sus intereses y reclaman eficacia en el control de dichas conductas.

3. La contracara: “Benefactores” y “protectores” de la comunidad

Cultivar una relación de cercanía con la gente es una práctica de las organizaciones criminales. Pablo Escobar sentó un precedente al apoyar la construcción y dotación de canchas deportivas en los barrios de la zona nororiental, al tiempo que reclutaba jóvenes para encargarlos de las tareas más arriesgadas. Menos llamativa pero igualmente eficaz ha sido la labor de algunos jefes de bandas y combos, reconocidos por su contribución a la realización de festividades comunitarias en épocas de Navidad o el día

de la madre, los regalos para los niños y los favores a personas mayores y necesitadas. De esta manera varios jefes de banda se han ganado la simpatía de la gente. En la comuna noroccidental, por ejemplo, aún se recuerda al Tino, representante de la “delincuencia seria”:

Era el que dialogaba, el que le pagaba los servicios a la gente, una señora: ‘ah esa pobre señora’, entonces le daba los servicios. El Tino casi no consiguió plata. Cuando lo mataron tenía como dos buses, mientras que Frank era más burdo. Frank: ‘A ver, firmeme aquí, tome estos diez millones por el bus, si no firma entonces lo matan’. Esa pelea de esas dos formas de delincuencia, yo he visto es una pelea que lleva en esa zona nororiental y Medellín. He visto que es una pelea como de quince años, que la ha venido ganando como la cultura seria. (Entrevista a líder social, comuna 5 y 6, Medellín, 2013)

La intervención en la solución de conflictos que hacen parte del diario vivir se produce como respuesta a las demandas de personas que prefieren acudir a “los armados” antes que a la justicia³². Por lo general se trata de conflictos de índole familiar (maltrato, celos), disputas por linderos o por el no pago de deudas. A consecuencia de los fallos que han proferido, hay quienes han tenido que abandonar el barrio. En este punto se advierte una continuidad con el proceder de las bandas desde la década de los 80, quienes relegaron a un segundo plano la labor de mediación que desarrollaban los líderes comunales, lo que en opinión de personas que vivieron de cerca esta situación empoderó a los armados.

El contacto con la gente facilita la conformación de redes de colaboradores apoyadas en la familia, amigos y vecinos. La importancia de estas redes ha quedado en evidencia con la participación de sectores de la población en protestas y asonadas

32 Esta tendencia en Colombia, según Gaitán (2006:174), responde al temor a represalias y a las bajas expectativas de éxito que tiene la denuncia. Invertir en un abogado, rendir testimonio, aportar pruebas, generan el temor de terminar involucrados en los hechos que se denuncian.

para impedir la realización de operativos policiales en búsqueda de algunos jefes de bandas o combos. Pero también en ello se advierte el arraigo de una representación del bandido social que en el caso de Colombia tiene un antecedente reciente en el fenómeno del bandolerismo que prosperó en la Violencia de los años 50 (Sánchez, 2006).

Otro asunto que debe considerarse es la similitud con los métodos ya mencionados de control puestos en práctica por la guerrilla en áreas rurales en las cuales ha ejercido un dominio. Al analizar los intercambios y relaciones de las FARC con la población, Aguilera (2010: 105) toma en cuenta su intervención en la solución de conflictos, la definición de los casos más graves y el tipo de sanciones a impartir contra los infractores, que van desde un llamado de atención hasta amenaza y desplazamiento o la pena de muerte. Sin embargo su aplicabilidad en un contexto urbano no tiene el mismo impacto, debido a una mayor presencia del Estado y una heterogeneidad social y cultural traducida en la adopción de diversas formas de comportamiento y estilos de vida que riñen con la visión que comportan los “armados” sobre el tipo de orden a implantar. Los cambios en la correlación de fuerzas, fruto de las disputas entre bandas y combos o de la intervención policial, se erigen en un obstáculo para prolongar en el tiempo este tipo de controles.

En la década del 80, como lo recuerda Duncan (2013b), la Policía no tenía acceso a calles de barrios dominados por los bandidos y “si alguien cruzaba las fronteras invisibles de un barrio dominado por las bandas y los combos de Escobar y era sospechoso de ser policía, inmediatamente era ejecutado sin que mediara pregunta alguna”. En la actualidad y con todas las reacciones encontradas que genera la presencia de la Policía, los residentes en las zonas epicentro de la violencia se mantienen a la espera de que el Estado logre ejercer un control del territorio y de una institución policial que defienda a la gente y deje de transar con sus verdugos.

V. CAPACIDAD PARA INCIDIR EN LA ESFERA POLÍTICA

Es característico del crimen organizado el empleo de la corrupción de funcionarios públicos y de políticos para garantizar impunidad y la protección de sus empresas, sin embargo las posibilidades de consolidar este tipo de vínculos varía de acuerdo a los contextos y a las decisiones de criminales y narcotraficantes con respecto a un eventual protagonismo.

En Medellín, dos décadas después del fallido intento de Pablo Escobar de participación directa en política, la injerencia de alias Don Berna en las elecciones para Alcalde y en espacios de participación y organizaciones sociales aprovechando la condición de desmovilizado, vuelve a poner en evidencia el interés de los grupos armados ilegales por lograr una mayor influencia en el acontecer político de la ciudad y en la cooptación del Estado.

1. Los procesos electorales.

En las elecciones locales de 2003, en las que fue electo alcalde Sergio Fajardo, quien por primera vez en la historia de la ciudad no provenía del bipartidismo, a diferencia de las dos siguientes contiendas electorales (2007 y 2011) no hubo denuncias sobre injerencia ilegal ni constreñimiento de los grupos armados ilegales a favor de determinado candidato. Lo que sí marcó la dinámica electoral en los años 2007 y el 2009 fue la desmovilización de 864 integrantes del Bloque Cacique Nutibara, el 25 de noviembre de 2003, y los debates en torno a las condiciones en que esta se produjo. Entre otras razones por la participación política y social de los desmovilizados, tanto en espacios constituidos como mediante la creación de organizaciones propias, y sus relaciones conflictivas con organizaciones sociales ya existentes. Este es un punto que se desarrollará más adelante.

En las elecciones de 2007, el ambiente político es de polarización en torno a las figuras del candidato Alonso Salazar, el cual

le apuesta a la continuidad del proyecto político de Fajardo y se enfrenta al candidato tradicional Luis Pérez, ex alcalde, con unos resultados en los que sólo les separaron 33.741 votos. En estas elecciones, la Misión de Observación Electoral (MOE), organismo de la sociedad civil encargado de monitorear los riesgos por fraude corrupción y/o violencia en los procesos electorales, emitió una advertencia de alto riesgo electoral por motivos de violencia. En su comunicación, la MOE alertaba sobre ataques contra candidatos a corporaciones públicas, en los cuales fueron asesinados tres candidatos al Concejo y una candidata a la Junta Administradora Local de la comuna 13, Judith Vergara, integrante del Polo Democrático Alternativo.

Apenas unos días después de las elecciones, el candidato derrotado, Luis Pérez, formuló graves acusaciones contra Alonso Salazar, por la presunta incidencia de los paramilitares desmovilizados a su favor. El 5 de diciembre de 2008, más de un año después de las elecciones, el debate seguía, fue alimentado por una carta de alias don Berna, quien luego de ser extraditado a Estados Unidos en marzo de 2008, hacía referencia a un supuesto acuerdo de Salazar con los desmovilizados para un apoyo a su candidatura. Estas acusaciones llevaron al alcalde Salazar a solicitar una investigación de la Fiscalía General de la Nación, la cual terminó el 9 de julio de 2010. En ese fallo, la Fiscalía 28 delegada ante la Unidad Nacional contra el Terrorismo archivó el proceso (El Tiempo, 2010, 30 de julio).

Durante el primer año de gobierno de Salazar se presentó una fuerte lucha por la gobernabilidad de la ciudad. En ésta intervinieron por un lado el gobierno municipal liderado por el Alcalde y, por el otro, una alianza criminal conformada por integrantes de grupos armados ilegales y desmovilizados, quienes actuaron en alianza con representantes de partidos políticos, el derrotado candidato Luis Pérez y altos funcionarios de organismos de seguridad como el Director Regional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio (hermano del entonces Ministro del Interior Fabio Valencia), y el comandante de la Policía Metropolitana Marco Antonio Pedreros, entre otros. Esta alianza criminal pretendió generar

un ambiente de desgobierno para la administración de la ciudad, y apeló a mecanismos como el desprestigio del Alcalde, la promoción de la revocatoria de su mandato, así como un marcado incremento de las acciones de violencia en varios barrios de la ciudad con repercusión en un aumento de los homicidios (El Espectador, 2008).

La grave constatación de la penetración criminal en la Fiscalía Seccional de Medellín, que terminó con la captura y condena del director Valencia Cossio a 15 años de cárcel por apoyo a grupos paramilitares, produjo incluso la visita en agosto del 2008 a Medellín del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien ofreció sus disculpas a la ciudad por el “acto bochornoso, vergonzoso y delincuencial en el que están involucrados no sólo funcionarios de otras instituciones como el Ejército y la Policía, sino desafortunadamente la cabeza de la (Fiscalía) seccional” (El Tiempo, 2013c).

La administración de Alonso Salazar vivió también una coyuntura de crisis del proceso de desmovilización, luego de más de cuatro años de debates sobre la autenticidad de la desmovilización y las denuncias sobre el mantenimiento de una estructura criminal latente en la ciudad, en torno a prácticas ilegales de control sobre la población por parte de los desmovilizados y en relación a los límites de una política local de atención a los desmovilizados que dejaba muchos interrogantes (Amnistía Internacional, 2005). El proceso finalmente explota con la extradición de alias don Berna, el 13 de mayo de 2008, y la confrontación entre diferentes facciones de la Oficina de Envigado que se habían mantenido activas durante el proceso de desmovilización.

A pesar de los esfuerzos de los grupos armados ilegales de la ciudad por influir y determinar los resultados electorales en el 2007, los resultados en una abrumadora mayoría no les favorecieron. Su candidato a la Alcaldía no fue elegido. Tampoco obtuvieron buenos resultados con sus candidatos al Concejo. Así mismo, de 18 candidatos que presentaron los desmovilizados a Juntas Administradoras Locales, sólo salió electo uno en la comuna 8, John William López, alias Memín, quien luego fue capturado y condenado el 13 de marzo de 2009 a 22 años de cárcel por los delitos de des-

plazamiento forzado, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal agravado, contra habitantes de dicha comuna.

En las elecciones para alcaldía de 2011, de nuevo se presentó una fuerte polarización, entre una propuesta de continuidad esta vez en cabeza del candidato Aníbal Gaviria del Partido Liberal, y Luis Pérez, derrotado en las elecciones anteriores. Esta vez la diferencia fue de 17.385 sufragios a favor del primero.

El debate electoral estuvo muy agitado los últimos días debido a las graves denuncias realizadas a comienzos de octubre de 2011 por el alcalde Alonso Salazar sobre alianzas entre sectores criminales de la Oficina de Envigado, específicamente la facción liderada por alias Sebastián, y las campañas de algunos candidatos al Concejo de la ciudad, así como el presunto favorecimiento a la campaña de Pérez Gutiérrez.

Según el Alcalde, grupos armados ilegales realizaron actos proselitistas en los cuales se promovieron ciertas candidaturas, mientras se prohibió o restringió la presencia de candidatos de otros grupos políticos. También denunció pactos en sectores de la ciudad como la comuna 8, la 1 y la 6, para favorecer intereses de ciertos candidatos (Partido Cambio Radical) y actividades proselitistas con la presencia de líderes políticos e integrantes de la Corporación Democracia.

Estas denuncias calentaron el debate electoral a menos de tres semanas de las elecciones y provocaron reacciones airadas de los sectores políticos y candidatos señalados por el Alcalde de hacer parte de esta alianza criminal. Así mismo la Procuraduría General de la Nación, con inusual prontitud, abrió investigación preliminar contra el Alcalde por presunta participación en política, la cual terminó en fallo de primera instancia del 29 de febrero de 2012 con su destitución y su inhabilidad por doce años para ejercer cargos públicos, fallo que fue confirmado en segunda instancia, el 3 de mayo de 2013.

Una muestra de la complejidad de la última campaña electoral de Medellín y sus preocupantes niveles de violencia son los informes de la MOE con corte a octubre 26 de 2011. Según éstos, de los

2.465 reportes recibidos en todo Colombia, 421 fueron de Antioquia (17 % del total) y, de estos, 56 lo fueron de Medellín, es decir el 13 % de los del departamento.

Los principales motivos de reporte fueron 13 por vinculación de campañas políticas con grupos armados ilegales y 10 por violencia política, la cual incluye amenazas, asesinatos y atentados. En los casos relacionados, se identifican hechos como la conducción de presidentes de juntas de acción comunal para ordenarles por quién votar, los asesinatos de dos líderes sociales, acciones de constreñimiento ilegal para favorecer ciertas candidaturas, investigaciones de la Fiscalía a candidatos por vínculos con grupos armados ilegales. Es de destacar que muchas de las denuncias recibidas por la MOE concuerdan con las denuncias hechas en su momento por el alcalde Alonso Salazar.

2. El papel de la Corporación Democracia

Medellín tuvo dos momentos de desmovilización de grupos paramilitares. El primero fue el 25 de noviembre de 2003, en el cual se desmovilizó el Bloque Cacique Nutibara en el Palacio de Exposiciones de la ciudad, acto en el cual participaron 868 integrantes. El segundo ocurrió el 1 de agosto de 2005, con la desmovilización de 2.033 personas del Bloque Héroes de Granada en el corregimiento Cristales de San Roque, nordeste antioqueño.

Desde el inicio de la desmovilización se tenía prevista una cobertura política del proceso y una organización que sirviera como interlocutora entre los desmovilizados y los gobiernos, nacional y local. Por esto, desde la firma del acuerdo de 2003 ya se manifestaba en el denominado Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia³³ que el gobierno nacional reconocía a la

³³ Acordado en el municipio de La Ceja, Antioquia, el 10 de diciembre de 2003, firmado por Fabio Acevedo Monsalve y Giovanni Marín como miembros representantes de los desmovilizados

organización no gubernamental Corporación Democracia como la representante de los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara, “con quien [sic] se mantendrá una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo del proceso de reincorporación”. El Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia diseñarán los programas de seguimiento, desarrollo y apoyo al proceso de reinserción. Posteriormente, la Corporación Democracia se creó formalmente ante la Cámara de Comercio de Medellín, el 16 de enero de 2004. A partir de allí, dicha entidad desplegó una amplia red organizativa que estaba presente en prácticamente todos los lugares de la ciudad en los cuales se concentraban personas desmovilizadas, construyó grupos de desmovilizados por barrio, comuna y zona y desarrolló una estructura de control y mando constituida por coordinadores, cada uno de los cuales tenía a su cargo un número cercano a los 20 integrantes. La Corporación Democracia se convirtió en el referente para la interlocución con el Gobierno, especialmente con el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín dirigido primero por Gustavo Villegas³⁴, entre el 2004 y el 2006, y luego por Jorge Gaviria, hasta mediados del 2009.

El primer período de la actuación de la Corporación Democracia (2004-2007) se caracterizó por su fluida relación con diferentes autoridades públicas, así como por las dificultades de las organizaciones sociales de encontrar eco a las denuncias en torno a las presiones y amenazas realizadas por los desmovilizados integrantes de los grupos de la Corporación Democracia. No fue fácil la relación en torno a este tema, ni con las diferentes dependencias de la administración municipal, ni tampoco con la delegación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), como lo señaló en su momento la Unidad Permanente de la Personería de Medellín en sus informes periódicos sobre derechos humanos (Restrepo, 2011).

34 Gustavo Villegas fue secretario de Gobierno de la ciudad durante el año 2007, cuando Alonso Salazar se retiró de la Secretaría para ser candidato a la Alcaldía de la ciudad. Posteriormente se vio involucrado en las denuncias como partícipe de la conspiración para derribar al Gobierno de Alonso Salazar y fue desvinculado del gobierno local.

No obstante, en tanto la Corporación Democracia estaba atada de manera indisoluble a la suerte de la Oficina del narcotráfico de Envigado, las contradicciones al interior de la estructura criminal se reflejaron en la vida de la organización, la cual estaba en la mira de las autoridades judiciales de Colombia y Estados Unidos, pero también porque una buena parte de sus líderes cayeron en ajustes de cuentas en su interior.

Luego se dan otros hechos como el asesinato de uno de sus principales líderes y vocero nacional de las Autodefensas, Severo Antonio López, alias Job, conocido por haber participado en reuniones con personal de alto nivel del gobierno Uribe Vélez en el Palacio Presidencial con el fin de concertar acciones en contra de la Corte Suprema de Justicia, organismo que estaba liderando en ese momento las investigaciones sobre nexos entre líderes políticos regionales y los grupos paramilitares. Alias Job fue asesinado el 28 de julio de 2008 en un restaurante de Medellín.

La estocada final a la Corporación Democracia la propinó la Fiscalía General de la Nación el 16 de abril de 2009 ante un juez de garantías durante la legalización de la captura de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, quien al parecer estaba al frente de la Oficina. Durante la diligencia judicial, la Fiscal 14 Especializada de Bogotá, Berta Cecilia Díaz Neira, señaló directamente a Giovanni Marín y a Fabio Acevedo dirigentes de la Corporación, como los líderes que “representaban en Medellín los intereses de la banda Los Paisas, una estructura rural de la Oficina (Verdad Abierta, 2011).

3. Incidencia en espacios de participación social y comunitaria

En los últimos años se han presentado denuncias de organizaciones sociales sobre contradicciones con grupos armados ilegales en procesos de participación social, pero también por la incidencia ilegal en espacios de participación y representación como las Jun-

tas Administradoras Locales, las Juntas de Acción Comunal y los Comités de Presupuesto Participativo.

Durante la primera fase del proceso de desmovilización paramilitar algunas de las denuncias se centraban en los choques entre la Corporación Democracia y otras organizaciones conformadas por desmovilizados (Corporaciones Comunas de Vida y Paz, La Sierra con Futuro, Cementerio San Pedro, Campo Santo, entre otras) y las organizaciones comunitarias de la ciudad. Las denuncias se originaban por las presuntas acciones de intimidación ejercidas por estas organizaciones, lo cual se agravaba dado el poder militar que estas estructuras mantenían en la semiclandestinidad. En este sentido, los conflictos comunitarios estaban marcados por la confrontación entre organizaciones civiles y estas otras que poseían un evidente poder de intimidación y destrucción.

Posteriormente, luego del fracaso del proceso de desmovilización y en el marco de las múltiples acciones de violencia que se presentaban en los barrios de la ciudad, organismos de derechos humanos no gubernamentales e incluso estatales, del Ministerio Público (Observatorio de Seguridad Humana, 2011), advertían sobre diferentes modalidades de captura de recursos públicos mediante acciones como;

- Toma de organizaciones sociales y acciones de contratación de recursos públicos con el Estado local, en especial mediante la penetración de las Juntas de Acción Comunal³⁵.
- Apropiación de recursos públicos mediante diferentes modalidades de extorsión a contratistas, quienes eran obligados a transferir recursos públicos mediante acciones como cobro en dinero, en especie (materiales de construcción) o en la obligación de contratar mano de obra.

35 Modalidad que fue puesta en práctica por las milicias sobre todo en la comuna 13, donde eran ellos quienes ponían o intentaban comprar a los presidentes de juntas de acción comunal para que les entregaran parte de los recursos públicos a los que tenían acceso (Entrevista a habitante comuna 13, Medellín, 2012).

- Extorsión a destinatarios de políticas públicas de subsidios, como por ejemplo a usuarios del programa Fuerza Joven dirigido a jóvenes integrantes de grupos armados ilegales, quienes recibían ayudas en dinero a cambio de que se retiraran de las actividades ilícitas.

Mediante estas acciones no sólo se apropian de ingentes cantidades de dinero para el fortalecimiento de las organizaciones ilegales, sino también de la legitimidad pues éstas se convierten en intermediarios de las demandas de la ciudadanía y en “gestores” ante la institucionalidad de la ciudad. Esto explica en parte que en los últimos años se hayan presentado graves desórdenes en algunos barrios ante la acción de control de la Policía o en operativos que buscan capturar líderes e integrantes de los grupos armados ilegales, ocasiones en las cuales se han presentado confrontaciones entre pobladores y la fuerza pública. Pero tal vez lo más significativo es la constatación en diferentes procesos electorales de la existencia de una red clientelista al servicio tanto de los intereses de políticos como de grupos armados ilegales asociados.

VI. EN LA BÚSQUEDA DE SALIDAS AL LABERINTO

Los problemas de violencia que ha vivido Medellín han provocado que los temas de la seguridad y la convivencia hayan aparecido como un elemento central de preocupación de diferentes sectores sociales y políticos, al tiempo que ha sido un componente fundamental de la acción institucional en la que han confluído entidades de carácter nacional, departamental y municipal³⁶.

36 Si miramos los planes de desarrollo desde 1992, se pueden identificar a manera de antecedentes las definiciones hechas por los gobiernos municipales desde la administración de Luis Alfredo Ramos (1992-1994), la cual identificó la necesidad de un Plan Estratégico de Seguridad (PES). Así mismo, esta Alcaldía definió la conformación de la Asesoría de Paz y Convivencia. Luego en el gobierno de Sergio Naranjo (1995-1997) se define como centro la implementación de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia bajo el lema “Con seguridad habrá seguridad.” En la Alcaldía de Juan Gómez Martínez (1998-2000), el centro de la acción institucional local estuvo en la constitución del Programa de Convivencia Ciudadana, diseñado y ejecutado con un empréstito del BID con un monto de 25 millones de dólares. En estos dos últimos gobiernos se mantiene

Aunque la responsabilidad central del diseño y ejecución de las políticas públicas es un asunto de carácter esencialmente estatal, es claro que la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil es un asunto para destacar. En Medellín existe una amplia red de organizaciones sociales y de líderes que conocen el tema y poseen una larga experiencia en el diseño e implementación de proyectos sociales orientados a la prevención y generación de alternativas a la violencia.

En consonancia con un enfoque restringido de la seguridad, se le ha dado una gran trascendencia a la destinación de una enorme cantidad de recursos para mejorar sistemas de comunicación y movilización, una obsesión tecnológica expresada en la opción por un conjunto de dispositivos de video vigilancia. E incluso con expresiones de lo que se denomina el populismo punitivo, es decir, el impulso a propuestas que ven en el incremento de las penas y la reducción de garantías, las claves para mejorar los problemas de seguridad.

Por momentos se ha expresado en la ciudad en materia de seguridad y convivencia una idea restringida y/o instrumental de la participación ciudadana, según la cual ésta sólo debe estar enfocada en la asistencia a eventos, y su función es ser apoyo a la fuerza pública, sin mayores reconocimientos sobre su rol autónomo de seguimiento y control a la gestión pública.

En muchas de las acciones institucionales, a pesar de que existe una importante labor de diagnóstico, no hay un tratamiento di-

además en funcionamiento la Asesoría de Paz y Convivencia. En la alcaldía de Luis Pérez, en su Plan de Desarrollo "Medellín competitiva", se contempló un componente de convivencia y otro de seguridad ciudadana, aunque se terminó por privilegiar este último. Además se plantearon programas como "Compro la guerra" y la Política pública de seguridad y de reincorporación a la civilidad. En la administración de Sergio Fajardo (2004-2007) se adoptó el Plan de Desarrollo "Medellín compromiso de toda la ciudadanía", con sus programas de prevención de la violencia, fortalecimiento de la institucionalidad y el componente de paz y reconciliación, con un sistema de seguimiento y monitoreo a los procesos de desmovilización. En la administración de Alonso Salazar, las políticas públicas en materia de seguridad y convivencia se pueden rastrear en las líneas 1 y 2 del Plan de Desarrollo y en la política pública "Medellín más segura, juntos sí podemos", en la cual se reorientó la política de seguridad y convivencia.

ferenciado para las amenazas a la seguridad ni tampoco para los riesgos de la vida, integridad y libertad derivados de aquellas conductas que pueden ser catalogadas como contravenciones pero no como delitos. A veces se homologa, por ejemplo, la venta de drogas de uso ilícito con la venta informal de mercancías en la vía pública.

Pero es de notar que se han puesto en marcha acciones orientadas a la prevención de la violencia mediante el diseño de programas destinados a atención de jóvenes en alto riesgo, con gran probabilidad de vincularse a bandas o combos y en los cuales se contempla la atención a problemas de drogadicción, vinculación a ofertas educativas y culturales, actividades de servicio social y preparación para el desempeño laboral.

En lo que constituye un logro en las políticas de seguridad, mediante Acuerdo Municipal 022 de 2003, se aprobó una política para “la prevención y atención de las violencias sexuales que afectan a la ciudadanía, principalmente a mujeres, niñas y niños en la ciudad de Medellín”. Así mismo, desde el gobierno de Sergio Fajardo se creó el programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y, luego en el gobierno de Salazar, se sumó la Gerencia de Desplazamiento Forzado. Hoy en día, ambas dependencias se han unificado como Unidad Municipal de Atención a Víctimas.

Aunque en sentido estricto la desmovilización de grupos armados ilegales no es parte de las políticas de seguridad y convivencia de la ciudad, sí es evidente que los diferentes procesos que ha tenido la ciudad ameritan algunas consideraciones.

En nuestro país no es competencia del Estado local emprender estos procesos, los cuales están sujetos a la normatividad nacional y a la autorización del gobierno central para su concreción. Sin embargo en la ciudad, gracias a la gestión y decisión del gobierno local, se han concretado al menos tres procesos de desmovilización los cuales ya se han mencionado: el de las Milicias en 1994, el MIR- COAR en 1998 y el bloque Cacique Nutibara en 2003. Aunque estas experiencias, a excepción del MIR, tuvieron efectos contrarios a los esperados, denotan el interés por explorar otros caminos diferentes a la represión.

El asunto más polémico es el relacionado con los pactos de convivencia entre actores armados y en los que habido alguna mediación por parte de la Alcaldía y de la iglesia y que han contado con el apoyo de algunas organizaciones sociales.

Los antecedentes principales de estos procesos se dieron en la segunda mitad de la década del 90, cuando se creó en la Alcaldía de Medellín la Asesoría de Paz y Convivencia, la cual tenía entre sus funciones promover pactos de convivencia entre los grupos armados de la ciudad. Esto incidió en un descenso de los homicidios, a cambio de lo cual se convertía a los líderes de los grupos en interlocutores centrales para la definición de planes sociales en sus comunidades (Sepúlveda, 2010). Para 1999 se habían establecido en las ciudades procesos de mediación y pactos que comprometían a cerca de 160 bandas, combos y milicias para cubrir a unas 3.000 personas en 86 sectores de la ciudad (Martin, 2012: 328)

Dichos pactos fueron de corta duración, debido a las falencias en los seguimientos y, ante todo, porque coincidieron con reclutamientos y la centralización de la Oficina de Envigado, así como con la aplicación de la estrategia contrainsurgente en la ciudad. Al respecto son relevadoras las recientes declaraciones de Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, detenido en Argentina:

...Yo inicio un proceso de resolución de conflictos con tres bandas de Robledo Miramar, acompañado con el cura párroco del barrio. Hacemos unos pactos de no agresión, logró tener un buen impacto y monseñor Darío Monsalve, de la Pastoral Social, nos pide que extendamos esa experiencia (...) La idea era convencer a los jóvenes de sus posibilidades de liderazgo, pero sin dejar de adoc-trinarlos en la guerra contrainsurgente (...) planificamos política y socialmente el trabajo en Medellín (...) En la Iglesia nadie sabía de ese doble trabajo. En la Alcaldía de Medellín, el único que no sabía de ese proceso de las Autodefensas era el asesor de Paz y Convivencia, Luis Guillermo Pardo, porque en la Alcaldía no le tenían confianza (Verdad Abierta, 2013).

Lo dicho por Alias Mi Sangre evidencia los efectos perversos de este tipo de decisiones en las que, en lugar de afirmarse la pre-

sencia del Estado, dispuesto a ejercer un monopolio de la fuerza, se terminó por negociar el desorden y, por consiguiente, un fortalecimiento de los actores armados ilegales.

Lo expuesto hasta aquí permite apreciar la importancia que por más de dos décadas se le ha conferido a las políticas en seguridad y convivencia en la ciudad, algunos de sus aciertos y errores, los cuales son expresión de intereses y de enfoques divergentes en torno a la seguridad, pero también de intentos de avanzar en la construcción de ciertos consensos entre Estado y sociedad.

No existe ninguna duda de que en el territorio de la ciudad no debe existir ninguna otra fuerza distinta a la fuerza pública como encargada de la regulación legal de la seguridad y la convivencia. Sin embargo, tampoco debe existir ninguna duda de que como contraprestación obligatoria la fuerza pública debe actuar sin sombras, en el marco de la legalidad y sin la menor connivencia con los grupos armados ilegales.

Hay una gran cantidad de proyectos y programas que han demostrado su utilidad y pertinencia y que no sólo deben ser mantenidos sino fortalecidos. En especial, programas como los que han existido en el pasado para prevenir las dinámicas de vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de la institución educativa como un lugar central para las actividades de prevención, los programas de atención a víctimas, las iniciativas de memoria histórica y de atención a personas interesadas en abandonar de manera definitiva la violencia.

La experiencia de Medellín demuestra la necesidad de innovar en el diseño y aplicación de una política criminal que permita acometer a fondo la tarea de la desestructuración de las organizaciones criminales y que no esté solo orientada a la captura de jefes (los “objetivos del alto valor”), sino a afectar su poder económico. También se deberían probar otras opciones como la despenalización del consumo de algunas drogas, lo cual puede contribuir a la construcción de una nueva mirada frente al complejo fenómeno de la drogadicción.

Finalmente, en materia de convivencia es necesario hacer un enorme trabajo en el campo ético que tenga como objetivo la generación, difusión y fortalecimiento de valores democráticos y de una cultura de la legalidad. Acciones en este sentido en espacios públicos, como la institución educativa, el espacio público barrial y urbano en general, y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, son claves para la deslegitimar la violencia y socavar las bases que sustentan el poder de las mafias.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera, M., *Las FARC. La guerrilla campesina (1949-2010 ¿Ideas circulares en un mundo cambiante?* Bogotá: Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris, 2010.
- Alcaldía de Medellín. (2011). *Encuesta de Calidad de Vida 2011*. Medellín, Colombia.
- _____ (2012). *Proyecto de acuerdo Plan de Desarrollo "Medellín un hogar para la vida" 2012-2015*. Medellín, Colombia.
- Amnistía Internacional (2005). Informe. Recuperado de: http://www.pbi-colombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia_formacion/files/Documentos/Paramilitarismo/0509_AI-desmovilizacion_en_Medellin.pdf
- Angarita, P. Gallo, Héctor; Jiménez, Blanca Inés (Ed) (2008). *Dinámicas de guerra y construcción de paz: estudio interdisciplinario del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín*. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.
- Análisis Urbano (2013). *Se reafirma la existencia del Pacto del Fusil en Medellín*. Recuperado de: <http://analisisurbano.com/2013/08/04/se-reafirma-la-existencia-del-pacto-del-fusil-en-medellin/>
- Daza, A. (2001). *Experiencias de intervención en el conflicto urbano*. Medellín, Colombia: Alcaldía de Medellín.
- Duncan, G. (2013). La división del trabajo en el narcotráfico. Mercancía, capital y geografía del Estado. En Giraldo, J (Ed.), *Economía criminal y poder político*. (pp 113-161). Medellín, Colombia: Eafit-Colciencias.
- _____ (2013b). Una lectura política de Pablo Escobar. En *Revista Coherencia*. Vol. 10, núm. 19, pp 207-234

- _____ (2005). *Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Diario Oficial (1955). Decreto No 0014, 19 de enero.
- El Colombiano. (1951). Fumaderos de marihuana.
- _____ (2002). *Medellín. 20 años de llanto en las calles*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/conflicto_urbano/bandas.htm
- _____ (2010). *El empresario y "La Oficina"*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_empresario_y_la_oficina/el_empresario_y_la_oficina.asp
- _____ (2010). *Vacunas alimentan guerra.*, Recuperado de: www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/O/obras_vacunadas_por_combos/obras_vacunadas_por_combos.asp?pag=2&todos=1
- _____ (2010b). *Botín de guerra en Medellín supera los 700 millones de dólares*. Recuperado de [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us\\$700_millones/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us\\$700_millones.as](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us$700_millones/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us$700_millones.as)
- _____ (2010c). *Combos cobran "peaje" a las visitas de novios*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/combos_cobran_peaje_a_las_visitas_de_novios/combos_cobran_peaje_a_las_visitas_de_novios.asp
- _____ (2011). *Círculos solidarios. Garrote al pagadiario* Recuperado de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/circulos_solidarios_garrote_al_pagadiario/circulos_solidarios_garrote_al_pagadiario.asp
- _____ (2011b). *Huevos y arepas negocio de los combos*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/H/huevos_y_arepas_negocio_
- _____ (2012). *Así se organiza el crimen en Medellín y Antioquia*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_se_organiza_el_crimen_en_medellin_y_antioquia/asi_se_organiza_el_crimen_en_medellin_y_antioquia.asp
- _____ (2012b). *Investigan microtráfico y vacunas en canchas públicas de Medellín* Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/article/79349>
- _____ (2012c). *Así exterminaron a la temible banda 'La Terraza'*. Recuperado de: <http://www.ecbloguer.com/revelacionesdelbajomundo/?p=5071>

- _____ (2013). *Botín de guerra en Medellín supera los 700 millones de dólares* Recuperado de: [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us\\$700_millones/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us\\$700_millones.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us$700_millones/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us$700_millones.asp)
- _____ (2013a). *Inversión social en Medellín no logra parar las balas*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inversion_social_en_medellin_no_logra_parar_las_balas/inversion_social_en_medellin_no_logra_parar_las_balas.asp
- _____ (2013b). *A noviembre, 25,2 por ciento menos de homicidios en Medellín*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/a_noviembre_252_por_ciento_menos_de_homicidios_en_medellin/a_noviembre_252_por_ciento_menos_de_homicidios_en_medellin.asp
- _____ (2013c). *Botines de una guerra que no acaba*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botines_de_una_guerra_que_no_acaba/botines_de_una_guerra_que_no_acaba.asp
- _____ (2013d). *Aun sin balas persiste el temor en la comuna 13*, Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/aun_sin_balas_el_temor_persiste_en_la_comuna_13/aun_sin_balas_el_temor_persiste_en_la_comuna_13.asp
- _____ (2013e). *Los “pagos” de las urbanizaciones. Las cuentas criminales*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuentas_criminales/las_cuentas_criminales.asp
- El Espectador (2008). *El pulso político en Medellín*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso90799-el-pulso-politico-medellin>
- _____ (2013). *Queríamos que Castaño llegara a la presidencia*. Recuperado de:
<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/queriamos-castano-llegara-presidencia-articulo-449263>
- _____ (2013b). *El pacto criminal en Medellín*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/pacto-criminal-medellin-articulo-450844>
- _____ (2013c). *Criminalidad sistemática*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-421027-criminalidad-sistemica>
- El Mundo (2010). *La ciudad se encuentra en tregua*. Recuperado de: <http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impression.php?idx=140406>

- El Tiempo (2000). *En estampida la Terraza* Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1213958>. 14 de diciembre
- _____ (2010). *Fiscalía archivó el proceso penal que adelantaba en contra del alcalde de Medellín*, Alonso Salazar, Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/fiscalia-archivo-el-proceso-penal-que-adelantaba-en-contra-del-alcalde-de-medellin-alonso-salazar/7834545/1/home>
- _____ (2012). *La guerra urbana no le da tregua a Medellín*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12371884>
- _____ (2013). *Extorsión: el azote de medio país que mueve 2 billones de pesos al año*. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/extorsion-en-colombia/articulo-web-nota_interior_multimedia-12702998.html
- _____ (2013b). *'Pactos de fusil' sí llevan seguridad a barrios de Medellín*. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/articulo-web-new_notas_interior-13052002.html
- _____ (2013c). *Iguarán pidió perdón por líos en la Fiscalía*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3079347>
- Gambetta, D. (2010). *La mafia Siciliana el negocio de la protección privada* México: Fondo de Cultura Económica.
- Garay, J. y Salcedo. (2012). *Narcotráfico, Corrupción y Estados*. México: Debate.
- Garzón, J.C. (2008). *Mafia y Co*. Bogotá, Colombia: Planeta.
- Gayraud, J.C. (2007). *El G9 de las mafias en el mundo. Geopolítica del crimen organizado*. Barcelona, España: Tendencias Editores.
- Gil, M. (2012). *Paramilitarismo y conflicto urbano. Relaciones entre el conflicto político-armado nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín*. Tesis de Maestría en Ciencia Política no publicada. Medellín, Colombia.
- Giraldo, J. y Mesa, J. (2013). Reintegración sin desmovilización: el caso de las milicias populares de Medellín. En *Revista Colombia Internacional*, No 77, enero - abril 217-239
- Giraldo, J. (2008). Conflicto armado urbano y violencia homicida: el caso de Medellín. En *Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*. No(5): pp 99-113.
- Hora trece (2013) *La banda "Los Triana" estaría detrás de muerte de reclamante de tierra*. Recuperado de: <http://www.hora13noticias.tv/index.php/generales/item/la-banda-los-triana-estaria-detras-de-muerte-de-reclamante-de-tierras>

- Hoyos, J. (2013). *De vuelta al barrio*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/de_vuelta_al_barrio/de_vuelta_al_barrio.asp
- Infrarrojo (2012). *El pagadiario: la ruina de los pobres*. Recuperado de: www.youtube.com/watch?v=haY4LsmuQ_8
- Jaramillo, A. (1994). *Milicias populares en Medellín: entre la guerra y la paz*. Medellín, Colombia: Corporación Región.
- _____ (2012) Acerca de los estudios sobre conflicto armado y violencia en Medellín (1985-2009). En Giraldo, J. (Ed) *Economía criminal y poder político*. Medellín, Colombia: Eafit-Colciencias.
- Grupo de Memoria Histórica (2011). *La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13*. Bogotá, Colombia. Imprenta Nacional. .
- Instituto Popular de Capacitación (2008). Bandas criminales detrás de conexiones ilegales de agua en terminales de buses. En *PRENSA MEDELLÍN 2008\IPC 2008\IPC 13-08-08Bandas criminales, detrás de conexiones ilegales de agua en terminales de buses.doc*, 13 de agosto.
- López, C. (Ed.) (2010). *Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá, Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Martin, G. (2012). *Medellín: Tragedia y resurrección. Mafia, sociedad y Estado (1975-2012)*. Medellín, Colombia: Planeta.
- Medina F.G. (2006.) Una historia de las milicias de Medellín. Medellín, Colombia. Instituto Popular de Capacitación.
- Melo, J. (1994). *Hacia una política de convivencia: la experiencia de Medellín* En: Consenso, Recuperado de: <http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/convivenciam.pdf>
- Misse, M. (2009). Estado y mercados ilegales en Latinoamérica. Reflexiones a partir del concepto de mercancías políticas. ´ En: Giraldo, J. (Ed.) *Economía criminal y poder político*. Medellín, Colombia: Eafit-Colciencias.
- Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (2011). *Control territorial y resistencias. Una lectura desde la seguridad humana*. Medellín, Colombia.
- Personería de Medellín (2011). *Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Medellín. Primer semestre de 2011*. Medellín, Colombia.
- Restrepo, J.D. (2010). *Estructuras paramilitares desmovilizadas en Medellín: de la criminalidad a la fragmentación violenta*. Recuperado de: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_15.pdf

- Salazar, A. y Jaramillo, A. (1992) *Medellín: las subculturas del narcotráfico*. Bogotá, Colombia: Cinep.
- Sánchez, G. y Meertens, D. (2006). *Bandoleros, gamonales y campesinos*. Bogotá, Colombia: El Áncora Editores.
- Secretaría de Seguridad (2013) Homicidios en Medellín. Alcaldía de Medellín.
- Sepúlveda, J.G. (2010). *Vivencias urbanas de paz*. Recuperado de: http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/vivencias_urbanas_de_paz
- Perea, C. M. (2007). *Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder*. México: Siglo XXI.
- Restrepo y Franco (2012). '*Oficina de Envigado*':génesis, disputas y ciclos de reorganización de una empresa criminal. Documento inédito.
- Romero, M. (2003). *Paramilitares y autodefensas*. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y relaciones internacionales (Iepri). Universidad Nacional.
- Semana (2008). Bandas roban agua y la revenden revista semana 2008. <http://www.semana.com/on-line/articulo/bandas-roban-agua-revenden/94549-3>
- Tribunal Superior del Distrito Sala de Justicia y Paz, (13). Recuperado de: [www.saladejusticiaypazmedellin.com/...sala/.../auto_bloque_cacique_nutibara_4 de septiembre](http://www.saladejusticiaypazmedellin.com/...sala/.../auto_bloque_cacique_nutibara_4_de_septiembre).
- Uribe, M.T. (1989). La territorialidad de los conflictos y la violencia en Antioquia. En: *Realidad Social*. Medellín, Colombia: Gobernación de Antioquia. Medellín (1)
- Verdad Abierta (2011). *El ocaso de la Corporación Democracia*, 11 de marzo. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/50-rearmados/3107-el-ocaso-de-la-corporacion-democracia>
- _____ (2013). Policía Nacional armó al Frente Capital: Alias Mi Sangre. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/177-entrevista/4593-policia-nacional-armo-el-frente-capital-alias-mi-sangre/>
- Vélez, J.C. (2012). Conflicto y guerra, la lucha por el orden en Medellín. En: Espinal, Vélez y Pérez (Ed). *Ensayos sobre conflicto, violencia y seguridad ciudadana en Medellín*. Medellín, Colombia: Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia.

“ROBAR, PERO NO MATAR”¹

CRIMEN, HOMICIDIO Y VIOLENCIA EN BOGOTÁ²

Carlos Mario Perea Restrepo³
Andrés Rincón Morera⁴

El vendedor de un puesto ambulante ubicado sin falta en la misma calle de Ciudad Bolívar -la localidad con la reputación de ser la zona de mayor pobreza y conflictividad en Bogotá-, afirma sin vacilación que el robo y el consumo son las dolencias prominentes de la zona: “Aquí hay un pequeño problema, los ladrones y el vicio”. La violencia no entra en el listado de prioridades, no por falta de conciencia sobre ella, sino porque (según lo repitió varias veces)

1 El artículo hace parte del trabajo del grupo de investigación sobre ciudad del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, conformado por Andrés Rincón, Nancy Guzmán, Ricardo Moreno, María Eugenia González, Gloria Bermúdez y Sayra Rodríguez, bajo la dirección de Carlos Mario Perea.

2 Este escrito contó con el invaluable aporte de Sayra Rodríguez, los autores expresan la deuda con su contribución. Agradecemos los lúcidos comentarios de Claudia Arenas, Rocío Rubio, Melissa Gómez y Fabián Acuña.

3 Director IEPRI-Universidad Nacional de Colombia. carlosmarioperea@gmail.com

4 Antropólogo, investigador asociado IEPRI-Universidad Nacional de Colombia. andrinconm@unal.edu.co

el número de muertes ha descendido dejando de ser el motivo de gran preocupación. Desde la experiencia del otro oficio con que acompaña el puesto de venta, el de calibrador que informa sobre los itinerarios de los buses, asevera que “últimamente no pasa nada, ya no matan conductores”⁵. De tal modo en Ciudad Bolívar el hurto está disparado, “aquí no puede salir ni un niño con un billete porque se lo rapan”, pero el homicidio ha amainado.

Al testimonio, sin embargo, lo cruza cada tanto la inquietante evocación de las operaciones de limpieza. Los comerciantes las pagan, “les quitan el dolor de muela por quinientos mil pesos, cogen a los ladrones, les dan piso y listo”. Él mismo es avezado en la materia: “Nosotros fuimos a poner orden en unos barrios de por allá arriba”. En varios fragmentos condena el asesinato reprobando el uso indiscriminado de la violencia, pero acto seguido justifica la macabra acción de la “limpieza”: “No le quito nada a nadie, antes me da rabo que le quiten a la gente, pero si la justicia estuviera en mis manos esto aparecería lleno de muertos”. Su razonamiento justificando la muerte por mano propia queda sintetizado en una frase tomada de la biblia -también repetida varias veces-, según la cual “árbol que no da frutos hay que cortarlo, es muy feo pero el que no produce frutos no merece vivir”.

Robo al alza, violencia en descenso, condena de la muerte, justificación de la limpieza: las contradicciones que cruzan el testimonio de este vendedor ambulante de Ciudad Bolívar no obedecen, ni a la eventual ceguera de la que puede resultar preso un actor directo del conflicto, ni mucho menos a los supuestos desatinos que suelen acompañar la precariedad cultural. Todo lo contrario, las contradicciones de la narración expresan con claridad las tensiones del conflicto violento en Bogotá. En efecto, la capital es una ciudad donde abunda el crimen, el homicidio descende y la violencia se disemina. La afirmación cifra nuestro cometido, dar cuenta de sus

5 Vendedor ambulante y calibrador de Ciudad Bolívar. Entrevista No. 15. Las entrevistas están numeradas siguiendo el orden en que fueron sistematizadas. Todas se realizaron en diversas localidades de Bogotá entre los meses de marzo y octubre de 2012.

significados e implicaciones constituye el propósito de las presentes páginas. Lo haremos siguiendo la pista de cuatro premisas: la asimetría entre las esferas del conflicto violento; la fragmentación del crimen y la violencia; el mandato de “no matarás”; y la inserción social del acontecimiento violento.

La primera premisa está enunciada en el relato que abre estas páginas. Entre las esferas del conflicto violento bogotano hay asimetrías: robo, homicidio y violencia no por fuerza coinciden. Mientras el robo abunda y la violencia halla formas (como la operación de limpieza), el homicidio disminuye. Tales asimetrías advierten sobre la imposibilidad de reducir una esfera a la otra. De un lado, el crimen no supone por fuerza el homicidio: la criminalidad bogotana no hace del asesinato la estrategia privilegiada de sus modos de operación. Del otro, el homicidio no proviene sólo de la criminalidad: el acto de matar emerge también en contextos sociales por fuera de la ilegalidad, como los contextos comunitarios y la vida privada. Finalmente, la violencia no se agota en el homicidio: otras formas se diseminan, como los choques entre identidades juveniles. El conflicto violento de la capital se construye entonces sobre una relativa autonomía de sus criminalidades y violencias, ninguna condiciona de manera mecánica a las otras. La premisa tiene implicaciones cruciales al dejar sin fundamento dos extendidas creencias. La primera, si el homicidio baja la criminalidad y las otras violencias también lo hacen. La segunda, la criminalidad está por fuerza acompañada de violencia⁶. Las implicaciones para la política pública son directas. La asimetría entre las esferas supone la necesidad de diseñar esfuerzos diferenciados para cada esfera.

Bogotá carece de una criminalidad o una violencia cuyas gramáticas de dominio subsuman las demás -la segunda premisa-. No hay una estructura “piramidal” al estilo de Medellín, donde los combos diseminados en los barrios le rinden tributo a las bandas

6 Entre la academia esta segunda creencia tiene gran arraigo: la violencia se explica mirando la criminalidad.

y éstas, a su vez, al señor de la cúspide⁷. Tampoco existen bandas de traficantes entronizadas en las favelas controlando el ejercicio de las violencias al modo de Río de Janeiro. Todo lo contrario, los dos rasgos distintivos de Bogotá son la ausencia de dominaciones violentas y la acción localizada, rasgos que configuran un panorama de enorme fragmentación. Como en la premisa anterior, las implicaciones no se hacen esperar. El conflicto violento de Bogotá no puede ser visto con la lente de la *guerrerización* (¿de la *medellinización*?), esto es, de la lógica del conflicto armado⁸. Los actores de la guerra y sus estrategias de poder hacen presencia en Bogotá -no cabe duda-, sin que ello signifique la existencia de un actor violento o criminal enfrascado en el proyecto de expandir a gran escala la búsqueda de rentas, la apropiación de territorios, la dominación de actores. Las políticas públicas en materia de seguridad, como consecuencia, han de construirse de cara a esa abigarrada fragmentación.

No obstante, una vez lanzadas las premisas de la asimetría y la fragmentación es preciso volver la página para mirar el otro lado, el de las dependencias mutuas entre las tres esferas (tercera premisa). Más allá de la comprobación obvia del caos y la muerte que suele acompañar la criminalidad, las esferas del conflicto violento bogotano se conectan mediante un mandato cifrado en la fórmula de “no matarás”. Su origen se remonta 20 años atrás, cuando Colombia enfrentó la triste realidad de ser el país más violento de Occidente mientras Bogotá alcanzó su punto más alto de homicidio. La reducción de la muerte violenta se convirtió en insignia de la ciudad que entró en un intenso proceso de transformación. Es aún

7 El control de la cúspide está en disputa desde la extradición de alias Don Berna en 2008. Las comillas indican que la pirámide es cambiante y está atravesada por conflictos. Diversos sectores insisten en el término red (no de pirámide) pero ello suprime la estructura vertical y jerárquica que caracteriza la situación de Medellín.

8 Una interpretación dominante en Colombia reduce el conflicto violento al conflicto armado (entendido como la confrontación entre actores en armas), suprimiendo otras violencias y de paso emborronando la ciudad. Hablaremos entonces de conflicto violento. La ciudad tiene su especificidad en tanto el conflicto armado llega de manera precaria a sus calles. El punto en Perea (2013).

hoy el orgullo bogotano, el de la megalópolis que mutó controlando el homicidio y tras él la criminalidad. Poco importa que el crimen aumente, como lo pone en evidencia el exceso de robos en Ciudad Bolívar. El lema “no matarás” se transforma en la consigna “robar, pero no matar”. La ciudad se lee en ese referente de identidad anclado en la reducción sin pausa del homicidio.

Incluso es el homicidio, no la violencia. Una ciudad enorme como Bogotá se confirió una identidad, las ciudades lo hacen pese a las hondas inequidades que las constituyen. La conciencia colectiva se nutre de un signo capaz de proporcionar una interpretación de lo real y un código regulador de la conducta (Geertz, 1992). “No matarás” circula en la capital como una consigna dotada de eficacia normativa. Empero, como suele acontecer con los regímenes simbólicos el reconocimiento mutuo se construye también sobre aquello que se excluye y castiga (Deleuze y Guattari, 1988). En Bogotá se encarga de recordarlo el vendedor de Ciudad Bolívar con su acalorada defensa de la operación de limpieza. De tal suerte, el mandato bogotano del “no matarás” ni erradica del todo el homicidio, ni suprime la circulación de otras violencias, ni elimina la criminalidad. La simbólica se traza sobre unos bordes más allá de los cuales brotan la exclusión y la violencia, con mayor fuerza en una ciudad donde la marginalidad y la exclusión son marcas distintivas de la vida urbana. Las implicaciones se hacen evidentes. La seguridad ciudadana no es un mero asunto de incremento de los recursos para la represión policial (Bogotá no sobresale por el tamaño de su aparato de seguridad)⁹. Es, antes bien, un proceso que arrastra un conjunto de ejecutorias encaminadas a moldear las estructuras profundas de la conciencia pública de la ciudad.

Finalmente, se toma distancia del enfoque del conflicto centrado en el agente violento (en las ideaciones y estrategias que usa en la búsqueda de sus intereses), reduciendo la sociedad al papel de simple actor pasivo. Es la cuarta premisa. Entre ilegalidad y so-

9 En 2007 Bogotá era la ciudad con la tasa de policías más baja entre 9 ciudades (Mokus, Murraín y Villa, 2012: 12).

ciudad hay más de un intercambio: el crimen se reproduce en un contexto social que lo alimenta y la sociedad cumple su función en la producción de lo violento. La inserción social del acontecimiento violento –el concepto del que nos valdremos– supone considerar la inscripción de lo ilegal en el tejido social donde toma cuerpo. Se trata de identificar los agentes de la criminalidad (la organización y sus prácticas), entrecruzados con sus formas de ocupar el territorio mediante el establecimiento de vínculos con las personas que allí habitan. No sólo eso: la inserción social también se ocupa de establecer la conexión con los horizontes de sentido imperantes en la ciudad (en Bogotá el signo de “no matarás”)¹⁰. Las implicaciones, en este caso, recaen sobre el contenido de la investigación. El estudio se estructuró sobre un trabajo de campo en siete localidades sin entrar a considerar criminalidades no localizadas como la de cuello blanco o el lavado de activos¹¹.

Volvemos entonces a la afirmación, “Bogotá es una ciudad donde abunda el crimen, el homicidio descende y la violencia se disemina”. Dar cuenta de ella, se dijo, cifra nuestro cometido. El texto se ordena en tres partes, cada una dedicada a un enunciado de la afirmación. En la primera se aborda “El homicidio descende” mostrando su traducción en el mandato de “no matarás”, dividido en cómo se expresa el mandato (primer capítulo) y cómo se construyó (segundo). En la segunda parte se considera la afirmación “Abunda el crimen”, dividida en la resemantización del mandato (tercero), la caracterización del crimen (cuarto) y sus formas de estructuración (quinto). En la tercera parte se profundiza en la aserción “la violencia se disemina”, atendiendo la existencia de “enclaves violentos” (sexto), la difusión de la violencia (séptimo) y, finalmente, la diseminación del acontecimiento violento (octavo). A modo de cierre, la conclusión hace una aproximación al qué hacer tanto desde la sociedad como desde las políticas públicas.

10 La inserción social se apoya en una noción de tejido social que involucra tanto los intercambios sociales efectivos como los horizontes de sentido que los informan.

11 Por supuesto la investigación se estructura también con entrevistas a expertos, sistematización de archivos (prensa, datos criminalidad, indicadores de Bogotá) e informaciones secundarias.

PRIMERA PARTE

El homicidio desciende: “no matarás”

En Bogotá se ha instalado una conciencia pública en torno al homicidio y su reducción. Los funcionarios del Estado, incluyendo los cuerpos de seguridad, reproducen sus discursos y actúan en consecuencia. No es tan sólo un asunto estatal, es también una conciencia que cruza los procedimientos del ciudadano común y corriente, incluida la delincuencia. El mandato de “no matarás” preside la ciudad. ¿Cuál es su realidad efectiva y cómo se construyó?¹²

I. HOMICIDIO EN DESCENSO

En el paso del siglo XX al XXI Bogotá se convirtió en ejemplo canónico de la gran ciudad capaz de reducir de manera sistemática el homicidio¹³. Algunas otras urbes del mundo ostentan títulos similares, redujeron y mantuvieron la violencia en niveles bajos. Lo notable de la experiencia bogotana, no obstante, se debe a la condición de ser la más populosa aglomeración urbana de un país desgarrado por un largo e intenso conflicto armado. Pese al contexto nacional, el homicidio desciende, lo hace con marcada intensidad manteniéndose al margen de nuevos brotes sangrientos. Es la notoriedad bogotana y el ingrediente básico del mandato, la realidad “dura” de un homicidio que cae en picada¹⁴.

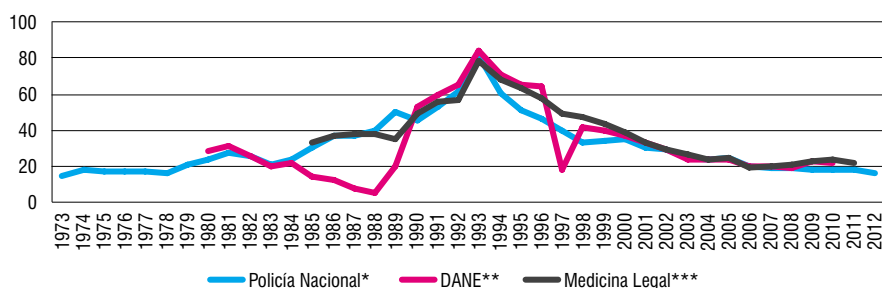
12 La tarea de mostrar la construcción de un mandato de esta naturaleza, en todas sus implicaciones desborda el alcance de estas páginas. Nos limitamos a mostrar su comportamiento, las ejecutorias públicas que le dieron lugar y referencias etnográficas que le muestran actuando en la vida corriente de la ciudad.

13 En 2011 Bogotá posee 7'467.804 habitantes al tanto que Medellín, la segunda ciudad, tiene 2'368.282.

14 En México, antes de la crisis de 2007, se identificó una estructura simbólica que amonorraba las violencias. Se llamó “la ley del no exceso”, una regulación que detiene los desbordes violentos una vez empiezan a dislocar la convivencia local (Perea, 2008).

El ascenso y el descenso de la tasa de homicidio en Bogotá saltan a primera vista. Es un comportamiento que presenta la misma tendencia en los reportes de tres instituciones autónomas en el manejo de la información (Gráfico No. 1). Haciendo a un lado el decremento del DANE entre 1984 y 1989, desde finales de la década del 70 la capital experimentó un ascenso sostenido que alcanzó su punto más alto en 1993¹⁵; en el curso de 15 años el homicidio se incrementó en más del 400%. A partir de ese año la curva llega a un punto de inflexión, dando inicio a un descenso no menos espectacular, hasta su estabilización desde 2003 en tasas por debajo de 25 homicidios por cien mil habitantes. La caída es palmaria. En 2012 (según la Policía) alcanza el nivel que tuviera 40 años atrás, cuando a comienzos de los 70 arrancara con tasas de homicidio cercanas a 15¹⁶.

Gráfico No. 1
Tasa de homicidio de Bogotá según tres fuentes. 1973-2012



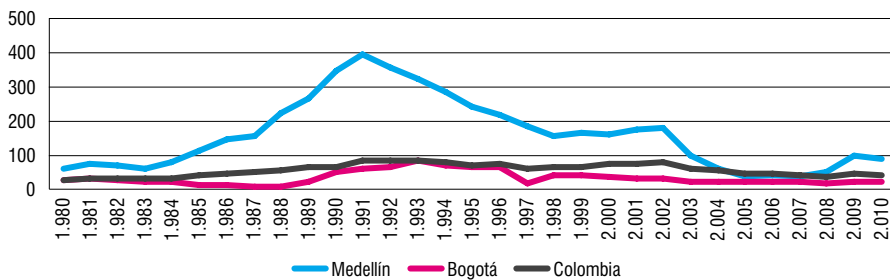
Fuente: Policía Nacional: Revista Criminalidad. Cálculos nuestros.
 DANE: Estadísticas Vitales. Defunciones no fetales. Defunciones por Causa Externa. Cálculos nuestros. Medicina Legal: Fundación Ideas para la Paz (2013).

15 Para la Policía Nacional con una tasa de 81, para el DANE de 84 y para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 78.

16 Diferentes argumentos se han esgrimido para explicar el descenso. Los más significativos son el fortalecimiento institucional nacional (Casas y González, 2006); las políticas distritales, cuyo peso varía de un autor a otro (Castro y Salazar, 1998; Sánchez y Niño, 2002; Acero, 2002); la constitución de alianzas políticas (Gutiérrez, Pinto, Arenas y Guzmán, 2009); las dinámicas de la criminalidad organizada (Rubio, 1999; Formisano, 2002; Llorente, 2005; FIP, 2013; Ávila, 2013). En su momento se incluirán los comentarios a estas posiciones.

La trayectoria de incremento en la década del 80 y descenso posterior la siguen igual Colombia y Medellín (Gráfico No. 2)¹⁷. La inflexión de Medellín se produce en 1991 y la nacional en 1992, un poco antes de Bogotá. Entre las tres curvas, empero, existe una diferencia sustancial. La de Bogotá desciende de manera sostenida¹⁸, las otras dos detienen su caída en 1998 ascendiendo hasta 2002¹⁹. Además Medellín vive un nuevo ciclo violento en 2008. De tal modo Bogotá comprime con celeridad su homicidio y lo hace sin la aparición de nuevos brotes violentos, dando muestras de un comportamiento caracterizado por la caída sostenida durante las dos últimas décadas.

Gráfico No. 2
Tasa de homicidio de Colombia, Medellín y Bogotá. 1980-2011



Fuente: DANE: Estadísticas Vitales. Defunciones no fatales. Defunciones por Causa Externa. Cálculos nuestros

En el conjunto de las 61 ciudades de Colombia²⁰, una vez se comparan las tasas promedio entre las décadas del 90 y el 2000, Bogotá ocupa el séptimo puesto en reducción del homicidio (Cuadro No. 1). Le toman la delantera seis ciudades de Antioquia, las cuales

17 Las ciudades de Colombia siguen un patrón variable de una región a otra, aunque en general se verifica la disminución a partir de comienzos de los 90 (Perea, 2013).

18 Sólo para la Policía se produce una interrupción entre 1998 y 2000, cuando sube de 33 a 35 (Gráfica 1).

19 Son años de recrudecimiento de la guerra con ocasión de la expansión de la guerrilla y el paramilitarismo.

20 Se entiende ciudad como la aglomeración urbana que en el año 2011 tiene más de 100 mil habitantes.

tuvieron tasas astronómicas en los 90. Durante la siguiente década se comprimen, sin que ello signifique su reducción por debajo de 70 homicidios por cien mil habitantes (con la excepción de Envigado). Bogotá no tiene un pasado tan violento (en los años 90 tiene una tasa promedio de 56), presentando un promedio de 25 homicidios por cada cien mil habitantes durante la primera década del nuevo siglo. Sin embargo, otra vez, la reducción bogotana muestra un descenso sostenido sin la presencia de nuevos ascensos, condición no exhibida por ninguna ciudad antioqueña²¹.

Cuadro No. 1
Diferencia en la tasa promedio de homicidio décadas 90 y 2000
(primeros 10 lugares)

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DÉCADA 90	DÉCADA 2000	DIFERENCIA
Antioquia	Apartadó	316	74	-77
Antioquia	Envigado	137	36	-74
Antioquia	Medellín	267	93	-65
Antioquia	Turbo	204	78	-62
Antioquia	Bello	184	71	-62
Antioquia	Itagui	218	90	-58
Bogotá D.C.	Bogotá	56	25	-55
Antioquia	Rionegro	147	67	-54
Santander	Piedecuesta	30	15	-51
Cundinamarca	Chía	30	15	-51

Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Defunciones no fatales. Defunciones por Causa Externa. Cálculos nuestros

La percepción según la cual “últimamente no pasa nada, ya no matan conductores”, expresada por un vendedor de dulces en

21 Como Medellín las restantes ciudades interrumpen la caída en 1998 ingresando en un episodio violento, incluyendo Envigado (la de menor tasa en los 2000).

Ciudad Bolívar²², se refiere a un comportamiento característico del conjunto de la ciudad. La alusión de un homicidio a la baja se repite en múltiples testimonios de personas que habitan los enclaves violentos (zonas de conflicto donde el homicidio mantiene todavía una elevada intensidad, según se verá en el capítulo 6). Un morador del barrio Las Cruces, situado en Santa Fe (la localidad con las tasas de homicidio más elevadas de la ciudad), dice que “eso es en lo que ha cambiado el barrio, hay índices altos de atracos pero muertos casi no” (Joven de Santa Fe. Entrevista 23).

Los avances de Bogotá no se limitan al homicidio, se extienden también a la criminalidad. La fiabilidad de la información sobre los delitos contra el patrimonio económico es objeto de controversia dado que multitud de acontecimientos no son reportados a las autoridades²³. La encuesta de victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, aplicada desde 1998, muestra cómo en el curso de 15 años se ha victimizado el 34% de los encuestados: 14% de forma directa y un 19% indirecta²⁴. De los victimizados directamente sólo la tercera parte denuncia el hecho ante las autoridades, hecho que hace visible el abismo entre el delito real y el que se conoce públicamente. Pese a ello, los reportes de la Policía son el material disponible para la comparación, empleados en el presente texto una vez hecha la advertencia de su limitación.

Cuando se compara el comportamiento de los delitos de alto impacto durante las últimas dos décadas en Bogotá, Medellín y Colombia, se hacen visibles los grandes avances de la capital. La Gráfica No. 3 ofrece un cuadro revelador: en todos los casos es la ciudad don-

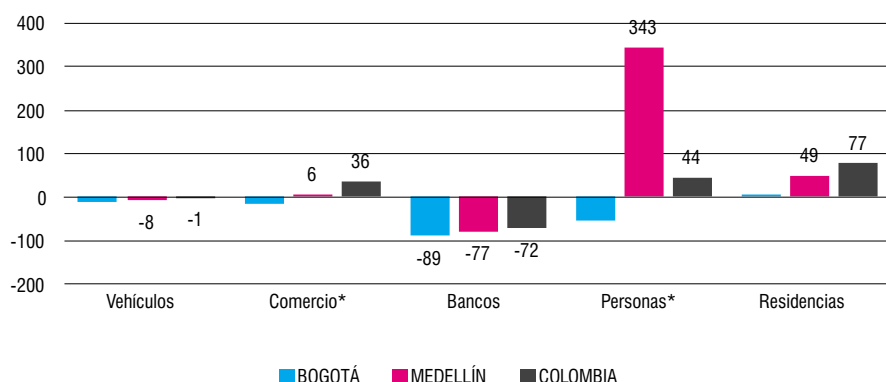
22 La localidad de Ciudad Bolívar tiene zonas que clasifican como enclaves violentos; el homicidio ha bajado considerablemente pero aún mantiene niveles preocupantes.

23 El dato del hurto de bancos y vehículos es más fidedigno pues el pago de los seguros exige un denuncia formal; el denuncia del hurto a comercios, residencias y personas depende de un manojito de circunstancias ligadas al valor de los bienes arrebatados, el eventual daño a la integridad física y hasta la “credibilidad” de los afectados en las instituciones de policía y justicia.

24 Directa: ataque personal; indirecta: ataque a algún miembro de la familia; índice de victimización: suma de la directa y la indirecta (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013).

de más descienden (en color rojo)²⁵. En primer término en el hurto a comercio, un delito en extremo sensible por cuanto su ocurrencia impacta la actividad productiva que emplea casi la tercera parte de la población ocupada de la ciudad (el 28%)²⁶. Bogotá es la única que desciende (15 %), mientras Medellín y Colombia ascienden²⁷. En el hurto a residencias Bogotá es la única que baja con un pequeño decremento (3%). En el hurto a personas una vez más Bogotá saca ventaja con una diferencia más grande, el 52%. En el hurto de vehículos Bogotá y Medellín disminuyen casi lo mismo; mientras que en el robo a bancos todas las ciudades bajan su índices, pero es la capital la que más lo hace con un decremento del 89%.

Gráfico No. 3
Diferencia en el hurto a comercio, residencias, personas, vehículos y bancos
Bogotá, Medellín y Colombia. 1993-2007



* Comercio. En cada década se incluyeron 7 años: 1994-2000 y 2001-2007.

* Residencia: En cada década se incluyeron 9 años: 1990-2000 (sin datos de 1992) y 2001-2009.

* Personas: En cada década se incluyeron 7 años: 1994-2000 y 2001-2007.

* Vehículos y bancos: En cada década se incluyeron 9 años: 1991-1999 y 2000-2008

Fuente: Revista Criminalidad. Policía Nacional. Cálculos nuestros.

25 Se excluyó Cali de la comparación pues sus elevados datos suprimen el detalle. Ciertamente, en la capital del Valle el hurto a comercio subió 249, a residencias 737, a personas 2307 y a vehículos 120%. El único que disminuyó fue el hurto a bancos en un 61%.

26 El comercio ocupa económicamente el mayor porcentaje de la ciudad, le siguen después los servicios a empresas y personas (23%) y la industria (17%). (DANE, 2012).

27 En cada delito faltó información de algunos años. El reporte de cada caso aparece en la nota de pie de página del Gráfico No. 3.

Bogotá manifiesta un inquebrantable comportamiento virtuoso. Entre las dos décadas, mientras mantiene una sostenida tendencia a la disminución del homicidio, también muestra las mayores mejorías en el control de la criminalidad. La ciudad puede decir que la transformación en la que se comprometió desde la década del 90 está respaldada en los indicadores de seguridad. El mandato de “no matarás” tiene su principio de realidad en la contención del crimen y la violencia.

II. SEGURIDAD Y CIUDADANÍA: DISCURSO E INSTITUCIÓN

¿Cómo se construyó el mandato? Una mezcla de institucionalidad con sus emprendimientos, renovados referentes simbólicos y alianzas políticas presiden la gran transformación que experimenta la ciudad a partir de comienzos de la década del 90. Las políticas públicas de seguridad de las administraciones de las dos últimas décadas pueden ser divididas en tres momentos²⁸. El primero un preámbulo que permitió el despegue de un proyecto urbano de grandes proporciones²⁹. El segundo, que denominamos “la época de oro”, cuando se sientan y afianzan los fundamentos que hacen posible la transformación. El tercero la sostenibilidad, momento en que se mantienen y profundizan las condiciones creadas con anterioridad³⁰. Cada alcaldía coloca su toque distintivo al proyecto de construcción de ciudad; empero, pese a las marcadas diferencias -y los reveses de las dos últimas administraciones³¹-, Bogotá

28 Un análisis de las administraciones Mockus (1995-1997 y 2001-2003) y Peñalosa (1998-2000) en Martín y Ceballos, 2003; Llorente y Rivas, 2004. El balance de las alcaldías Garzón (2004-2008), Moreno (2008-2011) y lo que va de la actual en Acero et al, 2013.

29 Corresponde a la alcaldía de Jaime Castro (1992-1994), período en que se expidió el Estatuto Orgánico que posibilitó una vasta reorganización administrativa y financiera, incluido un desarrollo en el tema de seguridad (PNUD, 2008; Martín y Ceballos, 2004).

30 La fase de oro toma cuerpo en los dos períodos de Mockus y Peñalosa; la de sostenibilidad en las alcaldías de Garzón hacia adelante.

31 Moreno fue destituido por corrupción y en su reemplazo se nombró a Clara López (junio 2011-2012), quien reemprendió con tino la gestión gubernamental. Petro fue destituido en diciembre de 2013 por la peouraduría, con base en medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

se mantiene en un horizonte de continuidad que permite la pervivencia del mandato. En el intento de hilvanar nuestro punto, dos operadores se perfilan como nudos simbólicos de la construcción pública del “no matarás”, la seguridad y la ciudadanía.

1. La seguridad

El nudo simbólico de la seguridad adquiere relieve público por su conexión directa con el desarrollo urbano, todo lo cual supuso que dejara de ser un tema más para pasar a instituirse en motor de cambio. Los gobiernos de ese entonces enfrentaron el reto de transformar una ciudad reputada de insegura, atascada y sucia. Ante tamaño desafío, la estrategia adoptada consistió en el emprendimiento de planes globales articulados alrededor de la mejoría de las condiciones de vida, la productividad económica y la legitimidad de las instituciones, todo bajo el supuesto de que tales acciones tienen un sustrato en la regulación de los comportamientos ciudadanos: la de cada individuo (moral), la ejercida entre personas (cultura) y la emanada de las normas constitutivas del Estado (ley) (Mockus et al., 2012). Los planes de gobierno de los dos períodos de Antanas Mockus resultan incomprensibles sin el énfasis puesto sobre la cultura ciudadana. El plan de Peñalosa, por su lado, no hace mención explícita de ella; pero la prioridad concedida a la reconstrucción del espacio público cinculó la admirable continuidad que hizo de esos años la época de oro de la ciudad. En efecto, los avances en movilidad por el inicio de Transmilenio y la transformación de espacios, plazas y parques en sitios de circulación humana crearon el sustento material sobre el que fue posible una renovada relación de las personas con la ciudad³². Cada administración le imprimió su propio matiz, pero entre ellas se tendió un hilo conductor que hizo de lo público un asunto de interés ciudadano.

32 La intervención del espacio público tenía en mente un modelo igualitario de ciudad: en el trabajo y la casa las gentes mantienen sus diferencias, en el espacio público son iguales –afirmaba Peñalosa–.

La seguridad era el corazón del proceso, un signo descifrado mediante una sistemática labor sobre el homicidio y la convivencia. La preocupación frente a la muerte hacía parte de un esfuerzo nacional. A comienzos de la década del 90 la paz era un clamor generalizado, la reducción del homicidio uno de sus decisivos indicadores; Colombia venía del trágico período de la segunda mitad de los años 80, años cruzados por una cruenta guerra contra el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares y toda suerte de expresiones criminales. La Constitución Política de 1991 fue un mandato de paz, sus disposiciones buscaron transformar las instituciones y las costumbres políticas que habían servido de caldo de cultivo a la guerra y la violencia³³. Bogotá hizo parte del proceso nacional convirtiendo la reducción del homicidio en una apuesta primordial³⁴, propósito buscado mediante su introducción en un contexto discursivo singular. No se trató sin más de una confrontación contra los agentes violentos sino, antes bien, de una tentativa de erradicar el homicidio a través de la transformación de la convivencia.

En las alcaldías de Antanas Mockus se funden en un solo haz las nociones de homicidio y convivencia, como lo hacen saber sus diversas iniciativas: programas de desarme y mandatos de paz entre grupos en lucha; control del porte de armas; hora zanahoria para los establecimientos nocturnos; tarjetas de regulación ciudadana; mimos pedagógicos; ceremonias de perdón y tramitación de la violencia, entre otras (Formisano (2002), Sánchez, Espinoza y Rivas (2003) Llorente (2005)). El nombre de la entidad distrital responsable del tema, Subsecretaría de Asuntos para la Seguridad y la Convivencia -adscrita a la Secretaría de Gobierno a partir de 1997-, pone en claro los nexos que van de uno a otro término³⁵. Para Pe-

33 En simultaneidad con la nueva Constitución se clausuró la guerra contra el cartel de Medellín y se reinsertaron organizaciones guerrilleras y grupos paramilitares. En esos años arranca la inflexión del homicidio nacional.

34 La caída del homicidio bogotano arranca en 1993 en resonancia con los procesos nacionales. Pero en 1995 empieza el proceso que le conferirá la autonomía dibujada en la sección anterior.

35 El título del libro donde Mockus y su equipo dan cuenta de un sostenido trabajo sobre cultura ciudadana, *Antípodas de la violencia* (2012), muestra una vez más el vínculo entre seguridad, cultura y violencia.

ñalosa, por su parte, la edificación de una nueva convivencia nutre el sentido de las obras que terminan por transformar el paisaje urbano. El desarrollo urbano no se redujo a la promoción de una empresa económica orientada a incrementar los rendimientos y la productividad, fue una labor atada a circuitos ampliados de la vida colectiva que tenían su alma en la convivencia.

Naturalmente la agenda pública de la seguridad demandó el desarrollo de una institucionalidad que la tornara realidad. Según la Constitución de 1991 el presidente, los gobernadores y los alcaldes son los responsables del orden público dentro de sus respectivas jurisdicciones. La norma se cumplió con creces en Bogotá. El liderazgo del alcalde llevó la seguridad, de un asunto privativo de la Policía y las fuerzas de seguridad, a un andamiaje institucional encabezado por su autoridad³⁶. Tres líneas institucionales se abren de ese momento en adelante. Primero, una serie de instancias encargadas de la gestión directa de la seguridad; además de la constitución de la mencionada Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, se crearon los Consejos de Seguridad, los Comités de Orden Público y los Consejos Locales de Seguridad, todo bajo la égida de Planes de Seguridad globales³⁷. Segundo, se convocaron otras instituciones relacionadas con el tema a los Consejos de Seguridad convirtiendo la preocupación por el tema en propósito colectivo del aparato gubernamental. Tercero, se promovieron instancias productoras de información, desde observatorios hasta estudios académicos sobre el conflicto y la violencia³⁸. Del mismo modo la reactivación del Fondo de Seguridad (creado por el acuerdo 9 de 1980) fue un ingrediente clave en tanto el sistema no operaría sin la debida asignación presupuestal: si en 1998 se invirtieron \$16 mil millones,

36 Martín y Ceballos (2004) y Acero y colaboradores (2013) insisten en la importancia capital del liderazgo del alcalde para retomar la autoridad civil del orden público. Mirar también Camacho (1994) y Gutiérrez y colaboradores (2009).

37 Una presentación de estas instituciones y las sucesivas reglamentaciones que las rigen en Acero y colaboradores (2013).

38 Primero se armó el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia (SUIVD), luego convertido en el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC).

en 2012 se destinaron \$113 mil (Acero, Parra y Castillo, 2013). Por último, las instituciones policiales y de seguridad pasaron por un conjunto de reformas³⁹. La simbólica sobre la seguridad ciudadana tomó cuerpo en una vigorosa armadura institucional que hizo posible su emergencia, consolidación y permanencia.

2. La ciudadanía

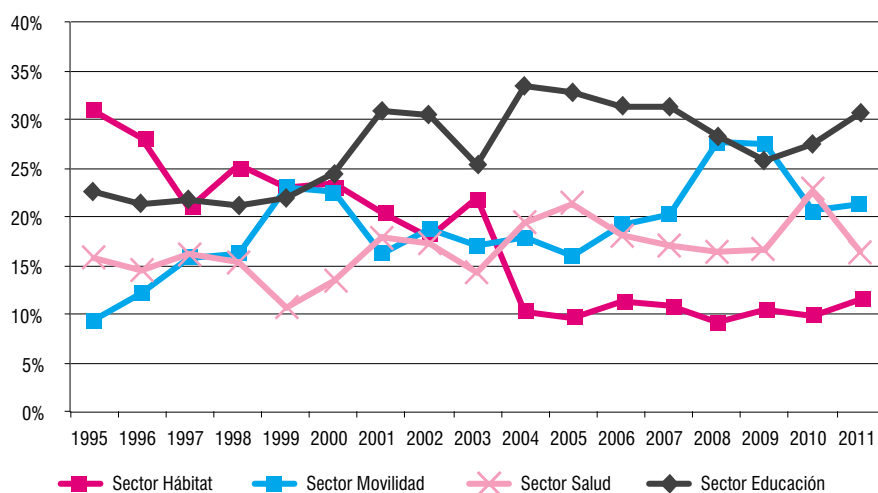
El mandato de “no matarás” se completa con la referencia simbólica a la ciudadanía construida sobre la clásica tensión entre derechos y deberes (Kymlicka, 1996). No sin razón se afirma que, en Colombia, la ciudadanía hizo su verdadera irrupción pública con la Constitución de 1991. La redacción de una carta de navegación centrada en el reconocimiento de derechos apoyados en la creación de aparatos institucionales que los protejan –la tutela y la Corte Constitucional-, llevaron la ciudadanía a un plano más allá de los partidos políticos y la representación electoral. La capital recogió ese espíritu presente en el escenario nacional, practicando la singular operación de traducir en acciones el derecho al disfrute de la ciudad, así como demandando el cumplimiento de determinados deberes.

La ciudad mutó en numerosas direcciones. Junto a la señalada reconstrucción de espacios públicos, las condiciones de vida mejoraron al punto de convertirla en el municipio con los más elevados indicadores de calidad del país. La cobertura en materia de servicios públicos está por encima del 99%, con la salvedad del gas natural y el teléfono (85 y 72%). Tiene los años de escolaridad, la seguridad en salud y el uso de bienes en el hogar más altos del país, mientras muestra los más bajos índices en necesidades básicas in-

39 Mockus promulga un Código de Policía (Acuerdo 79 de 2003) que a diferencia del hasta entonces vigente (Acuerdo Distrital 18 de 1989), introduce los derechos humanos y la protección de la vida previendo deberes y convivencia. Se pretendía promover un código de civilidad fundado en la prevención y la autorregulación. La reforma policial en Camacho (1994) y Socha (2013).

satisfechas⁴⁰. La inversión social se ha mantenido a lo largo de los años con un ascenso en educación y movilidad (Gráfico No. 4), al tanto que la mayor inversión se ha efectuado en zonas precarias económica y socialmente (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy y Engativá). El derecho al disfrute de la ciudad ganó terreno, el suficiente para fundar la percepción de una gran urbe en trance de mutación. Bogotá está lejos de resolver sus graves problemas de inequidad pero la mejoría se hizo visible en uno y otro rincón de la ciudad.

Gráfico No. 4
Ejecución del presupuesto de inversión*
Sectores con más del 10% del total



* Pesos constantes de 2012.
 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. Cálculos nuestros.

No fue sólo un problema de derechos, lo fue también de deberes. La cultura ciudadana deposita en el compromiso y la responsabilidad de cada persona la contrapartida de las gestiones del Estado.

⁴⁰ Los datos de NBI en DANE (2005), los restantes en Encuesta de Calidad de Vida 2010. La exposición de estos datos en Perea (2012).

Es el principio de la corresponsabilidad, el otro componente sin el cual cojea cualquier iniciativa gubernamental. La relación del ciudadano con lo público entra en nuevas cadenas de significación, es el punto primordial. Bogotá transforma su espacio público modificando el sentido de cuidado de la ciudad, permitiendo que la enseña de “lo público es sagrado” gane audiencia⁴¹.

Las administraciones que vienen después del segundo Mockus retoman y profundizan el impulso en una multiplicidad de aspectos. Luis Eduardo Garzón, para el caso, incluye el concepto de seguridad ciudadana en la perspectiva de los derechos humanos. La seguridad se incluyó en el eje de Reconciliación, marco indispensable para el fortalecimiento de las instituciones policiales y los organismos civiles encargados del tema, línea seguida por las alcaldías posteriores enfatizando la constitución de una ciudad de derechos (Acero, et al., 2013). La fase de consolidación (tercer período de las políticas públicas de la ciudad) ha mantenido el espíritu de innovación y compromiso con la ciudad bajo el que Bogotá se entregó a la transformación. Pese a que el liderazgo del alcalde, los planes y la coordinación interinstitucional en seguridad dejan qué desear –esos puntales del anterior momento- la inversión social y las instituciones de seguridad y convivencia continúan su marcha apoyada en una inversión presupuestal creciente (Acero, et al., 2013). Bogotá encarna un notable proceso que redujo el crimen y la violencia en medio de un país enfrascado en un crudo conflicto armado. Sobre esa mutación se cuece el mandato de “no matarás”.

41 Mockus y su equipo (2012) insisten en la corresponsabilidad como un valor básico, al tiempo que hacen de la consigna “lo público es sagrado” un principio fundante de la acción política y ciudadana. En 2002 Mockus pidió un pago voluntario del 10 % adicional en los impuestos predial y de industria y comercio. Durante los siguientes tres años la respuesta fue considerable.

SEGUNDA PARTE

El crimen abunda: “robar, pero no matar”

¿Qué acontece con la criminalidad? De cara a la transformación experimentada durante las dos últimas décadas Bogotá posee un crimen revestido de características particulares. ¿Cómo es y qué estructuras genera? ¿Cómo funciona entre los criminales el mandato?

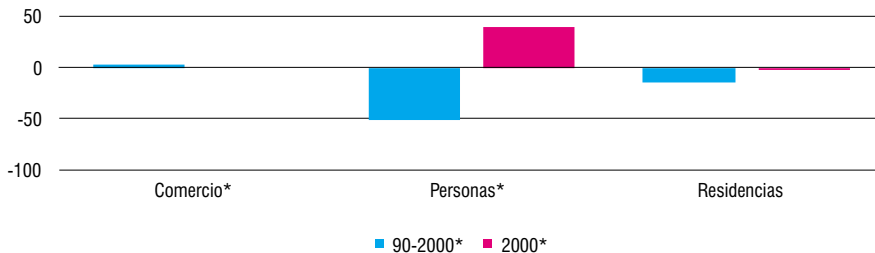
III. ASIMETRÍA Y RESEMANTIZACIÓN

Entre las décadas del 90 y del 2000, el crimen descende consolidando la imagen de la Bogotá virtuosa –según se acabó de mostrar-. Con todo, una vez se miran los indicadores en lo que va del presente siglo el descenso se detiene. Crimen y homicidio entran en una asimetría que abre paso a la resemantización del mandato: el “no matarás” se trastoca en “robar, pero no matar”. Antes de ingresar en la asimetría, sin embargo, es preciso dejar afirmadas sus mutuas dependencias. Sin que sea posible determinar qué viene primero (si el descenso violento determina un tipo de criminalidad o viceversa), la constatación viene a ser que la criminalidad bogotana está marcada, de un lado por una inserción social desprovista de dominaciones territoriales violentas y, del otro, por unas formas de operación localizadas y circunscritas. Sólo bajo estas condiciones se hace posible la caída en picada del homicidio: en el contexto de una ilegalidad que no hace de la muerte una práctica sistemática de su operación. La conocida fórmula de los mercados ilegales acudiendo al homicidio a falta de regulaciones legales (Sousa, 2004), tiene en Bogotá más de una mediación. El crimen abunda, adopta multitud de modalidades en muchas de las cuales se amasan grandes sumas de dinero, sin que el homicidio se constituya en el mecanismo que garantice el funcionamiento de la ilegalidad –como sí sucede en

Medellín-. El fenómeno bogotano está pues en conexión con unas estructuras criminales singulares, las cuales no pueden ser leídas con el prisma del conflicto armado⁴².

A partir del 2000 las cifras del homicidio continuaron descendiendo, en 2012 bajaron más todavía; en cambio la criminalidad se estabilizó y hasta se incrementó. El cotejo de las dos décadas (expuesta párrafos arriba) con el comportamiento de los dos primeros quinquenios del siglo XXI, le da sustento a la afirmación de “el crimen abunda” (Gráfico No. 5). El hurto a residencias disminuyó poco entre las dos décadas (3%), mientras se mantuvo estable en el curso de la última. El hurto a comercio, que había bajado entre las dos décadas un 15%, en el 2000 apenas si se redujo (3%). El atraco a personas muestra un sorprendente ascenso: entre las dos décadas bajó bastante (52%) en tanto que en el curso del 2000 aumentó de modo considerable (40%)⁴³. El hurto se mantiene estable o al alza.

Gráfico No. 5
Diferencias en tres delitos contra el patrimonio
Década 90 versus década 2000; 2000-2005 versus 2006-2011



* Diferencia entre la década del 90 y la década del 2000

** Diferencia entre los periodos 2000-2005 y 2006-2011

Fuente: Revista Criminalidad. Policía Nacional.

42 La noción de estructuras criminales se ha empleado con amplitud en el estudio del caso bogotano (Llorente y colaboradores, 2001; Fundación Ideas para la Paz, 2013). Se toma distancia de la manera como ha sido usada en dos direcciones: 1) La generalidad en tanto incluye desde el crimen sofisticado hasta las pandillas sin ninguna diferenciación interna (la definición en FIP, 2013). Es necesario avanzar en la jerarquización. 2) El intento de relacionar de manera mecánica la criminalidad y el homicidio.

43 En el cálculo del atraco se tuvo en cuenta el cambio del código penal en 2005.

El trabajo de campo le da consistencia a la resemantización del mandato, así como lo confirma de entrada el testimonio del vendedor ambulante. Mientras el homicidio desaparece, por el contrario “aquí no puede salir ni un niño con un billete porque se lo rapan”. La lógica atraviesa los procedimientos criminales. Un “pillo” narraba cómo se cuidaba de “no calentar el parche”, esto es de articular con astucia sus prácticas guardando todo cuidado de no perpetrar ningún homicidio que atraiga el acoso de la policía (Habitante de calle de Santa Fe. Entrevista 7) Más allá de la natural previsión que puede abrigar un agente violento en cualquier ciudad del mundo –no excederse para no echarse encima la persecución de las autoridades-, en Bogotá se instaló una sanción frente al homicidio: su ocurrencia atrae de inmediato el rechazo de la gente o la atención policial, evaluada en su desempeño con la vara del “no matarás” que cruza la conciencia pública de la ciudad.

En el curso de los últimos meses dos acontecimientos conmovieron la atención de la ciudad, el Bronx en el Centro y los Pascuales en Usaquén. Pese a que los dos casos ejemplifican situaciones con más de 10 años de permanencia, ambos con criminalidades de reconocida trayectoria, la presencia del homicidio modificó la situación desatando la inclemente persecución de los organismos de seguridad. A finales de noviembre de 2012 una confrontación entre las bandas Mosco y Homero del Bronx, por causa de una venganza motivada por el homicidio de uno de los líderes de una agrupación, produjo un recio operativo que concluyó con el ingreso de las autoridades a una zona vedada hasta hace poco a la presencia policial. Pocos días después la masacre de cinco personas en una cafetería al norte de Usaquén por una discordia entre bandas, movilizó una poderosa acción que concluyó con la captura y desactivación de varias organizaciones delictivas del sector⁴⁴. En ambos acontecimientos se trasgredió la norma inviolable de “no

44 Sobre enfrentamientos y operativos en el Bronx El Espectador (28 de noviembre 2012); El Espectador (19 de febrero 2013); El Espectador (22 de marzo 2013). Sobre las bandas de Usaquén El Espectador (8 de enero 2013); Semana (12 enero 2013); El Tiempo (4 de febrero 2013).

calentar el parche”, enseña escuchada con frecuencia en diversos rincones de la ciudad. Ella sintetiza con precisión la creencia en que la ilegalidad tiene legitimidad siempre y cuando no provoque homicidios, tal como lo corrobora una habitante de Kennedy: “Lo único que no he hecho en esta vida es matar y putiar, pero de resto todo lo he hecho” (Habitante de Kennedy. Entrevista 13).

Muchos habitantes que conviven con la criminalidad la asumen como una realidad impuesta, ya sea como víctimas directas o por la amenaza que surge en caso de denunciarla. La estrategia adoptada suele ser la de colocar un lindero de por medio que le ponga al abrigo de ella. “Ni ellos se meten con uno, ni uno con ellos”, dice una moradora de una zona de conflicto. No obstante, los rigores de la pobreza modifican la actitud frente a la ilegalidad, las dificultades económicas hacen que el robo sea un recurso a la mano: “de ver que mis hijos estaban aguantando hambre y que por acá no había ningún progreso pues yo me fui de una”. El razonamiento según el cual “las necesidades empujan” sale a la luz a cada momento, en particular en los enclaves violentos. Así lo expresa una líder comunitaria: “acepta uno (el robo) porque fue por sus hijos que luchó y quiso dejarles algo”. La ilegalidad, sin embargo, se completa con el “no matarás”: “Que lo robe pero que no lo dañen”, como dice un poblador de la localidad de Santa Fe (Madre comunitaria de Kennedy, Líder comunitario de Kennedy y Líder comunitaria de Santa Fe. Entrevistas 13, 14 y 15). ¿Hasta dónde el ciudadano corriente es capaz de dar un salto e incursionar en la ilegalidad? En Bogotá, todo indica, es más fácil hurtar que matar⁴⁵.

IV. CARACTERÍSTICAS Y ACTORES ARMADOS

El crimen capitalino está caracterizado por la inserción social sin dominaciones territoriales violentas y por formas de operación circunscritas y localizadas, se enunció atrás. En cuanto a la primera

45 Las encuestas de cultura ciudadana aseveran que en Latinoamérica es fácil incurrir en violencia cuando están de por medio asuntos de la familia. (Mockus, et al, 2009; Mockus et al, 2012).

característica, Bogotá es impermeable a la implantación de un actor que mediante el ejercicio de la fuerza controle un territorio imponiendo su voluntad sobre la vida de los pobladores que allí habitan⁴⁶. Desde esta condición se arma el marcado contraste entre Bogotá y ciudades como Medellín y Río de Janeiro, lugares donde los agentes violentos (en Medellín los combos, en Río los traficantes), hacen un ejercicio de poder que participa de la dupla de fuerza y “consenso”⁴⁷. De fuerza en tanto el dominio descansa sobre la aplicación sistemática de la violencia por destacamentos armados trenzados en sostenidos e intensos choques con otros grupos y la Policía, garantía segura del funcionamiento de los negocios y la “lealtad” de la población; de “consenso” -entre comillas porque allí hay todo menos un pacto suscrito con los dominados-, en cuanto la convivencia con los moradores fuerza la búsqueda de legitimidad mediante la prestación de seguridad, la mediación de conflictos (incluidas las desavenencias familiares), los servicios comunitarios y las actividades festivas.

Nada similar acontece en Bogotá, en donde por supuesto no faltan bandas tenebrosas dotadas de la capacidad de intimidar hasta el pánico a la población, creando zonas de miedo donde el común de la gente no se atreve ni a mirar. Aparecen en uno y otro lugar. Igual, existen bandas que controlan geografías determinadas, en particular los puntos de venta del narco menudeo. Pero ni las unas ni las otras pasan por el despliegue de un aparato cuyo reconocimiento signifique la sumisión de la población a una voluntad de hierro. En Bogotá los vínculos entre la población y los criminales son otros, algunos de ellos atados a la máxima “usted en su rancho haga lo que quiera, en el mío yo veré lo que hago”, guardada con celo tanto por los pobladores como por los criminales. En la medida en que los grupos criminales no están enfrascados en guerras permanentes (como sucede en Medellín y Río), el barrio no es una

46 Toda regla tiene su excepción. El paramilitarismo en Ciudad Bolívar implantó una dominación territorial violenta durante los años que hicieron presencia (2001-2005).

47 La comparación de Río de Janeiro y Medellín en Perea (2014). El balance entre fuerza y consenso varía de modo considerable, Medellín con predominio de la violencia, Río del consenso.

zona de retaguardia que los fuerce a construir “consenso” entre la población. Como dice una líder comunitaria de Kennedy sobre una banda de la zona: “Si tengo algún problema voy hasta allá, [hablo con el jefe y le digo] me está pasando esto y no quiero tener problemas, usted sabe que no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo” (Madre comunitaria de Kennedy, Entrevista 14). Los agentes ilegales en Bogotá no administran la vida comunitaria, salvo episodios de mediación de conflictos entre la población con la que conviven. La violencia, claro, está a la mano, pero siguiendo la norma de su aplicación “discrecional”, particularmente en dos casos: contra los “sapos” (los que tienen la osadía de denunciarlos), y contra los “faltones” (quienes infringen las reglas del negocio como quedarse con dinero o mercancía).

En la misma línea, las bandas bogotanas ni ejercen dominio sobre zonas diversas de la ciudad ni generan estructuras de segundo nivel que aglutinen conjuntos de bandas, lo cual constituye el segundo rasgo característico. Frente a la estructura piramidal de Medellín (armada sobre la conexión hacia arriba), o ante la conexión de los traficantes de Río en comandos que conectan los jefes de las favelas (el comando *Vermelho* el más conocido), Bogotá carece de estructuras criminales de segundo orden que aglutinen fuerzas menores dispersas en diferentes puntos de la ciudad.

En realidad la capital no es tierra abonada para la inserción de actores armados, ni siquiera los del conflicto colombiano⁴⁸. Históricamente les ha resultado imposible trasladar a Bogotá la dominación que ejercen en zonas rurales, donde imparten justicia, expiden normas e intermedian los conflictos⁴⁹. A comienzos del 2000, cuando el conflicto armado pasaba por uno de sus picos de mayor actividad,

48 Siguiendo la separación entre conflicto violento y conflicto armado, diferenciamos el actor violento del actor armado. El primero es un concepto más amplio que refiere el actor que ejerce violencias (de la guerrilla a la riña callejera), mientras el segundo pasa por las organizaciones organizadas del conflicto armado (guerrillas, paramilitares y narcotráfico).

49 El conflicto armado no se ha apoderado de la urbe colombiana, con la notable salvedad de Medellín, Barrancabermeja y ahora Tumaco. En otro trabajo se muestra la precariedad de los indicadores de la guerra en las ciudades colombianas (Perea, 2013).

se hablaba del cerco que las FARC-EP le tenían tendido a Bogotá (un rumor fundado en las tomas de poblaciones alrededor de la ciudad); sin embargo el balance de poder en lo local urbano dejaba ver que las guerrillas, aún en ese momento crucial, no eran ni mucho menos un agente decisivo en el curso de las violencias de las barriadas (Pereira, 2007). Lo mismo sucedió con el M-19 a mediados de la década del 80 y las milicias populares a comienzos de la década del 90. En Bogotá no tuvieron la expansión que sí alcanzaron en otras ciudades, llegando al punto de forzar el cruento desalojo del M-19 en Cali y la negociación con las milicias en Medellín⁵⁰.

En la actualidad los actores armados no dejan de hacer presencia en la capital, pese a la reclusión en sus sitios originales de retaguardia a la que fueron forzados por la guerra durante la administración Uribe. Hacen presencia bajo la forma de destacamentos de apoyo logístico para el avituallamiento, la inteligencia y el reclutamiento. Ha sido la manera de operación en particular de las FARC, quienes constituyen milicias a la manera de agrupaciones urbanas de apoyo, sin que realicen acciones en el concierto político y violento de las zonas donde se asientan⁵¹. El ELN funcionó de otro modo, se inmiscuía en la organización comunitaria a través de proyectos de variada naturaleza pero sin intentar dominar los lugares donde desplegaban su trabajo político.

La actuación del paramilitarismo amerita mención aparte. El líder Carlos Castaño anunció a finales de la década del 90 la incursión de sus fuerzas en las zonas urbanas. Lo hicieron en varias ciudades, en algunas llegaron a controlar los fiscos municipales⁵². Bogotá no fue la excepción, no sólo uno sino dos frentes se movilizaron para el efecto. Uno organizado de manera expresa, el Frente

50 En Bogotá el M-19 tuvo una presencia importante en San Cristóbal, Kennedy y Suba pero no se convirtió en un actor capaz de producir un balance de poder en lo local; las milicias populares tuvieron sus conatos en Ciudad Bolívar.

51 Una base de datos sobre las FARC en Bogotá entre 2008 y 2012 arroja que hacen presencia (87 de sus militantes fueron capturados durante los 5 años en la ciudad), pero sus acciones se limitan a 7 atentados mediante la colocación de bombas explosivas.

52 Es el caso de Cúcuta en la frontera con Venezuela, ciudad donde los paramilitares recibían de la misma alcaldía la ejecución y el cobro de programas claves de la ciudad.

Capital, y otro ya constituido venido del Casanare. En más de una localidad hicieron presencia amenazando y persiguiendo líderes cívicos, en algunas practicando operaciones de limpieza en contra de jóvenes y consumidores. La oferta de seguridad se difundió, así como el control de la delincuencia común y la inseguridad⁵³. Además, lograron control sobre zonas comerciales estratégicas como los San Andresitos y Corabastos. Con todo, solamente en Ciudad Bolívar implantaron una dominación territorial violenta articulando una estructura armada que hizo de la limpieza una práctica sistemática, amén de las extorsiones sobre actividades del comercio y los servicios⁵⁴. Los paramilitares se instalaron en Bogotá, no cabe duda, la ilegalidad de alto vuelo se entronizó en la capital⁵⁵. Empero, ni siquiera esta avanzada aumentó la tasa de homicidios, con la salvedad del citado incremento de dos puntos en el año 2005⁵⁶.

Los actores armados no anidan en Bogotá. Se escuchan noticias de agentes criminales que heredaron las estructuras montadas por el paramilitarismo durante su estadía en Ciudad Bolívar (Álvarez Cruz, Díaz, Moreno y Wilches, 2009); se escuchan igual referencias a su acción en otras localidades como Bosa y Suba. Además de que el término paramilitar perdió vigencia histórica, no es posible identificar algo cercano a una dominación violenta en ninguna zona delimitada de la ciudad. Se trata más de bandas comprometidas en actividades ilegales, algunas de las cuales se hacen llamar paramilitares con el fin de asegurar el éxito de sus acciones, o que los moradores las nombran así recogiendo la estela de terror que rodea al paramilitarismo.

53 La oferta de seguridad operó en ciertos territorios amparada en un esquema contrainsurgente, con mayor protagonismo en Ciudad Bolívar y en alguna medida en Bosa y Suba. En otros lados la dimensión contrainsurgente es difusa, al reducirse a la búsqueda de rentas como aconteció en la UPZ Sabana y el barrio Santa Fe.

54 Es preciso aclarar que operaron, de buen modo, cooptando estructuras criminales preexistentes.

55 Desaparecieron por la recia guerra entre los dos Frentes paramilitares implantados en la ciudad, así como por la desmovilización pactada con el gobierno.

56 Dos puntos en la tasa de una ciudad con casi 7 millones de habitantes no es despreciable. El hecho determinante, empero, es que la presencia paramilitar en Bogotá no representó el inicio de un nuevo ciclo violento.

V. LA ESTRUCTURA CRIMINAL

La situación de los actores armados se repite en la criminalidad: Bogotá no es campo abonado para el desarrollo de mafias. ¿Será acaso que los capitales mafiosos prefieren preservar la capital para el lavado de sus ingresos y las grandes inversiones? (Duncan, 2013). Quizás así sea. La respuesta precisa un estudio de la circulación de tales capitales en el país, un propósito por fuera de estas páginas. Entonces, ¿cómo se organiza la criminalidad en Bogotá, tal como puede ser vista desde su inserción social? Los dos rasgos (no dominación violenta y acción localizada) estructuran el marco general; hace falta el ingrediente adicional de la operación. Para ello Federico Varese (2011) propone la diferencia entre crimen organizado y mafia sobre la amplitud de acción de cada uno: el primero controla un mercado, la segunda varios.

Siguiendo estos criterios viene de nuevo la afirmación: Bogotá no es tierra propicia para el asentamiento de mafias⁵⁷. Las organizaciones criminales domésticas ni tienen dominaciones territoriales violentas, ni actúan más allá de áreas delimitadas, ni controlan más de un mercado. Existe una portentosa criminalidad estructurada en torno a los consabidos términos de crimen organizado y delincuencia común, diferenciados en que el primero controla un mercado, mientras la segunda no. Cada uno, a su vez, se divide en dos categorías. El crimen organizado en bandas de comercio (legal e ilegal) y bandas de residencia; la delincuencia común en bandas especializadas y grupos esporádicos. Las fronteras entre una y otra son difusas, como acontece siempre con toda categorización, mas es preciso introducir un orden en la noción de estructura criminal.

57 Un reciente texto sobre el conflicto en Bogotá sugiere que la reducción violenta se da como resultado de un pacto entre mafias (FIP, 2013). ¿De cuáles mafias podría brotar un acuerdo capaz de domeñar una ciudad como Bogotá? Hace falta evidencia que soporte la existencia de esas mafias y la suscripción del pacto. Un acuerdo de esa naturaleza es posible en Medellín, donde existe un imperio mafioso con el dinero y las armas para controlar la ciudad. Lo mismo cuenta para el ingreso del cartel de Medellín en asocio con los esmeralderos, con el resultado de un dominio sobre la criminalidad. Las bombas en El Espectador y el DAS, la explosión del avión de Avianca y el asesinato de personalidades, entre otros, dan cuenta de la importancia que tenía la capital para el cartel de Medellín durante la segunda mitad de los años 80. Mas esa importancia parece ser más política que mafiosa.

1. Crimen organizado: bandas de comercio ilegal y legal

El nombre de bandas de comercio deriva de su inscripción en áreas de enorme concentración comercial como el centro y Corabastos⁵⁸. El tipo de mercancía bajo control, de su lado, las divide entre bandas legales dedicadas al manejo criminal de productos legales y bandas ilegales entregadas al mercadeo del narcotráfico. El prototipo de estas últimas, sin parangón en el resto de la ciudad, tiene asiento en el Bronx, una pequeña área del centro histórico donde se concentran las organizaciones con el mayor control sobre la venta de droga en Bogotá. El primer rasgo por remarcar es su notable nivel de organización. En la cúspide se instala el jefe rodeado de un pequeño número de personas cercanas, casi en su totalidad familiares, seguido después por el jefe o cabecilla encargado de ordenar y administrar los pagos. De allí para abajo siguen otra variedad de funciones que rematan en la base de la pirámide con los campaneros, por lo general jóvenes encargados de advertir la presencia policial. No es una estructura cualquiera, supone una jerarquía montada sobre una fina división del trabajo desgranada de arriba hacia abajo.

No obstante, la complejidad de la estructura no puede llamar a engaños sobre su alcance. En un lugar geográfico en extremo delimitado –el Bronx se compone apenas de un par de cuadras–, concurren seis “ganchos”, el nombre que adoptan allí y en otros puntos de la ciudad las bandas del narcotráfico. Manguera es el más poderoso, Homero el siguiente, seguidos luego por los ganchos Nacional, América, Morado y Mosco. Entre ellos hay una jerarquía, los cuatro finales rinden cuentas a los dos primeros y todos al Manguera. El Bronx, epicentro del gran negocio de la droga, carece de una organización centralizada que detente el control de las operaciones; pese a la escala de poder siguen siendo seis bandas, cada una de las cuales maneja una porción del negocio así sea pequeña.

⁵⁸ En otra zona de alto comercio y elevada criminalidad, Chapinero, no se hizo trabajo de campo.

Si hacia dentro no existe un poder centralizado, menos se expande hacia el exterior. El gancho Manguera, el más poderoso, tiene potestad sobre un puñado de barrios, un radio de acción circunscrito para una organización que mueve, según información de prensa, cerca de \$7.000 millones al mes (El Tiempo, 2012, 28 de noviembre; El Tiempo, 2013, 25 de enero; El Espectador, 2013, 7 de marzo; El Espectador, 2013, 21 de marzo; Semana, 2013, 21 de marzo; El Tiempo, 2013, 23 de marzo). El Bronx controla algo más de 70 expendios de droga, una cantidad insignificante frente a la infinita cantidad de “ollas” regadas por la ciudad. El negocio no funciona tanto por los puntos distribuidos en los barrios como por las ventas realizadas dentro del mismo Bronx. Es notable la sede del gancho Homero. En medio de la miseria de un área poblada por habitantes de calle, un lujoso casino ofrecía drogas, armas y una línea de bebidas alcohólicas identificadas por la figura de Homero Simpson estampada en cada uno de los artículos que ofrecía (El Espectador, 2012, 7 de diciembre). Ni la diversificación económica ni la diseminación geográfica son la impronta del más sofisticado crimen organizado de Bogotá, los adinerados ganchos del Bronx no se riegan por la ciudad movidos por el apetito de capturar más y más rentas⁵⁹. La nota distintiva de la banda de comercio de producto ilegal es su especialización localizada en el control de un mercado específico⁶⁰.

La organización se completa con los “sayayines”, un ejército de mercenarios con la misión de cuidar el negocio, tanto de los adversarios que eventualmente pretendan arrebatar el control como de las situaciones que afectan los márgenes de ganancia. El número de hombres en armas del gancho Manguera es objeto de versiones, algunas dicen que son 50 mientras otras afirman que llegan a 300. La ubicación del negocio los fuerza a mantener un negocio ilegal literalmente rodeado de habitantes de la calle, seres inestables y

59 Por el contrario tal condición es parte del poder mafioso de Medellín. La captura de rentas funciona desde los negocios y personas de los barrios populares hasta las altas esferas de la pirámide.

60 Los mercados de armas están dispersos entre ciertas bandas, aunque concentrados en particular en Corabastos.

explosivos, muchos adictos, fuente de múltiples conflictos. Mas en ningún caso los vínculos con la población se traducen en la dominación violenta de la vida del sector. No faltan las anécdotas en que los jefes o sus agentes intervienen en el arbitramento de diferendos o en la asistencia de personas agobiadas por la miseria. Se trata de la intervención del actor con poder en medio de la precariedad, nada cercano a un agente violento ostentando su poder discrecional sobre un área de la ciudad.

No se sabe de sus conexiones de alto nivel, las muchas que hacen posible su poderío sobre jugosos mercados ilegales. Los dineros con seguridad se lavan en una variopinta gama de mercados legales⁶¹. Las conexiones con mafias como las bandas criminales tampoco resultan claras⁶². Se escucha de la presencia de los Paisas en Suba, los Rastrojos en Bosa, los Urabeños en Ciudad Bolívar, mientras no escasean los panfletos provocando pánico bajo la rúbrica de las Águilas Negras o los Rastrojos⁶³. Su presencia y ascendencia, empero, no termina de ser clara. El gancho Manguera –cuyo jefe Rigo viene de conexiones con los paramilitares de Pereira-, trae la marihuana del Cauca y la coca del Guaviare⁶⁴, lo cual sugiere que Bogotá no permanece atada a una complejo mafioso que imponga por encima su voluntad⁶⁵.

61 Tampoco se sabe de conexiones políticas o de la búsqueda de pertenencia en las instancias de representación democrática. La Policía Nacional ha desmentido los rumores respecto a la conexión entre el Bronx y los carteles mexicanos de la droga. Colmundo Radio.

62 Las bandas criminales son las estructuras delincuenciales aparecidas tras la desmovilización del paramilitarismo. El nombre de neoparamilitares resulta entonces más adecuado.

63 En Ciudad Bolívar se sostiene que las bandas se reorganizan asumiendo esquemas de la inserción paramilitar. Se reciclaron con sus miembros e intentaron centralizar la venta de droga en la localidad. Practican asesinatos esporádicos de activistas locales y de consumidores, extorsionan comercios y no faltan intentos de control territorial. No heredaron ofrecimientos de seguridad.

64 El transporte de droga desde sitios lejanos incorpora una multiplicidad de transacciones. Habrá un vínculo con la mafia que controla las áreas de cultivo. Pero el hecho de que el gancho maneje este oneroso proceso sugiere su “independencia” frente a las mafias de la droga. El Tiempo (2013); Semana (21 de abril 2013).

65 Entre 2004 y 2006 el Loco Barrera, un narcotraficante recién extraditado, controló las franquicias en Bogotá. Pese a su poder no fue posible desarrollar un control territorial obligando a la disseminación de la venta en numerosos sitios de la ciudad. El Espectador (3 de Abril 2011).

Las bandas de comercio de producto legal, por otro lado, se ubican también en zonas de gran acopio comercial: el comercio sexual en Santa Fe, los autopartes y los celulares en Los Mártires, las drogas y armas en Corabastos⁶⁶. Hasta donde fue posible establecer carecen de los niveles de organización del Bronx. Cada una controla un mercado específico con la particularidad de ser una mercancía legal, todo lo cual impone el manejo de cierta discreción que impide el desarrollo de alguna forma de dominación violenta. Operan sobre una zona delimitada, lo que las obliga a generar dispositivos de seguridad contra los desmanes, siendo particularmente afectos a la contratación de operaciones de limpieza. Ninguna pretende invadir los fueros de las otras, las retaliaciones entre bandas no llegan a configurar guerras sostenidas⁶⁷.

2. Crimen organizado: bandas de residencia

Como las bandas anteriores derivan su nombre de la localización, pero ahora en zonas residenciales. Dominan el mercado de la droga en los barrios y suelen combinar otras actividades como el hurto de personas, comercios, residencias y vehículos, así como el control del transporte y la extorsión. El listado es largo. Los Pascuales, los Tarazona, los Piña, los Melco en Usaquén; los Pocholos, el Tablado, los Magolos, los Pecosos, las Norteñas en Kennedy; la banda de Jhonny, los Paisas, la banda de Gary, la banda de Tomasito⁶⁸, la banda de Gerardo en Ciudad Bolívar; la banda de Andrés en Bosa; los Paisas, los Boyacos, los Amaya, los Casallas, los Samacá en Suba; los Santadereanos, los Gemelos en Santa Fe; los Vargas, los

66 Al igual que el Bronx, la central de alimentos de Corabastos mueve grandes capitales ilegales sin que ello suponga el dominio de una banda sobre las demás. Son varias las que operan, cada una con independencia en el manejo de su negocio.

67 La única guerra entre agentes criminales fue el choque entre los dos frentes paramilitares a mediados de la década anterior. En años anteriores hubo una entre los comerciantes de esmeraldas.

68 La banda de Fredy Tovar Rodríguez, Alias Tomasito, se asentó en Altos de Cazucá en Soacha llegando a extender su acción hasta la localidad de Ciudad Bolívar. Soacha es un municipio colindante con Bogotá.

Carreño, los Cartagena, los Sandoval, los Peña en Rafael Uribe⁶⁹; El Tiempo, 2013, 9 de enero; El Tiempo, 2013, 13 de enero; El Espectador, 2013, 8 de enero. Benavides (2013, p. 21 y 38).

Carecen del grado de sofisticación organizativa de los ganchos del Bronx, pero siguen líneas de mando encabezadas por el jefe y sus allegados (familiares casi siempre), seguidas por personas encargadas de las funciones de empaquetamiento, distribución y venta de la droga, apoyadas igual por campaneros que alertan sobre la policía o las bandas enemigas. El control del mercado se ejerce mediante el dominio de puntos de venta localizados en proximidades del área de operación; por lo general son bandas de larga y reconocida trayectoria, familias que emprendieron una carrera criminal que las generaciones siguientes se han encargado de continuar. El caso de los Pascuales en el barrio Villa Nidia de Usaquén es ilustrativo (El Tiempo, 2013, 13 de enero). Pascual Guerrero, quien llegó en la década del 90 a Bogotá buscando refugio de la violencia en el Huila -al igual que tantos colombianos de otras regiones-, fue uno de los primeros habitantes del barrio que se convirtió en activista comunal en conexión con las labores que supone la organización de un barrio en la periferia. Preocupado por las quejas de los vecinos acerca de los frecuentes atracos realizados por las bandas de los Tarazona y los Piña, decidió configurar con sus hijos una defensa barrial sostenida con contribuciones de comerciantes y vecinos del sector. Como suele ser el caso de estas movilizaciones barriales, la rentabilidad del cobro a los moradores pronto movió la codicia haciendo derivar la organización en una banda dedicada a la extorsión, el hurto y la venta de droga.

Entre las bandas puede haber disputas sangrientas por el control del narcotráfico, enfrentamientos que usualmente vienen de tiempo atrás. No obstante, el grado de control se circunscribe a áreas reducidas. La poderosa banda de los Pascuales, por ejemplo, mandaba entre las calles 161 y 163, de la carrera séptima hacia la

69 Producto de la labor etnográfica adelantada en diferentes localidades de Bogotá, así: Kelly Peña (Ciudad Bolívar), Nancy Guzmán (Bosa), Andrés Rincón (Kennedy y Santa Fe), Gloria Bermúdez (Usme), Ricardo Moreno (Mártires) y María Eugenia González (Suba), entre marzo y octubre de 2012.

montaña, es decir, apenas un puñado de cuadras. En Kennedy sus muchas bandas no han protagonizado enfrentamientos recientes, antes bien han funcionado con la máxima de “no calentar el parche” trazando un acuerdo que distribuye la zona en líneas pertenecientes a cada banda. La línea es una serie de puntos de venta de droga que puede estar junto a la línea de otra banda, siguiendo un caprichoso arreglo que se mantiene sin muertos siempre y cuando cada banda respete los fueros de la otra. Del mismo modo que las bandas de comercio, las de residencia no emprenden el proyecto de subsumir por la fuerza a las otras dando cuerpo a una organización centralizada. Conviven “juntas” y ni siquiera la larga confrontación en Usaquén ha terminado por liquidar las bandas restantes dando lugar a la primacía de alguna. La situación se repite en todos lados, el largo listado de bandas en cada localidad es muestra de ello.

El contexto de las bandas de residencia es bien distinto a las de comercio, prosperan en medio de sectores habitados por moradores⁷⁰. Su actividad delictiva es la droga pero de igual modo pueden combinar otras actividades, dentro de las cuales la extorsión permanece en Corabastos, la UPZ Sabana (San Andresitos) y el barrio Santa Fe. En Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba y Usaquén se trata preferiblemente de acciones de micro extorsión que afecta a tenderos, comerciantes y en algunas zonas a transportadores. En general en Bogotá se presentan casos de extorsión sin que comporten ni las dinámicas ni los montos de Medellín. Se trata de cobros reducidos, recaudaciones diarias de dinero de cantidad variable, acompañadas de la amenaza latente de la violencia⁷¹. Finalmente, estas bandas tampoco desarrollan dominaciones territoriales violentas. Se sabe de anécdotas en torno a la mediación en conflictos locales (como Las Magolas en Kennedy), pero no a la manera de una intervención que las convierta en actores violentos reconoci-

70 En los puntos de localización de las bandas de comercio también hay residentes pero la nota predominante es la condición comercial.

71 Las bandas de terreros dedicados a la urbanización pirata, en especial en décadas anteriores, son un factor de violencia. La apropiación de terrenos (incluso públicos como humedales) y su venta ilegal se asocian a grandes violencias.

dos por los pobladores de una zona específica (Madre comunitaria de Kennedy. Entrevista 14).

3. Delincuencia común: bandas especializadas

El tercer tipo de criminalidad bogotana hace el salto a la delincuencia común, cuya nota característica es la inexistencia de control sobre un mercado. Puesto que las bandas de la delincuencia común especializada carecen de inserción territorial -el éxito de sus operaciones depende de la discreción-, tampoco tienen el menor interés en ejercer control sobre la población. Se distinguen por la especialización en una actividad: el hurto a casas, los “jaladores” de carros, el robo de celulares, los paseos millonarios, los fleteros, el atraco callejero practicado por familias especializadas a lo largo de varias generaciones. El acumulado familiar suele ser determinante, como se dice “vienen de familias de ladrones”⁷². Algunas pueden combinar actividades ilegales pero el signo predominante es la especialización.

Los reportes de prensa están literalmente plagados de noticias sobre el desmantelamiento de estas bandas. Sirvan de ejemplo Los Canarios de Kennedy, acusados de fleteo y hurto calificado: “Por allá en Roma hablaban de Los Canarios (...) hay un lugar donde los manes se encuentran”⁷³. Puesto que no operan mediante la delimitación de territorios sino por la especialización en un oficio, no requieren de la configuración de agrupaciones armadas. Pueden portar armas y no faltan las anécdotas de sus retaliaciones, pero sin llegar a convertirse en un actor violento visible en la ciudad.

4. Delincuencia común: grupos esporádicos

El último tipo incluye un conjunto de fenómenos caracterizados por su falta de sistematicidad –no son organizaciones constitui-

⁷² Líderes comunitarios de Santa Fe y Candelaria. Entrevistas 37 y 38.

⁷³ Información relacionada con agente de la DEA asesinado y de la cual son acusados “Los canarios”. Una noticia relacionada en W radio (25 de junio 2013).

das con el fin de acumular dinero mediante una actividad ilícita. Sin embargo, pese a la falta de organicidad, ejercen una considerable influencia en la crispación de la sensibilidad social. El atraco callejero es su actividad distintiva, desarrollado por “zorreros”⁷⁴, habitantes de calle, pandillas y eventualmente parches y barras bravas. Las actividades delictivas de los dos primeros se configuran a partir de una compleja trama de interacción atravesada por lazos de sangre y proximidad, frecuentemente señalados de ser responsables de atracos, hurtos a residencias y transporte de estupefacientes (Portal de noticias RCN, 2013).

Las pandillas, los parches y las barras tienen como finalidad la búsqueda de identidad y la construcción de espacios de pertenencia. De ahí la pertinente diferenciación entre banda, atada al fin del lucro, y grupo, conectado al logro de identidad. El caso más destacable es la pandilla, un término empleado sin el menor cuidado que se intercambia de modo indiscriminado con el de banda⁷⁵. El joven pobre, tatuado y armado vino a ocupar el espacio privilegiado de la imagería asustadiza de la ciudad contemporánea. El trabajo de campo pone en evidencia, de manera opuesta, la honda transformación de la pandilla bogotana. Si a comienzos de la primera década del 2000 la ciudad estaba llena de agrupaciones de hombres jóvenes en condición de tiempo paralelo⁷⁶, una década después la nota predominante viene a ser el dominio de los parches, agrupaciones cruzadas por un atado de características nuevas. El dominio territorial asentado sobre la confrontación violenta con otros grupos ha desaparecido junto a las marcas distintivas de identidad, como un nombre y sus símbolos asociados. Aún permanece la reunión en un sitio, el lugar de encuentro donde se parcha y departe, sin que ello signifique una actitud de choque con los ve-

74 Nominación coloquial dada a las personas que se dedican a labores de reciclaje por medio de la utilización de vehículos de tracción animal.

75 Un ejemplo en *El Tiempo* (26 de octubre 2012).

76 La noción de tiempo paralelo se acuñó para definir la pandilla: jóvenes desconectados de los tiempos y los ritmos de la vida social que les rodea (no estudian, no trabajan y con un intenso conflicto con la familia con quien todavía viven). (Perea, 2007).

cinos y otros grupos. Se consume droga, pueden incurrir en robos y no faltan los enfrentamientos. Sin embargo el parche se diferencia de la pandilla en que no constituye un grupo desconectado de los circuitos de la vida corriente, una desconexión que se sostiene sobre la acción violenta que hace posible el tiempo paralelo. Es el fenómeno prevaleciente hoy en la ciudad⁷⁷.

Otro tanto ha de afirmarse sobre las barras bravas, muchachos seguidores de las banderas de un equipo de fútbol. Pueden llegar a congregar un elevado número de miembros, pues son pocos los equipos y la fiebre de los seguidores se ha diseminado propiciando su presencia en numerosas barriadas de la ciudad. Se reúnen en sitios específicos pero lo hacen con irregularidad, convocando miembros de barrios distintos (en cuyo caso no pasan por la apropiación permanente de un territorio y su defensa violenta). No faltan los robos, las barras están conformadas por parches que no se detienen ante la falta de dinero para el ingreso al Estadio cuando el equipo juega: “La gente de las barras sí se metía con la comunidad (...) decían que era que estaban robando” (Líder juvenil cultural de Kennedy. Entrevista 15).

Ni los parches ni las barras tienen vocación de sometimiento de otros grupos, ni siquiera la tuvieron las pandillas en su época de auge. La búsqueda de identidad se funda en la alteridad frente a un otro distinto que le permita reafirmar su propia singularidad, aunque la diferencia se puede tramitar con desprecio y violencia. Tampoco pasan por la imposición violenta de un dominio localizado, rasgo que las diferencia de las pandillas. Roban sí, algunos con marcada frecuencia, sumándose a la experiencia fragmentada y dispersa que caracteriza la criminalidad de Bogotá.

⁷⁷ Otra vez la diferencia la hace Ciudad Bolívar, donde todavía existen pandillas.

TERCERA PARTE

La violencia se disemina: límites del mandato

En Bogotá opera un mandato, “no matarás”, expresado en la reducción del homicidio; su resemantización, “robar, pero no matar”, se arma sobre una criminalidad que no hace de la violencia su palanca de operación. Sin embargo el mandato tiene todavía serios límites visibles en “enclaves violentos”, actores generadores de violencia y conflictos en contextos de socialización. Se mirarán uno a uno estos límites.

VI. ENCLAVES VIOLENTOS

Un mandato no es por completo incluyente, no lo es al menos en las condiciones de una Bogotá atravesada por inequidades incontestables. Colombia posee el deshonroso título de ser uno de los países del planeta con la más inequitativa distribución de la riqueza⁷⁸. Bogotá participa de esta inequidad, en 2011 tuvo un Gini de 55 ocupando el segundo lugar entre las 13 ciudades colombianas donde se aplica la Encuesta Integrada de Hogares (Dane, 2011 y 2012). La mejora en las condiciones de vida enunciada antes no resuelve el panorama de una desigualdad social que cobra dimensiones mayúsculas. El 84% de la población pertenece a estratos bajos en medio de una alta segregación urbana que hace de Ciudad Bolívar el lugar de asentamiento del 53% de las personas de estrato bajo-bajo⁷⁹. Empleando una imagen, Bogotá avanza frente a la pobreza pero está inmovilizada ante la inequidad. En el contexto de las precarias condiciones en que vive una buena cantidad de la población se resquebraja la capacidad cohesiva del mandato,

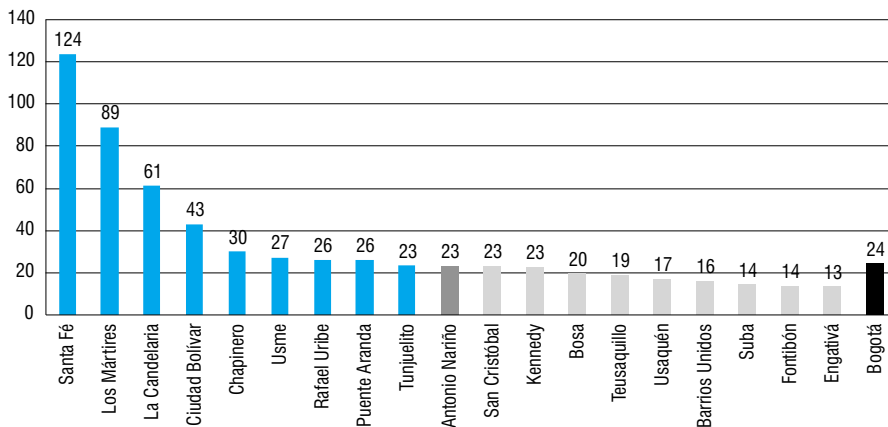
78 Entre un listado de 35 países Colombia ocupa el segundo puesto con un coeficiente de Gini de 56, sólo superado por la nación africana de Zambia; el más bajo fue Rumania con 24. Banco Mundial (2012). El coeficiente de Gini mide la concentración de la riqueza en un escala de 0 a 100, siendo 100 la máxima concentración.

79 El 9% de la población pertenece al estrato bajo-bajo; el 39 % al bajo; y el 36 % al medio-bajo El 2% no tiene estrato de manera que un reducido 14% se ubica en estratos medios y altos (Secretaría Distrital de Planeación, 2011).

abriendo el camino bien a la inobservancia del “no matarás”, bien a la profundización de la versión “robar, pero no matar”.

El homicidio varía de modo considerable de un punto a otro de la ciudad. Asumiendo un criterio de clasificación que toma como cota de violencia alta la tasa de 25 homicidios por 100 mil habitantes, la capital tuvo en la década pasada una tasa promedio de 33, una violencia elevada en términos comparativos internacionales⁸⁰. La enorme disparidad geográfica del homicidio salta a primera vista (Gráfico No. 6). Ninguna localidad clasificó en violencia baja (por debajo de 10), la más reducida fue Engativá con 13, encabezando una violencia media de importante presencia en la ciudad (11 localidades en color gris). Sin embargo, 8 localidades están por encima de la cota de 25 (en color rojo), tres superando el valor de 50 y una por encima de 100. En Bogotá hay sitios críticos, son los enclaves violentos entendidos como áreas donde el homicidio se mantiene con terquedad.

Gráfico No. 6
Tasa promedio de homicidio por localidad. Bogotá 2000-2010*



Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Atlas Interactivo. Cálculos nuestros.
* Tasa por 100 mil habitantes.

⁸⁰ El punto de referencia es Brasil –considerado violento en el contexto internacional-, quien promedió entre 1996 y 2009 una tasa de 25. México, en medio de su crisis, llegó en 2011 al mismo valor (Azaola, 2012). La clasificación a emplear es Violencia Baja: tasa de 10 para abajo; violencia Media: de 11 a 25; violencia Alta: 26 para arriba. La clasificación en Perea (2013).

El estudio de la Fundación Ideas para la Paz (2013) ofrece valiosa información sobre los enclaves. Series históricas de duración media -desde finales de la década del 70-, puntualizan que los mismos enclaves existen desde ese entonces hasta los días actuales. Hay sí una variación en su preponderancia. Hasta mediados de la década del 90 las violencias más altas se producen en las localidades del centro, a partir de entonces se localizan en la periferia. Pese al cambio, la práctica violenta está situada en las mismas zonas a lo largo de más de 30 años. Los enclaves violentos de Bogotá tienen una condición histórica.

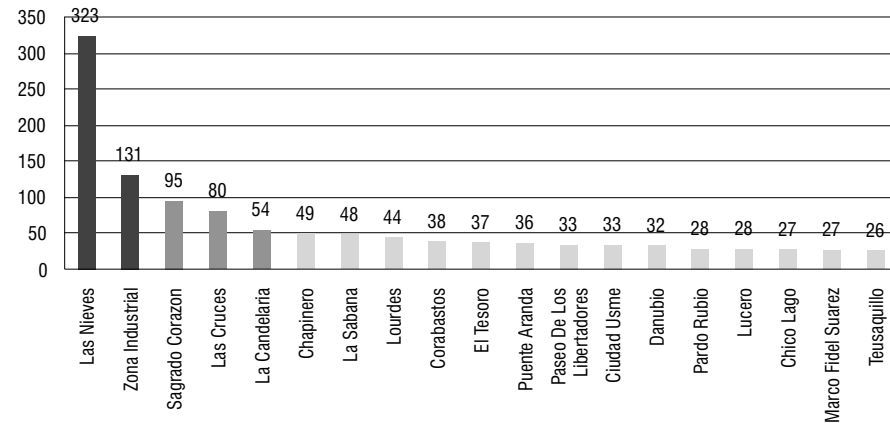
A fin de ubicarlos es preciso acudir a otras herramientas del ordenamiento geográfico (las localidades son entidades en extremo heterogéneas). Es el caso de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), establecidas sobre la base de su homogeneidad en los modos de uso del espacio⁸¹ (Gráfico No. 7). Tomando como base los reportes del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad (CEACS) sobre 93 UPZ⁸², y promediando la tasa de homicidio entre los años 2006-2010, una cantidad de 17 UPZ tuvo una tasa de homicidio elevada (por encima de 25)⁸³. Miradas con detenimiento a través de una clasificación adicional, dos tienen violencia desbordada (por encima de 100 en color rojo); cuatro violencia extrema (de 51 a 100 en color zapote); y 11 violencia alta (entre 25 y 50 en color curuba).

81 Las UPZ se clasifican en ocho tipos. La ciudad reserva un poco más de sus dos terceras partes para zonas residenciales (65%), distribuidas en tres según la consolidación de su equipamiento urbano: urbanización incompleta (29%), consolidado (26%) y cualificado (10%). Los otros cinco tipos de UPZ se distribuyen entre comercial, industrial, centralidad urbana, desarrollo y dotacional.

82 Bogotá tiene 112 UPZ pero del procesamiento se eliminaron 9 de Desarrollo (comienzan a ser incorporadas a la malla urbana) y 10 Predominantemente Dotacional (equipamientos urbanos como parques y aeropuertos). Se trata de zonas poco habitadas y por tanto un número reducido de homicidios dispara sus tasas, distorsionando la comparación.

83 48 UPZ tuvieron tasa Media (52%) y 29 tasa Baja (31%), sumando el 83%.

Gráfico No. 7
Tasa promedio de homicidio por UPZ. Bogotá. 2006-2010



100 o más	DESBORDADA	51 a 99	EXTREMA	26 a 50	ALTA
-----------	------------	---------	---------	---------	------

* Tasa por 100 mil habitantes.
Fuente: CEACS.

Haciendo el entrecruzamiento de las estructuras criminales, el tipo de UPZ y la etnografía derivada de la observación de campo es posible delinear un cuadro aproximado de los agentes de las violencias altas en Bogotá. Las bandas de comercio legal e ilegal hacen parte de un ejercicio marcado por la violencia, como lo confirma el homicidio en La Sabana y Corabastos (dos UPZ comerciales). Las bandas de residencia desempeñan un papel destacado en UPZ residenciales (Nieves⁸⁴, Sagrado Corazón, Las Cruces, Bosa Occidental, Lourdes, El Tesoro, El Danubio y Lucero). Por su lado la delincuencia común ejerce una violencia asistemática pero permanente a través de una verdadera miríada de pequeños grupos, en especial en los enclaves violentos (al margen del tipo de UPZ que sean). Pululan bajo la forma de bandas de atracadores, jaladores de carros, apartamenteros y fleteros, entre otros, acompañados de zorreros y habitantes de calle. Las UPZ Zona Industrial y Danubio se ven afec-

84 Allí hay un barrio que llaman Las Viudas porque los asesinatos entre los grupos de delincuencia común han dejado una gran cantidad de mujeres sin marido. Funcionaria Pública de Santa Fe, Entrevista 6.

tadas por la presencia de la cárcel La Modelo y La Picota, lugares que propician situaciones conflictivas en su entorno⁸⁵.

Los enclaves violentos se focalizan predominantemente en las UPZ comerciales y de urbanización incompleta: las primeras suman 5 y las segundas 8 del total de las 17 UPZ con violencia elevada (Mirar Mapa 1). La dificultad reside en que tales características no por fuerza se traducen en violencia. El 72% de las UPZ tipo urbanización incompleta tienen violencias medias y bajas; los enclaves violentos no son un fenómeno distintivo de toda la periferia, dando al traste con el intento de asociar de manera mecánica pobreza y violencia⁸⁶. Tampoco se trata de una condición asociada en exclusivo a la actividad comercial, relativizando la hipótesis de una violencia ligada a la extracción de rentas: el 50% de las UPZ comerciales no tienen violencias altas. La precariedad y el comercio, no obstante, construyen una condición de posibilidad para la emergencia del acontecimiento violento. La criminalidad explica una parte del panorama de las violencias en la capital, pero quedan otras violencias no ligadas a la actividad ilegal.

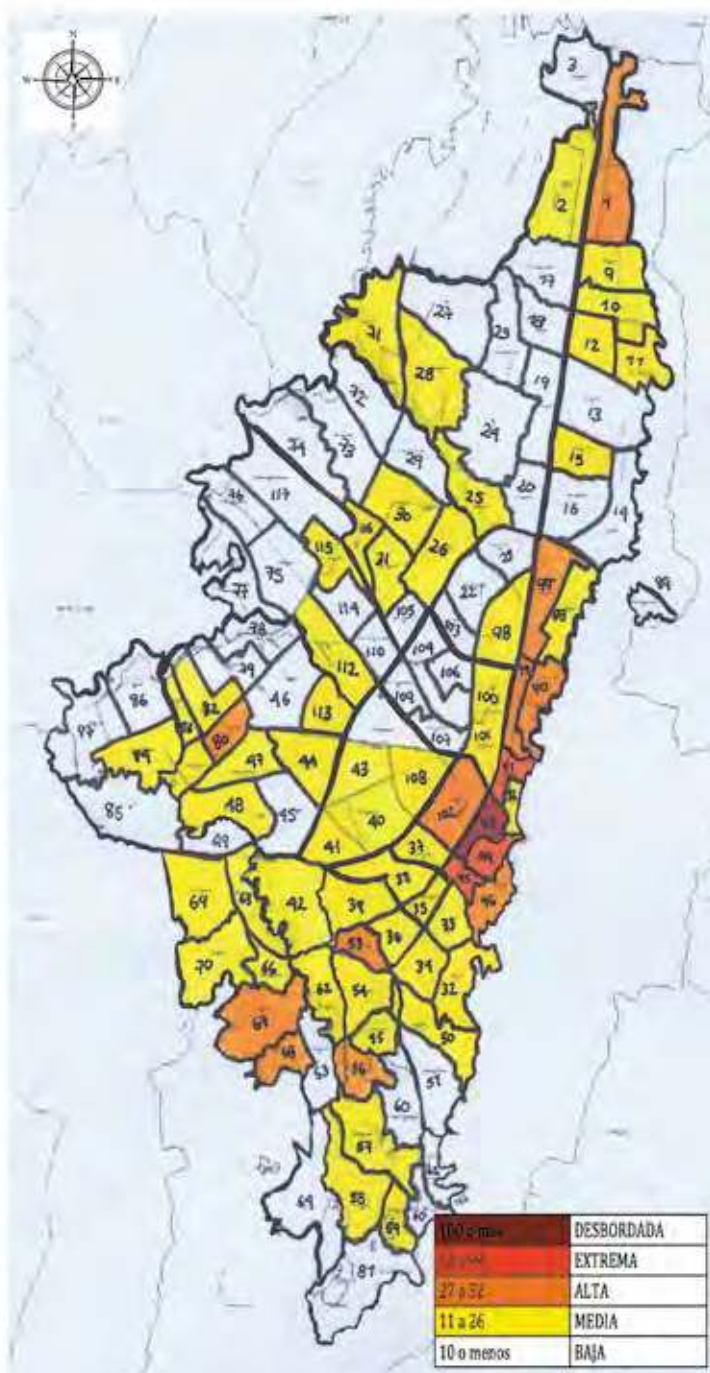
VII. LIMPIEZA E IDENTIDAD

“La violencia se disemina” –la esfera del conflicto violento en discusión-, es un enunciado que adquiere su más clara expresión en los enclaves violentos; pero igual lo hace mediante su difusión, según lo revelan dos fuentes. La primera los cuadrantes de la policía. Nada más un 15% de 714 cuadrantes no tuvo ningún homicidio; por el contrario más de la mitad (el 53%) tuvo entre 1 y 4 asesinatos en el lapso de dos años, una cantidad nada despreciable una vez se considera que los cuadrantes son circunscripciones diseñadas con el fin de hacer eficaz la intervención policial (CICRI - Policía Metropolitana de Bogotá-Delitos de impacto, 2010-2011). En Bogotá el homicidio adquiere cuerpo aquí y allá.

85 Chapinero y Puente Aranda no fueron objeto del trabajo de campo. Teusaquillo y Pardo Rubio, atípicas en cuanto pertenecen al tipo urbanización consolidado, son objeto de avanzadas de las bandas del Centro de la ciudad.

86 La localidad de Bosa (homogénea en el estrato 2) tiene 5 UPZ, sólo 1 es violenta. Igual Ciudad Bolívar, sólo 2 de sus 8 UPZ clasifican en homicidio Elevado.

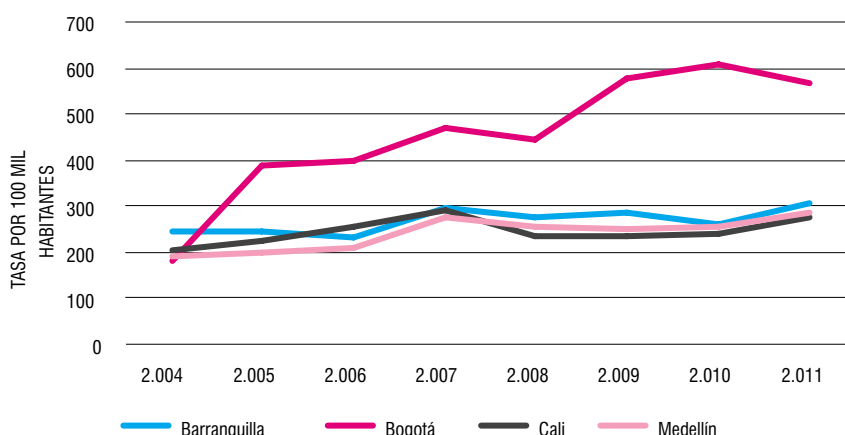
Mapa No. 1. Carácter de la violencia en las UPZ de Bogotá



UPZ por localidad	
USAQUÉN	ENGATIVÁ
1. Paseo los Libertadores	26. Las Faldas
9. Verbenal	29. Minuto de Dios
10. La Uribe	30. Boyacá Real
11. San Cristóbal	31. Santa Cecilia
12. Toberín	72. Bolivia
13. Los Cedros	73. Garcés Navas
14. Usaquén	74. Engativá
15. Country Club	105. Jardín Botánico
16. Santa Bárbara	116. Álamos
CHAPINERO	SANTA FÉ
88. El Refugio	91. Sagrado Corazón
89. San Isidro-Paños	92. La Macarena
90. Pardo Rubio	93. Las Nieves
97. Chicó Lago	95. Las Cruces
99. Chapinero	96. Lourdes
SAN CRISTÓBAL	RAFAEL URIBE
32. San Blas	36. San José
33. Sosiego	39. Quiroga
34. 20 de Julio	53. Marco Fidel Suárez
50. La Gloria	54. Marruecos
51. Los Libertadores	55. Diana Turbay
USME	FONTIBÓN
52. La Flora	75. Fontibón
56. Danubio	76. Fontibón-San Pablo
57. Gran Yomasa	77. Zona Franca
58. Comuneros	110. Ciudad Salitre Occidente
59. Alfonso López	112. Granjas de Techo
60. Parque Entrenubes	114. Modelia
	115. Capellanía
	117. Aeropuerto El Dorado
CIUDAD USME	MARTIRÉS
42. Venecia	37. Santa Isabél
62. Tunjuelito	102. La Sabana
BOSA	PUENTE ARANDA
49. Apogeo	40. Ciudad Montes
84. Bosa Occidental	41. Muzú
85. Bosa Central	43. San Rafael
86. El Porvenir	108. Zona Industrial
87. Tintal Sur	111. Puente Aranda
KENNEDY	SUBA
43. Castilla	2. La Academia
44. América	3. Guaymaral
45. Carvajal	17. San José de Bavaria
47. Kennedy Central	18. Britalia
48. Timiza	19. El Prado
78. Tintal Norte	20. La Alhambra
79. Calandaima	23. Casa Blanca Suba
80. Corabastos	24. Niza
81. Gran Britalia	25. La Floresta
82. Patio Bonito	27. Suba
83. Las Margaritas	28. El Rincón
113. Bavaria	71. Tibabuyes
CIUDAD BOLÍVAR	TEUSAQUILLO
63. El Mochuelo	100. Galerías
64. Monteblanco	101. Teusaquillo
65. Arboleda	104. Parque Simón Bolívar
66. San Francisco	106. La Esmeralda
67. Lucero	107. Quinta Paredes
68. El Tesoro	109. Ciudad Salitre Oriental
69. Ismael Perdomo	
70. Jerusalén	
ANTONIO NARIÑO	CANDELARIA
35. Ciudad Jardín	94. La Candelaria
38. Restrepo	
BARRIOS UNIDOS	
21. Los Andes	
22. Doce de Octubre	
98. Los Alcázares	
103. Parque Salitre	

La otra fuente la constituye el registro de lesiones personales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde Bogotá manifiesta un comportamiento opuesto al homicidio. Si éste tiende a la baja -como se mostró-, las lesiones evidencian un sostenido aumento. Entre las 61 ciudades colombianas 28 disminuyeron su tasa de lesiones personales, en tanto Bogotá ocupó el puesto 42 con un crecimiento del 20%. La comparación con las otras ciudades grandes del país (Medellín, Cali y Barranquilla), evidencia el alza bogotana. Mientras en las otras ciudades las lesiones permanecen estables en Bogotá crecen (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2004-2011).

Gráfico No. 8
Tasa de lesiones personales. Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá 2004-2011



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

¿Quién está detrás de tal difusión de la violencia? Comenzamos con dos actores, uno proveniente del mundo de la criminalidad y el otro de contextos sociales donde está en juego la pertenencia. El primero las operaciones de limpieza, evidencia de un homicidio que sigue siendo una práctica socorrida en la ciudad; el segundo agrupaciones juveniles organizadas en torno a un marbete de identidad, donde la violencia cruza sus gramáticas de actuación.

1. Operaciones de *limpieza*

Todo mandato supone una identidad cimentada sobre la alteridad, perfilando la diferencia que termina de definir aquello que une y cohesionan. Lo diferente se reviste de las cualidades de lo amenazante y lo peligroso que, en Bogotá, no abandona su trámite bajo el expediente del asesinato. “La limpieza” es, en efecto, una práctica de regulación violenta que aparece ante el desborde de las condiciones de seguridad en lo local. Se trata de “mantener los barrios sin delincuencia, sin consumo, sin nada de nada”. Aparece cuando “el barrio se calienta” convirtiéndose en blanco de sus ataques a consumidores, delincuentes, jóvenes problema, trabajadores sexuales, habitantes de calle⁸⁷. Como lo dijo el vendedor que abre estas páginas, “árbol que no da frutos hay que cortarlo, es muy feo pero el que no produce frutos no merece vivir”. Pero igual puede recaer sobre cualquier persona. “Pedimos perdón si caen inocentes”, rezaba un panfleto circulante en Ciudad Bolívar. El terror está garantizado.

Mientras la *limpieza* actúa en nombre de la neutralización de la inseguridad, ella misma y sus actores permanecen al margen de cualquier canon de justicia. Es una de sus características distintivas, el anonimato que envuelve sus ejecutorias cubriéndolas con un manto de impunidad⁸⁸. Pese a que la “limpia” hace parte del relato ordinario del barrio popular, los reportes oficiales ni la mencionan. Los pobladores se preguntan: “¿Cuántos procesos judiciales hay por esos asesinatos? ¿A quién han culpado y encarcelado por esas muertes?” (Colectivo cultural de Kennedy. Entrevista 19).

Las *limpiezas* hacen presencia al margen de la condición comercial o residencial, irrumpiendo cuando la inseguridad afecta la convivencia o la marcha de los negocios. Testimonios similares se

87 En varias localidades, particularmente en Ciudad Bolívar, circulan referencias de persecución política encubiertas bajo el rótulo de “limpieza social”.

88 Son contadas las intervenciones de la justicia sobre el fenómeno, un caso excepcional de la denuncia y el seguimiento a este tipo de casos tuvo lugar durante el desborde de la presencia paramilitar en Ciudad Bolívar. Semana (2003).

recogen en Mártires, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Usme, Suba, Bosa, Usaquén, Rafael Uribe⁸⁹, dando cuenta de ese espacio liminal donde se disuelve la eficacia normativa del mandato del “no matarás”. La estigmatización y el intento vano de “erradicación de la escoria de la sociedad” adquieren “legitimidad”, al menos lo hace a los ojos de sectores de pobladores, comerciantes e incluso miembros de los cuerpos de seguridad. La contratación del “servicio” tiene lugar en diferentes lugares de la capital, mas a diferencia de Medellín o Río de Janeiro la oferta no implica el desarrollo de un esquema de protección sostenida por largo tiempo.

No existe evidencia definitiva sobre la identidad de sus ejecutores, salvo en el caso de Ciudad Bolívar cuando la toma paramilitar de sectores de la localidad. De resto se habla de paramilitares, bandas criminales, agentes de policía activos o en retiro y destacamentos de seguridad expresamente constituidos para el efecto. En ocasiones se presume que el Estado actúa con el propósito de resolver un problema crítico, pero también intervienen ciudadanos corrientes (de las Juntas de Acción Comunal, comerciantes o líderes comunitarios), convocados para reunir el dinero y contratar los grupos. La alternativa está a la mano, como lo expresó el vendedor de Ciudad Bolívar “si me dan la justicia por mis manos yo la tomo”.

2. Identidades juveniles

La violencia entre identidades juveniles adquiere relevancia en el relato de los conflictos urbanos de la capital. Toma cuerpo en confrontaciones entre *Skinheads* de diversas corrientes ideológicas, Barras Bravas, *Hoppers*, *Punkeros*. La lista es extensa. Se trata de agrupaciones cuyas actividades pasan por la confrontación permanente con otros grupos, conflictos mantenidos en diversos lugares de la ciudad muchas veces a lo largo de varios años. La “tolerancia cero” es la nota predominante, rasgo central de identidades afirmadas sobre la agresión física y simbólica de quien se considera

89 El citado trabajo de comienzos de la década del 2000 muestra la sostenida presencia de las llamadas “limpiezas” en la ciudad. Rojas (1994), Perea (2002 y 2007).

el rival. Los enfrentamientos se extienden a lo largo de un amplio espectro, desde acciones espontáneas de confrontación hasta episodios extendidos de venganza. “No se puede mostrar debilidad o cobardía”, dice uno; “agresión debe ser respondida con agresión”, reclama otro.

El enfrentamiento opera entre grupos de identidades “pares”, aquellas construidas en contextos sociales específicos como el fútbol, la música, lo político. Son esporádicos los conflictos entre identidades cruzadas (barras versus *Skinheads* por ejemplo)⁹⁰. Ciertas maneras de vestir, el uso de determinados símbolos, “parchar” o pasar por ciertos lugares dispara la agresión, “yo le digo que mejor no se ponga esa camiseta de millos, porque usted sale a la calle y lo joden”. La diferencia entre identidades dispares es más tolerada.

La lógica de la pugnacidad cambia de una identidad a otra. Los enfrentamientos entre *Skinheads* comportan una dimensión ideológica que opone construcciones grupales asentadas sobre maneras opuestas de ver el mundo⁹¹. Entretanto en la barra brava el componente de identidad cifrado en la “defensa de los colores” es la nota predominante, el que desata agresiones entre barras de diferentes equipos o aún al interior de las mismas agrupaciones⁹²: “Ahora el combo con poder es hacer parte de una barra de millos o de un parche de Santa Fe”⁹³. Cada grupo despliega una presencia territorial que intenta excluir de sus escenarios a quiénes se consideran rivales; se trata no obstante de una pugna entre grupos pero en ningún caso de una dominación territorial extendida a los vecinos.

90 En años recientes la ciudad ha visto emerger grupos de *Skinhead* de ultraderecha que agreden a otros grupos de jóvenes, población LGBTI, trabajadoras sexuales, habitantes de calle y afrodescendientes. (Caracol Radio, 2007).

91 Multiplicidad de confrontaciones surgen entre la RASH (de izquierda) versus la Tercera Fuerza (de derecha) o entre la SHARP (apolíticos) contra Radicales Unidos Kennedy (apolíticos), entre otros. Enfrentamientos de *Skinheads* en El Tiempo (2013a).

92 Las disputas violentas también son internas: por el control de la barra, entre el verdadero barrista y los que se presumen no son “hinchas fieles”. Otro tanto sucede entre agrupaciones de *Skinhead* -como la RUK o la Tercera Fuerza-, donde se producen amenazas contra quienes deciden retirarse del parche provocando pánicos y desplazamiento por la ciudad.

93 Colectivo cultural de Kennedy. Entrevista 19.

“Que donde yo esté, no esté el otro” es la lógica, traducida en que “nosotros nos encargamos de limpiar las calles de neonazis”.

VIII. VIOLENCIA ENTRE CERCANOS

La violencia bogotana se disemina, las características del homicidio reportadas por Medicina Legal arrojan un cuadro adicional⁹⁴. Primero la circunstancia, clasificada en cinco tipos⁹⁵: política, económica, social, cotidiana y venganza⁹⁶. Cada uno de los tipos se divide en escenarios y estos a su vez en eventos⁹⁷. El primer acontecimiento digno de mención –una vez se excluye la venganza que no pudo ser clasificada en uno de los 4 tipos restantes-, es la escasa presencia de la violencia política ligada al conflicto armado (Gráfico No. 9)⁹⁸; es un fenómeno típico de la urbe colombiana, con contadas excepciones la guerra domina las violencias de la ciudad tal como se mostró con amplitud en otro trabajo (Perea, 2013). Luego salta a la vista la importancia de la violencia cotidiana con el 25 % de los homicidios, seguida por la económica y más atrás por la social (20 y 15 %) ⁹⁹. Sin duda alguna resulta más fácil identificar la circunstancia en el caso de situaciones cotidianas, tal facilidad infla su ventaja frente a los otros tipos de circunstancias. Sin embargo el

94 La información es precaria, en Colombia se desconoce la circunstancia y el perpetrador en el 73% de los homicidios (dos variables claves para su esclarecimiento). En Bogotá sucede otro tanto. Hecha la salvedad se incluye esta información en cuanto construye una imagen confirmada por la exploración etnográfica.

95 La categoría “sin información” en la circunstancia oscila con fuerza en Bogotá. En 2008 subió al 89% y en 2005 descendió al 58%, mientras en 2010 llegó al 20%. El censo lo confirma Medicina Legal argumentando un apoyo institucional que tuvo ese año. Se trabaja entonces sólo el 2010.

96 La venganza-ajuste de cuentas es un comodín donde se incluye una multitud de situaciones. En el intento de reducir su ambigüedad se cruzó la circunstancia con el presunto agresor introduciendo la venganza en cada tipo.

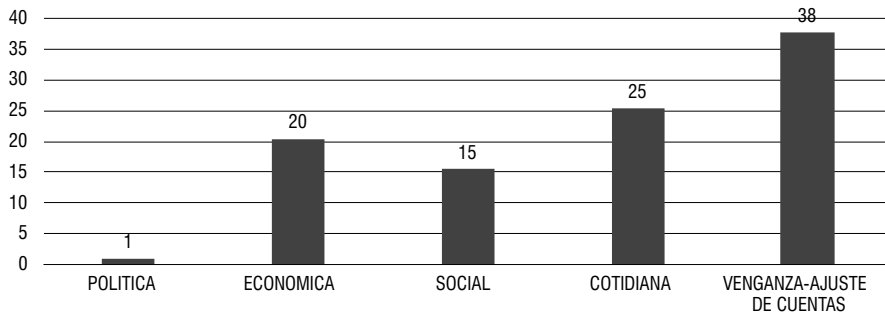
97 Los eventos son las categorías de los reportes de Medicina Legal.

98 La circunstancia política incluye: Acción guerrillera, acción paramilitar/bandas criminales, acción militar estatal, intervención legal, prevención acto delictivo, asesinato político, enfrentamiento armado, terrorismo.

99 La circunstancia económica incluye los siguientes eventos: atraco, hurto, robo banco, comercio, residencia, vehículo y retención ilegal. La social incluye barras, pandillas, bandas, intolerancia y contra marginales; la cotidiana se visualiza en el siguiente gráfico.

gráfico suscribe la evidencia de una violencia que toma cuerpo en diversos escenarios.

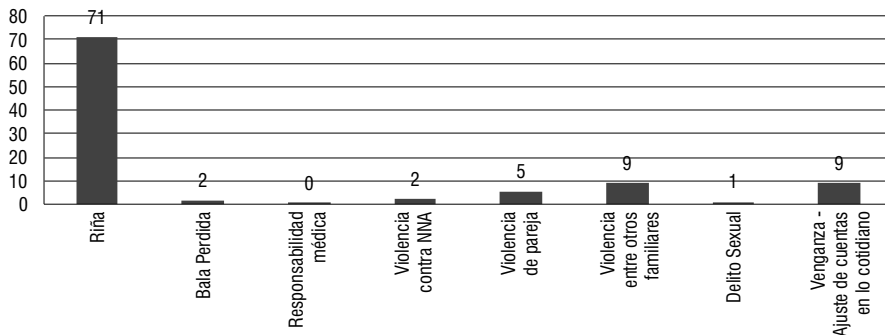
GRÁFICO No. 9
CIRCUNSTANCIAS DEL HOMICIDIO. BOGOTÁ 2010



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos nuestros.

Mirando de cerca los eventos de la circunstancia cotidiana resulta que, a todas luces, las riñas resultan dominantes con el 71 % de los casos. Los choques espontáneos, no cabe duda, generan parte de la violencia desperdigada revelando parte de la exacerbada cantidad de las lesiones personales en Bogotá.

Gráfico No. 10
Circunstancia cotidiana del homicidio. Bogotá 2010



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos nuestros.

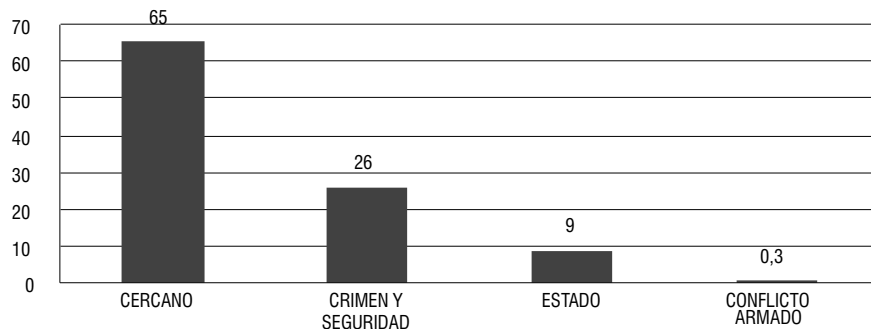
* Violencia contra niñas, niños y adolescentes.

** Violencia entre otros familiares.

*** Venganza-ajuste de cuentas en lo cotidiano.

La identificación del presunto agresor, una característica del homicidio igual de decisiva a la circunstancia, también aparece plagada de vacíos. Entre 2005 y 2009 el evento “sin información” está en Bogotá por encima del 90%, convirtiendo en conocimiento de dominio público menos del 10% de los victimarios. Entre 2010 y 2011 la situación mejora subiendo los casos conocidos a 21% y 17% respectivamente. El guarismo no es alentador pero posibilita trabajar sobre los dos años. Otra vez el conflicto armado hace presencia en su mínima expresión (0,3%), mientras sobresale con ventaja el agresor cercano con el 64% (Gráfico No. 11). Como quedó dicho, es más fácil el establecimiento del agresor cuando se trata de un homicidio cometido por un cercano; empero, otra vez el dato habla de una violencia que toma cuerpo en las circunstancias de la vida diaria.

Gráfico No. 11
Presunto agresor. Bogotá 2010-2011

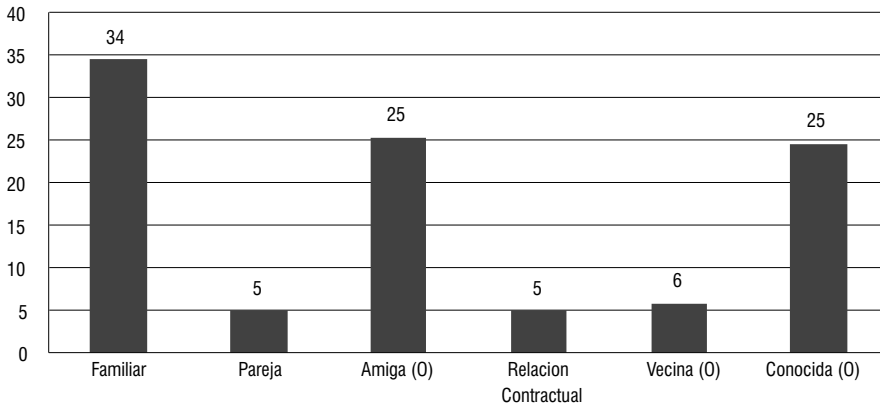


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos nuestros.

La proximidad con el agresor es notable; la mayoría de las veces se trata de alguien con quien existe un vínculo familiar, como lo deja ver la Gráfica No. 12 (la más alta con 34%). La categoría incluye una variada gama que va del abuelo a los hijos, pasando por los cuñados, el padrastro y el suegro. La mayor incidencia la tienen otros familiares civiles y consanguíneos, el esposo y el compañero permanente. Los amigos y conocidos tienen una participación si-

milar, cada uno cercano a la cuarta parte de los homicidios. El contexto de la vida cotidiana y la familiaridad produce una violencia con un peso nada despreciable.

Gráfico No. 12
Presunto agresor tipo cercano. Bogotá 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos nuestros.

El cuadro esbozado con los datos se confirma en la exploración etnográfica de las siete localidades. En Bogotá se produce una violencia en las instancias básicas de socialización (la familia, la escuela, el vecindario), terminando de poner en evidencia la diseminación de la violencia bajo modalidades inscritas en circuitos ajenos a la ilegalidad. La violencia intrafamiliar es una realidad difusa que responde a dinámicas diversas, que van desde la agresión sin causa aparente hasta la producida bajo los efectos del alcohol o las drogas: “Están pegándoles a las mujeres y así era mi papá, una cultura re machista”, se escucha decir con frecuencia. Pese a las variadas causas es factible detectar un texto que la atraviesa; la violencia en la casa se piensa como un medio para corregir el comportamiento desviado. Detrás del golpe y la amenaza, concebidos como garantía de control y sumisión, el acto violento gana “legitimidad” en la regulación de los tratos propios de la intimidad. La agresión contra cónyuges y parientes, ejercida esencialmente

por adultos masculinos, adquiere un aire de naturalidad que abre el camino al “infierno de la violencia intrafamiliar”, según lo nombró con propiedad un funcionario de la alcaldía menor de Suba¹⁰⁰.

El recurso de la agresión física y verbal, agenciado principalmente contra menores y mujeres, se vuelve parte del paisaje de la vida cotidiana; ingresa en la socialización de niños y jóvenes, desactivando la sanción que debiera venir una vez alguien hace uso de ella. El caso del padrastro violador que termina defendido por la madre es un ejemplo paradigmático: “Se puso a defender al tipo diciendo que la hija era una cualquiera, que ella había provocado al tipo”. En los enclaves violentos, en particular, circulan multitud de referencias sobre jóvenes que huyen “de este infierno” buscando la calle como lugar donde cimentar una identidad¹⁰¹.

Otra dimensión de la violencia cotidiana se encuentra asociada a los ámbitos escolares, donde las riñas al interior de los claustros, los enfrentamientos entre colegios, la amenaza a docentes, el robo en inmediaciones de las instituciones y la venta de droga configuran escenarios conflictivos. La riña entre estudiantes –amén de los choques entre muchachos de ambos géneros-, se reviste de modalidades como la violencia de género, racial y contra identidades, llevando al rechazo de poblaciones étnicas, LGBTI o diversas¹⁰². La referencia al microtráfico dentro de las instituciones educativas es hartamente repetida.

La violencia escolar no solamente victimiza a los jóvenes, actúa particularmente contra los maestros. “Tenemos maestros totalmente asustados en los colegios”, dice una funcionaria. Los mismos docentes lo confirman, aseverando ser objeto de agresiones directas, producto de múltiples desavenencias con los educandos, pero también resultado del hecho de que “algunos estudiantes no quieren reconocer ninguna autoridad, están acostumbrados a la agre-

100 Habitante, funcionaria de Santa Fe y funcionario de Suba. Entrevistas 23, 24 y 25.

101 Funcionario público de Santa Fe y funcionaria pública de Santa Fe. Entrevistas 6 y 19.

102 Ejemplo extremo de agresión en un colegio en El Tiempo (10 de abril 2008).

sión”¹⁰³. Las amenazas pueden ser verbales o por medio electrónico, pero se da el caso de la circulación de panfletos emulando las prácticas de las operaciones de limpieza. No faltan historias donde la seguridad de los docentes se precariza a tal grado que llegan a ser blanco de la delincuencia común a petición de estudiantes con quienes han tenido diferencias¹⁰⁴. “Ya van 150 profesores amenazados este año en Bogotá”, reza un titular de prensa denunciando la crítica situación del sector educativo. Como lo sintetiza un profesor en una ácida frase “ser docente es un deporte extremo” (Docente de Ciudad Bolívar. Entrevista 28)¹⁰⁵.

Mención aparte merecen los conflictos barriales. A varios barrios, en especial aquellos sujetos a la pugna por la tierra y los servicios públicos, los atraviesa un relato histórico sobre permanentes episodios violentos ligados a venganzas entre grupos familiares. En Ciudad Bolívar, el barrio las Cruces, Corabastos, Patio Bonito y Suba, entre otros, circulan dichos relatos. Se afirma que los brotes sostenidos de violencia crean la familiaridad de los menores con la violencia: “Se sigue manejando el lema de la venganza, entonces como usted se metió con los míos aténgase que yo me voy a meter con los suyos” (Actriz de colectivo teatral de Santa Fe. Entrevista 35). Aun cuando en ocasiones se pierde el origen de los conflictos, es posible percibir la disputa por la ocupación territorial como su más remoto comienzo¹⁰⁶. La irregularidad e ilegalidad en la ocupación, junto a los “terreros” inescrupulosos, caldean las relaciones entre vecinos¹⁰⁷. La conflictividad se mantiene, “los que más peleaban a machete eran los vecinos, la razón de eso era que aquí no había linderos”. El círculo vicioso se cierra alimentado por riñas, lesiones, homicidios y enemistades que permanecen por años: “A ellos les mataban el sobrino, al tío, al primo, a todo el mundo” (Actriz de colectivo teatral de Santa Fe. Entrevista 35).

103 Funcionaria pública de Santa Fe y docente de Ciudad Bolívar. Entrevistas 24 y 28.

104 Ejemplos de estas situaciones en Red de portales RCN (31 de Agosto 2010).

105 Mirar también El Tiempo (19 de octubre 2011).

106 En los 90 se habla de las consecuencias negativas de las bandas dedicadas a la urbanización pirata, así como de la incapacidad de las autoridades para contenerlas.

107 Una visión del funcionamiento reciente de la urbanización pirata en Semana (2013).

Las luchas históricas entre familias son un tipo de tensión con presencia en los contextos locales –una vez más, con mayor fuerza en los enclaves violentos-, pero igualmente los conflictos estallan asociados a circunstancias diversas como los recién inmigrados (se habla de la fuente de conflicto que representan los costeños y los chocoanos), los desmovilizados de los grupos armados (en particular los reinsertados del paramilitarismo) y los desplazados por la guerra. Los enclaves violentos, dada su condición social y económica, se vuelven centro receptor de población desplazada o de gente en precarias condiciones venida de otros sectores de la ciudad: “El que hayan personas de diferentes lugares producen choques” (Habitante de Ciudad Bolívar. Entrevista 16).

A modo de conclusión

¿Qué hacer?

Bogotá tiene el cuadro más diversificado de exportaciones y servicios del país, condición que le permite generar la cuarta parte del producto interno bruto de Colombia. Está clasificada como ciudad global en el puesto 55 del ranking mundial, calificada como urbe de baja vulnerabilidad y elevado potencial de desarrollo¹⁰⁸. Sin embargo su inequidad alcanza 55 en el coeficiente de Gini, un indicador en extremo elevado que da cuenta de la precaria distribución de la riqueza. La inversión estatal, que le da prioridad a las urgencias sociales de zonas deprimidas –tal como se ilustró-, ha venido operando como mecanismo de acceso de los desposeídos al derecho del disfrute de la ciudad. No es suficiente, sin embargo, la pobreza abunda. La capital avanza frente a la pobreza pero no ante la inequidad, se afirmó anteriormente.

Ante semejante desafío, Bogotá demanda una sociedad nutrida por movimientos y expresiones con presencia social y política en la cimentación de lo público, entre otras frente al acuciante tema de la inequidad. La abigarrada fragmentación de la criminalidad

108 Índice realizado por A.T. Kearney and The Chicago Council on Global Affairs.

bogotana, visible en la multitud de expresiones de la delincuencia común bajo la forma de bandas especializadas y grupos esporádicos, confronta a la ciudad con el imperativo de resolver su inequitativa distribución de los muchos bienes que produce. La sociedad tiene la primera palabra: construir un tejido social orgánico de la mano de partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales. La movilización política está de nuevo en el centro de la escena pública, las multitudinarias marchas en varios rincones del mundo lo atestiguan, pero también lo hace la efervescencia social que comienza a cobrar cuerpo en Colombia. Bogotá debe ganar un lugar entre la sociedad en movimiento.

Por supuesto la segunda palabra la tienen las élites y el Estado capitalino. Ahora que parece avecinarse la paz, ¿cómo entra allí la ciudad? ¿De qué modo se suma la ciudad en general y Bogotá en particular al desafío de construir una paz estable y duradera? Un “pacto” económico se configura como una posible vía, un pacto agenciado por élites dispuestas a distribuir una porción de sus ingresos mediante la inversión en el fortalecimiento de los pequeños y medianos empresarios, presentes por centenares en el escenario económico de la ciudad. Es un escenario eventual del cual puede emerger una ganancia colectiva. Del mismo modo, una eficaz regulación económica por parte del Estado se perfila como un ingrediente esencial. ¿Qué pasa en los enclaves violentos -en particular los ligados al crimen organizado de bandas de comercio-, estrechamente conectados a la falta de mediación del estado municipal?

La acción policial es un elemento clave, sobre el que deben recaer todavía mayores esfuerzos. El sistema de cuadrantes diseñado de unos años a hoy está detrás de la última reducción del homicidio: por primera vez en más de tres décadas Bogotá vuelve a alcanzar el nivel de violencia de los años 70. No obstante la ciudad demanda la reconstrucción de su visión de mandato simbólico y conciencia de sí misma, un proceso armado sobre el llamado del Estado para la intervención de la sociedad en la edificación de lo público. El Estado dio muestras de una voluntad resuelta -la ciudad mutó en variadas direcciones- y la sociedad se sumó a la imagine-

ría de la cultura ciudadana. La clave residió en la inscripción de la seguridad en un proyecto global de ciudad. Ese espíritu, dotado del poder de instaurar el mandato de “no matarás” es preciso resituarlo. Por desgracia Bogotá se acerca cada vez más al colapso, las dos últimas administraciones la han sumido en la corrupción y el conflicto agenciado desde el Estado. La ciudad necesita entonces, más que nunca, un renovado liderazgo donde el Estado desempeñe un papel capital.

En un taller realizado en agosto de 2013 en la localidad de Ciudad Bolívar una mujer de apenas 16 años de edad decía, cargada de una turbadora seguridad, que las operaciones de limpieza son un acto de justicia porque ponen término a graves situaciones que afectan las gentes que hacen las cosas bien. El asesinato de “viciosos y ladrones” no sólo trae calma a zonas afectadas por su presencia –decía-, sino que tantas veces alivia el dolor de quienes han sido perjudicados por sus actos infames. ¿En qué hondo vacío de institucionalidad –de impunidad rampante en la aplicación de justicia- se insertan las tajantes afirmaciones de esta joven mujer? La acción integral (en el sentido de actuar sobre diversos aspectos) sobre los enclaves violentos cobra relevancia. Empero un puntal de esa acción pasa por una intervención de la seguridad sobre el acercamiento de los cuerpos policiales a la sociedad. Si bien el lema de la orientación comunitaria de la policía está planteado desde hace varios años es poco el avance en esta materia de enorme sensibilidad.

No es sólo una responsabilidad del Estado y sus cuerpos de seguridad, es también una cuestión que demanda compromiso de la sociedad. La invocación salvífica de las operaciones de limpieza, en boca de una chica de una zona de conflicto, se produce sobre el trasfondo de un tejido social resquebrajado. Bogotá ha hecho avances sobre sus mandatos, no cabe duda; pero todavía tiene potentes límites donde aflora una sociedad que no termina de cimentar el mandato del respeto a la convivencia. No sucede entre los “viciosos y ladrones” que acosan la vida diaria, tampoco acontece entre los vecinos que contratan y apoyan sin remordimiento la macabra acción de la limpieza.

La reconstrucción de la sociedad desde abajo, desde sus intercambios de la vida de todos los días, es una tarea de obligada observancia en la Colombia de hoy día. Por ahí pasa el propósito de construir una paz estable y duradera, un propósito en el que Bogotá tiene que hallar el aporte que por obligación debe hacerle a la paz.

BIBLIOGRAFÍA

- Acero, H. (2002). Reducción de la violencia y la Delincuencia en Bogotá, Colombia. 1994-2002. En *Biomédica*, 22 (2), 362-372.
- Acero, H. (2005). La Seguridad Ciudadana Una Responsabilidad de los Gobiernos Locales En Colombia. En Lucía Dammert y Gustavo Paulsen (Eds.) *Ciudad y seguridad en América Latina*-. Chile: Editorial Flacso, 169-234
- Acero, H., Nuñez, A., Parra, S y Castillo, M. (2013). *Evaluación de la política de seguridad y convivencia de Bogotá. 2012*. Bogotá, Colombia: Mimeo
- Aguilera, M. (2009). *La justicia de los contrapoderes 1952-2003*. Tesis de grado, doctorado de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2000) *Acciones que recuperan la seguridad y la convivencia ciudadana*. Bogotá, Colombia: Imprenta Distrital.
- _____ (2003) *Experiencias en seguridad y convivencia, Bogotá, D.C*. Bogotá, Colombia: Imprenta Distrital.
- Álvarez, D., Cruz, E., Díaz., A., Moreno, G y Wilches, J. (2009). *Paramilitarismo, cultura y subjetividad en Bogotá (2000-2006)*. Bogotá, Colombia: UNIJUS.
- Ávila, A y Nuñez, M. (2009). Bogotá cercada, neoparamilitarismo y bandas. En: Informe *¿El declive de la seguridad democrática?* Bogotá, Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris, 59-89.
- Ávila, A. (2013). *Políticas públicas en seguridad urbana y convivencia en Bogotá. Políticas públicas locales y crimen urbano*. Recuperado de <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Ariel%20Avila%20Final%20Paper.pdf>
- Azaola, E. (2012). La violencia de hoy, las violencias de siempre. En: *Desacatos. Revista de Antropología Social*. Ciudad de México, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 40, 13-32.

Cámara de Comercio de Bogotá (2000-2010). *Atlas interactivo*. Recuperado de http://www.ccb.org.co/documentos/ia/Reporte_2011/atlas.html

Caracol Radio (28 de Febrero 2007). *Denuncias sobre grupos neonazis que atacan a negros y a homosexuales. Informe especial*. Recuperado de <http://www.caracol.com.co>.

Casas D., y González P. (2005). Políticas de Seguridad y Reducción del Homicidio En Bogotá, Colombia: Mito y Realidad. Recuperado de: <http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/Colombia/evaluaciones/politicasBogota.pdf>

Colmundo Radio. *Cartel de sinaloa no tiene vínculos con las mafias*. Recuperado de <http://colmundoradio.com.co/>

DANE (2012a). *Comunicado de prensa del 17-05-2012. Sobre Gran Encuesta Integrada de Hogares*. Bogotá, Colombia: DANE

_____ (1980-2010). *Estadísticas Vitales. Defunciones no fetales. Defunciones por Causa Externa*. Bogotá, Colombia: DANE

_____ (2012). *Gran encuesta de hogares*. Bogotá, Colombia: DANE

DANE- Secretaría Distrital del Hábitat. (2011). *Encuesta Multipropósito Bogotá*. Bogotá, Colombia: DANE

Deleuze, G y Guattari, F. (1988). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia, España: Pre-Textos.

Departamento de Geografía. (2006). Asesoría y Acompañamiento a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en el tema de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en la implementación del Plan Integral de Seguridad, según los lineamientos del Acuerdo 135 de 2004 del Concejo de Bogotá, D.C. Bogotá, Colombia: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y Universidad Nacional de Colombia.

Duncan, G. (2013). La división del trabajo en el narcotráfico. Mercancía, capital y geografía del Estado. En: Giraldo, Jorge (Ed) *Economía criminal y poder político*. Medellín, Colombia: Eafit-Colciencias.

Echandía, C. (2000). Geografía de la violencia homicida en Bogotá. En *Caracterización de la violencia homicida en Bogotá*. Bogotá, Colombia: CE-DE-Universidad de los Andes y Alcaldía Mayor de Bogotá.

El Espectador (19 de febrero 2013). *Operativo en el Bronx terminó en disturbios*. Recuperado de <http://www.elespectador.com>.

_____ (21 de marzo 2013) *Desarticulan el 'gancho Homero' de 'El Bronx'*. Recuperado de <http://www.elespectador.com>.

- _____ (22 de marzo 2013). *A la cárcel siete integrantes de banda de traficantes de droga del Bronx*. Recuperado de <http://www.elespectador.com>
- _____ (7 de marzo 2013). *A la cárcel jefes máximos del tráfico de drogas en el Bronx*. Recuperado de <http://www.elespectador.com>.
- _____ (8 de enero 2013). *Una guerra en el silencio*. Recuperado de <http://www.elespectador.com>.
- _____ (28 de Noviembre de 2012). *Balacera en el Bronx deja un muerto y varios heridos*. Recuperado de <http://www.elespectador.com>.
- _____ (7 de diciembre de 2012). *Homero Simpson, la cara de la delincuencia en la calle del Bronx*. Recuperado de <http://www.elespectador.com>.
- El Tiempo (10 de abril 2008). *Menor apuñalado al salir del colegio*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (10 de abril 2008). *Menor fue apuñalado al salir del colegio*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (13 de enero 2013). *Así nació el temido clan delincriminal de 'Los Pascuales'*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (18 de septiembre 2010). *Un muerto y dos heridos dejó un enfrentamiento de jóvenes en Bogotá, en el sector de Chapinero*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (19 de octubre 2011). *Ya van 150 profesores amenazados en Bogotá*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (23 de marzo 2013). *Así operaba la banda más temida del 'Bronx'*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (25 de enero 2013). *Alias 'Rigo', el capo de capos de la calle del Bronx*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (25 de enero 2013). *Decomisan 3 toneladas de marihuana en Bogotá*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (26 de octubre 2012). *Bogotá, una capital con 132 pandillas*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (4 de febrero 2013). *Policía confirma retaliación entre 'Pascuales' y 'Luisitos'*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>
- _____ (9 de enero 2013). *Así son los 'Pascuales', la familia que azota el norte de Bogotá*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com>

- Formisano, M. (2002). Econometría especial: características de la violencia homicidas en Bogotá. *CEDE, No. 10*. 15-65. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Fundación Ideas para la paz. (2013). Crimen organizado, intensidad y focalización de la violencia homicida en Bogotá. Una mirada de Largo Plazo. Bogotá, Colombia: Fundación Ideas para la paz.
- Geertz, C. (1991). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- Grupo de Memoria Histórica. (2013). *Basta Ya. Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.
- Gutiérrez, F., Pinto, M., Arenas, J., Guzmán, T. y Gutiérrez, M (2009). Politics and Security In Three Colombian Cities. London, UK: Crisis States Research Centre, (44). Recuperado de : <http://www.lse.ac.uk>
- Kymlicka, W. (1996). Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal. *Isegoría*, Número 14 5-36.
- La FM (11 de Noviembre 2012). *Narcotráfico de la Calle del Bronx no tendría relación con carteles mexicanos*. Recuperado de [http:// http://m.lafm.com.co/noticias](http://http://m.lafm.com.co/noticias).
- Leal, F., Bulla, P., Llorente, M. y Rangel, A. (2002). Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana, Una Aproximación Hacia la Paz. En Álvaro Camacho y Francisco Leal (Eds.), *Armar la paz es desarmar la guerra*. Bogotá, Colombia: Giro Editores.
- Llorente, M y Rivas, A. (2004). La caída del crimen en Bogotá. Una década de políticas de seguridad ciudadana. En Informe *Final de Consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo-Departamento de Desarrollo Sostenible*. Washington D. C.
- Llorente, M; Escobedo, V; Echandía, C. y Rubio, M. (2001). Violencia homicida en Bogotá y estructuras criminales. *Análisis Político*, 44, 18-33.
- Martín, G y Ceballos, M. (2004). *Anatomía de una transformación. Políticas de seguridad Ciudadana. 1995-2003*. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Mockus, A., García, M., Sánchez, E., Rodríguez, V., Melo, J., Castro, C. (...) Guzmán, F. (2009). *Cultura ciudadana en Bogotá. Nuevas perspectivas*. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor-Cámara de Comercio-Fundación Terpel-Corpovisionarios.
- Mockus, A., Murrain, H y Villa, M. (2012). *Antípodas de la violencia*. Bogotá, Colombia: Banco Interamericano de Desarrollo-Corpovisionarios.

- Perea, C. (2007). *Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder*. México: Siglo XXI.
- _____. (2008). *¿Qué nos une? Jóvenes, cultura y ciudadanía*. Bogotá, Colombia: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia.
- _____. (2012). *Bogotá, Colombia: entre la mutación, la inequidad y la violencia*. En: *Informe Final de Bogotá. Memoria de la Violencia. Una construcción social desde la perspectiva de Las Víctimas. Los Casos De Bogotá y Medellín*. Recuperado de: www.iepri.org.
- _____. (2013). *Resituar la ciudad. Conflicto violento y paz. Análisis Político*. No. 77, Bogotá, Colombia: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Universidad Nacional de Colombia. .
- Perea, C., Guzmán, N., González, M., Rodríguez, S., Moreno, R. y Rincón, A. (2012). *Informe Final de Bogotá. Memoria de la Violencia. Una construcción social desde la perspectiva de Las Víctimas. Los Casos De Bogotá y Medellín*. Recuperado de <https://docs.google.com/a/unal.edu.co/file/d/0B3a3BLhsJwe7a1BxODdTOXJteFk/edit>.
- Pizarro, E. (2006). Las FARC-EP: ¿Repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En: Gutiérrez, E., Wills, E y Sánchez, G (2006). *Nuestra Guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá, Colombia: IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 171-209.
- Policía Nacional (2012). *Revista Criminalidad*. Año 2012. Volumen 55, no 3.
- Portal de noticias RCN, (2013) *Policía desmanteló la "banda de los costaleros" que delinquía en Bosa*. Recuperado de <http://lacarinosa.com>
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2008). *Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe de Desarrollo Humano 2008*. Recuperado de: http://viva.org.co/pdfs/Informe_de_Desarrollo_Humano_Bogota.pdf
- RCN Radio (31 de agosto 2010). *Atacan con piedras a profesores de Ciudad Bolívar*. Recuperado de <http://www.lacarinosa.com>
- Rojas, C. (1994). *La Violencia llamada «limpieza social»*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- Sánchez, F., Espinosa, S. y Rivas, A. (2003). *¿Garrote o zanahoria? Factores asociados a la disminución de la violencia homicida y el crimen en Bogotá, 1993 – 2002. Documento CEDE 2003-27 (Octubre)*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Secretaría Distrital de Planeación. (2011). *Población por estrato socio-económico. Bogotá, Colombia*.

Revista Semana (12 enero 2013). *Familia que delinque unida...* Recuperado de <http://www.semana.com/Home>

_____ (2013). *¿Cómo delinquen los urbanizadores piratas en Bogotá?* Recuperado de <http://m.semana.com/>

_____ (21 de abril 2013). *Cayó Rigo, el narco más buscado del 'Bronx'*. Recuperado de <http://www.semana.com/Home>

_____ (21 de marzo 2013). *Cae 'línea de mando' delincuencia en la zona del Bronx*. Recuperado de <http://www.semana.com/Home>

Silva de Sousa, R. (2004). Narcotráfico y economía ilícita: las redes del crimen organizado en Río de Janeiro. *Revista Mexicana de Sociología*, Año 66, núm. 1, enero-marzo.

Socha, D. (2013). *Plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes: un análisis al modelo de policía de Bogotá*. Tesis de maestría. (IEPRI). Universidad Nacional de Colombia. Año, 2013.

Varesse, F. (2011). *What is organized crime? Critical Concepts in Criminology*, 4, 1-35. Londres, Inglaterra: Routledge

Vásquez, T. (2005). Las tendencias del conflicto armado en Bogotá y Cundinamarca y sus consecuencias en la planificación del desarrollo. En Varios autores *De las ciudades a las regiones. Desarrollo regional integrado en Bogotá-Cundinamarca*. Bogotá, Colombia: Undesa/UNCRD-Mesa de Planificación Regional.

W Radio (25 de Junio 2013). *Implicados en asesinato de agente de la DEA fueron solicitados en extradición*. Recuperado de <http://www.wradio.com.co>

CIUDAD JUÁREZ: SOCIEDAD, CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA TRASNACIONAL

César Alarcón Gil¹

En el sepulcro muchas lágrimas van brotando/ en Ciudad Juárez han sido bastantes inocentes víctimas del contrabando/ la mafia anda recio y no le importa el precio/ veo decapitados por cuernos de chivo asesinados/ Dicen que la justicia es divina/ ya no puedo salir ni a caminar para la esquina/ por que de repente un convoy de federales se avecina/ las cosas han cambiado desde hace tiempo no hay empleos/ porque dueños de negocios se han marchado/ las calles son militarizadas y a la vez utilizadas por sicarios/ que patinan las llantas de sus carros en distintos vecindarios/ se perdió el respeto/ ahora los chicos fuman piedra en el gueto/ yo miré crecer a Beto y ni siquiera tuvo una bicicleta/ ahora que ya está grande siempre trae su metralleta...

Alma Centena. José Arón, vocalista del grupo de rap Mc Crimen (Ciudad Juárez)

Ya en las líneas del epígrafe se trasluce una parte de la densidad de los complejos procesos y dinámicas sociales por los que atravesaron los habitantes de Ciudad Juárez en el último

1 Maestro en Estudios México Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigador asociado al Colegio de Chihuahua.

Alan Cornejo Campbell, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en su calidad de auxiliar de investigación realizó importantes contribuciones a lo largo de las diversas fases por las que pasó la elaboración del presente texto. El autor desea agradecer además a los hermanos Carlos y Citlalli Murillo (UACJ), así como a Davide Dalla Pozza (La Tenda di cristo) por su tiempo, disposición y apoyo en la construcción de este trabajo.

lustro. Dibuja someramente el perfil de muchos de los protagonistas de la sangrienta historia reciente de la urbe fronteriza, desde jóvenes pandilleros hasta policías federales, militares y, por supuesto, traficantes de drogas ilegales (la mafia que anda recio).

Pero la potencia de la canción también tiene que ver con la realidad que refleja su narrativa, la síntesis de múltiples trayectorias que ofrece y las posibilidades de contraste que se desprenden de un análisis mas cuidadoso: se percibe el imaginario de un antes cuando el trabajo estaba prácticamente garantizado, cuando transitar sin temor por las calles era parte de la rutina y cuando la violencia homicida era relativamente silenciosa, reservada a ciertos espacios, grupos o actividades.

Pareciera ser que de un momento a otro, todo cambió. Esta ciudad fronteriza, ubicada en el extremo norte del Estado de Chihuahua, colindante con Estados Unidos, ha llegado a ser reconocida internacionalmente por los muertos que se comenzaron a contar por decenas en el día a día y que, con el paso de los meses, se convirtieron en cientos.² Tras sólo un año se habían acumulado miles.³ El simple hecho de salir a la calle entrañaba riesgos cada vez más elevados: atestiguar un homicidio, ver un cuerpo abandonado o despojos humanos en la vía pública, quedarse en medio del fuego cruzado entre opositores armados frecuentemente anónimos, sufrir un atentado, ser requisado, robado o retenido ya sea por células de los grupos de traficantes en pugna o los cuerpos de

2 Un primer llamado de atención sobre la fuerte violencia presente en Juárez puede ser ubicado desde la primera mitad de la década de 1990 con un fenómeno que aún permanece fresco en el imaginario sobre la ciudad: el asesinato de mujeres previa tortura y/o violación, fenómeno conocido como *feminicidio*. Volveremos sobre esto más adelante.

3 Las diferentes fuentes consultadas refieren un promedio no mayor a 300 homicidios al año en el periodo que va de 1985 al 2007. Ese último año se contabilizaron 306 asesinatos en una ciudad de 1.431.000 habitantes. Pero tan solo un año después, en 2008 la tasa se incrementó escandalosamente llegado a un aproximado de 118 -132 homicidios por cada cien mil habitantes. Dependiendo de la fuente, se estima que en el 2008 ocurrieron entre 1569 y 1623 homicidios..

seguridad del Estado (civiles y militares), empezaron a formar parte de la vida cotidiana.

Si a primera vista, salir a la calle se había convertido en una situación de potencial peligro, no tuvo que pasar mucho tiempo para que, el estar en el trabajo, atender un negocio o simplemente quedarse en casa estuvieran atravesados por la misma lógica de inseguridad, miedo o terror. La vorágine de violencia tuvo distintos tipos de expresiones incluso en los espacios privados: desde comandos armados que, transportados en camionetas o autos sin placas, entraban a algunas casas a matar a uno o todos sus moradores,⁴ hasta hombres armados o provistos con bidones de gasolina que quemaban negocios o balaceaban las fachadas de éstos ante la negativa de los dueños a pagar extorsiones.⁵

De lo anterior se desprende una **primera premisa**. Concentrándonos solamente en el periodo que va de 2008 al 2012, es decir, en un lapso de 5 años, *la ciudad vivió un periodo de violencia prácticamente sin precedentes. Se transformaron los patrones y la escala de violencia homicida. No se trató únicamente del aumento de homicidios sino de la espectacularidad con la que estos se cometían, con el realce que eran expuestos, con la simbología detrás de muchos de ellos: el cuerpo se convirtió en el mensaje, el horror se volvió costumbre, la gente dejó de morir de vejez, y la ciudad, otrora conocida por maquilar productos para la exportación internacional, comenzó a maquilar muertos*. Proliferaron las masacres en espacios públicos y privados; los asesinatos en parques, restaurantes, calles, gasolineras, casas y centros nocturnos; numerosos cuerpos fueron colgados de puentes; innumerables cadáveres envueltos en

4 A lo largo de la frontera norte de México es común observar automóviles de origen estadounidense que son introducidos a México, pero que no cuentan con los permisos de tenencia regulados por el Estado mexicano. Estos son carros ilegales que circulan prácticamente sin identificación, son conocidos como "autos chocolate".

5 Fenómeno que en el argot local fue conocido como el pago de "la cuota" o el ejercicio del "derecho de piso". El fenómeno de la extorsión era prácticamente inexistente hasta el 2008 en Juárez.

cobijas o con evidentes muestras de tortura abandonados en la vía pública. Aparecieron las extorsiones y esto terminó de generar un poderoso ambiente de terror entre los habitantes de la ciudad.

El gobierno municipal, alarmado y sobrepasado por los actos violentos que se estaban multiplicando por todo Juárez, solicitó ayuda del Gobierno Federal para hacerle frente al problema.⁶ La respuesta fue un plan de contención y choque denominado Operativo Conjunto Chihuahua que se echó a andar a finales del mes de marzo de 2008.⁷ Miles de militares y algunos contingentes de la Policía Federal fueron enviados a patrullar la ciudad. Mandos castrenses asumieron el control de las instituciones municipales de seguridad pública de las que se sospechaba una fuerte y añeja colusión con los grupos de traficantes.⁸ Después de una aparente baja en el número de homicidios en los meses posteriores a la llegada de los militares, los asesinatos violentos se incrementaron nuevamente poco tiempo después. (Milenio, 2009, 10 de abril); (La Jornada, 2010, 16 de marzo). La presencia militar en Juárez fue controvertida y se conjuró el riesgo político de su presencia sin una cobertura legal adecuada: se multiplicaron los reportes de abusos, violaciones a derechos humanos, torturas, homicidios culposos e incluso se reportaron desapariciones forzadas (La Jornada, 2010, 28 de marzo; Amnistía Internacional, 2009)

6 En esos momentos el alcalde de ciudad Juárez era José Reyes Ferriz (2007- 2010) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El gobernador del Estado era José Reyes Baeza (2004- 2010), del mismo partido político, pero convertido en opositor del primero como rechazo a su petición de ayuda al gobierno federal. El presidente de la república era Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012), del Partido Acción Nacional.

7 El Operativo Conjunto Chihuahua formaba parte de una serie de medidas similares que se estaban llevando a cabo en diferentes regiones de la geografía mexicana (Michoacán, Tijuana, Culiacán, Tamaulipas, Guerrero), donde el poder y la capacidad de gestión de los grupos de los traficantes habían alcanzado grandes dimensiones sobre la vida local, Alarcón (2010).

8 A pesar de la implementación constante de mecanismos de control de confianza dentro de la policía municipal, era evidente la participación de algunos de sus elementos en actividades relacionadas con el tráfico de drogas ilegales. Volveremos sobre ello más adelante. Bowden (2004), Valdez (2005), Fernandez y Rampall (2006), Molloy y Bowden (2011).

A las acciones de un Ejército desgastado en las funciones de seguridad pública y vilipendiado por diferentes segmentos de la sociedad juarense, le siguió el anuncio de un cambio de estrategia donde la Policía Federal resguardaría la ciudad. Se redefinía así la correlación de fuerzas en cuanto a los elementos de ambas corporaciones (militares y policías federales) desplegados sobre la metrópoli. El Ejército vigilaría las inmediaciones e instalaciones estratégicas de Juárez y los Federales se encargarían de la mancha urbana. (El Universal, 2010, 1 de abril; El Universal, 2010, 8 de abril) A esta transformación operacional se le dio un nuevo nombre, Operación Coordinada Chihuahua, y se le anunció como la segunda fase de la estrategia diseñada desde el centro de la República.

Mandos federales tomaron el control de las policías municipales que, mientras tanto, continuaban un sinuoso proceso de reorganización y *profesionalización*. Pero tal como la actuación de los militares había sido objeto de crítica, la de algunos de los Policías Federales generó una renovada oleada de descontento y desaprobación pública. Se repitieron algunos de los señalamientos que en su momento se le hicieron al Ejército, como abuso de los derechos humanos, torturas, detenciones ilegales u homicidios culposos (La Jornada, 2010, 30 de octubre; La Jornada 2011, 28 de enero). Pero, además, aparecieron otros nuevos. El más escandaloso de todos fue la percepción popular de que con los policías federales se hizo inocultable la masificación de extorsiones (El Universal, 2010, 15 de abril; La Jornada, 2010, 18 de octubre; *Somos frontera*, 2011, 20 de septiembre).⁹

A finales de julio de 2011, el entonces alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal (PRI, 2010 – 2013) anunciaba que la Policía Federal se retiraría a más tardar en septiembre de ese mismo año. El alcalde enfatizaba que había una

⁹ Este tema fue recurrente a lo largo de las entrevistas realizadas en el terreno que por diferentes razones y con diferentes rutas convergían en el anterior señalamiento.

disminución ostensible en los homicidios que se presentaban en la ciudad por lo que la Policía Federal podía ceder el control a la nueva Policía Municipal. Ésta quedaría en manos del controvertido teniente coronel retirado del Ejército mexicano, Julián Leyzaola, seriamente cuestionado en materia de derechos humanos por su actuación como responsable de la seguridad pública en el Estado de Baja California (Milenio, 2011, 20 de febrero; El Universal, 2011, 26 de julio; El Universal, 2012, 12 de octubre). Los policías municipales regresaron a labores de seguridad pública como protagonistas de primera línea y nuevamente se presentaron señalamientos de constantes violaciones a los derechos humanos, dirigidos principalmente a la población joven de sectores marginales de la ciudad (Milenio, 2011, 3 de junio; La Jornada, 2011, 18 de noviembre; Norte Digital, 2012, 10 de febrero).

De acuerdo a lo anterior, se puede sostener una ***segunda premisa***. Los operativos de control y contención instrumentalizados por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado mexicano se desarrollaron en medio de un dilema que confrontaba la *efectividad en la reducción de homicidios* (aparentemente el indicador más importante para los tomadores de decisiones) con el *respeto a los derechos humanos de la población local*. La información disponible sugiere que en el periodo de 2008 al 2012 se privilegió la efectividad en la reducción de homicidios. Pero al sumar elementos es evidente que la sociedad juarense se vio inmersa en distintos tipos de victimización y el *Estado mexicano, a través de sus diferentes cuerpos de seguridad y justicia, no fue el único que quebrantó los derechos de la población*.

Una ***tercera premisa*** se desprende de la consideración anterior. *Las actividades relacionadas con el tráfico de drogas en y desde la ciudad fueron disputadas violentamente por dos organizaciones que tenían diversas formas de inserción social en la metrópoli fronteriza*. La organización de traficantes de Juárez y su respectivo brazo armado de características para-policiales conocido como La Línea, sumado

a la pandilla de origen mexicano - estadounidense conocida como Barrio Azteca, que en su conjunto se encargaban del paso y la distribución de drogas ilegales en Juárez. Éstos entraron en una feroz pugna con la organización de traficantes de Sinaloa, que a través de su apéndice armado conocido como Gente Nueva y las pandillas conocidas como Mexicles (también mexicano-estadounidense) y Artistas Asesinos (de origen juarense) entraron en conflicto. Pero *en la medida que la disputa entre todos estos grupos armados se fue incrementado, grupos no asociados directamente a éstos cometieron numerosos delitos aprovechando el ambiente de terror que se vivía en Juárez.*

De esta forma se observaron al menos cuatro dinámicas de victimización: por la acción de las diferentes organizaciones de traficantes y sus brazos armados; por la acción u omisión de los cuerpos federales de seguridad (Ejército y Policía Federal); por la acción u omisión tanto de los cuerpos estatales de seguridad como los sistemas de procuración de justicia del Estado y municipio (policías estatales y municipales, jueces y agentes de ministerio público) y, finalmente, por parte de grupos no necesariamente relacionados con las organizaciones de traficantes en pugna, pero que muchas veces se hacían pasar como miembros de estos grupos.

Los asesinatos tuvieron un comportamiento heterogéneo. Para los años 2009 y 2010, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes creció aún más. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México arrojan una tasa de 191 y 229 homicidios respectivamente. Retomando datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a finales de 2010 el número de homicidios fue de 3.042 víctimas en una población de 1.332.131 habitantes.¹⁰ Ante el clima de

10 La cifra del total de habitantes denota además una disminución de moradores de la ciudad. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia penal. A. C. (2011) Ciudad Juárez, por tercer año consecutivo, la urbe más peligrosa del planeta.

inseguridad, miles de juarenses huyeron de la ciudad rumbo a diferentes destinos, tanto al interior de México como al país vecino, Estados Unidos.

Pero las cifras disponibles de los años 2011 y 2012 constatan una paradoja notable del comportamiento homicida en Ciudad Juárez.¹¹ Estadísticas oficiales dadas a conocer por la fiscalía del Estado de Chihuahua indican que en 2011 se contabilizaron 2.086 homicidios, mientras que en 2012 se redujeron a 750 casos.¹² Respecto al año pico que fue 2010, estas cifras muestran una considerable reducción, pero siguen siendo altas frente al promedio anual previo al 2008. Así, desde que se desató la espiral de violencia homicida en el 2008 y hasta diciembre de 2012 se tenían contabilizados poco más de 10 mil homicidios en una ciudad que no estaba acostumbrada a semejante escala de asesinatos en público.

Si se acepta lo anterior, podemos sostener una ***cuarta premisa***. *Aunque en ciudad Juárez una parte importante del aumento de los homicidios violentos coincide con el despliegue y permanencia de los cuerpos de seguridad federales (Ejército y Policía Federal) y estos asesinatos empiezan a disminuir con el cambio de mando de una policía*

11 En el caso juarense, es notable la disparidad en el manejo de datos respecto a los diversos hechos delictivos, incluyendo las cifras de homicidios. En muchas ocasiones no hay concordancia incluso en las estadísticas oficiales. Mientras que la fiscalía del Estado de Chihuahua proporciona ciertos números, el gobierno federal proporciona otros. Incluso en el plano municipal los datos no son homogéneos: la policía municipal puede reportar ciertas cifras, la fiscalía otras. De la misma forma, los medios de comunicación locales y ciertos estudios académicos manejan información disímil. Incluso han existido episodios de una abierta confrontación entre las autoridades nacionales que manejan estadísticas (INEGI) y el gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, que las ha calificado de “mentirosas”. Numerosas tendencias políticas entran en disputa a través de los números. De cualquier forma, consideramos que las cifras más confiables son proporcionadas por el INEGI. Se recurrirá a éstas en caso de que la información esté disponible. Cuando no sea así, algunos estudios académicos y diagnósticos institucionales nos serán de utilidad. Respecto a la controversia citada, véase Monroy, J. (21 de agosto de 2012). Miente INEGI sobre cifras de homicidios: Duarte. *El Economista*.

12 Valencia, Nick y Chacón, Arturo. (2013). Los homicidios disminuyen más de la mitad de 2011 a 2012. *CNN En español*.

municipal "renovada", difícilmente pueden atribuirse exclusivamente estas alzas y estas bajas a la acción directa del Estado, sus aparatos de seguridad y sus políticas de contención. Si bien las variaciones presenciales de éstos son factores explicativos de peso, no se sostiene el argumento de que sean los únicos elementos a considerar para explicar el comportamiento homicida en la urbe fronteriza. Esto implicaría desconocer la dinámica y comportamiento de las organizaciones de traficantes en pugna.

Los últimos dos renglones del párrafo anterior dan pie a una **quinta premisa**. *Juárez cumple una doble condición en el entramado internacional del tráfico de drogas. Por un lado, es una ciudad de tránsito que es simultáneamente puerto de llegada, donde se condensan diversas sustancias que son introducidas a Estados Unidos vía El Paso (Texas). Sólo son unos metros de distancia. Por otro lado, también es una ciudad de consumo donde diariamente miles de usuarios de ambos lados de la frontera buscan satisfacer sus hábitos.*

Cada una de estas operaciones requiere de una logística diferente, varían las funciones de los agentes sociales participantes y también difiere el entramado relacional en el que ambos fenómenos se presenta: la inserción social es heterogénea. Mientras en el primer caso es fundamental la complicidad de autoridades de ambos lados de la frontera, en el segundo, la incidencia de autoridades estadounidenses en la comercialización local es nula. De la misma forma, mientras que en el primer caso el soporte social de los agentes participantes es relativamente reducido –el objetivo es *pasar* la línea, esto es, ubicar la mercancía en Estados Unidos y por ende, mientras haya menos personas implicadas la transacción resulta más redituable-. En el segundo caso, el número de involucrados es comparativamente mayor, puesto que a un punto de venta acuden numerosos usuarios, lo que provoca diversos retos organizacionales y logísticos. Un agente social puede ejercer actividades en el tráfico al menudeo o el tráfico internacional de drogas, pero sus espacios de interacción son diferentes.

Sexta premisa. *Aunque Juárez ha sido una ciudad donde el tráfico de drogas es una actividad centenaria, el relativamente reciente incremento en el tránsito de cocaína por el territorio local (desde la década del 80) revolucionó las finanzas y con ello distintos tipos de capacidades organizacionales de los traficantes de drogas que hacían presencia en la urbe fronteriza.* Para que ello se hiciera posible fue necesaria la articulación de varios procesos, como el cambio de los patrones de consumo en Estados Unidos, la declaratoria del tráfico de drogas como problema de seguridad nacional en ambos países, con el posterior fortalecimiento de los controles fronterizos, y la alianza de traficantes mexicanos con colombianos. Si a esto se le suma la proliferación de puntos de venta de drogas al menudeo (*tienditas* en el argot local) que se aceleró en la década de los 90, el tráfico de cocaína condensa y casi simboliza tanto la importancia estratégica de la aduana juarense como punto de paso, como la ciudad en su conjunto en cuanto lugar de consumo.

En torno a estas seis premisas básicas, se dibuja la hoja de ruta por la que va a transitar el presente artículo. En una primera sección trazaremos algunas líneas gruesas para comprender los fundamentos básicos de la evolución de la ciudad como un espacio híbrido, condicionado inexorablemente por su situación fronteriza. En una segunda parte observaremos brevemente el comportamiento del tráfico y los traficantes de drogas en la ciudad desde el inicio del fenómeno en los primeros años del siglo XX hasta finales de la década de los 80. Esto permitirá una comprensión más profunda de los cambios que se han producido en la ciudad. La tercera sección dará cuenta del periodo que va desde 1993 hasta finales de 1997, enfocándonos en la capacidad de las organizaciones de traficantes para mimetizarse en la cotidianidad de la urbe fronteriza y observar de paso lo que en este proyecto hemos denominado *la inserción social de la violencia*. Una cuarta sección mostrará las transformaciones ocurridas entre 1997 y 2007, periodo que va desde la muerte de Amado Carrillo, la consolidación de su hermano Vicente y la incorporación de nuevas

lógicas y estilos para el tráfico local e internacional de drogas. En la quinta parte nos concentraremos en las principales características y actores del periodo 2008–2013, cuando se quebrantaron los patrones previos.

I. EL PERFIL DE LA CIUDAD

La frontera entre México y Estados Unidos abarca poco más de 3.100 kilómetros desde San Diego, California (Océano Pacífico) hasta Brownsville, Texas (Golfo de México). Pero esta línea fronteriza no sólo marca el fin geográfico de un país y el inicio de otro. Tampoco puede entenderse sólo como el principio y el fin de dos entramados culturales diferentes, con diversos tipos de organización política y heterogéneas formas de ordenamiento jurídico.¹³ En esta región coinciden también dos mundos: el desarrollado, con un país con capacidades globales además de alto poder adquisitivo, y el subdesarrollado, donde personas de diferentes países del continente se aglutinan esperando poder llegar al otro lado, a hacer negocios, o a generar un poco de la riqueza que se percibe allende la frontera. Esto le da connotaciones muy diferentes a los habitantes de todas y cada una de las ciudades ubicadas en esta franja geográfica (Bustamante, 1992).

Ciudad Juárez se encuentra justo en el punto medio de los 3.100 kilómetros de frontera México – Estados Unidos. Su vecino del lado estadounidense es El Paso. Juárez, junto la región de San Diego (California) y Tijuana (Baja California) son las urbes fronterizas más densamente pobladas del mundo.

13 Un excelente texto sobre la construcción cultural de la vida en frontera de la región Juárez – El Paso puede encontrarse en González Herrera (2008).

Mapa No. 1 Región Juárez – El Paso



Región Juárez – El Paso. Fuente: El Paso Regional Economic Corporation (2009).

Anualmente 15 millones de vehículos particulares y 9 millones de peatones cruzan los puentes internacionales asentados en la región (Cervantes, 2010). Miles de personas atraviesan diariamente para estudiar, trabajar, hacer compras o disfrutar momentos de esparcimiento en ambos lados de la frontera. Pero la profundidad de esta interacción también somete a Ciudad Juárez a presiones que han tenido poca respuesta por parte del gobierno mexicano en sus distintos niveles. El puente internacional Paso del Norte ha sido uno de los principales puntos de repatriación de mexicanos que infringieron distintos tipos de leyes estadounidenses, empezando por las migratorias y culminando con las penales. Autoridades del municipio de Juárez calculan que en el periodo que va de 1999 al 2009, alrededor de 100.000 mexicanos fueron deportados vía terrestre a Juárez. En sus propias estimaciones, se llegó a mencionar que cuando menos el 4 % de los deportados eran delincuentes “muy peligrosos” (La Jornada, 2009, 8 de septiembre).

Juárez no es la capital política del Estado de Chihuahua, la cual tiene un nombre homónimo, Chihuahua, y está en el centro geográfico de la provincia. Partiendo de Juárez, Chihuahua capital se encuentra a poco menos de 370 kilómetros hacia el sur, en una carretera que va en línea recta y que se recorre aproximadamente en 4 horas. Aquí se deja ver una característica notable que nos da luz sobre la relación que la ciudad guarda no sólo frente al Estado local, sino también frente al Estado nacional. Un punto de tensión y factor explicativo de diversas tendencias. Sin ser la capital política, Juárez es el principal motor económico de Chihuahua. Esta fortaleza económica no se ha traducido necesariamente en la superioridad política de un municipio que rivaliza con la capital, por lo que ha existido una relación compleja y por momentos agria entre Juárez y Chihuahua.

De la misma forma, Ciudad Juárez ha permanecido históricamente lejos del radar y las preocupaciones de las autoridades nacionales ubicadas en el centro geográfico y político de México: el Distrito Federal –a poco más de 1.800 kilómetros de distancia-. Diversos autores hablan de una especie de “abandono histórico” de

la franja fronteriza del norte del país por parte de las autoridades federales que esperaban que la región se beneficiara de los ciclos económicos estadounidenses, incentivando la inversión y la construcción de naves industriales en este sector del país (Martínez, 1982; García, 2007; Herrera, 2008; Garza, 2011b).

Desde la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento económico de Juárez fue derivándose del establecimiento de numerosas empresas manufactureras de capital extranjero, principalmente estadounidense. Maquilas es como se les conoce en México y su presencia data de mediados de la década de los 60.¹⁴ La llegada de esta nueva forma de producción a la región provocó un viraje de 180 grados, tanto en la vocación económica de la ciudad como en el número de personas que se quedaron a residir en ella. En un lapso relativamente corto de tiempo, el esquema económico local pasó del privilegio del comercio y los servicios, a un crecimiento fundamentado principalmente en lo industrial (Carrillo – Hernández 1985: 81).

Poco a poco, muchos de los que se dirigían a Estados Unidos y que por diversas razones fueron detenidos o deportados hacia la frontera, encontraron trabajo en Juárez. De esta forma se fue adelgazando la percepción de la ciudad como un lugar de paso y se

14 El establecimiento de este tipo de industrias en México tiene mucho que ver con la articulación de varios procesos: la desindustrialización de los esquemas productivos en suelo estadounidense, el aumento de la economía de servicios en ese país, un incremento en la flexibilidad laboral, el creciente desarrollo de la economía de la información y la relocalización productiva en el lado mexicano de la frontera compartida, donde los costos de producción y sobre todo la mano de obra ha sido más barata. Como antecedente en cuanto al momento histórico que se vivía en la órbita internacional y binacional, la segunda guerra mundial hizo posible que se pactara la llegada de trabajadores agrícolas mexicanos al campo estadounidense. Este pacto fue conocido como “programa bracero” y estuvo vigente entre 1942 y 1964. Antes de finalizar este acuerdo, comenzó a funcionar el Programa Nacional Fronterizo (1961 – 1965) que buscó hacerle frente a la situación del desempleo y la pobreza regional una vez que se fueron desbordando las corrientes migratorias hacia Estados Unidos. Así, para finales de 1965 surgió el Programa Industrial Fronterizo (PIF) y su componente más conocido, la Industria Maquiladora de exportación (IME). Parte de la descripción este proceso histórico puede encontrarse en Martínez (1982); Carrillo y Hernández (1985); Almada (1995); Amaral (2007); Stern (2007) y Garza Almanza (2011).

robusteció la imagen de una metrópoli que ofrecía empleo. Con el correr del tiempo miles de personas fueron llamadas directamente por representantes de las maquiladoras y fueron reclutadas incluso en sus lugares de origen, que comúnmente se encontraban lejos de la frontera. “Al pueblo llegaban camiones –narra un habitante de Juárez de origen veracruzano- y el reclutador se ponía en la plaza del centro con su megáfono. Y a gritar. Y a ver quien quería trabajo. ‘Vente, que aquí te vamos a dar tanto’. Nos ofrecían un lugar donde vivir mientras encontrábamos algo qué comer en las jornadas de trabajo, además de la *lana* (dinero) quincenal fija. ¿Cómo uno no se iba a ir así, si era peor quedarse?”.

Desde mediados de la década del 70 y con algunos altibajos hasta la llegada de 2000, la ciudad tuvo tasas de crecimiento poblacional que por momentos duplicaron la media nacional (Martínez, 2009; Santiago, 2011). Los diversos diagnósticos sociales y territoriales sobre la ciudad publicados en la década de 2000 nos dan un perfil más preciso de muchas de las trayectorias que se enlazaron en la configuración de la ciudad. Un reporte realizado por la Secretaría de Gobernación (2004:13) documenta que para mediados del 2004 entre el 32 y el 50 % de los habitantes de Juárez habían nacido en otros estados. El incesante flujo de migrantes había ocasionado un crecimiento caótico del espacio urbano y existían numerosos enclaves de pobreza que se reforzaban por la falta de infraestructura para la satisfacción de necesidades básicas. En el mismo reporte se demuestra la falta de pavimentación en el 50 % de las calles, un déficit de 80 % de áreas verdes y zonas de recreación, además de que alrededor de 200 mil familias vivían en zonas de alto riesgo.

En el mismo reporte se mencionaba que generalmente las calles no pavimentadas se encontraban lejos de los parques industriales y que muchas de las casas apenas estaban hechas de cartón, láminas y otro tipo de materiales en una ciudad con temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. En palabras de un investigador local, la estructura espacial urbana de Ciudad Juárez creció 16 veces en los últimos 20 años –hasta el 2009-, con una tasa tres veces mayor que el número de habitantes. Según esa pes-

quiza, el crecimiento acelerado de la mancha urbana “provocó un desajuste espacial entre las áreas residenciales y los centros de empleo” (Fuentes, 2009). Lo anterior significa que en un lapso corto de tiempo el crecimiento de la mancha urbana fue más veloz que la dinámica poblacional. Por su parte, los centros de empleo, principalmente las naves industriales, quedaron cada vez más lejos de los lugares de residencia de los trabajadores. Así, el uso del automóvil y el transporte privado de las empresas maquiladoras fueron cada vez más necesarios para desplazarse dentro de una ciudad con un pésimo y caro sistema de transporte público.

En un reporte realizado por académicos del Colegio de la Frontera Norte junto con personal del Instituto Nacional de las Mujeres en el 2005, se mencionaba que a pesar de que la ciudad contaba con un 92% de dotación de agua potable, en los lugares donde aún no llegaba había potenciales riesgos infecciosos por la deficiencia del recurso. Alrededor del 20% de la mancha urbana tenía déficit de drenaje en casa habitación y zonas públicas como vías principales y alrededor del 11 % del territorio local estaba compuesto por terrenos baldíos diseminados por toda la ciudad (Cervera, 2005). Era patente la dispersión territorial y el poco interés de los urbanizadores y las autoridades locales por densificar la parte central de la urbe, reduciendo así tanto las distancias como los tiempos de traslado.

Diagnósticos dados a conocer en el segundo lustro de la década enriquecen estos primeros datos y nos dan una visión más profunda. Un estudio realizado por académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2007 confirma que cuando menos el 37% de sus habitantes habían nacido fuera de la ciudad y en algunos lugares, como el norponiente de la metrópoli fronteriza, la cifra alcanzaba el 45%. Se remarcaba que la presencia de la industria maquiladora de exportación le daba una dimensión muy particular a la situación del empleo en Juárez y que en virtud de la volatilidad del ramo, las condiciones de trabajo eran “sumamente precarias” ya que lo que se privilegiaba era “la productividad y los bajos costos”, no el desarrollo humano de los trabajadores (Jusidman, 2007; Almada H., 2007).

La complejidad del panorama poco cambió en las investigaciones publicadas en 2009 y 2010, en el periodo del auge de los homicidios violentos. En el reporte del 2009, encargado por la Secretaría de Gobernación a miembros de organizaciones no gubernamentales y reconocidos investigadores de las universidades locales, se corroboraron datos y tendencias acumuladas a lo largo de décadas. Midiendo la situación del empleo y la infraestructura económica de la ciudad, el reporte señalaba que 9 de cada 10 empresas derivadas del acuerdo de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en Juárez era de origen extranjero. -Esto ponía en una situación de enorme vulnerabilidad a la realidad productiva de la ciudad, la cual por lo menos desde mediados de la década del 70 hasta 1984 - había *feminizado* el mercado laboral. Es decir, las industrias contrataban casi exclusivamente a mujeres con graves consecuencias a corto, mediano y largo plazo en diversos entramados familiares- Otro factor adverso para las diversas industrias manufactureras, que para 1999 generaban el 64% del empleo en la ciudad, fue la crisis económica mundial ocurrida entre 2001 y 2003 que ocasionó una desaceleración en la economía local. En general, la industria maquiladora había sido una fuerte generadora de empleo, pero por sus condiciones estructurales no generaba mucho crecimiento económico (Ampudia, 2009)

Bajo estas condiciones, la vida en familia y muchos de los espacios en los que habitaban se encontraban en circunstancias altamente desfavorables. En el mismo diagnóstico se comprueba que en la década del 2000 hubo una disminución en la tasa de crecimiento de la población (del 4.3% en la década de 1990 a un 1.3% anual); que se continuó con una política agresiva de urbanización, pero sin el número necesario de usuarios. Se construyeron miles de viviendas sin contemplar las necesidades y los derechos de los posibles habitantes, casas estrechas, sin zonas de recreación y ubicadas lejos de los puestos de trabajo. Se dio una franca ausencia en la oferta de servicios sociales, tales como el cuidado infantil y espacios públicos como parques y canchas deportivas garantizadas

en el papel por el Estado, y de escuelas de educación básica cerca de muchas de las nuevas viviendas.

En cuanto a las formas de organización familiar hubo una serie de rupturas condicionadas por la articulación de una multiplicidad de factores: extenuantes jornadas laborales de uno o ambos padres en la industria maquiladora, figuras paternas debilitadas provenientes de culturas con altos niveles de autoritarismos masculinos, figuras maternas que asumieran el rol de proveedoras, quebrantamiento del apoyo proveniente de las redes de familia extendida (tíos, abuelos, etc.), violencia intrafamiliar, bajos recursos ante un alto costo de vida... La sumatoria de factores ocasionó el descuido de miles de niños que crecieron con frágiles referentes de autoridad, en entornos violentos, bajo condiciones económicas poco favorables (Acosta, 2009; Almada, 2009; Velázquez, 2009).

Cada uno de los rubros marca un pliegue en el telón de fondo de la compleja realidad social presente en Ciudad Juárez. Por separado, cada uno de los datos muestra importantes carencias en la dotación y calidad de los empleos, las viviendas, los servicios básicos y la infraestructura de la ciudad, sin olvidar el dibujo a lápiz que surge del tipo de habitantes, sus perfiles y rangos de acción en un entorno altamente demandante. Mas a pesar de ello, Juárez era un lugar de trabajo, un lugar para volver a empezar, para sobrevivir. Sobre el conjunto, estos mismos datos revelan una ciudad fragmentada, con el predominio de intereses privados en esferas tan diferentes como la producción industrial y el desarrollo urbano. La ciudad tuvo durante mucho tiempo altos niveles de migración y baja capacidad de ordenamiento territorial. De la misma forma, era clara la absorción deficiente de los numerosos contingentes poblacionales que se fueron acumulando. A ello se le sumaba una debilidad o franca falta de capacidad de gestión de lo público a través de una correcta articulación del poder político y los liderazgos sociales, que en la práctica sólo era posible en las inmediaciones de las contiendas electorales.

II. PROHIBICIONES Y OPORTUNIDADES

1. Origen y crecimiento

“La historia del narcotráfico mexicano –señala un periodista británico- es también la historia de la política de estupefacientes de los Estados Unidos” (Grillo, 2011). Las prohibiciones y regulaciones de un lado creaban oportunidades para aquellos que estuvieran dispuestos a correr el riesgo en el otro. Como afirma un académico estadounidense radicado en El Paso: “[son] relaciones bidireccionales. Los flujos de actividades, prácticas y mercancías -lícitas o no-, han sido históricamente de ida y vuelta en ambos lados”(Entrevista a Howard Campbell, El Paso Texas, 14 de diciembre de 2012). Como se sostiene en un sólido trabajo sobre el contrabando de tequila en Laredo, Texas a inicios del siglo XX: “En el complicado mundo de los negocios en la frontera, la diferencia entre el comercio lícito e ilícito es lo que tú llevas cargando mientras cruzas de un lado a otro” (Díaz, 2011: 68).

Además de los constantes reportes sobre el contrabando de distintos tipos de mercancías a lo largo y ancho de una porosa línea fronteriza, los primeros indicios de vigilancia sobre drogas en la frontera de Juárez y El Paso datan de cuando menos 1911 (Astorga 2003 y 2005). Es decir, antes incluso de la instauración formal de los primeros controles sobre estas sustancias (*Harrison Narcotics Act*, 1914). Con el paso de los años y siempre dependiendo del énfasis que fue poniendo cada administración federal del gobierno de Estados Unidos al tema, fueron multiplicándose las leyes y creciendo el aparato burocrático encargado de hacerle frente al problema de las drogas ilegales (Alarcón, 2010; Simon, 2011).

Las primeras redes de traficantes eran sumamente rudimentarias y sus primeros protagonistas introducían drogas junto con muchas otras mercancías. Se llegaron a presentar casos en los que las drogas eran ubicadas en Juárez en vez de El Paso, debido a la cantidad de lugares de consumo que había en la ciudad mexicana-

na¹⁵. Los fármacos que en su momento fueron declarados ilegales del lado norte de la frontera aún no habían ganado la identidad económica que permitiera los altos márgenes de ganancia que les distinguiría de otro tipo de mercancías.

La coherencia de la línea divisoria revelaba desde entonces la doble faz del negocio que se concentraba en la urbe. Juárez comenzó a ser un punto de tránsito, pero también un reconocido centro de consumo. Desde la propia instalación de las redes del ferrocarril que atravesaban la región, Juárez fue depositario de una animada vida nocturna. La cercanía de *Fort Bliss*, una de las más importantes instalaciones militares en territorio estadounidense, le añadía un cariz diferente. Desde la ciudad mexicana se ofrecían drogas baratas y entretenimiento nocturno en un ambiente de tolerancia; desde la ciudad estadounidense llegaban usuarios que ofrecían dólares en efectivo y no querían muchas preguntas. Y la línea que separaba ambas realidades podía ser superada sólo a al cruzar un puente. Con la entrada en vigor de la prohibición del alcohol en el territorio estadounidense, que duró de 1919 a 1933, la vida nocturna en Juárez no hizo más que crecer, a pesar de que ello no era bien visto por las autoridades del centro de la República (García, 2010).

De esta época datan figuras legendarias en la cosmogonía del tráfico de drogas local. En el lado de los traficantes, sin duda destacan los casos de Enrique Fernández Puerta y, sobre todo, de Ignacia Jasso viuda de González, conocida con el alias de La Nacha. En el campo político es notable la figura del Gobernador General Rodrigo

15 Parte de la explicación se encuentra en el cruce de dos variables: la presencia del ferrocarril y los primeros movimientos para el control de ciertas sustancias. El desarrollo ferroviario es antiquísimo y data del último tercio del siglo XIX. Va de la mano con el desarrollo comercial y el encadenamiento de diversos esquemas de producción tanto en México como en Estados Unidos. En términos históricos, la presencia del ferrocarril ayuda a entender los primeros momentos del crecimiento de una ciudad que durante mucho tiempo se compuso de algunas cuantas casas y aparecía como un asentamiento entre otros más en la frontera norte de México. El ferrocarril se instaló primero en El Paso conectando el oeste con el este de la Unión Americana, en Juárez después, vertebrando el sur con el norte (México con Estados Unidos). Al respecto, véase Martínez (1982), González de la Vara (2009) y González Herrera (2008)

Quevedo (Mottier, 2009). Fue uno entre muchos otros políticos regionales que en diversos puntos de la historia del siglo XX se vieron involucrados en el tráfico de droga (Recio, 2002), (Astorga, 2003), (Mottier, 2009), (García, 2010), (Campbell, 2011), (Carey, 2011).

Quizá la figura más prominente del tráfico de drogas local durante un buen lapso del siglo XX fue Ignacia Jasso viuda de González. Aparentemente la red encabezada por La Nacha se consolidó a lo largo de la década del 30 –aunque está documentada su participación en el negocio ilegal desde la década del 20- y tuvo vigencia prácticamente hasta su muerte en 1977. Su estilo, fundamentado en un bajo perfil y con poca necesidad de reconocimiento o ascenso social, le permitió trabajar en silencio durante los tiempos más conflictivos en los que su grupo no era el protagonista (Entrevista a Bob Chessey, El Paso, Texas, 14 de diciembre de 2012). Incluso cuando con el paso de los años su red alcanzó mayor visibilidad, se distinguía por su capacidad de adaptación, sus habilidades de negociación y sus relaciones públicas (Campbell, 2011). Los primeros reportes indican que La Nacha no vendía drogas desde su vivienda, sino a través de terceros. Llegado su momento, “hoteles, domicilios privados, salones de baile, garitos, prostíbulos y calles de la ciudad se constituían en centros de distribución”, cuenta García (2010). Aunque la organización de La Nacha no era la única que funcionaba en la ciudad, sí era una de las más importantes.

Hasta por lo menos finales de la década de los 60, ni las dimensiones del negocio ni el interés de los tomadores de decisiones de ambos países fueron suficientes como para ubicar al tráfico de drogas bajo la categoría de amenaza. Con todo y que los reportes de las diversas agencias estadounidenses señalaran sistemáticamente la vinculación de los políticos con los traficantes, estos episodios difícilmente trascendían más allá de algunas transitorias amonestaciones. El epicentro de los intereses estadounidenses se mantuvo durante mucho tiempo distanciado del tema de las drogas ilegales puesto que el entorno geopolítico de la posguerra privilegiaba la atención de otro tipo de fenómenos. Durante el periodo de las guerras mundiales o en el escenario que se configuró al surgir la

Guerra Fría, el tráfico y los traficantes de drogas eran vigilados con cuidado, pero sin el sentido de urgencia que representó el esfuerzo bélico primero y la confrontación ideológica del mundo bipolar que se desarrolló después.

La llegada de la década de 1970 trajo consigo una nueva oleada de fuertes transformaciones a diferentes escalas que eventualmente se dejarían sentir en Ciudad Juárez. En el lado norte de la frontera, el presidente Nixon declararía que su gobierno estaba en “guerra contra las drogas” (1971) En 1973 se creó la *Drug Enforcement Administration* (DEA) y, tan solo un año después, se instaló *El Paso Intelligence Center*, cuya misión principal era generar información de inteligencia sobre el tráfico de drogas en la región. En México, entre 1975 y 1978, se llevó a cabo la operación Cóndor, un operativo anti-drogas con participación militar que desplazó a muchos traficantes de origen sinaloense hacia Guadalajara, algunos de los cuales trabajaron desde el norte de México, permitiendo el fortalecimiento organizacional de una de las redes de traficantes más poderosas del país.

En una escala más amplia, desde principios de la década pudo ser detectada una transformación acelerada en los patrones de consumo de drogas en Estados Unidos, siendo la cocaína la nueva droga de preferencia en detrimento de la marihuana. Durante la segunda mitad de la década comenzaron a ser perceptibles alianzas entre organizaciones colombianas y mexicanas, y parte del flujo de cocaína comenzó a pasar por el norte de México, lo que incluyó a Ciudad Juárez (Musto, 1993), (Astorga, 2003), (Alarcón, 2010)

La Nacha falleció en 1977 y aunque su red era la más añeja y poderosa, se trataba de una red limitada en escala y agentes sociales participantes. No puede sostenerse, en este punto, que su red reclutara masivamente a jóvenes para vender la mercancía declarada ilegal en las calles. Así como tampoco, que sus márgenes de ganancias fueran extraordinariamente altos si el punto de comparación son las redes que se desarrollaron después de la década de 1980. “Aunque claramente había mucho consumo en Juárez por sus particularidades históricas- sostiene un investigador estadounidense- la

forma de comercialización de La Nacha no era muy sofisticada y se puede decir incluso que era artesanal” (Entrevista a Bob Chessey, El Paso, Texas, 14 de diciembre de 2012). Pero hay una tecnificación muy fuerte en los años 80: desde Ontiveros hasta Aguilar Guajardo, Muñoz Talavera y, por supuesto, Amado Carrillo.

2. La década de los años 80: un nuevo modelo para el negocio de las drogas ilegales en Juárez

A la previa dispersión y relativa desorganización de los años de La Nacha, le siguió un creciente proceso de centralización que se apoyó en la maquinaria de prácticas extralegales con la que operaban diversos agentes del Estado mexicano vía la Dirección Federal de Seguridad.¹⁶ Al menos tres figuras aparecen en el escenario local del tráfico de drogas, figuras que poco a poco consiguieron niveles de eficiencia más adecuados en un horizonte temporal donde los réditos del negocio ilegal comienzan a ser más lucrativos (1982–1993): Gilberto Ontiveros Lucero alias El Greñas, ex carpintero de Villa Ahumada, Rafael Muñoz Talavera quien junto con algunos de sus hermanos trabajaba en el negocio ilegal en Juárez y Rafael Aguilar Guajardo, ex agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)¹⁷.

16 La DFS funcionó desde 1947 hasta 1985. Esta poderosa policía política tuvo un éxito notable en el desmantelamiento de grupos anti estatales, como los movimientos guerrilleros de la década de 1970. Funcionaba con una cobertura legal endeble y con atribuciones nebulosas que se esclarecían de acuerdo de las necesidades de los tomadores de decisiones del momento. Con el aplastamiento de los grupos guerrilleros y en un entorno de Guerra Fría, no pocos agentes de la DFS se encargaron de ejercer el rol de intermediación entre los grupos de traficantes y las élites políticas. La gradual descomposición de la DFS culminó en lo inevitable: agentes de la DEA comprobaron la participación activa de empleados de esta institución en el asesinato de Enrique Camarena Salazar, oficial en servicio de la DEA en México. Tras un vendaval político, la DFS desapareció en diciembre de 1985. Respecto a la DFS véase Aguayo (2001).

17 Otra de las figuras regionales de gran importancia fue la de Pablo Acosta alias El Pablote, que trabajaba en Ojinaga (Chihuahua), a poco más de 4 horas de Ciudad Juárez. Esta figura es de particular importancia porque él encabezaba una de las primeras y más sólidas redes de tráfico de cocaína durante el primer lustro de la década de 1980. Su alianza con la organización de traficantes sinaloenses afincada en Guadalajara generó los contactos que llevaron al traficante colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano a la zona. Poppa (1990); Cortés (2009).

La información disponible sugiere que el liderazgo recayó sobre Rafael Aguilar Guajardo, quien se apoyó en los hermanos Muñoz Talavera para reconfigurar el negocio en y desde Ciudad Juárez. De forma temprana, Ontiveros Lucero fue enviado a prisión acusado de delitos contra la salud en 1986.¹⁸ El grupo reclutaba policías para que le asistieran en la logística del transporte y resguardo de drogas en la ciudad: se les proporcionaba equipos de comunicación y un pago semanal a cambio de información y tranquilidad para sus operaciones. A cambio la organización ofrecía seguridad, evitaba la proliferación de puntos de consumo en lugares no autorizados y garantizaba estabilidad en la zona. Incluso se permitía la presencia de vendedores independientes de la organización de Juárez, siempre y cuando respetaran las restricciones impuestas por los líderes de ésta. Simultáneamente se coordinaba el pago de acuerdo al rango y la relevancia estratégica de la persona en el cargo oficial.¹⁹

La empresa ilegal funcionaba con relativamente bajos niveles de incertidumbre respecto tanto al comportamiento homicida, como a la ubicación de la carga del otro lado de la frontera. Mientras que durante la misma época una ciudad como Medellín se desangraba en medio de guerras fratricidas, las dimensiones estructurales en las que se desenvolvía el tráfico de drogas en Juárez hacía poco probable el incremento exponencial de los homicidios violentos. El homicidio era la respuesta final a la ofensa, el acumulado de faltas o la traición intra o inter grupal. Aparecía después de todo un abanico de sanciones intermedias que iban desde la advertencia verbal hasta las agresiones físicas no mortales. Esto no implicaba, por otro lado, que la sombra de la muerte se dejara de sentir en

18 En la órbita del tráfico internacional de drogas, data también de 1986 la firma de la *National Security Desition Directive* No. 221 que declaraba al tema del tráfico de drogas como un “problema de seguridad nacional”. En la práctica esto autorizó al gobierno de Estados Unidos a implementar medidas más severas contra los traficantes fuera de su territorio. Musto (1993).

19 Según reportes periodísticos de la época, esta red atravesaba la procuraduría general de la República, la Policía Judicial Federal en Chihuahua e, incluso, llegaba a la propia Secretaría de Gobernación (equivalente al Ministerio del Interior de otros países).

todo momento. La violencia simbólica como preludio a la violencia física: “o le bajas o nos arreglamos de otra forma compa” (Diario de campo, Colonia Altavista, Ciudad Juárez, 15 de marzo 2012). Cuando llegaba la determinación del homicidio, se procuraba que fuera discreto, preferiblemente en espacios privados y, ante todo, que el asesinato obedeciera al interés superior del jefe del grupo o los líderes de la organización. Existían sanciones por los asesinatos “sin sentido,” esto es, asesinatos no aprobados por los superiores jerárquicos.

“Esta era una regla de oro en la época -cuenta un ex policía que trabajó en Juárez durante ese periodo- Se mataba como último recurso. Siempre había advertencias. A nadie le convenía llamar la atención. Lo que debía prevalecer era el negocio y si hay muchos muertos en el negocio es que el negocio no estaba funcionando correctamente” (Entrevista a alias Raúl, Ciudad de México, 23 de enero de 2013). Los insubordinados, adversarios o posibles competidores, eran conminados a “arreglarse” pacíficamente. Si no, se contemplaban otras opciones. En el argot local se comenzó a hablar de *levantones*, esto es, una especie de secuestro sin fines de extorsión o lucro. Los ejecutores de las sanciones eran conocidos como *pistoleros* o *gatilleros*. Aún tardaría algún tiempo en llegar la palabra *sicario*, de amplio uso en el caso colombiano. Al *objetivo*, -eufemismo con el que se designaba a la posible víctima- se le retenía, interrogaba, y/o torturaba en “casas de seguridad”, lugares rentados específicamente con estos fines que podían ser casas de habitación, bodegas o locales comerciales. Dependía de la voluntad de el o los líderes de la organización, así como de la gravedad de la falta, para que se decretara la pena de muerte: efectiva y a realizarse sin demora ni cuestionamiento.

Había dos grandes formas para otorgarle significado a la muerte y con ello hablar de la importancia del fallecido. Partiendo del código transgredido, la persona era desaparecida y sus restos enterrados en locaciones anónimas para que no pudieran ser encontrados. Si la ofensa había sido mayor, el cuerpo sin vida era dejado

en lugares públicos con algún gesto simbólico que delatara la falta: incumplimiento de acuerdos, traición o delación tenían un principio de correspondencia en cuanto a la integridad y el acomodo del cadáver en la calle.

Información recopilada por investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez apunta a que entre 1987 y 1993 la dupla Aguilar Guajardo – Muñoz Talavera llegó a movilizar más de 50 millones de dólares en ganancias. El dinero fluía con soltura en ambos lados de la frontera según investigadores y ex policías interrogados. (Entrevista a Howard Campbell, 14 de diciembre de 2012, El Paso Texas. Entrevista a alias Raúl, Ciudad de México, 23 de enero de 2013). De acuerdo a datos de DEA, se había fijado una nueva ruta para transitar por la zona, puesto que la cocaína llegaba por aire desde Colombia y se guardaba en los puertos de Veracruz o Tampico (en el Golfo de México). Desde ahí se mandaba en avión o camiones a Chihuahua y se volvía a guardar en Juárez donde se esperaba el momento propicio para enviarla a Estados Unidos vía El Paso. La organización local tenía en la nómina a poco más de 30 jefes policiales, así como delegados de la Procuraduría General de la República (PGR), esto sin contar a las personas que se encargaban de las cuestiones logísticas del trasiego de la droga al interior y exterior de Juárez. (Linares, 2011).

En las calles de la ciudad, el consumo de drogas ilegales se circunscribía a unos cuantos lugares y actividades previamente autorizadas.²⁰ Las principales sustancias consumidas eran la heroína y la marihuana. La cocaína comenzaba a aparecer pero aún no era tan demandada en esta ciudad fronteriza. Los niveles de violencia relacionados directamente con el tráfico de drogas difícilmente contabilizaban más de 200 homicidios al año. Pero la década de

20 Destacan lugares como el centro histórico de Ciudad Juárez y sus inmediaciones, donde se condensaban numerosas cantinas, bares y centros de entretenimiento masculino en los cuales era posible conseguir diversos tipos de sustancias ilegales a bajo costo. En algunas fiestas realizadas en la ciudad y sólo bajo pedido también se permitía la llegada de *vendedores*.

los años 90 traería una oleada de reconfiguraciones en diferentes campos que haría más complejo el funcionamiento del negocio ilegal en Juárez.

III. LOS SINALOENSES EN JUÁREZ

El fin de la época durante la cual Rafael Muñoz Talavera y Rafael Aguilar Guajardo ejercieron el liderazgo de la organización de Juárez estuvo enmarcado por el ascenso de otro traficante de origen sinaloense quien asentó el peso operacional de su poderosa red de alcance transnacional en Juárez: Amado Carrillo Fuentes alias El Señor De Los Cielos. Notas periodísticas de la época refieren que Aguilar Guajardo fue asesinado mientras tomaba vacaciones en Cancún en 1993. Carrillo, quien era uno de los representantes en Chihuahua del grupo de sinaloenses afincado en Guadalajara en la década de los 70, era además uno de los principales contactos para el tráfico de cocaína (El Universal, 2009, 3 de abril). Además de la marihuana y la heroína que eran transportadas vía terrestre, la cocaína llegaba por diferentes rutas a esa frontera. Para introducirla a Estados Unidos se utilizaban pequeñas avionetas Cessna. De ahí el mote del sinaloense. Posteriormente y hasta la muerte de Amado Carrillo en 1997, Juárez viviría un periodo de bonanza derivada del tráfico de drogas prácticamente sin precedentes.

De la misma forma como la ciudad estaba conectada a los circuitos de producción global de mercancías lícitas por medio de la industria maquiladora, Juárez se encontraba fuertemente enlazada a las transformaciones que se dieron en el tráfico internacional de drogas durante la década. Otro tipo de circuitos, sí, pero aunque éstos habían sido declarados ilegales hacía mucho tiempo, las posibilidades de acumulación de riqueza habían alcanzado niveles sin precedentes. El poder de los traficantes creció mientras el poder político mexicano se fragmentaba. Algunos de los códigos que en su momento garantizaron el equilibrio entre las culturas de la corrupción, la subordinación de los traficantes al poder político y el mercado local de drogas se fueron desmoronando.

1. Redes de producción globales, implicaciones locales

La organización de Juárez resultó ser una de las principales beneficiarias de los reacomodos que fueron ocurriendo en el campo internacional del tráfico de drogas a lo largo de la década de los 90. El asesinato del antioqueño Pablo Escobar en diciembre de 1993 coincidió con la consolidación de Amado Carrillo en Juárez. Si bien es claro que la muerte de Escobar no le puso fin al tráfico de drogas desde Colombia lo que sí se transformó fueron las formas de negociar con la cocaína. A ello ayudó, además, el encarcelamiento de los líderes de la organización de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela en 1995.²¹ Data también del primer lustro de la década de 1990 la clausura del puente aéreo desde Perú, y en menor frecuencia desde Bolivia, con dirección a Colombia y el quiebre de la ruta del Caribe que permitía sacar la cocaína desde Colombia hasta Miami (Uribe, Rocha, Reyes, Garzón, López, Tokatlian y Hernández, 1997; Tokatlian, 2000).

Una nueva ventana de oportunidad se abrió con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-CAN) en 1994, que incrementó los flujos comerciales entre México y Estados Unidos. Bajo esas condiciones, la ruta por México se convirtió en un bastión estratégico para los traficantes de cocaína y la información disponible sugiere que Amado Carrillo contaba con una eficiente cobertura política, policial e incluso de miembros del Ejército que facilitaban las operaciones logísticas que coordinaban la llegada de la mercancía y el transporte hacia Estados Unidos vía Juárez (Fazio, 1997); (Boyer, 2001); (Astorga, 2007) .

El balance de fuerzas se inclinó del lado mexicano que desde hacía tiempo buscaba liberarse de la intermediación de los colombianos en el lado estadounidense. Las nuevas reglas del juego per-

21 Respecto a Escobar en el caso de Medellín, la bibliografía es amplia y variada en calidad. En un ejercicio de síntesis se sugieren los textos de Salazar (2001) y Cañón (2002). Sobre la organización de Cali, se sugieren los textos de Torres y Sarmiento (1998) y Serrano (1999).

mitieron que los traficantes mexicanos gozaran de mayor libertad en la comercialización de la cocaína allende la frontera, limitando la participación colombiana a proveedores sin derecho a recuperar la droga en la Unión Americana (Astorga, 2007). Esto provocó un incremento exponencial en las ganancias de los grupos mexicanos y, dentro de ellos, el grupo liderado por Carrillo Fuentes desde Juárez era el más aventajado.

2. La multiplicación de puntos de venta: las *tienditas*, los *picaderos* y las lógicas de violencia en los barrios

Es notable como dentro de los relatos de los diversos entrevistados hay una cuestión persistente. Por lo menos hasta mediados de la década de los 90 había un bajo involucramiento de las pandillas o *Barrios* -como se les conoce en el argot local- en el fenómeno del tráfico de drogas al menudeo.²² No así en el consumo y las agresiones no letales que se mantenían en niveles altos. Un ex pandillero lo resume de la siguiente forma:

El involucramiento de la pandilla con las drogas se daba a través del consumo. No vendíamos y casi ninguna pandilla de la que yo supiera lo hacía. De la violencia, para pertenecer a la pandilla uno tenía que darse un tiro con uno de allí de la pandilla. Ahí se daba a conocer que uno tenía agallas. *Pos* si iba uno al otro barrio, el que pertenecía a la pandilla tenía que ir por delante y no tener miedo, entrar y si corría ya cuando regresaba uno de la bronca, toda la pandilla le ponía una *pataliza* [golpiza], entre todos hasta dejarlo tirado. Sin matarlo. Así que todos tenían que entrar parejo. Ya cuando entraban todos en pandilla ya era *Barrio* contra *Barrio*, bola contra

22 En el argot local, la palabra *barrio* tiene dos connotaciones principales. La primera de ellas está relacionada con las partes en las que se encuentra dividido un sector de la ciudad. En este sentido un barrio puede ser un grupo de casas ubicadas entre un número determinado de calles. Por otro lado, el término *Barrio* (con B mayúscula en el texto) da cuenta de una comunidad de individuos, generalmente jóvenes asentados en sectores marginales que fueron desarrollando sistemas de identificación, pertenencia, permanencia y disfrute: el equivalente más apropiado sería el término pandilla. Al respecto véase Perea (2007) y Valenzuela Arce, J. M., Nateras, A., & Reguillo R. (2013).

bola. Y sin respetar a nadie. Apedrear casas. Se metían señoras, muchachas. La cosa era ser sádico para que lo respetaran todos.

Es notable que en el relato se marca límites sobre el comportamiento homicida. El mismo entrevistado agrega que como miembro de una pandilla

Sí, teníamos pistolas y rifles pero era nuestro último recurso. Ya cuando se miraba uno en mucho peligro era cuando sacábamos el fierro. Yo estuve en muchos *Barrios*. Estuve en los *barrios* aquí en la ... con diferentes nombres. Antes cuando usted caminaba por la calle, la gente le decía ¿qué *Barrio*? Y si no contestaba pues le ponían. Y si contestaba y el guardia estaba peleado con alguno de su barrio también le ponían (...) Pertenecer a una pandilla era la moda, era para sobrevivencia. Un cholo tenía que pertenecer a una pandilla, para resaltar y para quedarse con la que era (Entrevista con alias Durango. Ciudad Juárez, 9 de agosto de 2012).

Se proyecta entonces que la vida en el barrio –como espacio físico y como comunidad entre pares al estilo pandilla- estaba sujeta a derechos, pero también a obligaciones. En el punto medio existían una serie de restricciones tácitas o explícitas. Si se satisfacían las condiciones de ingreso y permanencia se tenía el derecho de ejercer la violencia *razonablemente*. Atravesar una calle implicaba adentrarse en un territorio enemigo y ello estaba sujeto a castigos por parte de los otros barrios. No identificarse también estaba sujeto a castigo. Pero la violencia se ejercía a nombre del grupo y por el grupo. No necesariamente implicaba matar al contrario, pero esto podía ocurrir en casos extremos. Las desviaciones de estos cánones eran evaluadas con cuidado por parte de los líderes de los barrios quienes al dar un veredicto reafirmaban su autoridad mediante la aceptación o el rechazo de la acción. De la misma forma el tráfico de drogas aparece como un fenómeno relativamente marginal en los barrios de Juárez en la década de los 80 y principios de la de los 90.

La vorágine de las transformaciones por las que estaba atravesando la ciudad aún no había modificado sustancialmente la venta de drogas al menudeo dentro de Juárez. Por lo menos hasta media-

dos de la década de los 90, el tráfico de marihuana, heroína y, en menor medida cocaína, estaban concentrados en ciertos enclaves donde se toleraba su venta y consumo.²³ Incluso hasta el fin del liderazgo de Amado Carrillo en 1997 se permitía que algunos individuos vendieran droga de forma independiente de la organización de Juárez (O'Rourke y Bird, 2010; entrevista con alias Durango, Ciudad Juárez, 9 de agosto de 2012), pero no tardaría mucho tiempo en reconfigurarse este escenario.

Algunos testigos identifican que desde 1994 comenzó la propagación de estos lugares en la ciudad. Se transformarían así antiguas prácticas sociales tanto de contención de consumo como de usuarios. No fue un movimiento planeado, sino una adaptación al cambio de condiciones imperantes. "Fue después de una de las reuniones del Grupo de Contacto de Alto Nivel de los gobiernos de México y Estados Unidos,- menciona una de sus participantes, trabajadora social especialista en adicciones y prevención del VIH-. El gobierno estadounidense decidió ponerle freno a la situación del consumo en su territorio. Eso multiplicó los *picaderos* en Juárez". En sus palabras:

Lo que nos compartían los usuarios era que "antes tú ibas al Segundo Barrio [en El Paso,] por la droga, por que pasaba hasta allá. Cuando ya no te permiten entrar [las autoridades estadounidenses], [los vendedores] te dicen "tú vas a tener tus dosis gratis pero a condición de que me vendas tantas". Pues como ellos tenían sus relaciones con los adictos [y los adictos con otros adictos], pues muchos de estos dijeron "órale, ya no voy a tener que comprar, hago mi negocio, puedo tener mi ganancia extra." (...) Es a partir de ahí cuando en lugar de estar nada más Bellavista,

23 Se debe distinguir claramente entre lo que se conoce como *tiendita* y *picadero*. Los lugares conocidos como *tienditas* son aquellos donde se venden diversos tipos de drogas ilegales. Generalmente en las *tienditas* existen redes de protección que giran en torno a diversos grupos policiales o civiles armados que brindan seguridad en el punto de venta. El lugar donde se inyecta la droga conocido como *picadero* es un espacio que puede ser incluso una casa de familia donde se cobra cierta cantidad para que ahí se consuma. Entrevista con María Elena Ramos, directora de la asociación civil Programa Compañeros. Ciudad Juárez, Chihuahua. 17 de agosto de 2012.

Alta Vista, lo que es toda la orilla del puente de Estados Unidos a México, hasta Anapra (norponiente de Juárez), tuvimos que empezar a intervenir hasta acá en el sur, hasta Salvarcar, Infonavit Casas Grandes, lugares ya muy distantes del centro porque ya donde quiera comenzamos a ver consumidores de drogas. El periodo fuerte de crecimiento de estos primeros años fue entre el 94 y el 98 (...) (Entrevista a Isabel Urzúa, Ciudad Juárez, 15 de julio de 2012)

De la misma forma, la multiplicación de *tienditas* fue generando efectos aún más adversos en algunos de los segmentos más desfavorecidos de la sociedad juarense. Mas como en otros aspectos, esto se produjo acumulativamente. Muchas de las tensiones familiares, laborales, o personales comenzaron a ser paliadas con el uso de drogas ilegales de baja calidad. Para conseguirlas, ya no era necesario desplazarse hasta el centro de la ciudad, sus inmediaciones o llegar hasta El Paso, ir a centros nocturnos o salones de baile. La oferta se comenzaba a trasladar al núcleo mismo de numerosos barrios juarenses.

Esto implicaba fuertes retos para el funcionamiento de la organización de traficantes que operaba en la ciudad. Al multiplicarse los lugares de consumo, era necesario desdoblar la capacidad de la red para satisfacer la demanda. Esto implicaba involucrar a un mayor número de personas tanto para labores de distribución como para labores de seguridad y choque (Reyna, 2011). Este proceso se aceleraría a finales de la década de los 90 una vez que Amado Carrillo hubiera fallecido (1997) y su hermano Vicente Carrillo Fuentes tomase el control de la organización después de dos años de disputas violentas.

3. La irrupción pública de las muertes violentas en Juárez: el caso de los feminicidios

Recuperemos trayectorias y articulemos recorridos. Por un lado, una ciudad fronteriza con débiles referentes de legalidad y ambiguos poderes emanados de los diversos niveles del gobierno que oscilaban entre la debilidad y la corrupción. Una

ciudad con miles de migrantes llegando cada año bajo la oferta del “pleno empleo”, reventando con ello tanto los lazos con la familia extendida -que se quedaba en sus lugares de origen-, como la capacidad de ordenamiento municipal sobrepasada por las masas de nuevos moradores. Una ciudad volcada, incluso físicamente, hacia la manufactura para la exportación vía la industria maquiladora.²⁴ Una ciudad con pocos lugares de esparcimiento con excepción de los numerosos bares y centros nocturnos.²⁵ Sumemos aquí un pronunciado quebrantamiento de los esquemas patriarcales de familia, ante miles de trabajadores provenientes del sur del país, con bajos niveles de escolaridad, insertados en una ciudad donde el rol de proveedor fue asumido por muchas mujeres durante mucho tiempo puesto que a ellas estaba dirigida la oferta de trabajo.²⁶

Por el otro lado - y siempre considerando las numerosas superficies de contacto respecto a las condiciones de ciudad antes enunciadas-, tenemos el anquilosado fenómeno del tráfico de drogas que no se daba en el vacío. Se trataba de unos traficantes que fueron acumulando gran poder en un ambiente de impunidad, con crecientes capacidades económicas para garantizar silencios y financiar complicidades. Ambos recorridos se articularon en el asesinato sistémico de mujeres, previa tortura y abuso sexual. Un tipo de asesinatos que sobrepasaba los códigos tradicionales imperantes en la ciudad que buscaban invisibilizar la violencia. Aunque algunas investigaciones datan de 1989, la aparición de algunos cadáveres de mujeres torturadas (Gallur, 2010) se dio a partir de 1993, cuando

24 Ver la primera parte.

25 Un viejo residente de Juárez sintetiza el punto al mencionar que “para muchos jóvenes de estos barrios sobresaturados del norponiente de Juárez sin espacios de recreación o lugares para convivir, los bares y los prostíbulos hicieron las veces de canchas de fútbol o parques de diversiones. Esa era la oferta y la vida en comunidad fue desarrollándose en torno a muchos de éstos espacios”. Diario de campo. Zona PRONAF, Ciudad Juárez, 17 de julio de 2012.

26 Uno de los síntomas detectados por la investigación de Fernández y Rampall (2006) es la elevada cantidad semanal de denuncias por violencia doméstica que para 2005 llegaba alrededor de 400.

Juárez comenzó a ser percibida como “la ciudad de las muertas” y estos asesinatos fueron calificados como “feminicidios”.²⁷

Una definición simple del término feminicidio sería “el asesinato misógino de mujeres por parte de los hombres” (Fernández y Rampall, 2008: 49). Si se acepta lo anterior, la primera lectura que se desprende de ello es de un crimen de género. Pero como afirma una investigadora del fenómeno, en Juárez este tipo transgresiones no se puede aislar del ambiente general de la ciudad, de una tolerancia a cierto tipo de ilegalidad que condiciona comportamientos de acuerdo a los alcances y límites de un contexto social concreto (Monarrez, 2000).

“No se puede calificar cualquier asesinato de mujer como feminicidio, –dice uno de los ex funcionarios consultados–. Para que un asesinato de mujer entre en la categoría de feminicidio una de las precondiciones es el uso de la violencia extrema contra ellas derivada de su condición de mujer. Pueden darse casos donde algunas mujeres han sido asesinadas por estar con personas dedicadas a actividades ilícitas. En ese caso, difícilmente podríamos hablar de feminicidio” (Entrevista a ex funcionario del municipio que solicitó el anonimato, Ciudad Juárez, 12 de julio de 2012)

“El uso de la brutalidad, la saña, era una de las principales características de estos asesinatos” -señala en entrevista una periodista mexicano - americana que realizó una sólida investigación al respecto en Juárez-, era algo que antes no se veía mucho en la

27 Una amplia producción periodística, académica y cinematográfica retrata diferentes aristas de estos asesinatos. Entre algunos de los textos más relevantes que han sido publicados se encuentran los de Diana Washington Valdez (2005), González Rodríguez (2005), Fernández y Rampall (2008) Rodríguez et. al. (2008), Monarrez (2009) y Pineda (2011). La producción académica también ha sido abundante. Destacan los artículos de Julia Monarrez (2000), Wright (2001), Ravelo y Domínguez (2006). Productoras nacionales y extranjeras realizaron películas como *The virgin of Juárez*, traducida como *Las muertas de Juárez* (2006), dirigida por Carlos Carrera, o del mismo director *The backyard*, traducida como *Juárez, Gritos en el silencio*. Hollywood se hizo presente con películas como *Bordertown*, traducida al español como *La ciudad del silencio* y dirigida por Gregory Nava. Se realizaron además diversos documentales como *Bajo Juárez: la ciudad devorando a sus hijas* de José Antonio Cordero; *Border echoes*, traducida como *Ecos de una frontera*, de Lorena Méndez Quiroga; *On the edge: the feminicide in Ciudad Juárez*, de Steev Hise y *Juarez: the city where the woman are disposable*, de Alex Flores.

ciudad". De la tradicional discreción, se comenzaban a dar grandes saltos hacia la muerte como un espectáculo de sangre, un espectáculo público de alto impacto: "Comenzaron a aparecer cada vez más cuerpos en las fosas. Empezaron por pocos, pero después tiraban 8 o 9 o hasta 12 cadáveres de mujeres". Los posibles autores eran "algunos pandilleros, ligados al narcotráfico que asesinaban a mujeres como un rito de iniciación de sus miembros; narcotraficantes que asesinaban a mujeres con impunidad; un grupo de hombres poderosos que asesinaban a mujeres por diferentes causas en diferentes tiempos; asesinos en serie que por lo que se yo, nunca han sido encarcelados y los imitadores, los *copycats* que se han aprovechado de estos escenarios para tratar de ocultar sus propios crímenes" (Entrevista a Diana Washington Valdez, El Paso, Texas, 8 de agosto de 2012).

La ferocidad de los asesinatos de mujeres en Juárez desde los primeros años de la década de los 90 puso en evidencia muchas de las contradicciones y muchas de las tensiones sociales presentes en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Mas como señala nuestra entrevistada, era evidente que los traficantes no eran los únicos que asesinaban mujeres: había muchos potenciales victimarios. De la misma forma, había distintos *modus operandi*²⁸ lo que impedía aún más el esclarecimiento de los crímenes (Valdez, 2005). Sin embargo, el perfil de las víctimas era bastante similar: "mujeres morenas, jóvenes, de rasgos finos" señala la investigación de un par de periodistas franceses quienes no dudan en añadir un ingrediente extra: el grueso de las mujeres provenía de clases sociales desfavorecidas. Al menos una cuarta parte de las mujeres asesinadas entre 1993 y 2005 en la ciudad eran empleadas de las maquiladoras (Fernández y Rampall, 2006:48).

28 La investigación de Monarrez (2000) ofrece un escalofriante panorama al pasar revista sobre algunas de las características que tenían los cuerpos encontrados. Las clasificaciones son acuchillada, amordazada, arma de fuego, atada, atropellada, calcinada-incinerada, cuerpo en descomposición, entambada (restos de mujeres depositados en botes llenos de cemento o ácido corrosivo), estrangulada, golpeada, herida, mordida, mutilada, sepultada, o semi enterrada.

Las cifras de mujeres asesinadas y desaparecidas son objeto de amplio debate. Las autoridades municipales, estatales y nacionales mencionan que en el periodo que va de 1993- cuando aparece el cuerpo de la primera víctima oficial- hasta 2003 se tenían contabilizados 258 homicidios de este tipo. Extraoficialmente, hasta abril de 2008 la cifra llegaba a los 400 casos y poco más de 500 desapariciones (El Universal, 2008: 13 de abril, *Nuestras hijas de regreso a casa*, 2010) El tema de los homicidios de mujeres tocó muchas de las fibras más profundas tanto del modelo económico de Juárez como de la debilidad del Estado mexicano en sus diversos niveles (federal, estatal, municipal) para el acompañamiento del proceso socioeconómico que estaba viviendo la urbe fronteriza. El tráfico de drogas fue el telón de fondo de la macabra puesta en escena que llevaba décadas gestándose, pero que comenzó a ser pública sólo en la última década del siglo XX.

IV. LOS SINALOENSES EN JUÁREZ II

1. Adaptación, expansión y redimensionamiento: el cambio de las reglas del juego en Juárez (1997- 2007)

Hay, entonces, diversas líneas evolutivas que se fueron entrecruzando. Por un lado, la importancia estratégica de las organizaciones del tráfico de drogas en México se transformó, aprovechando los nuevos escenarios tanto de economía lícita (TLCAN 1994) como ilícita (relación con proveedores colombianos 1993 - 1995). La organización de sinaloenses en Juárez se convirtió así en una de las más poderosas de México. Se había asentado en una ciudad donde los múltiples problemas socioeconómicos de sus habitantes no significaron automáticamente la vinculación de grandes contingentes poblacionales al negocio del tráfico de drogas al menudeo. El flujo de dinero era notable entre algunos de los traficantes en posición de mando local, quienes buscaban minimizar en lo posible la visibilidad de los homicidios violentos que pudieran llamar a las

autoridades federales. La gran excepción fue sin duda el asesinato de mujeres que evidenciaba, por otro lado, tanto el enorme poder de la organización como la tolerancia social que rodeaba este tipo de asesinatos.

Acompañando estos procesos, nuevas formas en la relación traficantes-sociedad se fueron gestando. En correspondencia, los paradigmas sobre la demostración pública de la violencia homicida alcanzaron nuevos horizontes. La información expuesta hasta este punto indica que al fortalecerse las medidas de interdicción en la frontera estadounidense, se multiplicaron los puntos de venta en Juárez. A pesar de que bajo el liderazgo de Amado Carrillo se trató de limitar el número de *tienditas* (O'Rourke y Byrd (2010); Molloy y Bowden (2011), las posibilidades que ofrecía el negocio del microtráfico eran más grandes que la voluntad del líder sinaloense para regular y obtener rentas de estos espacios. Su poder no era absoluto en las calles de la ciudad. Así lo evidencian algunos entrevistados y fuentes hemerográficas cuando sugieren que en el periodo que va de 1994 a 1999, grupos de la Policía Municipal se encargaron del resguardo de estos lugares. Eventualmente, estos tendrían un nuevo estatus en la organización de Juárez como una facción especializada. El grupo policial más famoso durante esos años fue conocido como Los Tres Arbolitos. Algunos de sus integrantes habían participado incluso en el asesinato de mujeres (The Dallas Morning News, 2004, 28 de febrero; Monsiváis, 2004; Ravelo y Domínguez, 2006; Entrevista con "Durango", Ciudad Juárez, 9 de agosto de 2012).

En el campo político nacional, el Partido Revolucionario Institucional perdería su hegemonía en el Congreso de la Unión (1997). Tres años después, perdería el cargo político más importante en el país: la presidencia de la República, alcanzada por Vicente Fox Quezada (PAN; 2000). El Estado mexicano construido a instancias del autoritarismo priista culminaba así un complejo proceso donde su capacidad de contención y arbitraje sobre los traficantes de drogas perdía consistencia (Astorga, 2007; Alarcón, 2010). Poco a poco las consecuencias de ello se dejarían sentir en Juárez.

4.2 Un nuevo liderazgo, un nuevo estilo

A la muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997, le siguieron dos años de violentas disputas por el liderazgo del grupo. La escala de este aumento de violencia homicida preocupó a las autoridades de los diversos niveles del gobierno de momento, pero la respuesta fue tibia. Así lo atestigua la revisión hemerográfica realizada para documentar la época. Sin embargo, este periodo fue una primera demostración de las fuerzas que había ido acumulando la organización de Juárez. Un académico estadounidense lo resume de la siguiente manera:

[Después del asesinato de Amado Carrillo] hubo una primera guerra para la plaza de Juárez entre el 97 y el 99. Entonces comenzaron a matar a más gente en lugares públicos. Surgió una violencia un poco parecida a lo que ocurrió en los últimos cuatro años, pero no era para tanto tampoco. Nosotros íbamos siempre a Juárez. Todo el mundo seguía yendo a Juárez. Al final ganó el hermano de Carrillo Fuentes, Vicente. La familia Carrillo se impuso y seguía el negocio aunque había bajado [por el conflicto] (Entrevista a Howard Campbell. El Paso, Texas 14 de diciembre de 2012)

A pesar de atravesar un turbulento periodo de reacomodos donde operadores medios fueron asesinados públicamente en la ciudad, la vida social en Juárez no fue interrumpida. La percepción popular era que se trataba de ajustes de cuentas entre *narcos* y cuando no se estaba involucrado en el trasiego de drogas, era muy difícil que esa violencia alcanzara a quienes “no debían nada.” Para esos años aún era posible señalar a los traficantes como “personas que no se meten con uno”, individuos “que trabajaban por su lado mientras uno hace su vida”, como enfatiza una antigua habitante de Juárez (Diario de campo, Lomas de Poleo, Ciudad Juárez, 10 de agosto de 2012). La consolidación de Vicente Carrillo como líder de la organización buscó estabilizar nuevamente la tendencia hacia la invisibilización de los homicidios. Pero la ciudad ya no volvería a ser la misma.

4.2.1 Ciudad de paso: alianzas, cobro de rentas y redes de protección

En este mismo lapso, la organización de Juárez consolidó una importante capacidad de cobrar rentas a otros grupos de traficantes aliados que buscaran utilizar la región como punto de acceso de la mercancía ilícita a Estados Unidos. Lo que se ha llegado a conocer como “control de la plaza” se circunscribía a la funcionalidad de una abigarrada red de complicidades e impunidad en ambos lados de la frontera (Entrevista a Pedro Torres, director editorial de *El Diario* de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 de agosto de 2012). Algunos políticos, policías, agentes de aduana, agentes del cumplimiento de la ley y traficantes coordinaban esfuerzos para disminuir las posibilidades de incautación de los cargamentos o la detención del personal que se dirigía desde Juárez hacia El Paso. El funcionamiento de esta red de complicidades se traducía en la generación de un valor económico que podía ser recaudado y redistribuido entre algunos de los principales participantes.

Los diferentes grupos de traficantes en la región funcionaban mediante células con distintos grados de vertebración funcional frente a la organización que controlaba la aduana. Cada célula se componía de grupos de hasta cincuenta personas que estaban asignados a la logística del transporte de la droga así como de la dotación del servicio de seguridad. En virtud del cobro de rentas a otros grupos para que pudieran operar, existía un acuerdo explícito para que estas células no se agredieran (Molloy y Bowden, 2011). Esto no implicaba, por otro lado la ausencia de fricciones. Por condiciones históricas, la organización de Juárez contaba con el mayor número de células en la escala local, seguido por grupos asociados con la organización de Sinaloa (Joaquín Guzmán, Juan José Esparragoza Moreno, Ismael Zambada García). En menores números podían verse células de otros grupos (Hermanos Beltrán Leyva, La Familia Michoacana) siempre y cuando estuviera autorizado por la cúpula de la organización local.

Dentro de las células asignadas a la logística del transporte había una serie de diferenciaciones funcionales. En los planos su-

periores, ciertos integrantes se encargaban de organizar y estabilizar las condiciones de trasiego y conflicto cotidiano; unos más se encargaban de coordinar los lugares de resguardo y la asignación de dotaciones para el consumo local y otros se especializaban en el diseño y coordinación de las rutas de trasiego. En cuanto a las células asignadas al servicio de seguridad, éstas cumplían también con diferentes encargos: se encargaban de vigilar los lugares de resguardo, cuidaban a los principales líderes y operadores de relevancia, y algunas se especializaban en labores de choque.²⁹ En ambos rubros es notable el manejo de distinciones por pertenencia regional: individuos de Sinaloa o Durango aparecían como integrantes de la cadena de mando y el tráfico internacional. Eran percibidos como “personal de confianza.” Hijos de migrantes a Juárez o migrantes recientes se integraban a lo que se conoce como “la mano de obra del narco” y eran los encargados de las labores de mayor riesgo. Generalmente estos operaban en las redes de distribución local (Entrevista a Howard Campbell. El Paso, Texas 14 de diciembre de 2012).

4.2.2 Control del mercado local

Un congresista del Estado de Texas por El Paso señala como “una de las decisiones empresariales que tomó Vicente cuando alcanzó el control de la plaza después de la muerte de su hermano fue que el cartel de Juárez debía controlar el mercado local de marihuana de la misma forma que el de cocaína”. Su grupo, añade, “tenía la capacidad de imponer tal monopolio” porque ellos “controlaban la plaza” (O’Rourke y Byrd, 2010: 52). El número de *tienditas* había ido creciendo desde la segunda mitad de la década de los 90

29 En el relato sintetizado por Molloy y Bowden (2011) llama la atención que el grupo de Juárez tuvo la posibilidad de vincular a individuos que se encargaran del ejercicio de la violencia desde la propia academia de policía. El aprendizaje del uso de armas y tácticas de seguimiento y defensa era brindada por el Estado, mientras el soporte económico corría por cuenta de los traficantes. Así, una vez que los policías recién graduados salían de la academia, comenzaban a realizar diferentes funciones para la red de traficantes.

y muchos de sus réditos no estaban llegando sistemáticamente a las arcas de la organización. Investigaciones periodísticas señalan que este proceso aunque no fue automático, sí llegó a ser crecientemente efectivo como consecuencia del patrullaje tanto de células armadas de la organización de Juárez, como de grupos policiales aliados con éstos. Comenzó a hablarse de *alinear* a los traficantes de la ciudad, centralizando operaciones y reconfigurando las capacidades organizacionales del grupo (Entrevista a Pedro Torres, director editorial de *El Diario* de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua 8 de agosto de 2012)

Se mantuvo, aunque con muchas dificultades la lógica de no hacer demasiado visible la violencia. Pero el escenario era cada vez más complejo y se multiplicó el número de desaparecidos. “Para el 2003 -señala una periodista que trabaja en Juárez- comenzaron a ser descubiertas diversas fosas clandestinas en diferentes partes de la geografía local.” (El Universal, 2009, 15 de agosto) Además de la violencia contra las mujeres, las desapariciones y el asesinato de hombres se convirtieron en una práctica recurrente. La misma periodista señala que “cientos de personas eran *levantadas* para después ser torturadas” (Rodríguez, 2012: 37). Se buscaba que delataran a otros vendedores así como las fuentes de suministro y destino de la mercancía. Al final, muchos de ellos fueron asesinados a balazos y sus restos enterrados en fincas, casas rentadas o bodegas. “Si hubiera el chance de tomar una foto desde el cielo a Juárez y que cada muerto fuera del color de una flor de amapola, –comenta un operador de la violencia entrevistado– el retrato se vería tan rojo como esos campos que se miran por la tele que hay en Afganistán” (Entrevista a alias Edgardo, El Paso, Texas, 12 de diciembre de 2012.)

4.2.3 Ciudad de consumo: el funcionamiento de los puntos de venta

Se entrevistó a diversos traficantes al menudeo que trabajaban en distintas partes de la ciudad. En sus relatos fueron surgiendo los perfiles de algunas de las tienditas asentadas en los

diversos barrios de Juárez. Quizá el testimonio más claro es el de “Jorge” que fue deportado de California (Estados Unidos) a Ciudad Juárez en 1999. Se mantuvo activo en el tráfico al menudeo desde su llegada hasta mediados de 2007. Trabajaba para el grupo local señalando que:

Aquí las cosas son mucho, muy diferentes a comparación de Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes ser tu propio jefe en la venta de droga, bueno, droga al menudeo, como vulgarmente se les llama un *drug dealer*. Aquí no, aquí tienes que trabajar para alguien.³⁰

Yo empecé a vender drogas con un *bato* que fue de los primeros en caer a la hora de los *chingadazos*. Nosotros trabajábamos para (x). Él era el dueño de este punto pero nosotros le comprábamos la droga a (x). Y te digo nosotros porque yo fui varias veces a comprar. Era normal, ya nos conocían. Llegábamos, pagábamos nos íbamos con nuestra mercancía y nos regresábamos a vender. Tranquilo. Se puede decir que estábamos en el mismo equipo. Entonces no había ningún problema.

Nosotros teníamos una *desponchadora* [taller mecánico] como fantasma. Teníamos las máquinas, llantas y tú sabes cosas de esas. En realidad no era una *desponchadora* simplemente, era nada más ahí como la pantalla, pero ahí era donde vendíamos la droga. Con el tiempo fui ganándome la confianza de estos *batos* y me mandaron a conseguir una casa por aquí cerca (...) Fui, encontré la casa, la renté y todo normal... Y ahí se hacía todo. Había veces que hasta mil pesos me ganaba diarios [US\$ 92] (...)

30 Punto recurrente en el relato de diversos entrevistados, quienes coinciden en que en el lapso entre 2000 y 2007 las actividades del microtráfico atravesaron un proceso de centralización relativa en el que diversos agentes armados de la organización de Juárez buscaron limitar el rango de operación de vendedores independientes. Los dos principales mecanismos que se pusieron en marcha fueron, por un lado, el control de los insumos mediante la centralización de la red de proveedores y, por el otro, el cobro de una renta periódica a los propios vendedores. Es notable además que este proceso de centralización sobre las actividades derivadas del tráfico de drogas no tuvo contraréplica en otro tipo de actividades que pudieran generar rentas ilegales: se reportan niveles bajos de secuestros y la inexistencia de extorsiones.

Teníamos una casa de seguridad bien arreglada. Daba la apariencia de estar abandonada pero por dentro era otra cosa: candados, circuitos cerrados y eso. (...). Ahí teníamos pistolas, la droga, el dinero... Los fines de semana teníamos bastante gente, vendíamos bastante. Entonces en esa calle, por ejemplo si tú ibas y me comprabas un papel de cocaína, y si tú saliendo de esta calle o saliendo de este barrio te agarraba la patrulla, tú me podías ir a decir a mí “oye es que me acaba de agarrar la patrulla fulanita de tal. Y me quitó mi dinero y me quitó los papeles que tú me vendiste”. Nosotros teníamos radios y teléfonos, entonces por medio de ellos yo le hablaba a mi jefe y le decía “oye, fíjate que así y asao y la patrulla, digamos 525, le acaba de quitar estos papeles a este *bato*” Entonces él hablaba por teléfono con su jefe y su jefe hablaba con la Policía. (...) en dado caso, la Policía incluso te podía regresar la droga o el dinero. (Entrevista con “Jorge” Ciudad Juárez, 10 de agosto de 2012)

Se fue haciendo claro que en las transacciones del día a día había momentos en los que agentes corruptos de la Policía no estaban presentes. Ésta no tenía la capacidad de colaborar en todo lugar ni podía proteger a todos los involucrados todo el tiempo. Consecuentemente, se gestionaban mecanismos de protección armada que fueron descritos como sigue:

Cuando se tenía que sacar las armas, o pelear o algo *pos* tenías que sacar las uñas (...) [uno de los principales motivos de pelea era] que te querían robar. Muchas veces pensaban que estabas tú solo. Por ejemplo a mí una vez me vieron que estaba solo y se les hizo fácil quererme robar. Pero mis camaradas estaban en la esquina. No los matamos. Nada más les dimos unos *chingadazos*. Pero ya en la noche si había veces que tenía uno que traer la pistola. Era necesario porque nunca faltaba alguien (...) Se conseguían las armas fácil. Muchas veces, ¿sabes? Era de que llegaban ahí mismo y te las ofrecían por droga. “Dame tanto y *pus* aquí esta la pistola (sic).” (Entrevista con “Jorge” Ciudad Juárez, 10 de agosto de 2012)

Los matices del relato permiten una caracterización profunda. De entrada, se ponen en relevancia muchos de los mecanismos que le dan funcionalidad a los puntos de venta que se conocen como *tienditas*. Las había de diversos tipos y modalidades pe-

ro sus estructuras operativas comparten características similares. En los relatos, generalmente se distingue una por barrio lo que implica, si se les mira de una forma celular, que tienen rango limitado de incidencia. Pero al observárseles de forma vertebrada la dimensión cambia: el eje de articulación es la red de proveedores que tiene diversos agentes sociales participantes. En todo caso, las *tienditas* contaban un jefe o dueño, un encargado de ventas y diversas personas que les brindaban seguridad. Otros de los entrevistados refieren que el involucramiento de los *barrios* era bastante limitado. Solo la *ganga* de origen estadounidense denominada Barrio Azteca representaba una excepción a esta regla, pero su inserción en el tráfico de drogas data del período 2004 - 2005.³¹ Pero incluso este grupo no se impuso en los barrios por medio de la violencia durante este lapso.³²

El jefe o dueño era el que sustentaba la relación con el proveedor que en este caso era una de las organizaciones más fuertes y con las raíces históricas más profundas de la ciudad. En caso de que el encargado de ventas se ganara la suficiente confianza del jefe, también estaba autorizado a realizar transacciones. Incluso podían ser familiares del jefe de *tienda*. Estas transacciones mayoritariamente se desplegaban con umbrales mínimos de violencia. Se establecía una red de confianza que funciona en dos niveles: del proveedor al jefe local responsable y del jefe local responsable a su encargado de ventas o familiares. Mientras el pago fuera puntual y el funcionamiento del local se mantuviera bajo parámetros razonables, la red de confianza difícilmente podía desestructurarse.

La labor del patrullaje policial implicaba ciertos riesgos para el desarrollo armónico de las transacciones ilegales. En el discurso de Jorge se hace claro que el involucramiento de la policía municipal o estatal si bien era real, también era imperfecto. Los recorridos policiales y la acción policial hacían blanco principalmente sobre

31 Ganga, del inglés *gang* que significa pandilla.

32 Volveremos sobre ello más adelante.

los consumidores, situación que afectaba la credibilidad y la percepción de confianza que existía en torno a la red de comercialización: “uno va a comprar donde menos probabilidades hay de que me detengan”, señala una de las fuentes. (Diario de campo, sector Altavista, Ciudad Juárez, 25 de agosto de 2012). Así, una detención se convierte en el indicativo de fallas en el funcionamiento de la red. Si estas detenciones ocurrían sistemáticamente cerca de la *tiendita*, su jefe y el encargado de ventas dejaban de ser confiables.

Mediante el relato, se vislumbran ya diferentes tipos de involucramiento policial. El primero de ellos es la de policías - proveedores. No se puede olvidar que el grupo para el que trabajaba Jorge tuvo sus orígenes en la corrupción de diversos agentes de la policía municipal y estatal que le dieron forma y estructura operativa. Aquí, las transacciones entre proveedor y vendedor se desarrollaban como una red de confianza en la que los niveles de violencia eran mínimos. En este nivel los homicidios se presentaban como algo esporádico y extremo. Las motivaciones de éstos pueden ser la pérdida de confianza o deudas. Pero asesinar a uno de los comercializadores, implicaba trastocar el funcionamiento de la red y, con ello, desestabilizar los flujos tanto de dinero como de tranquilidad en el barrio.

De manera complementaria, se puede entrever otra tipología: los policías que ejercen labores de protección a las transacciones ilícitas. Pero incluso en esta perspectiva, el comportamiento de los agentes no es homogéneo. Los episodios descritos indican que existen por lo menos dos condiciones. La primera de ellas es la del patrullaje cotidiano que puede obstaculizar la eficiencia operacional de la red. Ejerce presión sobre el ambiente y los agentes sociales involucrados. Ahí se pone en funcionamiento un sistema de control que atraviesa la cadena de mando de la corporación policiaca. De esta forma surge una segunda observación. El encargado de ventas, tensionado, se comunica con su superior, el jefe de la tienda o de la zona quien a su vez se contacta con aquellos con los que había obtenido a un arreglo. La información

se triangula y al final puede dejar de patrullarse por la zona o incluso dar marcha atrás a la acción derivada del rol institucional de los agentes del Estado.

Se muestra en ello una subdivisión de trabajo policial que por acción u omisión se vuelve partícipe en el microtráfico. Sin embargo difícilmente puede sostenerse que el involucramiento fuera total y que todos recibieran paga por ello. De hecho, puede presentarse el caso de que los patrulleros no reciban un salario sustancial u honorario alguno por parte de los traficantes. Pero se puede inferir que algunos de los agentes en posición de liderazgo, con un sitio intermedio o medio alto en la cadena de mando si recibían recursos y estos eran sustanciales. A partir de ahí se buscaba limitar los riesgos de detención de los distribuidores al menudeo concentrando los riesgos en el consumidor que se presenta como el eslabón más débil de la cadena de comercialización.

A pesar de lo anterior existían lógicas de peligro que no estaban cubiertas por estos esquemas de protección. La presencia de la policía no era permanente. En su intermitencia cobra sentido el riesgo del robo del que se hace mención en el relato. Se presentaba así la posibilidad real de hurto de la mercancía ilícita, por lo que el hecho era doblemente censurable. Una doble ilegalidad. Para defenderse, había límites y patrones bien definidos: la noche era cuando se debía estar más atento y nunca dejar de lado el arma. A pesar de la amplia oferta de éstas, su simple posesión no se traducía en automático en la voluntad de usarlas: no se mataba por sistema pero la posibilidad del asesinato estaba siempre latente y cuando era necesario simplemente se hacía.

3. El eje transversal: El poder policial y las policías locales

“La historia de la Policía- apunta contundentemente un investigador inglés- es la historia del poder del Estado.” Si se acepta lo anterior, “el sistema de Policía ha sido central no solo para la represión o la reproducción del orden, sino para la fabricación de

éste" (Neocleous, 2010: 17). El caso juarense ejemplifica en negativo esta premisa. Bastará en este espacio regresar sobre algunos apuntes aparentemente sueltos que necesitan conectarse: la intervención de policías de diversos niveles de gobierno ha sido la constante en la historia contemporánea del tráfico de drogas en Juárez.

En algunos momentos, lo han hecho bajo la figura de líderes y protagonistas de primer orden, como fue el caso del cofundador de la organización Juárez en su sentido moderno, Rafael Aguilar Guajardo, ex agente de la Dirección Federal de Seguridad. En otros momentos, en lugares de relevancia aparentemente secundaria pero preponderantes para el funcionamiento de diversos segmentos de un negocio en crecimiento, como fue el caso del grupo conocido como Los Tres Arbolitos en la década de los 90. Ciertos policías locales aparecieron constantemente en sendas investigaciones, tanto del gobierno federal como académicas o periodísticas, como posibles participantes o encubridores de los feminicidios en Juárez Bowden (2004); Valdez (2005); González (2005); Herrera (2008); Fernández y Rampall (2008); Monarrez (2009); Molloy y Bowden (2011). Para la década del 2000, su rol siguió en evolución y algunos integrantes de las policías locales configuraron un nuevo grupo que al auto identificarse transmitía un imaginario de eficiencia y búsqueda de un orden: La Línea.

Indagaciones federales retomadas por periodistas indican que este grupo se había convertido en una poderosa subdivisión de la organización de Juárez: "narcos disfrazados de policías", comentó en una entrevista uno de los entonces responsables federales encargado del combate a estos grupos.³³ Además de su rol de proveedores y protectores de transacciones ilícitas, su versatilidad funcio-

33 Entrevista a José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Publicada por Fernández y Rampall (2008:166).

nal incluía grupos de choque, encargados de logística, trasiego y resguardo de los cargamentos, casas de seguridad y puntos de venta. Algunos testimonios refieren que “personas con potencial” llegaron a ser reclutados antes de o durante el ingreso a la academia de policía estatal. Otros más eran cooptados una vez que entraban en funciones. (Molloy y Bowden, 2011). Algunos entrevistados que solicitaron el anonimato, sugieren la participación y contubernio de algunos miembros del Ejército.

Notas dadas a conocer al público por la prensa de la época (2004 – 2005) apuntan a que su primer y más visible líder fue un comandante de la Procuraduría de Justicia del Estado que a su vez hacía las funciones de chofer ocasional de Vicente Carrillo Fuentes (El siglo de Torreón, 2004, 10 de marzo; El Universal, 2009, 15 de agosto). El líder de La Línea trabajaba de la mano de un operador sinaloense que era el responsable de la seguridad del negocio en la ciudad: un hombre de entera confianza para Vicente Carrillo Rodríguez (2012); Valdez Castellanos (2013). La información disponible señala que juntos encabezaron una poderosa red que hizo desaparecer a cientos de enemigos de la organización (Rodríguez, 2012). A pesar de que los despidos de elementos bajo sospecha habían sido una constante desde el 2004, la fortaleza que había adquirido el grupo parapolicial de La Línea dio, no solo para adaptarse sino también para crecer y mantener el control de una ciudad que era de tránsito y consumo, minimizando la visibilidad de la violencia homicida y transmitiendo la señal de que de quien se debía cuidar la ciudadanía era principalmente de las “pandillas”.

4. Barrio Azteca

Estimaciones del entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua señalaban que en 2006 alrededor del 50% de los homicidios, lesiones y robos con violencia en la metrópoli fronteriza eran producidos por pandilleros. Los barrios como espacios territoriales llevaban mucho tiempo siendo zonas de disputa entre

los *Barrios* como comunidades de jóvenes que reafirmaban identidad, compartían el disfrute y generaban formas de pertenencia. Pero ahora muchas de sus interacciones estaban en la mira de las autoridades puesto que estaban “sobrepasando los límites”. Se había detectado alrededor de 460 pandillas que estaban distribuidas a lo largo y ancho de la geografía juarense (El Universal, 2006, 27 de enero) Aunque se declaraba que algunas de ellas se estaban empujando a involucrar en el tráfico de drogas al menudeo –situación que hasta esos años era desempeñada casi exclusivamente por personajes como Jorge había una que destacaba sobre el resto: Barrio Azteca.³⁴

Surgida en seno del sistema penitenciario texano en 1986, Los Aztecas, como también se les conoce, son un producto de la hibridación cultural de la vida en frontera, de la exacerbación de las tensiones raciales imperante en las prisiones estadounidenses y de la necesidad de generar un frente común de autoprotección y pertenencia frente a otros grupos similares. Muchos de sus primeros miembros eran originarios de El Paso y rápidamente desarrollaron toda una constelación de símbolos físicos -tatuajes que celebraban el pasado indígena o señalaban el rango dentro del grupo -, un sistema de códigos de lealtad -de los que sólo podían eximirse una vez muertos y cuya infracción equivalía a la pena capital-, y una cosmogonía de derechos y obligaciones que cobijaban la permanencia de los miembros.

Poco a poco fueron atraídos nuevos reclutas ya no sólo dentro de la prisión sino en las calles de El Paso. El salto a Juárez era apenas cuestión de tiempo y se encontraba a la ínfima distancia del cruce de un puente. Muchos Aztecas liberados de las prisiones texanas y deportados a Juárez pudieron de esta manera encajar a la perfección en una ciudad que no les era del todo ajena. Simul-

34 En la misma nota periodística se mencionan tanto a Los Mexicles como a los Artistas Asesinos, remarcando su incipiente involucramiento en el tráfico de drogas sobre todo en el sur poniente de Juárez. Volveremos sobre ellos más adelante.

táneamente, esto les permitió expandirse y fortalecer sus alianzas con los jefes del tráfico de drogas en el lado mexicano de la frontera: la organización de Juárez y su brazo armado, La Línea. La estructuración interna de Los Aztecas, organizados a la usanza paramilitar, les permitía mantener orden y estabilidad en sus zonas de influencia.³⁵

Una salvedad se impone sin embargo. Integrantes de Barrio Azteca habían hecho presencia de diversas formas en la ciudad fronteriza. Su inserción en Juárez puede ser añeja, pero sólo hasta la década del 2000 comienza a destacar ante la multitud de transformaciones y grupos que se arremolinaban en la ciudad. La información recolectada *in situ* permite señalar que este grupo operaba de una forma diferente que las pandillas o *Barrios* tradicionales cuando menos en dos sentidos: por un lado en su relación con los distintos *Barrios* o pandillas y entramados sociales de referencia y, por el otro, en su relación con el tráfico de drogas en estos micro territorios.

Según una líder social entrevistada

Conocer el funcionamiento de Los Aztecas en los distintos espacios, con los distintos barrios de Juárez—tiene enormes niveles de complejidad, pues Los Aztecas han tenido relaciones muy diferentes en cada lugar de esta ciudad. No es lo mismo el norponiente o el sur de Juárez. Es importante entender que cada *Barrio* es una

35 Organizacionalmente, Barrio Azteca es una estructura piramidal. Existe un *capo mayor* quien generalmente es uno de los veteranos del grupo que a su vez se elige entre los distintos *capos*, frecuentemente encarcelados. En el siguiente nivel se encuentran los propios *capos* o capitanes que son los líderes encargados del orden entre los *tenientes* y *sargentos* que operan sobre el terreno. Los *tenientes* tienen a cargo un grupo de *sargentos* y mantienen la disciplina entre estos. Los *sargentos* se encargan de recolectar impuestos, reclutar y mantener la disciplina entre los *soldados* o *carnales* quienes son la parte más visible del grupo: distribuyen drogas y ejecutan los mandatos del grupo. Debajo de esta estructura existen dos categorías que no forman parte orgánica de Barrio Azteca pero son sumamente importantes para oxigenar y mantener la vigilancia en los territorios donde hacen presencia: los *prospectos* quienes son candidatos sometidos a distintas pruebas que van desde vender drogas para la organización como realizar misiones que implican “valor” y “coraje”. Finalmente se encuentran las *esquinas* que pueden llegar a ser incluso familiares de los miembros de pleno derecho y realizan funciones de respaldo y vigilancia.

red social: las diferencias son notables calle por calle, incluso casa por casa. Por ejemplo Los Aztecas están por encima de los *Barrios* digámoslo así *tradicionales* (...) en algunos lugares Los Aztecas desarrollaron el papel de árbitro entre *Barrios*, sobre todo en el norponiente. Pero al mismo tiempo en el suroriente, hay barrios que no reconocen a Los Aztecas como mediadores y menos como jefes. Ahí las pandillas de referencia son otras. En estos lugares las relaciones son más tirantes. (Entrevista con Teresa Almada, directora de Casa Promoción Juvenil. Ciudad Juárez, 12 de diciembre de 2012)

En ciertos sectores de Juárez, el gran poder de Los Aztecas ha sido “su enorme capacidad de enganche como consecuencia del arraigo que tienen con el territorio, una lógica de barrio al estilo cholo, de solidaridad, de gran familia, de dar la vida por el otro.” En palabras de nuestra entrevistada “el asunto más complejo con Los Aztecas ha sido su criminalización, sobre todo por la venta de drogas y sus alianzas con los narcotraficantes, pero en los espacios en los que ellos operaban y donde ellos se habían ganado el respeto y el apoyo de comunidades enteras, se comenzaban a ver sus capacidades de intermediación ya no solo entre los miembros de los *Barrios* sino también en el seno de las comunidades. Este proceso se detuvo parcialmente con el inicio del conflicto.” (Entrevista con Teresa Almada, directora de Casa Promoción Juvenil. Ciudad Juárez, 12 de diciembre de 2012)

Tenemos entonces un escenario abigarrado donde iban corriendo distintas puestas en escena. La inserción de Barrio Azteca en las calles de Juárez no se dio únicamente por la fuerza con anterioridad a 2007. Se trató de una labor que requirió de años, fue heterogénea y a pesar de alcanzar la capacidad de intermediación entre *Barrios*, el poder del grupo no pudo consolidarse en toda la ciudad. Su relación con el tráfico de drogas, sus recursos y las formas de ordenamiento interno le dieron un cariz diferente que al mismo tiempo de permitir su crecimiento, los puso en el centro de todas las tormentas que se iban gestando.

V. NECRÓPOLIS FRONTERIZA

Dos conjuntos de transformaciones ya mostraban síntomas de fractura desde mediados de 2007. Por un lado, desde la órbita nacional, el gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa (PAN, 2006 – 2012) echó a andar los denominados Operativos Conjuntos en distintos estados de México en los que se evidenciaba el vertiginoso aumento del poder local de los traficantes, lo que representaba un serio reto a la seguridad y convivencia ciudadana. Finalmente se había invertido la fórmula en la que los traficantes de viejo cuño se habían subordinado al poder político. Habitantes de estados como Michoacán, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa vivían momentos aciagos por las constantes balaceras que ocurrían cada vez más cerca de sus vecindarios, las escuelas de sus hijos, sus lugares de esparcimiento. El peligro de morir bajo el fuego cruzado al salir a la calle se había convertido en parte de la realidad cotidiana (Turatti, 2010).³⁶

Aunque el Estado de Chihuahua y el municipio de Juárez no aparecían como puntos conflictivos ni en la parte final de la administración de Fox (2005 – 2006), ni en los primeros meses de la administración Calderón (hasta mediados de 2007), este escenario no tardaría mucho en cambiar. Es aquí donde el segundo conjunto de transformaciones, íntimamente relacionado con el primero, se vuelve transparente: el esquema de alianzas entre las organizaciones de traficantes entró en un periodo de fuerte inestabilidad y se redefinieron lealtades. Muchos territorios aparentemente pa-

36 Incluso desde antes de la llegada de Calderón al poder Ejecutivo Federal, se había puesto en marcha un operativo bajo los mismos argumentos pero a una menor escala denominado “México Seguro” (11 de junio de 2005). Este se instrumentó en los estados de Tamaulipas (en los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa), Sinaloa, (en los municipios de Culiacán, Navolato y Mazatlán) y Baja California (en Tijuana y Mexicali). Posteriormente llegaría a los estados de Michoacán (zona de tierra caliente) Guerrero (Acapulco y Zihuatanejo) y el Estado de México (municipios cercanos al Distrito Federal). El Universal, 2006, 20 de septiembre.

cíficos, cuyo usufructo de las rentas ilegales había sido potestad histórica de las distintas organizaciones de traficantes, fueron disputados violentamente. Se quebrantarían así antiguos arreglos de convivencia.

La otrora poderosa coalición de traficantes de origen sinaloense conocida como La Federación³⁷, que en su conjunto había decidido iniciar la ofensiva tanto contra otra facción de sinaloenses radicados en Baja California (2002),³⁸ como contra la organización del Golfo -y su entonces apéndice armado Los Zetas (2004)³⁹-, también comenzó a dividirse. Una de las primeras escisiones internas de La Federación fue, justamente, la facción encabezada por Vicente Carrillo, quien tenía fuertes diferencias con el líder de la coalición, Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Producto de ello, familiares de ambos traficantes fueron asesinados en 2004. Pero Ciudad Juárez no vivió los efectos de este enfrentamiento hasta mediados de 2007 (Valdez Castellanos, 2013). En la urbe fronteriza, durante al menos tres años prevaleció la racionalidad económica sobre las rencillas personales.

1. 1 Violencia, horror y muerte: Juárez en disputa

Se llevaron a cabo operaciones armadas de alto impacto en tres niveles, a saber: 1) Las organizaciones de traficantes contra representantes de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano; 2) El Estado mexicano contra las organizaciones de traficantes y 3) Las organizaciones de traficantes y grupos subcontratados

37 Formada en 2001 donde aparecían líderes como el propio Vicente Carrillo Fuentes alias El Viceroy, los hermanos Beltrán Leyva, Ignacio Coronel alias Nacho Coronel, Juan José Esparragoza Moreno alias El Azul, Ismael Zambada García alias El Mayo y Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, quien aparentemente la encabezaba.

38 Los hermanos Arellano Félix.

39 Grupo de desertores del Ejército mexicano que conformaron el primer anillo de seguridad del entonces jefe de la organización del Golfo, Osiel Cárdenas Guillen. Después crecerían como una organización de traficantes independientes. Estos operaban en los estados del golfo de México y controlaban la estratégica aduana de Nuevo Laredo Tamaulipas que vivió momentos de terror en el año 2004 cuando los sinaloenses trataron de apoderarse del territorio. Gutiérrez (2007), Grillo (2011).

enfrentados entre ellos mismos. Como saldo de estas dinámicas, surgieron esquemas adicionales de violencia. En primer lugar, la que se derivó del cruce de las tres primeras cuyo resultado fue que operadores de nivel medio de algunos de los grupos de traficantes comenzaron a disputarse palmo a palmo los espacios y transacciones dejadas en medio de las detenciones y los combates. Y en segundo lugar, la que emanó de diversos grupos no asociados a los grandes polos de conflicto pero que replicaron algunos de sus *modus operandi*. De esta forma, los habitantes de la ciudad se vieron inmersos en este frenesí de violencias multidireccionadas.

La organización de traficantes de Juárez, encabezada por Vicente Carrillo con sus apéndices de La Línea y Barrio Azteca que transportaban, resguardaban, y comercializaban importantes cantidades de droga, fueron retados por la organización de traficantes de Sinaloa que tenía en Joaquín El Chapo Guzmán a su principal líder. Para poder hacerle frente al conflicto, la organización de Guzmán se apoyó en un subgrupo armado que llegó a ser conocido como Gente Nueva, principalmente *gatilleros* y profesionales de la violencia, que era personal de confianza trasladado desde diferentes lugares de la República. También subcontrató a dos pandillas que habían hecho presencia en la ciudad de diversas formas: Los Mexicles y Los Artistas Asesinos.

Existe poca información concreta acerca de la actuación de Los Mexicles en Ciudad Juárez. Pero su trayectoria tiene puntos de conexión respecto a Los Aztecas: surgidos en prisiones texanas en 1987, su primer objetivo era aglutinar a los mexicanos encarcelados en las prisiones de ese estado de la Unión Americana. También fue conocido como el Partido Revolucionario Mexicano por esta supuesta orientación política primigenia. En poco tiempo, este grupo comenzó a extorsionar a algunas personas de origen mexicano en las prisiones texanas lo que les hizo perder apoyo. No es claro en que momento llegaron a Juárez pero su capacidad de adaptación les permitió resistir los embates de Barrio Azteca con

quien rompieron relaciones en 1998. Los Mexicles estaban organizados bajo una estructura paramilitar que tenía un presidente, un vicepresidente, generales, capitanes, sargentos y soldados. Fuentes entrevistadas sugieren que el gran problema de este grupo ha sido que muchos de sus miembros son adictos a drogas duras como la heroína, lo que ha dificultado además la capacidad de reclutamiento de nuevos miembros.

El otro contendiente asociado a la facción de Guzmán son Los Artistas Asesinos. Es importante resaltar que son “hijos de la ciudad”. Es decir, son el único de los tres grupos asociados a las organizaciones de traficantes con arraigo local que evolucionó de un colectivo del estilo del *Barrio* tradicional, a un auténtico apéndice armado al servicio de los sinaloenses: jóvenes juarenses que nacieron o crecieron en la década de 1990, hijos de migrantes que se criaron prácticamente solos en virtud de la ausencia de figuras paternas, ocupadas en la maquila. A diferencia de Los Aztecas que se concentraban en el norte y norponiente de la ciudad, cercanos a los puentes internacionales, Los Artistas Asesinos o *doblados* se apostaron en el sur, la zona de migración más reciente y menor dotación de infraestructura y conectividad con el resto de la ciudad.⁴⁰ Los actores y las piezas estaban puestos. Solo hacía falta la chispa.

1.2 Los primeros síntomas de ruptura

Los primeros muertos fueron policías. El 26 de enero de 2008 en una céntrica avenida de Ciudad Juárez fue dejada una corona de flores a los pies del monumento al policía caído. En el centro de la corona había un afiche con el mensaje: “Para los que no creyeron: Cháirez, Romo, Baca, Cháirez y Ledesma.” Eran los apellidos de los policías asesinados en el curso de los últimos seis meses. Los apellidos aparecían en orden, según la fecha del homicidio. A ren-

⁴⁰ Al respecto véase Rodríguez Nieto (2012)

glón seguido decía: “Para los que siguen sin creer” y se enlistaban los apellidos, el número de clave y los distritos donde laboraban 17 agentes municipales más.⁴¹ Esta exposición pública de agentes presuntamente vinculados con el grupo de los Carrillo Fuentes era una especie de declaratoria formal de guerra.

Los meses posteriores fueron una pesadilla no sólo para los mandos medios amenazados –la gran mayoría escaparon, seis más fueron asesinados en los siguientes años-, sino para todos los cuerpos de seguridad que operaban en Juárez. Saliendo o llegando a su casa, en servicio, a la hora de la comida o en medio de refriegas, decenas de policías fueron liquidados. Tácticas de terror serían utilizadas: las frecuencias de radio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron intervenidas, ya fuera para ofrecer una recompensa por algunos de los mandos mencionados, (La Jornada, 2008, 2 de febrero; La Jornada, 10 de marzo de 2008; Milenio, 2008, 18 de marzo, La Jornada, 2008, 25 de marzo). Una fuente que trabajaba en la policía municipal en aquellos días, relata: “No sabíamos ni como lo hacían, pero cuando los narco corridos [sic] se escuchaban en la radio policial, la reacción instintiva era esconderse, dejar de patrullar. Era seguro que los *malandros* iban a salir a cazar”.⁴² Y esto fue sólo el principio. Después de los asesinatos de los jefes policiales de enero de 2008, un primer contingente de 500 elementos del Ejército mexicano salió a patrullar las calles de Ciudad Juárez. El alcalde solicitó ayuda de la federación pues la violencia no disminuía. El Operativo Conjunto Chihuahua sería anunciado en marzo, tres meses después. Los militares comenzarían a patrullar Juárez.

41 Rodríguez, A. (28 de enero de 2008) Deja mensaje con nombre de los que serían ejecutados. *El Diario*. El autor de esta nota fue asesinado en el transcurso de ese mismo año. Había sido amenazado por su cobertura sobre el escenario de la criminalidad en la ciudad.

42 *Malandro* es un término local con el que se designa a los traficantes, sin distinguir la facción de la que proceden. Entrevista a Citlalli Murillo. Ciudad Juárez, 3 de agosto de 2012.

1.3 Las geografías barriales de la violencia

Después de la muerte de los policías, los asesinatos comenzaron a llegar a los barrios. Y enfrentó a los *barrios*. Estos movimientos formaron una segunda y tercera fase con escasas semanas de diferencia. Los siguientes en caer fueron numerosos *jefes de tienda* y sus encargados de ventas. Como desde 2004 o 2005 la venta de drogas se expandió entre algunas pandillas que evolucionaron gracias a esto, algunos jóvenes involucrados en la distribución al menudeo también comenzaron a caer. En palabras de uno de los entrevistados:

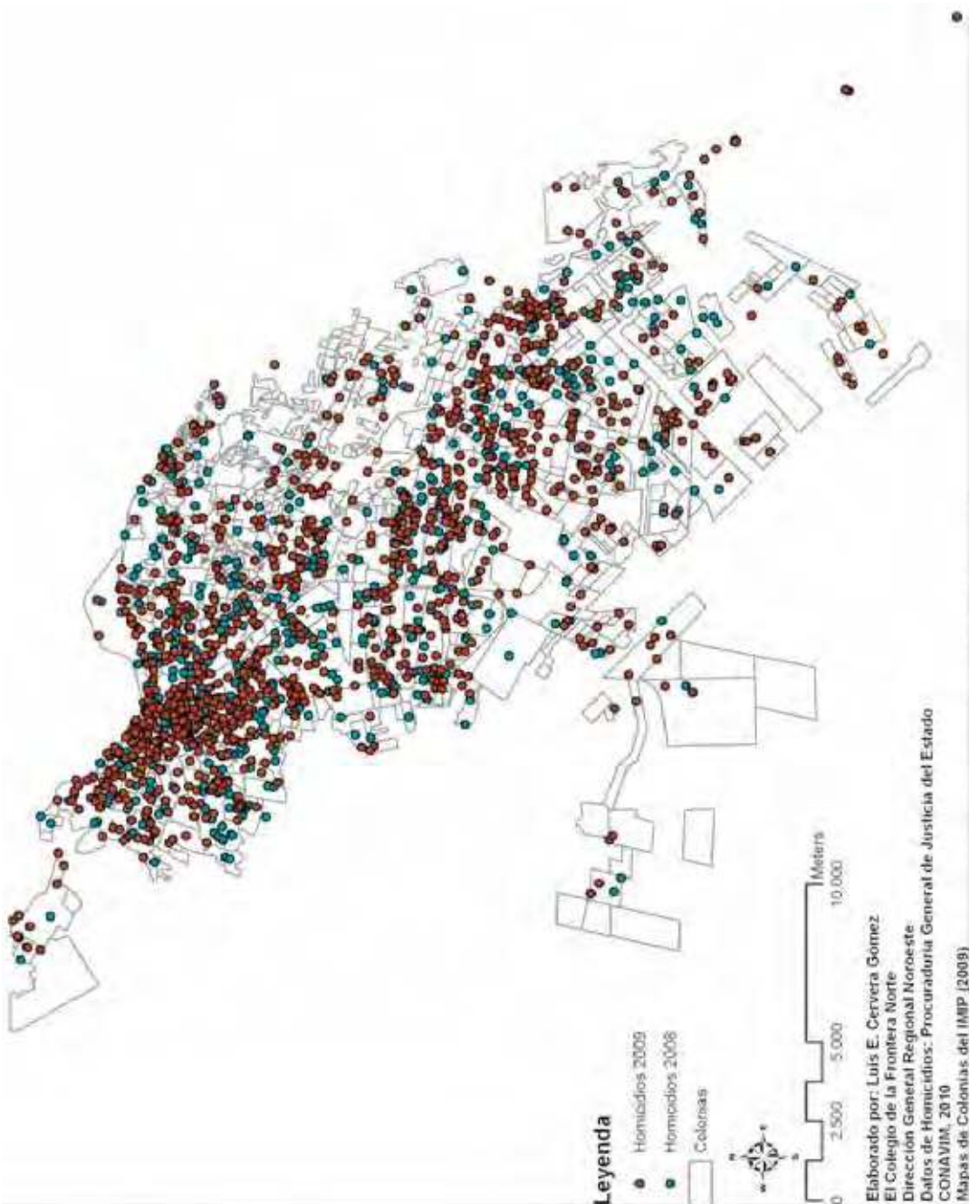
Sí hubo miedo (...). De primero te avisaban. En las madrugadas aquí se usaba que en las ventanas vendían la coca, la marihuana. No más llegaban y tocaban y tú no más salías y “órale ahí va”. Siempre había dos o tres adentro, armados y con pistolas cuidando [al vendedor y al producto]. Ellos cuando avisaban en un lado, mandaban gente a comprar. A ver si era cierto que se habían calmado. A ver si todavía andaban vendiendo. Y esa gente que iba a comprarle era la gente de ellos. Ya iban *encuetados* (armados). Era algo así como ve y cómprale. Si salen a venderte, *truénatelo*. No preguntas más. Y si no sale, vienes y nos dices ya para dejar de molestar ahí. (...) Así estuvieron *quebrando* muchos. Yo fui a visitar a mis compas “no, *pos* ya lo mataron” ¿cómo? “*pos* sí, por la ventana cuando estaba vendiendo. Es que ya le habían avisado” (...) yo ya sabía que estaban avisando en todos lados: *tienditas*, puestos de *burritos*, antros, restaurantes. El que no se alineaba era asesinado. Así de fácil. (Entrevista con alias Durango. Ciudad Juárez, 9 de agosto de 2012)

Las nuevas circunstancias imponían una transformación acelerada de las viejas prácticas. Las tradicionales restricciones sobre la visibilidad de la violencia fueron dejadas de lado completamente. En sus primeros momentos corrió un sistema de advertencias para restringir las ventas en lo que se redefinía la hegemonía del comercio ilícito en los barrios. Si no se atendían las señales, la muerte era el castigo. Aztecas, Artistas Asesinos y Mexicles realizaban muchos de estos homicidios. Pero no eran los únicos involucrados.

Las pandillas o *barrios* por debajo de estos grupos asociados a las organizaciones de traficantes en pugna no reaccionaron de forma similar ante los acontecimientos. En 2010, el Alcalde de Juárez calculaba que alrededor de 80 mil jóvenes de la ciudad estaban involucrados en pandillas. Otras estimaciones más medidas hablan de alrededor de 20 mil jóvenes. Esto sin contar a los posibles pandilleros que se radicaban en El Paso y podían desplazarse a Juárez y ejercer violencia en ella. Cualesquiera que sean las cifras, nos conectan a un universo tan amplio que simplemente no podía tener un comportamiento homogéneo. Algunas, las más aguerridas, trataron de resistir los embates y las incursiones en los diferentes barrios: algunos de sus líderes fueron asesinados. Otras fueron reclutadas en medio de las refriegas, teniendo más elementos susceptibles para ser sacrificados. Otras más se fragmentaron, pulverizando su presencia en las calles de Juárez (La Jornada, 2010, 7 de febrero; Milenio, 2010, 12 de abril; Milenio, 2011, 29 de octubre; *El Paso Times*, 2011, octubre; Milenio, 2011, 27 de noviembre, El Universal, 2012, 20 de marzo; Entrevista con Teresa Almada, directora de Casa Promoción Juvenil. Ciudad Juárez, 12 de diciembre de 2012; Entrevista a Jorge Balderas. Ciudad Juárez, 11 de diciembre de 2012),

Los episodios violentos, entonces, tenían distintos autores, no siempre partían de las mismas motivaciones, aunque sí pueden enmarcarse en el ambiente macro de descomposición que se vivía en Juárez. La violencia era incremental y multidireccional. Pero, aunque prácticamente no hubo un solo espacio o una sola zona de la ciudad donde se dejaron de presentar los homicidios, estos se concentraron tanto en zonas de fuerte influencia Azteca como de Los Artistas Asesinos: el norponiente de la ciudad, cerca del centro histórico y el puente internacional paso del norte centro; el centro de la ciudad desplazándose hacia el sur, respectivamente. (Véase mapa 1) Diversas entrevistas realizadas en la ciudad coinciden en que si bien estos asesinatos eran los que concentraban la atención pública, “prácticamente cualquiera podía matar a su antojo: para no ser perseguidos hacían pasar el cuerpo como si hubiera sido una ejecución de los traficantes. Todos estábamos expuestos” (Entrevista a líder social que solicitó el anonimato. Ciudad Juárez 18 de agosto de 2012)

Mapa No. 2.
Geo-referenciación de Homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua (2008-2009)



Fuente Cervera y Monarrez, 2010: 117

5.1.4 Masacres, asesinatos ejemplares y cobro de cuotas

La información que surge de las diversas entrevistas realizadas por el equipo de investigación apunta a la pronta llegada de una cuarta fase de violencia que se traslapó sobre las tres anteriores, desarrollándose tanto acumulativa como simultáneamente. Se dio en dos movimientos: por un lado, la proliferación de masacres, y por el otro, la aparición y posterior masificación de las extorsiones.⁴³

Aunque diversos motines se habían presentado a lo largo de la década, en mayo de 2007 hubo uno que se distinguió del resto. Miembros de Los Mexicles tomaron el techo de la prisión local para exigir la destitución del director. Alegaban malos tratos y señalaban que éste favorecía a Los Aztecas presos. Convenientemente omitían que eran los propios Mexicles quienes vendían drogas en el interior del penal. Un mes después, se presentó una batalla campal donde dos reos murieron y 23 quedaron heridos. En un operativo posterior, se encontraron armas de fuego genuinas, chalecos antibalas y bombas molotov. En enero de 2008, un nuevo enfrentamiento se presentó donde los protagonistas fueron Artistas Asesinos contra Aztecas: una persona murió y 20 quedaron heridas. Pero en marzo de 2009 se superaron todas las cifras: 20 reos fueron asesinados a balazos y molidos a golpes, 31 resultaron heridos una vez que miembros de Los Aztecas entraron a las zonas donde estaban separados tanto Artistas Asesinos como Mexicles. Testigos señalan que tenían una lista en la mano y que fue una masacre selectiva, bien planeada y eficientemente ejecutada. Ésta inauguraría una nueva fase en la dinámica de la guerra (La Jornada, 2007, 15 de mayo; Milenio, 2007, 21 de junio; Milenio, 2007, 5 de noviembre; La Jornada, 2008, 21 de octubre; La Jornada, 2009, 5 de marzo; Milenio, 2009, 6 de marzo).

43 Las tres precedentes habían sido el asesinato de policías, la llegada de la violencia a los barrios mediante el asesinato de traficantes al menudeo y la atomización de violencia entre *barrios* y organizaciones asociadas a los grupos de traficantes.

“¿Quién manda en este barrio?”, pregunta un periodista a un ex interno del penal municipal entrevistado en su casa. La respuesta marca el ritmo del momento: “Lo de los *barrios* ya se *chingó*. Todos están por todos lados. Ahora lo que hay es pura mafia grande”, remata lapidariamente (Milenio, 2009, 8 de marzo). En los meses posteriores a la masacre en la penitenciaría local se multiplicaron las matanzas, pero ahora en las calles. El escenario fue lo de menos: diversos centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones recibieron la visita de escuadrones armados compuestos por células articuladas de Aztecas y La Línea, o de Gente Nueva y Artistas Asesinos o Mexicles, para exterminarse recíprocamente. Fiestas de jóvenes sin relación con estos grupos también fueron objeto de estas visitas. Centros nocturnos, parques públicos e incluso iglesias. La violencia no se podía contener, sin importar en manos de quien estuviera la seguridad pública del municipio. De marzo de 2009 a octubre de 2010 se cometieron siete masacres en el Estado de Chihuahua con un saldo de poco más de 100 muertos. El 80% de los finados eran jóvenes menores de 18 años (El Economista, 2009, 3 de septiembre; El Universal, 2009, 17 de septiembre; Milenio, 2010, 17 de septiembre; Milenio, 2010, 20 de abril; Milenio, 16 de junio de 2010; El Universal, 2010, 1 de febrero; La Jornada, 2010, 24 de octubre). Esto, sin contar los homicidios episódicos que, a cuenta gotas, fueron sumando en la fúnebre numeraria de todos los días.

De lado y lado, el asesinato llegó a ser en un espectáculo para el consumo público, diseñado para amedrentar y paralizar. Se trataba al mismo tiempo tanto de enviar una señal clara de mando, como de transmitir una advertencia franca de lo que podía pasar en caso de continuar defendiéndose, vendiendo drogas, o no atender las señales enviadas. Los asesinatos como actos de terror calculado tomaron forma en los cuerpos desmembrados, dejados en espacios abiertos, con toda una simbología que partía de los despojos humanos y buscaba dar un ejemplo. Un espectáculo ritualizado, calculado para obtener un máximo de efectos propagandísticos

que buscaba influenciar la correlación de fuerzas en los diversos barrios, intimidar a las autoridades e imponer el miedo entre la sociedad civil.⁴⁴

En los extremos, hubo dos tipos de respuestas sociales a este frenesí homicida: la adaptación o el exilio. Como cuenta una periodista enviada entonces a la ciudad: “Surgieron nuevos hábitos para sobrellevar la muerte. Los niños fotografían cadáveres con sus celulares, los jóvenes ya no salen en las noches, algunos periodistas llevan chalecos antibalas, algunos empresarios trabajan a cortina cerrada para simular la quiebra, algunos maestros enseñan en las clases como tirarse pecho a tierra, algunos vecinos cerraron sus calles...” (Turati, 2010: 163). Diversas manifestaciones sociales, académicas y políticas surgieron para pedir el fin de la violencia, no sólo de los traficantes sino la que emanaba de la presencia del Estado a la que numerosos entrevistados señalaban como uno de los principales responsables, omitiendo que el grueso de los homicidios ocurría en los márgenes formales de su poder (Milenio, 2011, 6 de mayo; Somos frontera, 2011, 13 de agosto; Somos frontera, 2011, 17 de octubre; El Universal, 2012, 11 de junio).

Miles de habitantes de la ciudad salieron de ella. Las estimaciones varían según la fuente. Datos del INEGI señalan que poco más del 24% de la población, esto es 60 mil familias huyeron por la violencia. El censo nacional de población y vivienda, efectuado en 2010 revela que, respecto a la cifra reportada en 2005 mediante un censo parcial, Juárez tuvo nulo crecimiento poblacional. Autoridades locales hablaban de alrededor de 115 mil casas abandonadas. Fuentes periodísticas hicieron eco de cifras escandalosas, resaltando que poco menos de 500 mil personas que dejaron de vivir en Juárez. Otras fuentes, más medidas hacían conjeturas que iban

44 Este fenómeno se inserta en lo que Campbell (2012) denomina “narco propaganda” y que tiene 5 principales manifestaciones: 1) espectáculos de violencia simbólica diseñados para el consumo público; 2) Narco mensajes, declaraciones escritas y signos relacionados con la actividad de los traficantes; 3) videos y *ciber postings* 4) Géneros musicales conocidos como “narco- corridos” y 5) Control y censura de los medios de comunicación masiva.

entre 180 y 200 mil (Payan, 2011; La Jornada, 2010, 1 de abril; La Jornada, 2010, 18 de marzo; La Jornada, 2011, 8 de junio). A pesar de sus variaciones, los cálculos ofrecen una idea de la magnitud de la crisis y una noción de los alcances de muchas tragedias.

El segundo movimiento, además de las masacres y el aumento de los homicidios fue justamente la proliferación de las extorsiones, fenómeno prácticamente inédito en la ciudad hasta 2008. En las entrevistas realizadas incluso se pueden identificar dos momentos. El primero de ellos se dio de la mano con el cruce de los homicidios en los barrios y el agotamiento de las fuentes de financiamiento local básicamente circunscritas al tráfico de drogas al menudeo. Aquí, los diversos bandos en pugna a través de Artistas Asesinos, Aztecas y Mexicles comenzaron a amenazar a personas que demostraran tener cierta capacidad económica o que estuvieran encargadas de locales comerciales que generaran réditos. En este primer momento su rango de influencia se circunscribió a los lugares que habían sido azotados con mayor fuerza por los homicidios, esto es en el norte y centro histórico de la ciudad. Sin embargo, el segundo momento, cuando las extorsiones se multiplican a toda la ciudad y prácticamente a cualquier tipo de actividad, fue posterior al despliegue de Policías Federales en Juárez.

Difícilmente podría sostenerse que todos los elementos federales desplegados se dedicaron a extorsionar directa y masivamente. Sin embargo, las evidencias recolectadas en esta investigación sugieren que subgrupos dentro del contingente enviado sí lo hicieron. Ya el 23 de abril del 2010 el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, exponía ante los medios la detención de 16 agentes de la institución por conductas “irregulares”. Seis de ellos fueron acusados de los delitos de abuso de autoridad y robo, y otros diez de extorsión y allanamiento de morada. De el 1 de enero al 12 de abril de 2010 se tenían contabilizadas 744 quejas contra policías federales en Juárez según el propio Rosas dijo en otra conferencia. En algunos operativos de revisión interna al personal desplegado en Juárez, se habían encontrado sumas importantes de dinero en efectivo y armas que no eran las de la institución. Cuarenta agen-

tes fueron despedidos (El Universal, 2010, 15 de abril; El Universal, 2010, 19 de abril; La Jornada 2010, 24 de abril; Milenio, 2010, 30 de agosto; La Jornada, 2010, 18 de octubre). Un empresario local entrevistado sostiene: “Uno se debía cuidar de todo, pero más de los federales. Nunca sabías cuando podían llegar a presentarse y ponerse *a disposición*. Horas o días después los veías regresar a pedir la cuota. Enmascarados, pero el mismo cuerpo, las mismas complexiones, las mismas voces” (Diario de campo, centro histórico de ciudad Juárez, 3 de agosto de 2012).⁴⁵

El colofón de este complejo sistema de extorsiones fue dado a conocer por la fiscalía del Estado de Chihuahua en sus reportes sobre el tema. Con distintos *modus operandi*, individuos no relacionados con los grupos en pugna, desde Juárez o territorio estadounidense, desde las prisiones o desde los propios vecindarios locales, miembros de las policías municipales o estatales, hombres o mujeres, menores o mayores de edad, obreros o mecánicos e incluso amas de casa, aparecieron mencionados. Se detectaron alrededor de 200 organizaciones de distintos tamaños dedicadas a este propósito. Aunque no se podía contabilizar con precisión la cantidad de negocios extorsionados, en algunas partes de la ciudad la percepción era que “si un negocio está abierto, es porque está pagando la cuota” (El Universal, 2010, 18 de agosto; Milenio, 2010, 2 de noviembre; Milenio, 2010, 16 de noviembre El Economista, 2011; 16 de septiembre; El Paso Times, 2011, 19 de diciembre; Entrevista con Davide Dalla Pozza, Ciudad Juárez, 29 de julio de 2012).

Con la masificación de los episodios violentos y las extorsiones, los habitantes de la ciudad comenzarían a limitar primero, a cancelar después, sus prácticas cotidianas. El espacio público y privado estaba siendo vivido como algo amenazante y la silueta de la muerte se dejaba ver en cualquier actividad, ambiente u horario. Como observa un periodista local consultado a propósito de este análisis:

45 La paradoja notable es que si bien se multiplicaron las extorsiones, también coinciden con la llegada de la Policía Federal la disminución en el número total de homicidios (Milenio, 2010, 31 de mayo).

El aumento de la violencia fue provocando que la gente se fuera quedando en sus casas, que muchos negocios comiencen a quebrar, y luego se fue reforzando todo esto con la cuestión de las extorsiones y los secuestros... fue como una bola de nieve. A una cosa le vas agregando otra y otra y de repente la ciudad se ve desolada. Entre más se intensifica la cuestión de los homicidios, pues más se reforzó esta idea de que la gente se debe quedar en sus domicilios para evitar que le suceda algo (Entrevista a Pedro Torres, director editorial de *El Diario* de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua 8 de agosto de 2012).

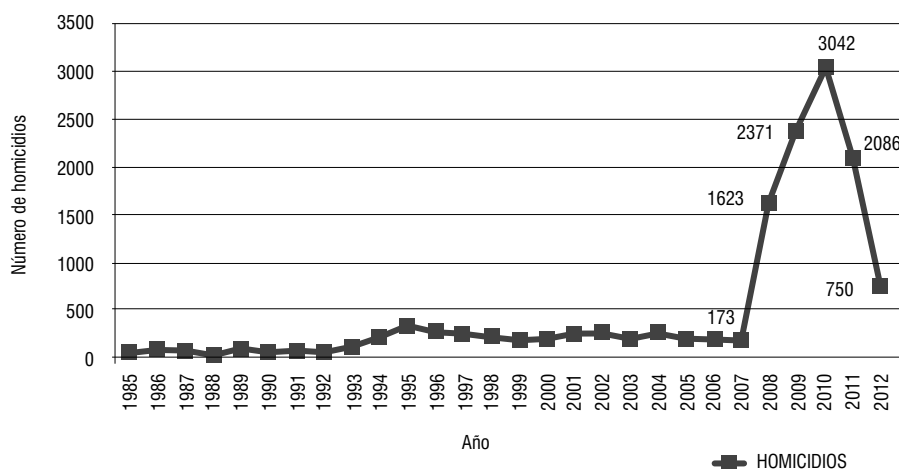
5.2 La guerra total y algunas de sus cifras

Llegamos así a una quinta fase desde donde es muy difícil precisar el origen de o la direccionalidad de todos los episodios violentos. El desbordamiento fue total y se enlazaron características de las cuatro fases anteriores: los policías siguieron muriendo, pero el nivel de violencia alcanzó un nuevo pico cuando se detonó un coche bomba en una céntrica avenida de la ciudad, en los momentos previos del horario estelar del noticiario (El Universal 2010, 15 de julio; Milenio, 2010, 15 de julio; Milenio, 2010, 16 de agosto).

La vida en numerosos barrios se transformó de tal manera que muchos de ellos se convirtieron en vecindarios fantasma con apenas algunos habitantes. La heterogeneidad de *barrios* o pandillas vivió a la expectativa o en medio de la violencia de los reacomodos más amplios. Masacres y extorsiones masivas, robos y asesinatos. Ciertos entrevistados señalan la aparición de comandos de exterminio fuera del control de los grupos en conflicto dentro de la ciudad. De la ciudad de la fiesta, como fue conocida en la primera mitad del siglo XX a la ciudad del trabajo de la década de los 80, poco quedaba. Ahora los referentes eran fúnebres y poco halagadores. Desde inicios de la década del 90 Juárez fue reconocida sucesivamente como la “ciudad de las muertas”, “la fábrica del crimen” y “la Bagdad americana”:⁴⁶ una auténtica necrópolis fronteriza.

⁴⁶ Frase acuñada por el ex zar antidrogas del gobierno de Clinton, Barry Mac Caffrey cuando se le interrogó sobre la efectividad de la ayuda militar estadounidense en México. El Universal, 2011, 3 de enero.

Gráfico No. 1. Comportamiento homicida en Ciudad Juárez 1985 -2012



Fuente: Elaboración propia con datos de Brugués y Monarrez sacados del texto de Cervera (2005) para la serie 1985 -2004. El dato de 2005 fue obtenido de PGR (2005) La serie de 2006 a 2008 se obtuvo del texto de Monarrez, Cruz y Cervera (2010). Los datos de 2009 a 2012 por reportes de prensa dados a conocer por el gobierno federal retomados en esta investigación.

Juárez se convirtió en el ejemplo de una auténtica ciudad en guerra en el contexto del incremento general de la violencia en México. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación mencionaban que a finales de 2011 el 80 % de los homicidios relacionados con el narcotráfico había ocurrido en 162 municipios de los 2.456 en que se divide el territorio mexicano. El estado de Chihuahua y el municipio de Juárez aparecían como los más afectados, al concentrar el 30% del total (El Universal, 2011, 29 de enero; El Universal, 2011, 20 de agosto)

Al terminar el sexenio del presidente Calderón en diciembre de 2012 y desde que se desató la espiral de violencia en la ciudad, se contabilizaban alrededor de 10 mil homicidios, de los cuales la inmensa mayoría quedó sin resolución judicial, con lo que se alcanzó tasas de impunidad superiores al 98% (Diario, 2012, 26 de noviembre; Diario, 2013, 27 de julio). Ni las víctimas ni sus familiares recibieron una atención adecuada, dejando una enorme estela de afectación no sólo dentro del círculo inmediato de los asesinados, sino también dentro del grueso de sus amistades y conocidos

(Entrevista a Isabel Urzua. Ciudad Juárez, 15 de julio de 2012.) Hasta mediados de 2010, el número de huérfanos en la ciudad era de cerca de 10 mil menores de 14 años y la gran mayoría solo encontraría un nuevo lugar para vivir en albergues. Incluso de otros estados (Diario, 2010, 16 de agosto).

Aunque los esquemas de extorsión se multiplicaron a lo largo y ancho de la ciudad, no todos lo sintieron de la misma manera. Las grandes industrias y centros maquiladores prácticamente no fueron tocados por los extorsionadores, no así los medianos y pequeños comerciantes, con consecuencias desastrosas en las economías barriales que quedaron desvertebradas (El Paso Times, 2010, 3 de marzo; Milenio, 2011, 26 de julio; Milenio, 2010, 27 de julio).

Cifras dadas a conocer por la Cámara de la Industria Restaurantera indicaban el cierre del 40% de los restaurantes y el 18% de los bares que operaban en la ciudad desde el 2009 hasta el 2011. Alrededor de cinco mil negocios cerraron con pérdidas incuantificables (El Economista, 2011, 9 de febrero; El Universal, 2011, 10 de febrero).

El aumento de los homicidios violentos y las proliferaciones extorsivas tuvieron consecuencias incluso en la configuración física de la ciudad misma. No sólo se abandonaron miles de casas, y se quebraron miles de negocios: cerca de dos mil calles fueron cerradas en diferentes sectores de Juárez en un intento simbólico de los habitantes para sentirse más seguros mientras la vorágine de la violencia continuaba. Incluso territorialmente, la ciudad estaba fragmentada (Milenio, 2011, 1 de marzo; Somos frontera, 2011, 10 de agosto).

5.3. Los puntos de inflexión y la reducción en el número de homicidios

Dos hechos, relativamente inconexos pero con enormes repercusiones simbólicas marcaron importantes puntos de inflexión en la dinámica del conflicto. En ambos llama la atención que no todos los homicidios tienen el mismo significado para los tomadores de

decisiones. Por un lado, la masacre de jóvenes estudiantes en una fiesta celebrada en Villas del Salvarcar en los últimos días de enero de 2010 puso en relevancia que la situación era insostenible. Esta masacre evidenció la falta de sensibilidad del Ejecutivo mexicano frente a la problemática social de Juárez más allá del propio conflicto entre las organizaciones de traficantes.

Un aparente error en los esquemas de vigilancia de una de las organizaciones en pugna se produjo al informarse que se llevaba a cabo una celebración de Artistas Asesinos. Un comando armado, compuesto tanto de miembros de Barrio Azteca como de La Línea, asesinó a 15 personas en una casa ubicada en la colonia Villas del Salvarcar, en el sur de Juárez. De manera apresurada y sin evidencia sólida, el presidente Calderón señaló que la masacre era un ajuste de cuentas entre pandillas criminales. La indignación social fue inmediata y provocó la reacción de diferentes padres de familia, miembros de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación quienes exigieron una disculpa oficial en virtud de que la mayoría de los asesinados eran jóvenes con buenos promedios escolares. La respuesta del Ejecutivo, además de su retractación, fue llamar a consultas a la sociedad civil, miembros de los poderes estatal y local, para lanzar posteriormente el programa “Todos somos Juárez: reconstruyamos la ciudad” (El Universal, 2010, 1 de febrero; Milenio 2010, 2 de febrero; Milenio, 2010, 9 de febrero, La Jornada, 2010, 16 de febrero; La Jornada, 2010, 24 de marzo).

Por otro lado, en marzo de 2010, fueron asesinadas en dos operativos simultáneos tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Una mujer, su marido y otro hombre salían de una fiesta en dos camionetas de color blanco y fueron seguidos por miembros de Barrio Azteca y de La Línea. Aparentemente tenían identificada a la mujer como una “facilitadora” de visas a operadores de Sinaloa (Artistas Asesinos) para que estos cometieran asesinatos en El Paso. Al no poder verificar en cual camioneta viajaba la mujer en compañía de su esposo y su hijo, decidieron asesinar a los ocupantes de ambos vehículos. De inmediato el gobernador del Estado de Chihuahua, legisladores y

el presidente de México manifestaron sus condolencias y se comprometieron a que estos asesinatos no quedarían impunes. Por su parte, funcionarios estadounidenses e incluso el propio presidente Obama mostraron su indignación y pugnaron por un trabajo más cercano para atrapar a los responsables. Agentes de la DEA y el FBI comenzaron a trabajar en Juárez y se pusieron en marcha programas piloto de cooperación entre agencias de investigación y cumplimiento de la ley de los dos países (Milenio, 2010, 14 de marzo; Milenio, 2010, 15 de marzo; El Universal 2010, 15 de marzo; Milenio, 2010, 16 de marzo).

En los meses posteriores comenzaron a verse los resultados del cruce de ambos acontecimientos. Sumado al componente social derivado de la implementación del programa Todos Somos Juárez, en el rubro de seguridad se exigieron mejores niveles de articulación dentro las fuerzas del orden que hasta el momento aparecían dispersas. La intervención estadounidense en materia de inteligencia ocasionada por el asesinato de sus ciudadanos potenció muchas de las capacidades de seguimiento y vigilancia en el lado mexicano. De la misma forma, el Ejército salió de la ciudad y el esquema de rastreo de objetivos implementado por policías federales honestos gradualmente comenzó a tener resultados al capturar a los principales líderes de los grupos armados, no así a los jefes máximos de las organizaciones de traficantes que con toda probabilidad ni siquiera estaban en el Estado. A finales de 2011 y en el 2012, se percibió la disminución del número total de homicidios en Juárez.

Aunque diversas detenciones fueron realizadas a lo largo del 2010, que fue estadísticamente el más violento en cuanto a homicidios, a finales de ese año y mediados del 2011 se capturó a los cabecillas de Barrio Azteca en Juárez (Arturo Gallegos Castrejón alias El Farmero) y de La Línea (José Antonio Acosta Hernández alias El Diego), así como el fundador de Gente Nueva (Noel Salgueiro alias El Flaco) y uno de los líderes de este grupo en Juárez (José Antonio Torres Marrufo alias El Marrufo). Diversos mandos medios de Los Artistas Asesinos y Los Mexicles también fueron apresados.

Con líneas de sucesión relativamente bien definidas y esquemas organizacionales que pudieron soportar estas capturas, los grupos en pugna tenían la oportunidad de mantener su ofensiva. Sin embargo, la hipótesis de un ex funcionario federal entrevistado que solicitó omitir su nombre es que en la relación del costo y el beneficio para mantener la lucha por Ciudad Juárez se dejó de justificar la cuota económica y de sangre que se estaba pagando: “Los recursos no son infinitos. La sociedad estaba cansada, los medios estaban muy atentos y muchos cuerpos policiales tanto mexicanos como estadounidenses involucrados. Era ya un desgaste muy fuerte.” Bajo esas condiciones, “la plaza no sólo se calentaba, sino que dejaba de ser redituable. Las capturas permitieron bajar la intensidad y cambiar el perfil de la guerra aunque no ganara nadie” (Entrevista a Gómez Ciudad de México, 7 de enero de 2013; Milenio, 2010, 28 de noviembre; Milenio 2011, 31 de julio; Milenio, 2011, 5 de octubre; Somos frontera, 2012, 4 de febrero).

Autoridades federales, estatales y locales han manifestado abiertamente su satisfacción por la disminución de los homicidios violentos en la ciudad. Sostienen que la disminución en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes ha sido un éxito rotundo, resultado del esfuerzo coordinado entre los diversos órganos de los distintos niveles de gobierno en diferentes rubros que trascienden la lógica meramente policial. Esto tiene su cuota de validez. Sin embargo, esta aseveración adolece de dos consideraciones fundamentales: a) el reconocimiento de las dinámicas del conflicto y los agentes sociales que producen violencia, los cuales también tienen ciclos de acumulación, desgaste y saturación, y que b) a pesar de la disminución de los delitos de alto impacto en la ciudad, subsisten una multiplicidad de deudas y deficiencias históricas que en cualquier momento y por el encadenamiento de diversas variables pueden, una vez más, explotar violentamente.

5.4. La violencia persistente

Bien puede sostenerse que frente al tema de la seguridad pública de la ciudad los resultados son cuando menos ambiguos. A

pesar de la disminución de los homicidios violentos, si nos concentramos en el tema de prevención –componente básico de la seguridad pública- por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, el panorama es aún sombrío. Se invirtieron sumas extraordinarias para la “recuperación de espacios públicos” o la “construcción de nuevos” que en no pocas ocasiones permanecen vacíos, trabajan a medias o incluso están abandonados. Aunque el discurso de los tomadores de decisiones apuntan a un éxito rotundo, la visión de numerosos representantes de la sociedad civil es que planes como Todos somos Juárez son “mucho cemento” con “poco contenido social” (Milenio, 2011, 31 de enero; Diario, 2012, 23 de marzo; Diario, 2012, 7 de agosto; Entrevista con Davide Dalla Pozza director de La tenda di Cristo, Ciudad Juárez, 29 de julio de 2012; Entrevista con Teresa Almada, directora de Casa Promoción Juvenil, Ciudad Juárez, 12 de diciembre de 2012).

Las respuestas ante el ambiente homicida han sido reactivas y generalmente emanadas desde el centro del país donde frecuentemente se ha estado poco familiarizado con las expresiones socio espaciales de la violencia. Otra parte de las tácticas empleadas para disminuir los homicidios han emanado incluso de autoridades estadounidenses. Los gobiernos estatal y municipal se concentraron en la ejecución de medidas mayoritariamente punitivas. El entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012) reconocía estas limitaciones en medio del punto más alto del espiral de asesinatos que se vivía en la ciudad. Señalaba que el gobierno federal “no ha escuchado debidamente durante muchos años” y que, a pesar de iniciativas como Todos somos Juárez, iban a seguir pasando “cosas muy duras” (El Universal, 2010, 12 de febrero; La Jornada, 2010, 17 de marzo).

Esta especie de profecía se ha consumado ya sin Calderón en la presidencia. Durante el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 -2013), en Juárez se han presentado nuevas masacres. Aunque en menor escala, siguen apareciendo casos de extorsiones, algunos cuerpos siguen siendo abandonados en sus calles. Represen-

tantes de Human Rights Watch señalan que hay “escasas evidencias”, “más allá de compromisos retóricos” para frenar la impunidad de los grupos del crimen organizado y que “no hay avances significativos en la investigación de los abusos del pasado” (Milenio, 2013, 23 de septiembre; El Universal, 2013, 17 de noviembre; *Diario*, 2013, 11 de mayo; *Diario*, 2013, 16 de noviembre; *El país*, 2013, 27 de noviembre)

CONCLUSIONES

Al discutir las hipótesis sobre la aparente disminución de los homicidios violentos, uno de los miembros de este equipo de investigación señala:

Nadie te puede decir con certeza que pasó, que entró en el cálculo, o por qué se dejaron de matar en Juárez. Cuando uno observa las carencias estructurales de la ciudad, ahí siguen aunque un poco maquilladas; si observamos a los grupos que entraron en conflicto, ahí están; si miramos la actuación de diversos actores del poder político, mantienen brutales déficits en el manejo de la ciudad. La estela de la violencia aún se percibe en las calles –aunque sí es menos- y a pesar de lo que digan, no ganaron ni los sinaloenses ni los de Juárez. Vivimos el asesinato de miles de personas, todos perdimos y se sacrificó a una generación completa (Alan Cornejo, sesión de trabajo 17, Ciudad Juárez, 10 de diciembre de 2013).

Un investigador estadounidense afirma por su parte: “A pesar de la disminución en el número de muertos, los tiburones siguen bajo el agua”.

Tal puede ser, escuetamente dibujada, la paradoja juarense. Ciudad de tráfico internacional, ciudad de consumo, la historia de Juárez en el narcotráfico es una historia ya centenaria. A lo largo de todo este tiempo y con diferentes vaivenes, no fue una ciudad con los altos niveles de homicidios presentes en otras latitudes como Medellín o Río de Janeiro. Esto no implica en ningún sentido la ausencia de violencia. Llegado su momento se puso en marcha una gran cantidad de dispositivos que evidenciaron un formidable poder de invisibilización sobre la muerte masculina violenta, rela-

cionada con el tráfico de drogas. El lado inverso de esta moneda fue, sin duda, el asesinato femenino expuesto pública y sádicamente desde los primeros años de la década de los 90.

Una alta vinculación de diversos elementos del poder político y policías locales, estatales y federales en un esquema autoritario servían como válvulas de escape y muros de contención contra las acciones violentas. El involucramiento de la sociedad en actividades derivadas del tráfico de drogas, incluso en la órbita micro territorial, fue bastante reducido hasta tiempos muy recientes.

Los diferentes grupos de traficantes afincados en la ciudad han pasado por varios periodos de reajuste organizacional que habían tenido que ver con los cambios en el flujo de distintos tipos de drogas, el crecimiento del mercado estadounidense, la evolución del sistema político mexicano y los ambiguos esfuerzos punitivos llevados a cabo por diversas administraciones federales.

En la década del 2000, el escenario se tornó mucho más complejo. Con un esquema de poder político en transición, los históricos déficits de gobernabilidad evidenciaron muchos y diversos tipos de acumulación social de la violencia que subsistían en Juárez sin los mecanismos de contención y arbitraje característicos de otros tiempos, con otras condiciones políticas y distintas correlaciones de fuerzas. A pesar de ello, por lo menos hasta 2007, esos procesos acumulativos no habían detonado en la escala que lo hicieron. La suma de todas las contradicciones se cristalizó cuando estalló un conflicto del que todos los habitantes de la ciudad fueron testigos y de alguna forma u otra, protagonistas.

Este conflicto catalizó un caldo de cultivo volátil que hizo las veces de polvorín, alcanzando niveles de violencia prácticamente sin precedentes, coadyuvando en medio de las refriegas a la cancelación de espacios públicos y privados, erosionando las prácticas de convivencia y forzando la migración de miles de juarenses. En un lapso de tiempo extraordinariamente corto se transformarían los patrones socio históricos de contención y visibilidad de la violencia homicida, las restricciones del involucramiento de pandillas en el

tráfico de drogas al menudeo, la relación de los traficantes con el poder político y los policías, así como la relación de las organizaciones del tráfico de drogas y los diferentes enclaves sociales en los que interactuaban.

En el juego de contrastes la misma velocidad con la que se presentó el incremento de los homicidios violentos ha sido proporcional a la disminución de éstos. La cifra final de 2012 lo verifica. Sin embargo, el acumulado de distintos tipos de violencia permanece. Fuera de las cifras de homicidios en la metrópoli fronteriza subsiste un universo de contradicciones económicas, políticas y sociales de difícil solución. Como bien lo sintetiza una líder social entrevistada: “si esto lo hicieron los hijos de la ciudad maquiladora, ¿qué harán los hijos de esta ciudad arrasada?”.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta Beltrán, D. (2009). Especulación del suelo, vivienda e infraestructura urbana en Ciudad Juárez. En L. Barraza (coordinador). *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la Violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua* (pp. 121-159). México: SEGOB - Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Aguayo Quezada, S. (2001). *La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México*. México: Grijalbo.
- Alarcón Gil, C. (2010). *El eje Washington – Bogotá- México: entre la política, la seguridad y el tráfico de drogas ilegales*. Tesis para obtener el grado de Maestro en estudios México Estados Unidos. México: Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
- Almada Mireles, L. (2009). Las familias en Ciudad Juárez. En L. Barraza, (coordinador). *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la Violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua* (pp. 85-120). México: SEGOB - Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Almada Mireles, H. (1995). *La industria maquiladora y su impacto en la migración y el empleo*. Noesis, VI (15).

- _____. (2007). *La realidad social de Juárez. Análisis territorial. Tomo 2.* Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Ampudia Rueda, L. (2009). Empleo y estructura económica en el contexto de la crisis de Ciudad Juárez: las amenazas de la pobreza y la violencia. En L. Barraza, (coordinador). *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la Violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua* (pp. 12-56). México: SEGOB - Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Amnistía Internacional (2009). *México. Nuevos informes de violaciones a los derechos humanos a manos del Ejército.* Madrid: Amnesty international publications.
- Astorga Almanza, L. (2003). *Drogas sin fronteras.* México: Grijalbo.
- Astorga Almanza, L. (2005). *El siglo de las drogas.* México: Plaza y Janés.
- Astorga Almanza, L. (2007). *Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra.* México: Tusquets.
- Balderas Domínguez, J. (2012). *Discursos y narrativas sobre la violencia, miedo en inseguridad en México. El caso Ciudad Juárez. PHD Thesis.* Nederland: Leiden University.
- Bernecker, W. (1994). *Contrabando, ilegalidad y corrupción en el México del siglo XIX.* México: Universidad Iberoamericana.
- Bowden, C. (2004). *Down by the river. Drugs, money murder and family.* New York: Simon and Schuster paperbacks.
- Bustamante, J. (1992). Demystifying the United States – México border. In *The journal of American History* , 79 (2).
- Campbell, H. (2011). *Drug war zone. Frontline dispatches from the streets of El Paso and Juarez.* Austin: University of Texas Press.
- Campbell, H. (s.f.). *Narco-propaganda in the mexican drug war an anthropological perspective.* Recuperado de: <http://lap.sagepub.com/content/early/2012/04/30/0094582X12443519>
- Cañón, L. (2002) *El patrón. Vida y muerte de Pablo Escobar.* Bogotá: Planeta.
- Carey, E., & Cisneros Guzmán, J. C. (May – Jun de 2011). The Daughters of La Nacha: Profiles of Woman Traffickers. *NACLA report on the America's.*
- Carrillo, J., & Hernández, A. (1985). *Mujeres fronterizas en la industria maquiladora.* México: SEP – Frontera.

- Castillo, C., & Barraza, L. (2009). Las políticas sociales en Ciudad Juárez. En L. Barraza, (coordinador). *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la Violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua* (pp. 194-225). México: SEGOB - Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Cervantes Trejo, A. (2010). *Epidemiología del homicidio y prevención de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua*. México: Centro Nacional de Prevención de lesiones - Gobierno Federal.
- Cervera Gómez, L. E. (2005). *Diagnóstico geo económico de Ciudad Juárez y su sociedad*. Chihuahua: El Colegio de la Frontera Norte – Instituto Nacional de las Mujeres.
- Cervera Gómez, L. E., & Monárrez, J. (2010). *Sistema de información geográfica de violencia en el municipio de Juárez, Chihuahua: geo referenciación y su comportamiento espacial en el contexto urbano y rural (SIGVIDA)*. México: CONAVIM- SEGOB – COLEF.
- Chao Romero, R. (2011). Chinese immigrant smuggling to the United States via México an Cuba, 1882- 1916. En E. Carey & A. Marak (eds.). *Smugglers Brothels and Twine. Historical perspectives on contraband and vice in North America's borderlands*. Tucson: Arizona University Press.
- Craig, R. (1981). Operación intercepción: una política de presión internacional. *Foro Internacional* (2), 86.
- Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia penal. A. C. (2011). Ciudad Juárez, por tercer año consecutivo, la urbe más peligrosa del planeta. Recuperado de: <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/329-ciudad-juarez-por-tercer-ano-consecutivo-la-urbe-mas-violenta-del-planeta>
- Escalante Gonzalbo, F. (2008). *Homicidios 1990 -2007*. Recuperado de: <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=776>
- _____ (2009). *Territorios violentos*. Recuperado de: <http://www.nexos.com.mx/?Article=56102&P=leerarticulo>
- Fazio, C. (1997). *El tercer vínculo. De la teoría del caos a la teoría de la militarización*. México: Joaquín Mortiz.
- Fernández, M., & Rampall, J. (2008). *La Ciudad de las muertas: la tragedia de Ciudad Juárez*. México: Debate.
- Foucault, M. (2005). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. México: Siglo XXI.

- Fuentes Flores, C. (2009). La estructura espacial urbana y la accesibilidad diferenciada a centros de empleo en Ciudad Juárez, Chihuahua. En *Región y sociedad*, XX (44).
- Galtung, J. (2003). *Tras la violencia: reconstrucción, reconciliación, resolución*. Guernika aldaba.
- García Amaral, M. L., & Santiago Quijada, G. (2007). Ciudades fronterizas en el norte de México. En V. Orozco (coordinador). *Chihuahua hoy 2007. Visiones de su historia, economía política y Cultura*. México: UACJ - Instituto Chihuahuense de Cultura- UACH Doble hélice ediciones.
- García Pereyra, R. (2010). *Ciudad Juárez la fea. Tradición de una imagen estigmatizada*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Garza Almanza, V. (2011). *Breve historia ambiental de la frontera México - Estados Unidos 1889 - 2010*. México: Colegio de Chihuahua.
- _____. (2011b). *Receta para una catástrofe social. Crimen, zonas desatendidas, tipos de vivienda y estilos de vida en Ciudad Juárez*. México: El Colegio de Chihuahua.
- González de la Vara, M. (2009). *Breve historia de Ciudad Juárez y su región*. México: El Colegio de Chihuahua.
- González Herrera, C. (2008). *La frontera que vino del norte*. México: Santillana- El Colegio de Chihuahua.
- González Rodríguez, S. (2005). *Huesos en el desierto*. México: Anagrama.
- Gootenberg, P. (2008). *Andean Cocaine, The making of a global drug*. USA: University of Carolina Press.
- Grillo, I. (2011). *El narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana*. México: Urano.
- Gutiérrez de Alba, E. *La fiesta. Recuerdos de una alegre y luminosa Ciudad Juárez del siglo XX*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Gutiérrez, A. (2007). *Narcotráfico. El gran desafío de Calderón*. México: Planeta.
- Herrera Robles, L. A. (2008). *El desgobierno de la ciudad y la política del abandono*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Jusidman, C. *La realidad social de Juárez. Análisis social. Tomo 2*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Knight, A. (2012). *La revolución Mexicana*. México: Fondo de cultura económica.

- Linares, Adriana (2011). La leyenda Negra. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuperado de: <http://docentes2.uacj.mx/rquinter/cronicas/narcotr.htm>.
- Nuestras hijas de regreso a casa. Los números de la vergüenza (2010). Recuperado de: www.mujeresdejuarez.org.
- Martínez, O. (1982). *Ciudad Juárez: el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Martínez Toyas, W. (2009). Situación y evolución demográfica en Ciudad Juárez. En L. Barraza, (coordinador). *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la Violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua* (pp. 57-84). México: SEGOB - Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Misse, M. (2011). *Crime e violência no Brasil contemporâneo, Estudos de sociologia do crime e da violencia urbana*. Brasil: Lumen Juris.
- Molloy, M., & Bowden, C. (2011). *Sicario. Autobiografía de un asesino a sueldo*. México: Grijalbo.
- Monárrez Frago, J. (2000). La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez. *Revista Frontera Norte*, 12 (23).
- _____ (2009). Trama de una Injusticia; feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. Tijuana: El Colegio de la frontera norte- Porrúa.
- _____ (2005). Violencia e Inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez. En L. Cervera Gómez (coordinador). *Diagnóstico geo socio económico de Ciudad Juárez y su sociedad* (pp. 273-314). Ciudad Juárez: El Colegio de la Frontera Norte – Instituto Nacional de las Mujeres.
- Monárrez Frago, J., Cruz Sierra, S., & Cervera, L. E. (2009). Análisis del homicidio y del feminicidio en Ciudad Juárez y su georreferenciación: un comparativo con el Estado de Chihuahua y México (2006 – 2008). En L. Cervera & J. Monárrez (eds.). *Sistema de Información Geográfica de la violencia en el municipio de Juárez, Chihuahua: georeferenciación y su comportamiento espacial en el contexto urbano y rural (SIGVIDA)* (pp. 91-128). Ciudad Juárez: Secretaría de Gobernación- CONAVIM.
- Monsivais, C. (2004). *Viento Rojo. Diez historias del narco en México*. México: Plaza y Janes.
- Mottier, N. Drug gangs and politics in Ciudad Juarez 1928 – 1936. *Mexican studies*, 25 (1)
- Musto, D. (1993). *La enfermedad Americana. Orígenes del control antinarcóticos en EU*. Bogotá: Tercer mundo editores.

- National Gang Intelligence Center. (2011). *National Gang Threat assessment. Emerging trends*. Washington: NGIC.
- Neocleous, M. (2010). *La fabricación del orden social. Una teoría crítica sobre el poder de la policía*. Buenos Aires: Prometeo.
- Rourke, B., & Byrd, S. (2010). *Dealing death and drugs. The big business of dope in the US and Mexico*. El Paso: Cinco puntos press.
- Orozco, V. (2007). Una narración histórica: los primeros cien años en las relaciones Juárez – El Paso. En V. Orozco (coordinador). *Chihuahua hoy 2007. Visiones de su historia, economía política y Cultura*. México: UACJ - Instituto Chihuahuense de Cultura- UACH Doble hélice ediciones.
- Páez Varela, A. (2009). *La guerra por Juárez. El sangriento corazón de la tragedia nacional*. México: Editorial Planeta Mexicana.
- Payan, T. (2011). Ciudad Juárez: la tormenta perfecta. En N. Armijo (ed.). *Migración y seguridad: nuevo desafío en México* (pp. 127-143). México: Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia CASEDE.
- Perea, C. M. (2007). *Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder*. México: Siglo XXI.
- Pineda- Madrid, N. *Suffering and salvation in Ciudad Juárez*. USA: Fortress press.
- Poppa, T. (1990). *El zar de la droga*. México: Selector.
- Ravelo, P., & Domínguez, H. (2006). Los cuerpos de la violencia fronteriza. *Nomadas* (24).
- Recio, G. (2002). Drugs and alcohol: US prohibition and the origins of drug trade in Mexico, 1910 – 1930. In *Journal of latin American Studies* (34), 21- 42.
- Reyna, J. C. (2011). *Confesión de un sicario*. México: Grijalbo.
- Rodríguez Nieto, S. (2012). *La fábrica del crimen*. México: Planeta.
- Rodríguez, T., Montané, D., & Pulitzer, L. (2008). *The daughters of Juarez: a true story of serial Murder south of the border*. New York: Simon and Schuster.
- Sanchez Carlos, J. (2011). Efectos económicos de la violencia e inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua [Presentación]. En *Tercer foro regional Hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo*. Ciudad Juárez: UACJ.
- Salazar, A. (2001). *La parábola de Pablo. Auge y caída de un gran capo del narcotráfico*. Bogotá. Planeta.

- Santiago Quijada, G. (2011). *Políticas federales e intervención empresarial en la configuración urbana de Ciudad Juárez, 1940- 1992. Tesis para obtener el grado de Doctora en Historia*. México: Colegio de Michoacán.
- Secretaría de Gobernación. (2004). *Informe de gestión. Noviembre de 2003-abril de 2004. Comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez*. México.
- Serrano, R. J (1999) *Jaque Mate. De cómo la policía le ganó la partida a el aje-drecista y a los carteles del narcotráfico*. Bogotá, Norma.
- Shanon, E. (1988). *Desperados. Los caciques latinos de la droga, los agentes de la ley y la guerra que Estados Unidos no puede Ganar*. México. Lasser Press.
- Silva Herzog, J. (2000). *Breve historia de la Revolución Mexicana. Los antecedentes y la etapa maderista*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Simon, J. (2011). *Gobernar a través del delito*. México: Gedisa.
- Stern, A. (2007). Industria maquiladora de exportación. En C. Jusidman & H. Almada Mireles (eds.). *La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis social. Tomo I* (pp. 99-138). Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Thoumi, F., Uribe S., Rocha, R., Reyes, A., Garzón, E., Lopez, A., Tokatlian, J., y Hernández, M. (1997) *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*. Bogotá: Ariel.
- Tokatlian, J. (2000) *Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia*. Bogotá: Norma.
- Torres, E. y Sarmiento, A. *Rehenes de la mafia*. Bogotá, Intermedio.
- Turatti, M. (2010). *Fuego Cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco*. México: Grijalbo.
- Valdez Castellanos, G. (2013). *Historia del narcotráfico en México*. Ciudad de México: Aguilar.
- Valdez, D. W. (2005). *Cosecha de Mujeres. Safari en el desierto mexicano*. México: Océano.
- Valencia, Nick y Chacón, Arturo. (2013). Los homicidios disminuyen mas de la mitad de 2011 a 2012 . *CNN En español*. Recuperado de: <http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/05/los-homicidios-disminuyen-mas-del-50-en-ciudad-juarez-de-2011-a-2012>.
- Valenzuela Arce, J. M. (2002). *Jefe de Jefes. Corridos y narcocultura en México*. México: Plaza y Janes.

- Valenzuela Arce, J. M., Nateras, A., & Reguillo R. (2013). *Las maras. Identidades juveniles al límite*. México: COLEF – UAM – Juan Pablos editor.
- Velázquez Vargas, M. (2009). La situación de los servicios de salud, cultura, recreación y deporte. En L. Barraza, (coordinador). *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la Violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua* (pp. 160-193). México: SEGOB - Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Wright, M. (2001). Femenine Villains, masculine heroes and the reproduction of Ciudad Juarez. En *Social text*, 19 (69).

**CIUDADES EN LA ENCRUCIJADA:
Violencia y poder criminal en Río de Janeiro,
Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez.**

Se terminó de imprimir en el taller de Pregón S.A.S.,
durante el mes de octubre de 2014,
para la Corporación Región
y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales - Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia.

Río de Janeiro en Brasil, Medellín y Bogotá en Colombia, Ciudad Juárez en México hacen el testimonio elocuente de la paradoja Latinoamericana. Ciudades revestidas de toda importancia; pero al mismo tiempo cruzadas por criminalidades y violencias intensas. América Latina, ciertamente, sale del período amargo del neoliberalismo dando muestras de mejoría económica y reducción de situaciones críticas como la pobreza y el desempleo; con todo, pese al repunte en los indicadores de bienestar, continúa siendo el continente donde germina una variada gama de agentes violentos que intentan imponer la ley de su voluntad arbitraria y déspota al resto de la sociedad.



ISBN: 978-958-5134-66-6



9 789588 134666